Liliana de Riz

Sociedad y política en Chile

(de Portales a Pinochet)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Liliana de Riz/Sociedad y política en Chile

LILIANA DE RIZ: SOCIEDAD Y POLÍTICA EN CHILE: *de Portales a Pinochet*

LILIANA DE RIZ

Sociedad y política en Chile: de Portales a Pinochet

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MEXICO 1979

Primera edición: 1979

D R © 1979, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. México 20, D. F.

Dirección General de Publicaciones

Impreso y hecho en México

ISBN 968-58-2597-1

INTRODUCCIÓN

Me parece indispensable explicar al lector cómo nació este libro y cómo lo que al comienzo no era sino un proyecto limitado de trabajo se convirtió en un intento más ambicioso.

El punto de partida de este trabajo fue la caída de la Unidad Popular en Chile. El golpe militar de septiembre de 1973 echó por tierra las esperanzas depositadas en la experiencia chilena de transición al socialismo que se había iniciado en 1970. Con él se abrió una nueva etapa cuya realidad distó mucho de asemejarse a las previsiones de los que se hicieron eco de esa esperanza. Entonces, como ahora, era claro que se imponía un esfuerzo intelectual de búsqueda de respuesta a los interrogantes que planteó el fracaso de la izquierda chilena. También era y sigue siendo claro, que todo intento de aportar una respuesta va más allá de las fronteras de ese país ya que obliga a repensar las diferentes estrategias de transformación estructural de una sociedad dependiente.

Este libro nació como un intento de encontrar una respuesta adecuada, o mejor dicho los elementos para una respuesta que permita comprender la lógica del proceso que se inició con el acceso de la Unidad Popular al gobierno y desembocó en la caída de éste.

Desde el golpe militar, y salvo contadas excepciones, la reacción emocional ha sido infinitamente mayor que los esfuerzos de explicación. Por otra parte, pocos se han escapado a la tentación de encontrar una respuesta apelando a alguna teoría preestablecida, de la que la sociedad chilena no resulta más que una ejemplificación. Desde esta óptica, el fracaso de la Unidad Popular es visto como la consecuencia lógica del reformismo del Partido Comunista Chileno y de los partidos del "ala derecha" de la Unidad Popular; o bien, como la secuela de las tendencias de ultraizquierda (el MIR, el "ala izquierda" del Partido Socialista). A mi juicio, cuando éste es el enfoque el debate resulta estéril. En efecto, se extrapolan teorías sobre la transición al socialismo sin preguntarse por las condiciones concretas de su aplicabilidad en el contexto de una sociedad dependiente como la chilena, o bien la discusión

queda encerrada en el ámbito de la política en el sentido estrecho del término (o sea como reflexión destinada a "condenar" o "lamentar" acciones políticas, pero incapaz de explicar el porqué de las mismas). En cualquiera de estas dos opciones la descripción del proceso se convierte en prescripción —"lo que debería de haberse hecho"— y es incapaz de dar cuenta del desenlace de la crisis. En ambos casos, nos encontramos con la inútil sabiduría del *post facto,* una sabiduría que no ayuda a explicar las causas y luchar por la eliminación o contra el resurgimiento de las mismas.

Muchos son los que hoy reflexionan sobre la experiencia chilena y tratan de aplicar las lecciones que se extraen de ella a otras situaciones: latinoamericanas, del "Tercer Mundo" e incluso europeas. Muchos son también los que concluyen que la experiencia chilena "probó" que la "vía pacífica hacia el socialismo" es imposible.[1]

Este tipo de reflexiones constituye un ejemplo de una lectura incorrecta del proceso de transformación social en las sociedades latinoamericanas. En efecto, ella se sostiene en una generalización infundada y vuelve a remitir a una generalización abusiva.

Este trabajo defiende la idea de que para descifrar la lógica del proceso que culminó con la muerte del Chile popular es insuficiente la descripción de la política de la Unidad Popular y de los partidos de la izquierda chilena durante los tres años de gobierno. Considero necesario inscribir el análisis del Chile popular en el estudio de la historia de las formas de dominación política en esa sociedad. Los actores del Chile popular —las clases sociales en la sociedad chilena— tienen una historia. La historia de sus luchas está marcada por las condiciones sociales concretas que caracterizaron el proceso de formación del capitalismo y de las clases sociales en esa sociedad y gira, fundamentalmente, en torno a la constitución del enclave minero. Sin embargo, las condiciones estructurales —las contradicciones fijadas por la dependencia bajo la forma de enclave— no agotan la explicación del desarrollo histórico específico de la sociedad chilena. Constituyen el punto de partida, pero no el de llegada, para comprender cómo se relacionaron las clases sociales y cuál fue el movimiento que, en cada período, las impulsó hacia la transformación de la sociedad.[2]

[1] Para una crítica de esta interpretación véase el excelente análisis de Régis Debray, "Le crible chilien", en *La Critique des armes,* París, Seuil, 1974, 2 tomos, tomo I, cap. VI.

[2] Para un análisis de la doble determinación —interna, externa— en el análisis de la dependencia, véase Cardoso, F. H., *Estado y Sociedad en América Latina,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1972 (colección de ensayos del autor); Cardoso, F. y Faletto, E., *Dependencia y subdesarrollo en América Latina,* México, Siglo xxi, 3ª edición, 1971; Cardoso, F., *Ideologías de la burguesía industrial en las sociedades de-*

La formación del capitalismo giró en Chile en torno a la constitución del enclave. Sin embargo, la sociedad chilena conoció una dinámica política que la apartó de otras situaciones latinoamericanas de enclave. El objetivo central de este trabajo es tratar de dar cuenta de esa dinámica política (el tipo particular de relación entre clase y política y las transformaciones ocurridas en la misma). La hipótesis que orienta esta búsqueda de cuáles fueron los modos de vinculación entre el desarrollo del capitalismo dependiente en Chile y la política en esa sociedad, sostiene que la historia de la lucha de clases durante la Unidad Popular no puede ser comprendida si se la desvincula de la historia de esas luchas en la sociedad chilena, de la historia misma de sus protagonistas.[3] Por este camino intentaré capturar la dinámica específica de esta sociedad recurriendo para ello a la especificación en términos de coyunturas históricas concretas.

La dinámica política chilena constituye un caso atípico en América Latina. La mayoría de los observadores calificaron esa particularidad a través de la presencia de un sistema político "avanzado" y "pluralista", próximo al que conocieron los países de capitalismo avanzado. Sin embargo, esa designación no constituye un principio de explicación. Es necesario preguntarse acerca de los factores que hicieron posible la realización en Chile, con mayor fortuna que en otros intentos latinoamericanos, de una dominación burguesa legítima que resistió largamente las duras pruebas de la realidad. Para responder a este interrogante es necesario volver la mirada hacia el proceso mismo de constitución de las clases sociales y a las formas en que éstas se definieron (y redefinieron) en el plano político.

Como ya he señalado, este trabajo apunta a la historia reciente de Chile. Para comprender por qué las esperanzas depositadas en Chile popular fueron brutalmente frustradas se impone ampliar el alcance del estudio. Es por eso que el lector se encontrará aquí con un intento de análisis de las transformaciones que conoció esa sociedad y de las luchas a través de las cuales éstas se llevaron a cabo. La hipótesis que aquí se sostiene afirma que para que el análisis sea fértil hay que historizar el estudio de la sociedad chilena, es decir, emprender la

---

pendientes, México, Siglo XXI, 1971 y del mismo autor "Las clases sociales y la crisis política en América Latina". *Ponencia presentada al seminario sobre clases sociales y crisis política en América Latina.* Instituto de Investigaciones sociales, UNAM, Oaxaca, México, 1973, mimeo.

[3] Por este camino transitan Cardoso y Faletto en la obra citada y también Barrington Moore, en su trabajo *Orígenes sociales de la dictadura y de la democracia,* Barcelona, Ed. Península, 1973. Para un análisis de las relaciones entre economía y política, seguiremos de cerca los aportes de Antonio Gramsci al pensamiento marxista.

búsqueda de las condiciones pasadas que puedan dar cuenta de las características que allí tuvo el proceso de lucha de clases. Éste es pues un análisis *actual,* en la medida en que apunta a rescatar la especificidad de la dinámica política chilena y comprender así las formas en que se moldearon los objetivos, los alcances, las estrategias y las tácticas de los movimientos sociales en el curso de la lucha.

Este enfoque diacrónico evita la tentación de reducir el análisis de las transformaciones sociales ocurridas en Chile a la lógica pura del desarrollo de las fuerzas productivas. En efecto, lo que aquí se sostiene es que los procesos sociales no pueden ser explicados a través de hipótesis deterministas relativamente simples, según las cuales las prácticas sociales se disuelven en el estudio de la "economía". Las condiciones estructurales fijan un "campo de posibilidades" para la acción de las clases, pero no las formas específicas que revestirán sus luchas. En síntesis, desde esta perspectiva la dinámica social de la sociedad no puede ser reducida al despliegue de la trama de contradicciones básicas establecidas por la situación estructural de dependencia. Las contradicciones, estructuralmente determinadas por el desarrollo del capitalismo dependiente, sólo actúan por "delegación" y "sobredeterminación", lo que permite explicar que el curso de la historia haya sido el que fue y no otro.

El movimiento obrero chileno se expresó a través de partidos que se definieron como agentes políticos de la clase. He aquí una primera cuestión importante: ¿qué factores hicieron posible que en Chile el movimiento obrero tuviera una expresión política autónoma, a diferencia de las demás situaciones latinoamericanas? Esta pregunta lleva inmediatamente a una segunda cuestión más significativa aún que la primera: ¿por qué la lucha política de clases se libró fundamentalmente en el plano institucional, sin consecuencias decisivas con respecto a la transformación del modo de producción dominante?

Para responder a estos interrogantes es necesario volver la atención hacia el proceso de constitución de la burguesía chilena. ¿Por qué ésta pudo consolidar una dominación de clase legítima, largamente estable? O, en otros términos, ¿cómo se explica que, en el juego del poder, la burguesía chilena abriera las puertas del Estado a la participación de las representaciones políticas del movimiento obrero?

En Chile, la temprana y rápida consolidación del proceso de organización nacional aparece asociada a la presencia de una clase dirigente nacional, unificada en torno del Estado portaliano. Éste es un dato decisivo para comprender la especificidad de la respuesta de las clases dominantes chilenas a la dominación extranjera en el enclave minero. Desde la perspectiva de las clases dominadas, la formación de un movi-

miento obrero de origen minero en torno del enclave, constituye el otro dato básico.

La exposición de este trabajo respeta la secuencia histórica real y comienza por el estudio de las características que tuvo el proceso de creación de la sociedad nacional en Chile.

En el capítulo II de la primera parte se trata de precisar cuál fue el tipo particular de relación entre clase y política en la sociedad chilena bajo el impacto del enclave (el papel del Estado en las relaciones entre las clases sociales). Dos son los temas en que se articula esta sección del estudio. Por una parte, la consolidación de las nuevas funciones del Estado frente al enclave en el contexto caracterizado por la presencia de una clase dominante relativamente unificada en torno del Estado (a diferencia de otras situaciones latinoamericanas de enclave). Por otra, la constitución del movimiento obrero, de composición minera, que tempranamente se expresó a través de organizaciones corporativas y políticas autónomas.

La lucha de los mineros contra las formas de explotación de las compañías extranjeras —el antagonismo de clases en el plano social (mineros *versus* enclave)— se expresó de manera "distorsionada" en el plano político. En efecto, el enfrentamiento político revistió la forma de un enfrentamiento entre los obreros del enclave y las clases dominantes locales. En esa lucha el Estado adquirió un papel clave en tanto intermediario entre las clases dominantes y el enclave, y fuente principal de recursos. Este desfasaje entre la definición social de la lucha de clases y su manifestación política, consecuencia de la situación de dependencia, constituye un factor central para explicar —en las condiciones históricas concretas de la sociedad chilena— el amplio margen de institucionalización que conoció su sistema político.[4]

Las clases dominantes locales pudieron hacer efectiva su dominación, pero de manera indirecta; es decir, a través de un sistema institucional abierto y flexible (la incorporación de los sectores medios al sistema político tuvo lugar en los años 20) que se constituyó en el terreno en el cual participaron las distintas fuerzas sociales y del que derivaron su fuerza. Pero ese sistema institucional tenía "límites de tolerancia" claramente establecidos.

En la segunda parte de este trabajo se analizan las características del modelo político de funcionamiento de la sociedad (en germen en

[4] Para un análisis del efecto de la dependencia sobre la constitución de las clases y la política en América Latina, véase Alain Touraine, "Les classes sociales dans une société dépendente: la société latino-américaine", en *Tiers Monde*, t. XV, núm. 62, avril-juin, 1975.

los años 20 y consolidado después de la crisis mundial del 30). Allí se trata de precisar cuál fue el pacto social tácito sobre el que descansó la estabilidad del sistema político chileno.

En Chile, a diferencia de la mayoría de las situaciones latinoamericanas, la crisis mundial de 1929 no abrió un período de crisis política permanente. La transición hacia el capitalismo industrial fue el resultado de una coalición en la que el movimiento obrero desempeñó un papel clave. Los partidos obreros fueron una de las fuerzas sociales protagonistas de ese proceso (los años del Frente Popular). Si bien las clases dominantes fueron incapaces de retener en sus manos el aparato político, conservaron su hegemonía de manera indirecta y sin quebrar la institucionalidad.

La experiencia del Frente Popular desarrollista marcó decisivamente los objetivos, el alcance, la estrategia y las tácticas del movimiento obrero y de sus representaciones políticas. El fracaso del mismo, así como el de la experiencia "populista" que le sucedió (el ibañismo), tradujo el desgaste de una lucha política que, en razón de librarse a través de partidos que reproducían clivajes de clase en la sociedad chilena, se mostraba cada vez menos eficaz para resolver los conflictos en los marcos de la institucionalidad vigente. El sistema político organizado en función de los partidos de clase (de clases constituidas y no en transición o internamente ambiguas) dejaba afuera a aquellos sectores de las clases subordinadas que no habían logrado sustraerse de la dominación tradicional y que, como "residuos" políticos, caían fuera de las organizaciones corporativas y partidarias. La sociedad urbana que surgió en Chile de las rentas del enclave estaba lejos de dar cuenta de toda la sociedad. El campo seguía siendo el territorio inexpugnable del patrimonialismo terrateniente. Las clases subordinadas no constituían la categoría homogénea del trabajador incorporado a la empresa capitalista. Estos "residuos" políticos con que operó el sistema institucional —fruto de la acentuación del carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista dependiente— fueron erosionando progresivamente su eficacia.

La segunda parte de este estudio examina el lento proceso de desarticulación del modelo político chileno y su culminación bajo el impacto del proyecto reformista-burgués de la Democracia Cristiana (modernización capitalista y populismo reformista).

Finalmente, la tercera y última parte de este estudio aborda el análisis de los años de la Unidad Popular en el gobierno. El supuesto es que el proceso social que se abrió entonces estuvo moldeado por la historia de las luchas en la sociedad chilena. El enfoque de esta parte se sostiene en la afirmación de que los años del Chile popular

fueron el resultado del entrecruzamiento de dos historias: la historia de la ruptura del modelo político de funcionamiento de la sociedad (y por lo tanto del pacto social tácito en que éste descansaba) y la historia del proyecto de la UP, destinado a crear las condiciones para la transición al socialismo en Chile. Desde esta perspectiva de análisis, la comprensión del fracaso del gobierno popular aparece encadenada a una estrategia construida sobre una ilusión de larga trayectoria en la sociedad chilena: la ilusión del "Estado por encima de las clases", ilusión de la que también participaba el movimiento obrero. En este sentido se puede afirmar con Debray [5] que la lógica de las opciones de la UP es la lógica de la historia tanto como la lógica de la política.

La dominación burguesa, que en el límite fijó las restricciones al intento transformista de la Democracia Cristiana, reapareció en el golpe militar de 1973. Roto el compromiso social tácito sobre el que se fundara la estabilidad del sistema político chileno, la dominación se divorció de la legalidad y reapareció "desnuda" con los militares. La UP siguió centrando su estrategia en el plano político-institucional, sin poderla articular con una estrategia de masas. Por eso mismo no pudo crear las condiciones para la modificación estructural de la sociedad que buscaba su proyecto. Preguntarse el porqué del fracaso implica ir más allá de la descripción de la política de los partidos de la izquierda chilena. Implica analizar las condiciones que hicieron posible el predominio de determinada estrategia; en otras palabras, hacer aparecer como objeto de investigación a la historia misma del movimiento obrero y de sus organizaciones políticas en sus luchas por la conquista de una sociedad socialista.

Es por eso que este trabajo adopta un enfoque histórico del análisis de las formas de dominación-impugnación en la sociedad chilena. Su objetivo central es romper con una concepción de la historia de la lucha de clases en la sociedad chilena como una historia *continua* y mistificada, de ascensos —sin contramarchas— hacia el socialismo.

Aquí se impone una aclaración al lector. En efecto, éste podrá sorprenderse ante el hecho de que no se lleve a cabo un análisis del papel desempeñado por el imperialismo norteamericano. Esto se debe a que, si bien ese papel de los Estados Unidos y la CIA está fuera de toda discusión, la explicación del desenlace no puede ser reducida a la sola intervención norteamericana, como ocurre en las "teorías del complot". Si ésta fuera la interpretación la sociedad chilena quedaría reducida en su estudio al análisis de la dominación extranjera, "verdad última"

[5] Debray, R., *op. cit.*, p. 313.

a la que remite toda la historia de las sociedades latinoamericanas. Y en esa opción, el análisis sociopolítico carecería de sentido.

A pesar de la importancia de la intervención norteamericana (que de ninguna manera se trata de minimizar aquí y sobre la cual hay abundantes estudios probatorios), el énfasis ha sido puesto en el análisis de los procesos sociales que permitieron que esa intervención (bloqueo invisible, política de *low profile,* etc.) fuera eficaz para derrocar a Salvador Allende. Esto constituye, sin duda, una limitación de este estudio, pero es también una opción adoptada de acuerdo con los objetivos propuestos. Para una documentación complementaria de los efectos de la política norteamericana, me remito a la abundante literatura sobre el tema.[6]

Quiero dejar constancia de que si me he sentido con el derecho de abordar los problemas de la sociedad chilena es porque creo que su estudio tiene una importancia decisiva para la comprensión de las formas de dominación política en América Latina. País excepcional en el contexto latinoamericano, aunque cercano a la experiencia europea como lo han visto muchos, su estudio atento muestra una proximidad con nuestras sociedades que estuvo durante mucho tiempo oculta.

A su vez, la especificidad de su dinámica política muestra, por contraste, aspectos de la dominación política en América Latina que, aunque sólo sean tratados a manera de contrapunto, pueden abrir el camino hacia un análisis comparativo que permita escapar al dilema creado entre un empirismo ciego y una proliferación de conceptos que, aunque útiles, no constituyen aún una teoría de nuestras sociedades.

Los años vividos en Chile durante la Democracia Cristiana y el gobierno popular me impulsaron a hacer este trabajo, en la convicción de que es preferible avanzar hipótesis, dudar, contradecirse, que encontrar en el silencio el refugio para la desazón que dejó la muerte del Chile popular. Que este intento, pese a sus debilidades, pueda contribuir a la discusión que se abrió en septiembre de 1973. Ése es mi propósito.

Por último, quiero dejar aquí testimonio, ante todo, de mi deuda con el profesor Alain Touraine, quien me ayudó con sus críticas, su

[6] Dado que carece de sentido reproducir aquí todo el extenso material publicado sobre el tema, especialmente después del golpe militar de septiembre, señalo tres obras recientes que me parecen contribuciones importantes para este análisis: Uribe, Armando, *El libro negro de la intervención norteamericana en Chile,* México, Siglo xxi, 1974; Vuskovic, Pedro, *Acusación al imperialismo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1975 y Petras, J. y Morley, M., *La conspiración yanqui para derrocar a Allende,* México, Ed. Nuestro Tiempo, 1974.

apoyo y su estímulo permanente durante todo el período de elaboración de este trabajo.

Durante el tiempo en que este libro fue escrito, numerosas discusiones y muchas horas de trabajo en común tuvieron para mí enorme importancia. Esta experiencia está vinculada a varias personas con las que contraje una deuda intelectual: Juan Carlos Torre, Silvia Sigal, Daniel Pécaut, Julio Cotler, a quienes no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento.

PRIMERA PARTE

LA FORMACIÓN DEL MODELO POLÍTICO CHILENO: DE PORTALES A LA CRISIS DE 1930

CAPÍTULO I

LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Como se señaló en la Introducción, este estudio parte del proceso de creación de la sociedad nacional en Chile. La hipótesis que subyace a este enfoque histórico afirma la necesidad de buscar aquellas condiciones pasadas que son eficaces para dar cuenta de las tendencias y direcciones de las transformaciones ocurridas en la sociedad chilena después de la ruptura del pacto colonial. En efecto, una primera observación de importancia con que se encuentran los estudiosos de la sociedad chilena es que allí, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas más comunes, el proceso de organización nacional es un proceso temprano y de rápida consolidación. Esta primera "singularidad" de la sociedad chilena, que aparece en el trasfondo de las tendencias más generales para América Latina, debe ser puesta en relación con las formas de dominación política que conoció esa sociedad.

En términos más generales, la hipótesis es que el proceso de formación de las sociedades nacionales en América Latina constituye una dimensión analítica que es necesario hacer intervenir para comprender los efectos que las diversas modalidades de inserción en el sistema capitalista mundial produjeron sobre los sistemas de dominación de las sociedades dependientes.

El intento de transitar este camino en el caso que me preocupa —la sociedad chilena— tiene el doble objeto de dar cuenta de la especificidad del modelo político que conoció esa sociedad y —procediendo por contraste— plantear algunos aspectos de la dominación política en América Latina.

Lo que interesa destacar aquí son algunas hipótesis que permitan interpretar las características que revistió la creación de la sociedad nacional en Chile después de la ruptura del pacto colonial. Soy consciente de que un estudio histórico de las características que revistió este proceso en la sociedad chilena desborda las posibilidades de este trabajo. Más aún, un análisis comparativo de diversas experiencias de

constitución de las sociedades latinoamericanas que permita explicar las diferencias en las modalidades de los sistemas de dominación que en ellas se constituyen es una tarea que está lejos de mis objetivos inmediatos. Las comparaciones que se harán aparecen más como contrapunto para esclarecer el tema en discusión que como resultados de un análisis sistemático de ese período.

Mi intención consiste en destacar aquellos aspectos cuya importancia creo decisiva para comprender la evolución posterior de las formas de dominación política en la sociedad chilena. La debilidad de la documentación deja algunas "lagunas" que será necesario llenar con estudios posteriores orientados en esta dirección. En todo caso, avanzar en el conocimiento de esos "vacíos" constituye un primer paso para poder replantearse una serie de cuestiones que la reflexión sociológica vino eludiendo. Éste me parece el camino adecuado para evitar caer en un enfoque en el que la explicación se reduce a una causalidad externa, principio y fin del análisis.

En efecto, si bien en Chile, como en el resto de las sociedades de América Latina, la creación de la sociedad nacional reconoce la ruptura del orden colonial y la emergencia de un nuevo sistema de dominación a escala internacional, el análisis de la "dependencia" no puede sustituir a una teoría general. La dinámica de las sociedades dependientes reconoce una doble determinación: la lógica "externa" de la dominación extranjera y la lógica "interna" de la sociedad dominada. Si esta última no ha de ser concebida como un mero reflejo de la sociedad dominante es necesario volver la atención hacia el estudio de las formas específicas de articulación de las relaciones económicas, sociales y políticas —situadas en un tiempo histórico preciso— que permitan dar cuenta de las tendencias fundamentales de los cambios en la sociedad dominada.

Como corolario de esta afirmación se deriva que el estudio particular de la sociedad chilena sea visto como el resultado del análisis de las dos dimensiones señaladas: la forma particular de inserción en el sistema capitalista internacional y las peculiaridades del proceso de creación de la sociedad nacional que sigue a la ruptura del orden colonial.

Nuestra hipótesis sostiene que este análisis permite dar cuenta de los factores que constituyen la especificidad del modelo político chileno en América Latina. Las raíces de lo que los estudiosos han llamado el carácter "avanzado" del modelo político chileno, sin más precisiones, se encuentran en el cruce de estas dos dimensiones analíticas. Veamos por qué.

a] LA UNIFICACIÓN DE LOS INTERESES AGRARIOS Y COMERCIALES. HIPÓTESIS PARA SU INTERPRETACIÓN

Las luchas por la independencia política se desarrollaron en Chile, como en el resto de Hispanoamérica, como "un drama que se representaba en un escenario muy limitado: las élites criollas".[1] Carrerinos y o'higginistas se disputaron el mando sin que las diferencias entre ambas facciones pusieran en cuestión el carácter oligárquico de la dominación. Las divisiones políticas internas de la clase terrateniente giraron en torno de cuestiones tales como la continuidad de las instituciones coloniales o su liberalización; las relaciones entre la Iglesia y el Estado; la federalización o centralización de la estructura gubernamental.

El intento de O'Higgins de organizar un Estado autocrático con mando efectivo sobre el territorio fracasó. La aplicación de medidas tales como la eliminación de los mayorazgos, el establecimiento de la tolerancia religiosa, las contribuciones forzosas, etc., le enajenaron el apoyo de los terratenientes conservadores. Impugnado por sus enemigos carreristas, incapaz de articular políticamente los intereses de los sectores económicamente predominantes y enfrentado a la Iglesia Católica, O'Higgins debió abdicar. En 1823 se abrió un breve período de anarquía que habría de cerrarse con el triunfo militar de los terratenientes conservadores sobre los liberales en 1830.

La rivalidad de las dos fracciones políticas de la clase dominante —los pelucones y los estanqueros (conservadores) y los pipiolos (liberales) — se resolvió con el triunfo militar de los primeros. La oposición liberal fue disuelta y sus líderes perseguidos. La victoria conservadora inició el período de la denominada "República Portaliana" (1830-1860), período en el que se logró consolidar el orden político independiente bajo la hegemonía de los grandes terratenientes del valle central.

Cabe preguntarse cuáles fueron los factores que determinaron que el proceso de organización nacional se iniciara en Chile más temprano que en el resto de los países de América Latina. El hecho decisivo en que descansó el Estado autocrático construido por Portales fue la unificación política de los sectores agrarios y comerciales de la clase dominante. La tendencia liberal pudo gobernar mientras éstos estuvieron políticamente fraccionados. Las bases de esta unificación polí-

[1] Halperin, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina*, Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 91.

tica, orgánicamente representada por el ministro todopoderoso, Diego Portales, descansaron en la continuidad de la pauta económica colonial.

La mayoría de los historiadores coincide en señalar que la guerra de la independencia no produjo en Chile una conmoción social ni una transformación fundamental de las instituciones.[2] La explicación de esta singularidad fue expuesta por Celso Furtado.[3] El autor observa que: "Las dificultades encontradas en los mercados externos para abrir líneas de exportación dejaron a los grupos urbanos que habían dirigido las luchas de la independencia incapacitados para organizar un sistema de poder estable".[4] El caso de Chile, agrega, constituye una excepción a esta regla. Ese país, capitanía autónoma de la época colonial, no era ni centro de metales preciosos ni región exportadora de productos agropecuarios hacia la metrópoli. Chile era una región agropecuaria articulada al polo peruano. En efecto, a fines del siglo XVIII la agricultura y la ganadería colocaban apreciables cantidades de excedentes en el mercado peruano. Como señala Furtado, los intereses exportadores chilenos estaban integrados con los agropecuarios de la región y se habían formado bajo el cuadro legalista del monopolio organizado por la metrópoli. A diferencia de otras burguesías comerciales, formadas en el comercio del contrabando y bajo fuerte influencia inglesa, la burguesía comercial chilena estaba estrechamente articulada a los sectores agropecuarios. La continuidad de esta pauta colonial después de la independencia constituyó el elemento clave para la unificación política temprana de estos sectores. Como observa Furtado, Chile pudo sacar partido de las condiciones particularmente favorables en lo referente a comercio exterior. Poseía un núcleo de economía minera basado en la producción de la plata y el cobre, el cual se expandió a partir de entonces, y disponía de un excedente agrícola, especialmente de trigo, que colocó en una posición privilegiada en la zona del Pacífico. Ningún otro país latinoamericano de la zona del Pacífico disponía de iguales potencialidades agrícolas y de una tradición de exportación en ese sector. Por otra parte, como también señala Furtado, dadas las con-

[2] Véase Galdames, Luis A., *A History of Chile,* Chapell Hill, N. C., University of North Carolina Press, 1941, p. 131, cit. en Petras, James, *Política y Fuerzas Sociales en el desarrollo chileno,* Buenos Aires, Amorrortu, 1971, p. 75.

[3] Furtado, Celso, *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana,* Santiago, Ed. Universitaria, 1970.

[4] Furtado, Celso, *La economía..., op. cit.,* p. 40. Véase también Ramírez, N., Hernán, *Antecedentes económicos de la independencia de Chile,* Santiago, Ed. Universitaria, 1967.

diciones de transporte de la época, ningún país atlántico, latinoamericano o no, podía competir con él.[5]

La debilidad de los conflictos en el seno de la clase dominante después de la ruptura del orden colonial encuentra su raíz en esta continuidad de la pauta económica colonial. La consolidación del proceso de unificación nacional se explica en primera instancia por la presencia de una clase dirigente unificada. A esta unificación política, estructuralmente determinada por la articulación de los intereses de los sectores agrarios y comerciales, se agrega una serie de factores que dan cuenta de la debilidad de las fuerzas centrífugas en la sociedad chilena que sucede al orden colonial. Como observa Aníbal Pinto,[6] la administración colonial en Chile estaba menos desarticulada que en otras regiones. Por otra parte, la incorporación del territorio despojado a los indígenas ya se había iniciado bajo la égida de los intereses metropolitanos en el siglo XVIII (la conquista de la Araucania). En 1883, todo el territorio araucano quedó incorporado y por esa vía quedaba consolidado el gran latifundio en el sur. Cabe agregar también que Chile era un país homogéneo, sin el peso de una sociedad arcaica comparable a la peruana o la boliviana. Las condiciones geográficas del país, su aislamiento relativo, y lo que algunos autores describen como la "simplicidad de la estructura social",[7] es decir, el carácter homogéneo de la sociedad chilena, son factores importantes en esa consolidación de la unidad nacional. Unidad que, pese a revestir la forma republicana, conservó la tradición monárquica y aristocrática del período colonial.

Estos elementos, en el contexto de la continuidad de la pauta económica colonial, permiten dar cuenta del carácter temprano que revistió el proceso de unificación nacional en la sociedad chilena.

El Estado nacido con Portales fue un Estado autocrático, expresión directa de la hegemonía política de los grandes terratenientes del valle central. La organización republicana consagrada en la Constitución de 1833 sentó las bases de un gobierno fuerte, centralizado y elitista, destinado a garantizar la exportación de materias primas básicas, la propiedad privada de la tierra y el control de las masas plebeyas y artesanales.

[5] Furtado, C., *La economía..., op. cit.*, p. 41.

[6] Pinto Santa Cruz, Aníbal, *Chile: una economía difícil*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

[7] Véase Gil, Francisco, *El sistema político de Chile*, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1969, p. 55. El antiguo orden colonial había sido preservado por lo que Portales denominara "el peso de la noche", para referirse a la continuidad de la tradición colonial, como observa Gil.

Pero este Estado autocrático fue también un Estado nacional. Pese a que sólo parcialmente satisfizo los rasgos que la experiencia europea confiere a esta noción, el Estado portaliano fue un Estado nacional en el sentido de instrumento de la unificación política basada en el territorio y propulsor de la economía de exportación. Como en los demás países de América Latina, el Estado-nación en Chile fue un Estado oligárquico que restringió la participación política a las clases económicamente predominantes y a los sectores a ella asimilables. Su legitimidad se limitó a una "élite" y la identidad que alcanzó no fue abierta y consensual como en el caso de los Estados nacionales europeos.

La originalidad de la sociedad chilena reside precisamente en esta temprana consolidación de un Estado nacional autocrático a través del cual una clase dirigente nacional logró organizar la sociedad con éxito. El Estado portaliano fue eficaz en el logro de la "paz social" y garantizó la continuidad del dominio de la élite conservadora. Más aún, y como observa Jovet,[8] la creación de una sólida estructura administrativa —la maquinaria del Estado— impulsó un proceso de desarrollo que no lesionó las prerrogativas de esa élite.

Los intentos de institucionalización en otros países de la región no fueron sino pálidos reflejos de la norma portaliana —piénsese en la Argentina rosista— y sólo se concretaron en la década de 1880.

b] LA DOMINACIÓN POLÍTICA: EL ESTADO OLIGÁRQUICO Y LA CLASE DIRIGENTE NACIONAL

La solución portaliana a la crisis de la independencia confirió a los grandes terratenientes el ejercicio del poder estatal en el nivel local. La propiedad de la tierra y el control sobre los trabajadores constituía el fundamento del predominio de éstos en el bloque conservador. Pero, como vimos, los intereses de los sectores agrícolas estaban estrechamente articulados a los de una burguesía comercial, intermediaria de la vinculación entre éstos y el mercado internacional. Ambos sectores constituyeron una clase dirigente nacional encargada de la organización del país y capaz de asegurar —apenas un decenio después de las guerras de la independencia— una estructura de poder estable; orgánicamente representados por Diego Portales, la orientación hacia el mercado externo no impidió la expansión del sistema productivo local. De allí

[8] Jovet, Julio César, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, Santiago, Ed. Universal, 1955, pp. 32-35.

que los analistas coincidan en afirmar que ésta fue la etapa en la que el sistema productivo chileno fue más autónomo.[9]

La fuerza del proceso de unificación nacional chileno descansó en la unificación de la clase dominante, unificación que hizo posible que la orientación hacia el mercado externo fuera compatible con un proceso de modernización del que se beneficiaron también los sectores orientados hacia el mercado interno. Bajo el control de una clase dirigente el Estado ejerció un papel activo en el desarrollo de la economía nacional. La política de los gobiernos conservadores se orientó hacia la construcción de obras de infraestructura que consolidaron la economía de exportación de los grandes terratenientes del valle central: ferrocarriles, telégrafos, caminos, puertos y canales de regadío. Pero también durante ese período (1830-1861) se adoptaron una serie de medidas proteccionistas destinadas a impulsar el desarrollo de la manufactura.[10] La estabilidad política garantizada por la regla portaliana explica en gran parte el auge económico que se produjo después de 1830. En efecto, en esas condiciones la disminución de la fuga de capitales y el comienzo de un proceso de acumulación cobraron fuerza.

La subordinación del ejército a la autoridad civil, depurado de oficiales liberales por Portales, fue un elemento decisivo en el logro de la unidad nacional. Como en la mayoría de los países de América Latina, el ejército cumplió un papel clave en la formación de la sociedad nacional. Pero el orden conservador en Chile, a diferencia de la situación peruana o boliviana, comenzó por limitar la fuerza del ejército.[11] Esta temprana subordinación del poder militar al civil, compatible con la presencia de presidentes militares durante los primeros veinte años de gobierno conservador, hizo factible que allí los militares aparecieran más como la expresión armada de la nación que como los guardianes del orden establecido. La victoria en la guerra contra la Confederación peruano-boliviana (1836-1839) legitimó los valores del orden establecido al identificarlos con la defensa de la comunidad territorial, al mismo tiempo que sentó las bases de esta percepción del papel del ejército en la sociedad chilena.

La estabilidad de la regla conservadora estuvo asociada al papel desempeñado por el ejército. En efecto, cuando la burguesía minera comenzó a luchar por un espacio político propio (y durante los gobiernos conservadores de los generales Prieto y Bulnes la minería había

[9] Véase Zemelman, Hugo, "El movimiento popular chileno y el sistema de alianzas en la década de 1930", en Faletto, E. Ruiz, E. y Zemelman, *Génesis histórica del proceso político chileno,* Santiago, Ed. Quimantú, 1971, pp. 33-118, p. 39.

[10] Pinto Santa Cruz, A., *Chile: una economía..., op. cit.,* p. 157.

[11] Halperin, T., *Historia contemporánea..., op. cit.,* p. 268.

cobrando un peso importante en la economía chilena), el ejército part cipó activamente en la pugna por el poder entre las fracciones de la clas propietaria. La solución política a las guerras civiles de 1851 y 185 —verdaderas revoluciones en las que se incorporó a la lucha a obrerc y artesanos— descansó en la subordinación del poder militar al civi Esto es, los militares garantizaron la regla conservadora y su transició hacia formas más liberales sin que se quebrara la institucionalidad.

Un Estado autocrático, expresión de la articulación directa entre e poder económico y el poder político en la sociedad chilena, pudo prc longarse a través de la tutela de un ejército prestigioso que tomó su cargo la defensa de los intereses de la élite dirigente.

Pero durante el período conservador (1830-1861), la sociedad chilen conoció un desarrollo importante del sistema productivo. En el Nort Chico creció una burguesía minera en torno a la explotación de l plata y del cobre. Entre 1845 y 1860 la producción minera experiment un notable ascenso, incluida la carbonífera del sur. El sostenido aumen to de la producción de cobre hizo que Chile se convirtiera en e primer productor mundial de ese metal en la década de 1860-1870.[1] Al mismo tiempo, la demanda de nuevos mercados —Australia, Cali fornia, Inglaterra— y las necesidades de las nuevas zonas mineras e expansión, hicieron crecer la producción agrícola ganadera.[13] A media dos de siglo, el Manifiesto del Partido Conservador ("Chile es un nación agrícola y comercial") comenzaba a quedar estrecho frente a surgimiento de nuevos sectores que aspiraban a compartir el pode desde posiciones de fuerza económica considerable. El gobierno d Montt mostró los efectos de esta diversificación en el seno de las clase propietarias. La burguesía minera hizo sentir su peso económico e la escena política. En efecto, Montt amplió la red ferroviaria desde e norte minero hasta el centro agrícola-ganadero (las primeras vías férrea en el Norte Chico habían sido financiadas por la burguesía miner con sus propios capitales).[14] La hegemonía política de los terrateniente del valle central comenzaba a ser socavada por un amplio descontent que desembocaría en los enfrentamientos de 1851 y 1859.

Hacia mediados de siglo, la fuerte integración del sistema productiv chileno en el sistema internacional —a través de las actividades mine ras en primera instancia, pero también de las agrícolas— trastrocó la

[12] Véase Herman, Alberto, *La producción en Chile de los metales y minerales má importantes desde la conquista hasta fines de 1902,* cit. en Vitale, Claudio, *Inter pretación marxista de la historia de Chile,* Santiago, Ed. Universitaria, tomo III p. 150.

[13] Pinto Santa Cruz, Aníbal, *Chile, un caso de desarrollo frustrado,* Santiago, Ed Universitaria, 3ª ed., 1973.

[14] Vitale, C., *Interpretación..., op. cit.,* tomo III, p. 159.

bases de la "República portaliana".[15] Los voceros más visibles del descontento se expresaron en la generación literaria de 1842. Entre sus filas se encontraron los hombres que, a través de la Sociedad de Igualdad (creada en 1850), expresarían las ideas de avanzada social. La burguesía minera, encabezada por los Matta y los Gallo, constituyó el eje del desafío a la regla conservadora, desafío que se extendió a la zona austral y al valle central. Los gobiernos de Bulnes y Montt debieron hacer uso reiterado de las facultades extraordinarias que preveía la Constitución de 1833 para reprimir el descontento. La liberalización lenta del régimen durante el gobierno de Montt fue insuficiente para incorporar las nuevas demandas de los sectores surgidos bajo el impulso del comercio internacional. Con todo, significó el comienzo de un proceso de diversificación de la estructura de poder. El impulso a la enseñanza pública, la ampliación de la universidad (creada en 1842), la proclamación de la libertad de cultos, eran signos de una respuesta cautelosa a las nuevas condiciones que vivía la sociedad chilena. La transición hacia la "República liberal" (1860-1891) no fue pacífica, aunque sí pudo llevarse a cabo sin quebrar la institucionalidad vigente. La transformación institucional —la liberalización de las instituciones políticas— significó la ampliación de las bases sociales de la dominación. El Estado autocrático —espacio político de los grandes terratenientes del valle central— pasó a constituirse en un Estado oligárquico de bases más diversificadas (la burguesía minera y sectores de una burguesía industrializante surgidos al compás del desarrollo del sistema productivo).

La eliminación de los rasgos autocráticos del sistema político respondía a las nuevas perspectivas abiertas en el mercado internacional. La oscilación desde una política proteccionista, orientada al desarrollo de la manufactura, hacia una política de afianzamiento de la economía de exportación, se sustentó en la coincidencia de intereses entre los nuevos y viejos "propietarios" del Estado. Unos y otros se beneficiaron de la creciente integración en el mercado internacional, como observa Aníbal Pinto.[16] Esa coincidencia de intereses hizo posible la liberaliza-

[15] Como consecuencia de la victoria en la guerra contra la Confederación peruano-boliviana, Valparaíso había pasado a desempeñar un papel en el Pacífico similar al de Buenos Aires en el Atlántico.

[16] "Pero, insistimos, no hay antagonismos fundamentales en el terreno económico. Como grupo, todos son productores primarios o de servicios anexos o subordinados; todos son más o menos librecambistas por las mismas razones y sus mercados principales están afuera, y en el exterior también se hallan los aprovisionamientos que requiere su demanda habitualmente refinada; no son proteccionistas por la simple razón de que tienen poco que proteger; y finalmente, todos van a ser en alguna medida partidarios de la depreciación monetaria porque mejora sus posibilidades en

ción de las instituciones políticas. Durante buena parte del siglo XIX, la clase dirigente había utilizado al Estado para preservar sus intereses económicos de la competencia externa.[17] El neomercantilismo, con su insistencia en la protección y fomento de la industria, gravitó fuertemente cia en la política conservadora. En efecto, los gobiernos de Prieto y Bulnes habían apoyado vigorosamente una política proteccionista. Ya en la época de Montt (1851-1860) se había debilitado esa política y, consecuentemente, el papel que desempeñara el Estado en la economía nacional.

Los años de la "República liberal" estuvieron marcados por una disminución del papel del Estado en la economía nacional. Como observa Leiva Lavalle,[18] el gobierno se desentendió progresivamente de los asuntos económicos y permaneció indiferente ante las alzas y bajas del sector manufacturero y de la marina mercante. En el período 1879-1900, la disminución de las tasas de crecimiento del ingreso fiscal fue notable; y lo fue particularmente en el caso del gasto, pese a que a partir de entonces el gobierno tuvo la posibilidad de recurrir al salitre.

El modo de funcionamiento del Estado autocrático aparecía directamente ligado a sus iniciales "propietarios": los grandes terratenientes del valle central. La liberalización política con el consecuente debilitamiento de ese Estado instauraba un nuevo patrón de funcionamiento acorde con la diversificación de los sectores dominantes y la coincidencia de sus intereses, ahora volcados hacia afuera.

Esta liberalización existió junto con la pauta de comportamiento oligárquico. La sociedad política de entonces sólo incluía a aquellos sectores de la clase dominante cuyo poder económico les permitía abrirse un espacio político propio. La articulación directa entre el poder económico y el poder político en la sociedad chilena confirió al Estado un carácter oligárquico desde sus orígenes. La presencia de formas democráticas no alteró ese carácter.[19] Los grandes terratenientes de

---

el mercado externo y alivia sus deudas, cosa importante cuando ellos son los únicos que gozan del crédito." Pinto Santa Cruz, A., *Chile, un caso de..., op. cit.*, p. 39.

[17] Véase Will, Robert M., "The introduction of Classical Economics, into Chile", en *Hispanic-American Historical Review*, vol. XLIV, núm. 1, febrero 1964, pp. 7, 16; cit. en Petras, J., *Políticas y..., op. cit.*, p. 80.

[18] Leiva Lavalle, J., *El sector externo, los grupos sociales y las políticas económicas en Chile, 1830-1940*, Santiago, CESO, pp. 13-14. Sin embargo, como observa el autor, algunos rubros de la manufactura, especialmente los ligados al comercio de exportación, a la construcción de ferrocarriles y al consumo interno, no pudieron dejar de desarrollarse. Existen indicios de que el crecimiento manufacturero se acentuó cuando se aflojó la competencia externa como consecuencia de la contracción económica de los años 1875-1879. Véase Carmagnani, M., Hernández, D. y Colodro, M., "Evolución de la Industria en Chile, 1860-1940", en *Boletín del Centro de Estudios Socioeconómicos*, núm. 1, Santiago, 1967.

[19] La reforma electoral de 1874 desplazó el control del proceso electoral desde el

Santiago y del sur (entonces más que nunca ligados a la exportación), los grandes mineros del Norte Chico, y los grupos comerciales y financieros asociados con el comercio exterior de la capital y su puerto, Valparaíso, fueron los actores legítimos en el sistema de dominación. El patrón de funcionamiento del Estado quedaba en sus manos.

La Guerra del Pacífico (1879-1883) acrecentó los recursos (incorporación de las regiones salitreras al territorio chileno) e introdujo una mayor complejidad en la división social del trabajo, el sistema de dominación y el aparato estatal. A partir de entonces el desarrollo del capitalismo dependiente en Chile giró en torno del enclave. Para comprender la peculiaridad del modelo político que se gestó como respuesta al sistema de enclave, se hace necesario fijar las características que el proceso de creación de la sociedad nacional tuvo en ese país.

La temprana formación de un Estado nacional —un Estado que participó de los efectos que introdujo en su constitución la inserción dependiente en el sistema capitalista mundial— constituyó una dimensión clave para el análisis de la forma de dominación política en el momento de la formación del enclave salitrero.

Una clase dirigente nacional políticamente unificada en torno a un modelo de funcionamiento del Estado que garantizó su dominio —bajo un régimen autocrático primero, más liberal después— había tomado a su cargo la dirección de las transformaciones de la sociedad. Su reacción frente al enclave no puede ser comprendida sin tener en cuenta su historia previa.

La hipótesis es que, si bien la modalidad de dependencia constituye un factor clave en el análisis de los sistemas de dominación de las sociedades dependientes, no lo agota. La sociedad chilena de comienzos de este siglo fue una sociedad de enclave que conoció un modelo político atípico con respecto a otras situaciones estructurales de dependencia similares, e incluso se alejó de las situaciones caracterizadas por el control nacional del proceso productivo. Para comprender esta "singularidad" es necesario partir del proceso de formación de la sociedad nacional como la otra dimensión analítica a controlar en el estudio de las formas de dominación política. Los efectos que produce la forma de articulación económica con el exterior se interiorizan en la sociedad dominada, mediatizados por las formas específicas que allí reviste la articulación de las relaciones sociales, políticas y económicas.

Ejecutivo hacia las representaciones partidarias, al mismo tiempo que amplió la participación política al derogar el carácter censitario de la Constitución de 1833. Véase: Borón, Atilio, "Movilización política y crisis política en Chile", en *Aportes*, núm. 20, abril de 1971, p. 49.

CAPÍTULO II

ECONOMÍA DE ENCLAVE Y PATRÓN DE DOMINACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CHILENA: LA SINGULARIDAD DEL "MODELO POLÍTICO" CHILENO

a] LA CONSTITUCIÓN DEL ENCLAVE SALITRERO: DESARTICULACIÓN ENTRE EL PODER ECONÓMICO Y EL PODER POLÍTICO EN LA SOCIEDAD CHILENA

El triunfo de la Guerra del Pacífico tuvo una consecuencia paradójica. Al tiempo que consolidó la unidad nacional, reforzando los valores de la clase dominante al identificarlos con la grandeza de la nación, marcó el momento de la máxima apertura a la dominación extranjera. La clase dirigente nacional renunció a su papel de agente del proceso de transformación de la sociedad chilena; a partir de entonces se comportará como una oligarquía también en el nivel de las relaciones de producción. En efecto, se mostró más interesada en la reproducción de sus privilegios, y por ende del sistema de dominación imperialista del que era beneficiaria, que en la transformación de la sociedad. El período de desarrollo más autónomo que había conocido la sociedad chilena bajo la regla conservadora quedaba definitivamente clausurado.

La economía chilena se articuló con el capitalismo inglés a través de la explotación del salitre. La minería del salitre pasó a ser controlada por el capital inglés, tanto en la fase de comercialización como en la de explotación.[1]

¿Por qué se desnacionalizó el salitre? Es difícil responder a esta pregunta si se tiene en cuenta que nada obligaba al gobierno a tras-

[1] En 1878, el capital inglés americanizado representaba el 13% de la industria del salitre y el peruano-boliviano el 67%; el 20% restante correspondía a extranjeros económicamente nacionalizados. El 10 de agosto de 1884, el capital peruano había desaparecido; el chileno estaba reducido al 36%; el inglés llegaba al 34% y el capital europeo no nacionalizado, al 30%. El 31 de diciembre de 1901, el capital inglés representaba el 55%, el europeo no nacionalizado el 30% y el chileno el 15%. Encina, Francisco, *Historia de Chile*, tomo XVIII, p. 314, cit. en Leiva Lavalle, Jorge, *El sector externo, los grupos nacionales y las políticas económicas en Chile, 1830-1940*, CESO, Universidad de Chile, Santiago, mimeo., p. 22.

pasar la propiedad de las oficinas explotadoras a manos del capital extranjero. La contracción económica de 1875-1879 había hecho disminuir en forma drástica las exportaciones tradicionales.[2] Los productores de cobre durante más de 20 años —primeros productores en el mercado mundial— se enfrentaron con dos tendencias que los afectaban negativamente. Como observa Lavalle, la disminución de los depósitos de alta ley provocaba alzas en los costos. Por otra parte, el comportamiento del mercado internacional deprimía los precios. El cobre sólo podía mantenerse o revivir sobre la base de innovaciones organizativas o tecnológicas.[3] Muchos empresarios chilenos prefirieron confiar sus utilidades a la seguridad que brindaban los mercados de capitales europeos antes que reinvertirlas en sus propias explotaciones.

Así, en el contexto del predominio ideológico de una política liberal y antiestatista, la alternativa del enclave salitrero encontraba eco en los distintos sectores de las clases propietarias locales. Las innovaciones tecnológicas serían aplicadas por el capital extranjero. En pocos años el capital inglés logró desarrollar un sector que sustituyó con creces la decadencia de las exportaciones tradicionales chilenas y se constituyó rápidamente en la actividad económica más dinámica del sistema.

El sistema de dominación se transformó como consecuencia de la constitución del enclave. El poder económico dominante quedó fuera de la sociedad. La disociación entre el poder económico —la dominación inglesa sobre los recursos salitreros— y el poder político de las clases dominantes locales, todas ellas económicamente débiles frente al enclave, alcanzó su grado máximo bajo esta modalidad de dependencia que conoció la sociedad chilena de fines del siglo pasado.

La acción del Estado como agente de modernización de la economía había venido reduciéndose desde tiempo atrás y era resistida por todos los sectores, ahora volcados hacia el mercado internacional. El sistema político era el espacio en el que las clases propietarias expresaban su dominación política, dirimiendo las pugnas por maximizar sus beneficios, y sin que ningún sector vetara el esquema de política económica seguido. Con la nueva forma de articulación con el capital extranjero —el enclave minero— el Estado oligárquico, prácticamente ausente en los años del régimen liberal, adquirió una nueva función. En ausencia de propietarios nacionales del sector exportador más dinámico, fue el Estado el encargado de negociar el excedente proveniente del enclave. Las clases propietarias nativas participaron de los beneficios en el marco de la dominación extranjera y en condición de subordi-

[2] Leiva Lavalle, J., *El sector externo..., op. cit.*, pp. 18-19.

[3] *Ibidem*, p. 19. Véase también Pinto Santa Cruz, Aníbal, *Chile: una economía..., op. cit.*, p. 163.

nación frente al Estado, intermediario de su articulación con el enclave.

La constitución del enclave salitrero redefinió el modo de articulación entre las clases y el Estado al introducir como personaje clave al poder económico extranjero. El Estado se debilitó en su papel económico y reforzó sus funciones políticas. En efecto, *el Estado chileno pasó a ser el lugar de negociación entre las distintas fracciones de la clase dominante y entre éstas y la potencia económica extranjera en el enclave;* la función represiva destinada a garantizar el orden interno que facilitase las actividades del enclave se vio necesariamente reforzada y, finalmente, a él le cupo definir las áreas de conflicto legítimas.

Esta nueva modalidad de funcionamiento del Estado, consecuencia de las condiciones estructurales fijadas por la dependencia bajo la forma del enclave, significó —y no podía ser de otro modo— una redefinición de la clase dominante y de las relaciones entre ésta y las clases dominadas (lo que constituye un factor clave para comprender el comportamiento de estas últimas). Las clases dominantes locales pasaron a ser los agentes políticos de la dominación del enclave.

Esta caracterización del impacto del enclave sobre el Estado chileno permite fijar el campo de posibilidades que se abrió a la dinámica política de la sociedad. Sin embargo, es insuficiente para dar cuenta de su desarrollo específico. En efecto, si la descripción se detiene aquí se corre el riesgo de perder la especificidad del Estado chileno que se constituye como respuesta al enclave. En otros términos, se lo puede confundir con otros Estados latinoamericanos de enclave.

Cabe entonces preguntarse en qué consistió su peculiaridad. *Mi hipótesis es que la particularidad de los efectos del enclave sobre la sociedad chilena (el rol del Estado en las relaciones entre las diversas clases sociales) reside en la presencia de una clase dominante local unificada en torno al sistema hegemónico.* La unificación de las clases dominantes se había expresado tempranamente en la constitución de un Estado nacional. La legitimidad de ese Estado no fue cuestionada. Por el contrario, las clases dominantes locales se sirvieron de ella para negociar, desde una posición de repliegue y subordinación frente al enclave, sus posiciones políticas y económicas. La burguesía industrializante aprovechó las posibilidades de desarrollo de los sectores mercantiles y financieros y los terratenientes se beneficiaron de la colocación en el mercado interno generado por el enclave.

Mientras en otras situaciones latinoamericanas de enclave, las clases dominantes constituían un conjunto fragmentado, sin capacidad para superar los antagonismos que surgieron con la ruptura del pacto colo-

nial (y que por supuesto también conocieron los sectores dominantes chilenos), en Chile una clase dirigente nacional unificada pudo reaccionar frente al sistema del enclave en condiciones que le fueron particularmente favorables. Había salido victoriosa de la Guerra del Pacífico y contaba con un ejército excepcionalmente prestigioso en la región; [4] los productores de cobre habían sido durante más de dos décadas los primeros productores en el mercado mundial. Su unificación relativa en torno del modelo político y su poder económico les abrían posibilidades excepcionales.

En la medida en que las nuevas funciones del Estado se fueron reforzando por la presencia misma del enclave (y no fueron cuestionadas desde el seno de la clase dominante),[5] se abrió la posibilidad para una mayor exteriorización de la dominación de clase en el Estado. Los sectores urbanos y mineros (las clases medias que surgirán prohijadas por ese Estado del enclave y las clases proletarias surgidas esencialmente en torno del enclave) pudieron percibir al Estado como un ámbito de participación política. Por el contrario, en el campo el Estado chileno siguió revistiendo la forma de un Estado de clase y no de Estado de una sociedad de clases.

En la particularidad de la respuesta a las condiciones objetivas fijadas por el enclave residen los determinantes que hicieron que el curso de la historia chilena se apartara de los caminos más comunes que conocieron otras sociedades latinoamericanas de enclave.

b] LOS EFECTOS DEL ENCLAVE SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES

El efecto principal que la constitución del enclave produjo sobre las clases dominantes de la sociedad chilena fue, como ya se señaló, la desarticulación entre el poder económico y el poder político. *El poder*

[4] A comienzos de la segunda mitad del siglo pasado se inició la modernización del ejército bajo la influencia de una misión germana. La victoria militar de 1879 transformó a Chile en la "Prusia iberoamericana" a los ojos de sus vecinos. Véase Halperin, *Historia contemporánea..., op. cit.*, p. 271.

[5] El caso extremo de las "repúblicas bananeras" configuraría una situación en la que no se puede hablar de "un Estado", en tanto que allí no se establece una dominación legítima y con mando efectivo sobre el territorio. De la administración colonial se pasa a una administración de tipo "factoría", que actúa como prolongación de la dominación extranjera. Véase Edelberto Torres Rivas, *Interpretación social del desarrollo latinoamericano*, Costa Rica, Ed. Universitaria Centroamericana, 2ª ed., 1971.

económico dominante quedó afuera de la sociedad. Las clases propietarias nativas perdieron su situación de predominio económico frente al enclave. Pero lo que constituye el aspecto central de los cambios producidos por la forma de articulación con el exterior es que *la clase dirigente chilena dejó de ser el agente de transformación económica de la sociedad;* ya desde mediados de siglo las presiones liberales habían reducido mucho su papel de dirigente del proceso de transformación de la sociedad. Con la constitución del enclave la dinámica de la transformación económica quedó en manos del capital extranjero. La oligarquía nativa expresó su dominación en el plano político —"hegemonía y dictadura"— en tanto agente político de la dominación extranjera. Es decir, con el propósito de garantizar la dominación extranjera sobre los recursos minerales, dominación de la que era beneficiaria. De este modo, la clase dominante local que bajo la regla conservadora había tomado a su cargo la revolucionarización económica de la sociedad, dejó de ser la clase dirigente de la sociedad que nacía con el enclave. En efecto, ésta pasó a comportarse más como una oligarquía interesada en la reproducción de sus privilegios en el marco de la dominación imperialista que como el agente de transformación de la sociedad.[6]

Desde el punto de vista de los efectos del enclave sobre las clases dominadas, la explotación del salitre, como la del estaño boliviano, significó el uso extensivo de mano de obra. En efecto, mientras que en 1880 en las provincias norteñas de Tarapacá y Antofagasta había solamente 2 848 obreros en la industria del nitrato, para 1890 este número había aumentado a 13 060. En todo el país, el número de trabajadores manuales no rurales había crecido un 50% en el lapso de una década y era ya de 150 000 obreros.[7] Por las características del trabajo generadas en el enclave, los trabajadores mineros representan una condición particular dentro de la clase obrera. El aislamiento geográfico que caracteriza a los centros productores y a las sociedades que surgen junto a ellos, unido a la presencia en los mismos de grandes concentraciones obreras y a la necesidad de trabajo en equipo, genera una subcultura obrera caracterizada por una fuerte solidaridad interna y una definición, que es a la vez una definición en términos de clase y en términos de comunidad.

La "conciencia proletaria" de los mineros[8] se expresa como concien-

[6] La noción de "oligarquía" incluye tanto a los sectores tradicionales como a los modernizantes de las clases dominantes.

[7] Angell, Alan, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile,* México, Era, 1974, p. 23.

[8] La noción de "conciencia proletaria" utilizada es la que desarrolla Alain Touraine en su libro *La conscience ouvrière,* París, Seuil, 1966, pp. 305-325.

cia de un antagonismo social, fuertemente penetrada por la ideología anarquista en los comienzos de la lucha de los mineros. La conciencia de exclusión —reforzada por la situación de aislamiento— pone de manifiesto las particularidades de las condiciones de vida y de trabajo de los mineros. Esta situación estructural específica, aunada con la posición estratégica en el sistema productivo, confiere a este sector un mayor poder de regateo que se expresa en la intensidad de los conflictos y las formas organizativas que los caracterizan.

De las concentraciones típicamente proletarias nacidas en torno del enclave surgieron las primeras organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera chilena. La composición predominantemente minera del movimiento obrero chileno constituye un dato de importancia básica para comprender la forma fundamental que revistió la lucha de clases en la sociedad chilena.

El desafío interno que significó la protesta minera por las condiciones de explotación en el enclave acentuó la función represiva del Estado, destinada a garantizar la disciplina de la fuerza de trabajo. Los mineros se movilizaban a partir de una lucha en las minas contra las compañías extranjeras. En esa lucha, no se enfrentaban directamente con las clases dominantes locales a las cuales no estaban ligados por ningún lazo de explotación económica. Sin embargo, su protesta contra el enclave puso en cuestión el orden interno, y, por esta vía, se constituyó en una amenaza para el sistema de dominación de la oligarquía nativa.

En 1890 estalló la primera huelga general de los trabajadores del nitrato en Iquique, que se extendió a Valparaíso y culminó en una violenta represión por parte del ejército. Estas primeras manifestaciones del sindicalismo chileno expresaban una revuelta proletaria contra un sistema de explotación que amenazaba la supervivencia de los obreros. El año 1890 marcó el comienzo de un movimiento que tuvo metas y liderazgos cada vez más autónomos. La articulación entre el Estado oligárquico y el enclave se vio amenazada.

La crisis política de 1891, que culminó con el derrocamiento del presidente Balmaceda, surgió en el contexto del doble impacto producido por la crisis económica que afectaba a los grupos dominantes y por el descontento minero. El Estado, constitutivamente débil como agente económico en tanto que dependiente de los recursos del enclave, se debilitó aún más como consecuencia de la contracción económica y del surgimiento de las primeras protestas obreras contra las compañías. La nueva articulación de las relaciones sociales, económicas y políticas que siguió a la crisis de 1891 no rompió con el modelo político de funcionamiento instaurado con el enclave. Sin embargo, dejó sentir sus efectos sobre la forma que revistió el Estado.

En efecto, el Estado era el administrador de los recursos del enclave, encargado de otorgar privilegios y concesiones nacionales y extranjeras, fuente del crédito interno y externo. El gobierno, a través de la tributación, era el agente que recibía y por lo tanto administraba, distribuía y gastaba la parte de la renta del enclave que quedaba en el país.[9] Pero esos recursos se habían reducido como consecuencia de la contracción económica y con esa reducción su lugar de "reparto democrático" de los excedentes quedaba impugnado. Al mismo tiempo, la protesta minera irrumpía en la escena política configurando una nueva fuerza social que pugnaba por lograr intervenir en el Estado.

c] LA CRISIS POLÍTICA DE 1891: APERTURA DEL ESTADO A NUEVAS FUERZAS SOCIALES. LA MAYOR AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

La contracción económica de 1875-1879 afectó a los grupos dominantes locales. La producción del cobre empezó a descender desde 1876. Los precios en Inglaterra, al finalizar el siglo, eran inferiores a la tercera parte de los obtenidos en 1872. La situación de la plata fue algo diferente ya que pese a la disminución de los precios en Londres la producción se mantuvo en niveles altos debido a la explotación de Caracoles. A partir de 1887 ésta también disminuyó en forma drástica. El trigo languidecía ya que los precios estaban por debajo o apenas sobrepasaban la mitad del precio promedio obtenido en los años cumbres. En parte esa reducción se debía a la entrada de trigo proveniente de nuevas regiones (Rusia, por ejemplo).[10]

Las disputas entre Balmaceda y la oposición hicieron crisis a propósito de la discusión de los presupuestos. El aumento de la capacidad del Estado en la coyuntura de la crisis económica y del surgimiento de las primeras protestas mineras contra la explotación de las compañías provocó la reacción de los grupos dominantes locales.

Las transformaciones institucionales bajo el régimen liberal se habían expresado en medidas destinadas a reducir la capacidad de acción del Estado.[11] El proyecto de Balmaceda y sus seguidores —el Partido Democrático Liberal— pugnaba por un papel más activo del Estado en la

[9] Véase Aníbal Pinto, "Desarrollo económico y relaciones sociales en Chile", *Trimestre Económico*, XXX, núm. 4, México, octubre de 1963.

[10] Leiva Lavalle, J., *El sector externo..., op. cit.*

[11] Las reformas constitucionales de los años 70: reducción del poder del Ejecutivo, fortalecimiento de las garantías personales, expansión del electorado con miras a mantener el poder de los caudillos locales, se orientaron en esa dirección. Véase Jovet, J. C., *Ensayo crítico..., op. cit.*, p. 103.

economía nacional. La nacionalización de algunas áreas estratégicas de la industria del salitre, las políticas proteccionistas que se concretaron en el arancel aduanero de 1887, y la modificación de aspectos de las finanzas públicas eran medidas de integración nacional frente a la dependencia del capitalismo inglés.

Los sectores proteccionistas habían ganado algún terreno. En 1883 se creó la Sociedad de Fomento Fabril, la que desde entonces clamó por la protección de las industrias nacionales. Éstas se beneficiaron, sin embargo, con las ventajas de las devaluaciones periódicas de la moneda nacional. También sectores terratenientes, como indica Leiva Lavalle,[12] se pronunciaron a favor de las medidas de protección. En efecto, enfrentados con las dificultades de colocación en el mercado externo se volcaron hacia el consumo interno. Esto ocurrió especialmente entre los agricultores del sur, quienes establecieron estrechos vínculos con el Partido Radical,[13] abandonando a sus representaciones tradicionales, el Partido Conservador y el Liberal. Estos últimos seguían convocando los intereses de los terratenientes del valle central.

Sin embargo, la debilidad de estos sectores no permite afirmar que contaran con un proyecto coherente de clase. El proyecto de Balmaceda significaba la puesta en marcha de medidas que favorecían una reforma capitalista-democrática adecuada a los intereses de los sectores volcados hacia el mercado interno. Pero, pese a la existencia de estos sectores, no tuvo eco entre aquellos económicamente predominantes. No existía una "burguesía nacional" que diera su apoyo a las medidas estatistas. Como observa Halperin, la trayectoria de la fracción política de Balmaceda se adaptó muy bien al parlamentarismo y se caracterizó por un marcado oportunismo.[14]

La reacción antiestatista triunfó después de una guerra civil en la que la intervención de la marina y parte del ejército jugó un papel decisivo.[15] Contrariamente a interpretaciones como la de Ramírez Necochea,[16] la hipótesis del derrocamiento de la burguesía nacional chilena no encuentra fundamento en los hechos. Parece más plausible

[12] Leiva Lavalle, J., *El sector externo...*, *op. cit.*, p. 24.

[13] Hacia fines de siglo surgió en la escena política el Partido Radical. Éste representaba a los nuevos sectores —las capas medias del funcionariado— nacidos a la sombra del Estado del enclave, y a las capas profesionales, fruto de la extensión de la educación.

[14] Halperin, T., *Historia contemporánea...*, *op. cit.*, p. 334. Véase también Gil, Federico, *El sistema político de Chile*, *op. cit.*, p. 7.

[15] Balmaceda resistió a la oposición. La intervención de buques de la marina inglesa en los episodios de la revolución del 91 contribuyó al desenlace.

[16] Véase Ramírez Necochea, Hernán, *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891*, Santiago, Ed. Universitaria, 1969.

centrar el fracaso de Balmaceda en la debilidad de aquellos sectores que podían acompañarlo. Como ya señalamos, la etapa de desarrollo más autónomo de Chile había quedado atrás en los años de la "República Liberal".

En efecto, desde la constitución del enclave y aun antes, los grupos dominantes locales no se comportaron como una "burguesía nacional"; sus intereses estaban estrechamente ligados a los del imperialismo. La época de los pioneros del cobre, como Urmeneta, había quedado atrás. La contracción económica y la protesta minera reforzaron la tendencia hacia una mayor dependencia de la economía nacional con respecto al capital extranjero. A comienzos de siglo el salitre estaba en manos inglesas y financiaba alrededor del 40% de las entradas ordinarias del Estado. La gran minería del cobre comenzaba a ser penetrada por los capitales norteamericanos. A partir de 1904 las minas de Chuquicamata y El Teniente, controladas por firmas norteamericanas, fueron las que llevaron la iniciativa.[17]

La crisis política de 1891 se resolvió a través de una reducción de la capacidad de acción del Estado. En efecto, la capacidad de gestión económica del gobierno (el poder ejecutivo) se vio considerablemente reducida. El Estado se había debilitado en tanto lugar del "reparto democrático" del excedente. Este debilitamiento del Estado del enclave significó la imposibilidad material de mantener en los viejos niveles la función redistributiva que le cabía. La pugna entre las clases dominantes (las principales beneficiarias) y la presión ejercida por los nacientes sectores medios (las capas de los funcionarios orgánicamente articuladas con el aparato del Estado) condujo a una "apertura" de ese Estado. En esta apertura, las clases medias conquistarán su ciudadanía política; pasarán a ser los actores legítimos. De este modo, la presión ejercida por esta nueva fuerza social será canalizada a través del sistema político. En los hechos, ésa fue la realidad que dio nacimiento a la República Parlamentaria que desde sus comienzos se pronunció por la reducción de las fuentes de ingreso del gobierno, al mismo tiempo que se redujeron drásticamente los impuestos internos. El sistema político pasó a ser el lugar en el que se negociarían los conflictos de clase. La crisis política de 1891 desembocó en una crisis social en la que lo que se impugnaba era la forma misma de reproducción de la sociedad. El proyecto oligárquico triunfó bajo el ropaje del liberalismo.

Si bien el Estado se debilitó como actor económico, cobró una realidad mayor en tanto que aparato político. Las clases dominantes pu-

[17] Leiva Lavalle, J., *El sector externo..., op. cit.*, p. 25.

dieron imponer su dominación ampliando el espacio político a nuevas fuerzas sociales. Las capas profesionales y burocráticas de la pequeña burguesía —hijas de ese Estado— pugnaron por una democratización formal de las estructuras de poder.[18] Los partidos Radical y Democrático fueron sus representantes en la escena política.

El Estado, disociado del poder económico (el enclave), se abrió a la penetración de nuevas fuerzas sociales que fueron incorporadas al sistema político. Esta apertura —a través de los canales institucionalizados del sistema político— marcó el carácter que tuvo la lucha política a partir de entonces. En efecto, las distintas fuerzas sociales definieron su lucha en términos de su inclusión en el Estado y no a través del cuestionamiento de la dominación de clase que esto expresaba. La lucha política fue una disputa por la participación en los beneficios, en el cuadro de la dominación extranjera, antes que una lucha por el control del aparato estatal.

En la medida en que esta solución política —o sea, la apertura de canales institucionalizados como instrumento de intervención de las fuerzas sociales— se consolide y resista a las duras pruebas de la realidad (tema sobre el que volveré al analizar los efectos de la crisis mundial de 1930), habrá de marcar la acción misma del movimiento obrero.

La República Parlamentaria vino a limitar la capacidad de intervención del Estado en las relaciones entre las clases. Sin embargo las condiciones estructurales impuestas por la situación de enclave contrapesaron este efecto. La acentuación de la dependencia de la economía nacional con respecto al capital extranjero (el comercio exterior chileno dependía cada vez más de la producción de compañías extranjeras y de la tributación de éstas) otorgó al Estado un papel crecientemente preponderante. La base económica de los terratenientes se había contraído y transformado cualitativamente. Los grupos locales ligados con el comercio exterior perdieron su importancia estratégica para la obtención de medios de pago.

La función política de intermediario en la negociación con la potencia extranjera del enclave le siguió confiriendo al Estado un alto margen de acción propia. En efecto, éste, a través del gasto fiscal, pudo constituirse una base de apoyo social propia, los "sectores medios", principales beneficiarios de las medidas de expansión de la educación y la creación de empleos. Ellos fueron la capa social que se

[18] Véase Humud, Carlos, "El sector público chileno entre 1830 y 1930", Santiago, Fac. de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Memoria, 1969, p. 180. El autor estima que el número de funcionarios públicos fue de 2 525 en 1860; de 3 048 en 1880; de 13 119 en 1900 y que alcanzó a 27 469 en 1919.

constituyó en la fuerza social e ideológica que hegemonizó los movimientos sociales de los años 20, lo que significó en los hechos el impulso de un proceso de apertura a nuevas fuerzas sociales que no desbordó los límites fijados por el sistema de dominación de clase.

En efecto, entre 1900 y 1920 la inflación afectó seriamente a los sectores de ingresos fijos. El antagonismo entre los sectores medios y los grupos dominantes locales cobró expresión en la evolución programática del Partido Radical, su representación política fundamental. Mientras que los acuerdos de la Convención de 1888 apenas mencionaron cuestiones economicosociales, la Convención de 1906 aprobó un programa que incluía reformas orientadas hacia un socialismo estatista moderado.[19]

La devaluación era el recurso sistemático de las clases dominantes para hacer recaer el peso de los avatares económicos sobre las clases asalariadas.[20] Por otra parte sus activos se revalorizaban constantemente con el alza de los precios y así podían recurrir al endeudamiento con moneda depreciada y obtener intereses reales negativos. Esta situación se constituyó en un rasgo estructural permanente de la historia inflacionaria de Chile. La lucha política del Partido Radical estuvo marcada por la constante presión para mantener la situación de relativo privilegio de las capas medias nacidas a la sombra del Estado.

Los acontecimientos políticos de los años 20 estuvieron decisivamente influidos por las presiones de los sectores medios y por la agitación obrera, esta última violentamente reprimida, en Santiago y Valparaíso, y más duramente aun en el norte minero y salitrero. La "semana roja" en Santiago, en 1905, arrojó como saldo la muerte de muchos obreros que protestaban por el alza del costo de la vida; la masacre de Santa María de Iquique, en 1907, constituyó la represión más cruenta de todas.

En 1920, la orientación socialista del movimiento obrero chileno era clara. Sin embargo, se trataba de un socialismo democratista, fuertemente antimperialista en el enclave minero y antipatronal en las industrias tradicionales (textiles en especial). Con un contenido internacionalista, reflejaba más la negación de un orden social injusto que un proyecto de construcción de una nueva dominación de clase.

En 1912, Emilio Recabarren organizó en Iquique el Partido Obrero Socialista de Chile, que diez años más tarde sería el Partido Comunista Chileno. La lucha de los obreros por la conquista de un espacio político propio se había iniciado tempranamente con la formación de

[19] Gil, Federico, *El sistema político de Chile, op. cit.*, p. 73.
[20] Jovet, J. C., *Ensayo crítico...*, *op. cit.*, pp. 60-63.

organizaciones sindicales.[21] Muy pronto también, ésta se articuló sobre el eje político a través de sus representaciones partidarias. El sindicalismo chileno, surgido en el marco de una situación de exclusión y con una composición predominantemente minera, constituyó una experiencia atípica con respecto a las formas del sindicalismo latinoamericano puesto que no surgió en el ámbito de una alianza populista a través de la intervención del Estado.

En el plano político, la defensa de los intereses corporativos de la clase obrera fue inicialmente delegada en las representaciones políticas de los sectores medios. Recabarren fue electo diputado por el Partido Democrático.[22] En 1920 prestaron su apoyo al candidato de la Unión Liberal, Arturo Alessandri Palma. Éste aparecía como la alternativa para las reivindicaciones democráticas de los sectores medios. Para los sectores populares, enfrentados con las consecuencias de la crisis salitrera, Alessandri representaba las expectativas de una reorientación de la economía.

En efecto, la crisis del salitre se traducía en un debilitamiento en la capacidad de gestión del Estado y en la contracción de las bases de poder de los grupos oligárquicos. La crisis económica provocó una diferenciación en el seno del bloque dominante. Los sectores asimilados a la oligarquía —la incipiente burguesía industrializante— y los sectores medios buscaron una alternativa propia en alianza con los sectores populares. Como observan Faletto y Ruiz, esta escisión en el bloque dominante, consecuencia de la crisis del salitre, desembocó en la crisis política de 1924.[23]

Hasta la crisis de 1924, marcada por la intervención del ejército en la escena política, las pugnas en el Congreso se caracterizaron porque ninguna fracción pudo imponer su proyecto. Se produjo una situación de empate político que inmovilizó toda medida de reforma. La elección parlamentaria de 1924 se transformó en un plebiscito, que el presidente ganó con holgura. Las medidas que propiciaba el gobierno atentaban contra los intereses de los sectores oligárquicos, beneficiarios del capitalismo inglés. La oposición parlamentaria a la modificación de

[21] Hubo tres tipos de organizaciones sindicales: las "sociedades mutualistas", de composición predominantemente artesanal; las "sociedades de resistencia", importantes en los medios obreros en que tenían fuerza los anarquistas; y las "hermandades *mancomunales*", predominantes entre los mineros del norte y los trabajadores portuarios. Véase, Angell, A., *Partidos políticos..., op. cit.*, pp. 25-38 y Barría, Jorge, *Historia del sindicalismo chileno*, Santiago, Instituto de Administración, 1967.

[22] El Partido Democrático, fundado en 1887, consiguió una base popular durante el régimen parlamentario. Véase Gil, F., *El sistema..., op. cit.*, p. 74.

[23] Faletto, Enzo y Ruiz, Eduardo, "La crisis de la dominación oligárquica (1920)", en *Génesis histórica..., op. cit.*, pp. 8-31, pp. 24-25.

los mecanismos de poder y la ampliación del sistema político, así como a las medidas económicas, paralizó la gestión del gobierno. La intervención militar para derrocar a Alessandri culminó cinco meses después con el retorno de éste, también apoyado por militares.

De este modo, en 1925 se impuso un proceso de democratización de la estructura de poder a través del cual los sectores medios lograron reivindicar sus intereses inmediatos. Las reformas en el área monetaria lograron la estabilización de la moneda, vieja aspiración de estos sectores. El fortalecimiento del ejecutivo permitió la mayor capacidad de intervención del aparato estatal al que estos sectores estaban estrechamente articulados.

En lo que respecta a las reivindicaciones de los sectores populares, la Constitución de 1925 incorporó el tema obrero a la legislación (protección del trabajador, función social de la propiedad). En 1924 se había dictado la legislación laboral que reconocía el derecho de huelga.[24] Sin embargo, el reconocimiento de la capacidad de organización corporativa de los obreros fue un reconocimiento mutilante. El código limitó el poder económico de los sindicatos al volverlos agentes relativamente débiles dentro del sistema de contratación colectiva. La ley de sindicalización reconocía al sindicato de empresas como única forma posible de organización corporativa y excluía a aquellas empresas que tuvieran menos de 25 obreros.

La democratización de la estructura de poder impulsada en 1925 tuvo un doble efecto. Desde el punto de vista de la clase obrera, significó el reconocimiento temprano, en comparación con otras situaciones latinoamericanas, de la capacidad de organización de la clase. Sin embargo se trataba de un reconocimiento atomizado (como ocurrirá más tarde en otros países de la región) que reforzó la desorganización política de las prácticas del proletariado. Los militares actuaron como garantes del modelo político de funcionamiento de la sociedad al asegurar el tránsito hacia una nueva articulación de las relaciones sociales, económicas y políticas dentro de los "límites de tolerancia" que imponía el sistema institucional vigente. Desde el punto de vista de las clases medias, la democratización formal de las estructuras de poder les garantizaba un espacio político propio de manera que sus intereses de clase quedaban representados en el aparato del Estado.

Los años 1925-1929 fueron años de excepcional prosperidad para el comercio exterior chileno. Las exportaciones llegaron a recuperar el ni-

[24] Barrera caracteriza el período abierto en 1910 como el de incorporación de la clase obrera a la sociedad política. Véase Barrera, M., "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile", en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Universidad Católica de Chile, Santiago, núm. 9, septiembre de 1971, pp. 119-155, p. 132.

vel que habían alcanzado a fines de la primera guerra mundial. Las importaciones crecieron a niveles que no serían recuperados sino hasta comienzos de la década de 1950. Los sectores orientados hacia el mercado interno también se expandieron. El sector manufacturero creció a un ritmo que, aunque inferior al de los años de la primera guerra mundial, fue superior al crecimiento histórico del sector en el medio siglo comprendido entre 1915 y 1964.[25]

En 1927, fue un militar, el general Carlos Ibáñez del Campo, el encargado de hacer frente a la crisis económica cuyos síntomas ya se dejaban sentir. Ibáñez combinó dos factores clave para lograr la "paz social" en los primeros tiempos de su gobierno. La prosperidad económica y el recurso sistemático al crédito norteamericano. Este último se transformó en una condición esencial para mantener el nivel de gasto fiscal, condición *sine qua non* de los nuevos grupos de poder para asegurar la estabilidad política.

La crisis de 1930 introducirá modificaciones sustanciales en la articulación del modelo político chileno; sin embargo, no quebrará la continuidad institucional como fue la pauta en Argentina o Brasil. Para explicar el porqué de esta estabilidad política que caracterizó a la sociedad chilena es necesario volver la atención hacia las características del modelo político de funcionamiento gestado bajo la dominación de enclave, y la forma fundamental que revistió la lucha de clases en esa sociedad.

d] EL MODELO POLÍTICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CHILENA: DE LA CONSTITUCIÓN DEL ENCLAVE A LA CRISIS MUNDIAL DE 1930

La sociedad chilena, cuyo modo de articulación fundamental con el capitalismo mundial fue la dependencia de enclave, conoció un modelo político atípico en América Latina. Muchos observadores no vacilaron en enfatizar su similitud con la experiencia europea, pero confundir el modelo político chileno con esa experiencia conduce al error de no captar sus rasgos esenciales distintivos. Más precisamente, *el modelo político chileno surgido bajo el enclave, no puede ser comprendido si se lo desvincula de los efectos que esa forma de dependencia produjo en la sociedad chilena.*

Por otra parte, la dependencia en tanto modo de inserción en el sistema imperialista no es suficiente para explicar su especificidad. Como

[25] Muñoz, Oscar, *Crecimiento industrial en Chile, 1914-1965*, Santiago, Universidad de Chile, 1971.

ya he señalado, los efectos que ésta produjo se interiorizaron en una sociedad nacional con características específicas.

El modelo político chileno se caracterizó por su temprana apertura a las clases dominadas, pero esta apertura supuso un compromiso tácito de quienes, dentro de éstas, serían los actores legítimos.

El movimiento obrero chileno gravitó desde muy temprano como una fuerza social autónoma; si bien sus representaciones políticas no lograron un espacio político propio hasta mediados de los años 30, la presión que ejercieron permitió el logro de conquistas que constituyen también una situación excepcional en América Latina. Este peso político se explica si se tiene en cuenta que la fuerza del movimiento obrero provenía allí, fundamentalmente, de aquellos sectores del enclave, es decir los mineros. La acción corporativa y la acción política del movimiento obrero estuvieron dirigidas a satisfacer, dentro de los límites de lo negociable, las demandas de esos sectores estratégicos de la economía, y por lo tanto, los que tenían un mayor poder de regateo.

De este modo, los protagonistas del patrón de dominación política —actores legítimos— eran la burguesía (los terratenientes, estrechamente vinculados a grupos urbanos, financieros, comerciales y minero-industriales), las capas medias (la pequeña burguesía tradicional, los pequeños comerciantes y propietarios y las "nuevas capas medias", profesionales y burocráticas) y los sindicatos. Estos últimos, con una posición secundaria y sin una expresión política autónoma legitimada. En efecto, no será sino a mediados de los años 30 cuando los partidos obreros se incorporen al sistema político en forma independiente. Pero lo que importa destacar aquí es que el modelo político que se consolida después de la crisis mundial ya estaba en germen en los años veinte. Entonces, como después de la crisis (durante los años del Frente Popular), los campesinos estuvieron excluidos de la sociedad política. En efecto, el campesinado constituía la base de poder de los terratenientes, a través de la cual éstos mantuvieron una cuota importante de poder político pese a la decadencia de sus posiciones económicas.

Este compromiso social tácito que se comienza a gestar constituye la clave para entender la continuidad institucional en la sociedad chilena y la presencia simultánea de una fuerte discontinuidad social. El fundamento de este pacto social fue la dominación de enclave; su peculiaridad, el hecho de que la lucha de clases apareciera en su forma más "pura" de enfrentamiento en los marcos de la sociedad nacional antes que como una lucha antimperialista. El modo de dominación fundamental quedaba encubierto. La presencia delegada de los trabajadores en el sistema político ocurrió tempranamente y también muy pronto revistió una forma autónoma (los partidos obreros). Sin embargo, y

como se verá en las páginas que siguen, la definición de los partidos obreros como agentes políticos de la clase no significó, en la práctica, que su acción no estuviera sometida a las reglas de juego dictadas por el sistema de dominación vigente. La legitimidad de la batalla corporativa que habrían de librar los partidos obreros en los marcos del sistema político tuvo como restricción la exclusión de las demandas de aquellos sectores que no formaban parte de la categoría homogénea del trabajador incorporado a la empresa capitalista. Y por supuesto, del campesinado.

El conflicto de clases se expresó políticamente como un enfrentamiento entre una burguesía —unificada— y un proletariado fundamentalmente minero (salitre, cobre, carbón). Sin embargo, el eje de la oposición de clases residía en las demandas proletarias dirigidas al enclave. Sus personajes clave eran el poder económico extranjero y el proletariado minero. Esta situación singular es la que permitió un amplio margen de institucionalización del conflicto. En efecto, *el antagonismo de clase en el plano político no tenía una contrapartida en el plano social y, por eso mismo, no tuvo consecuencias decisivas sobre el modo de producción dominante* (véase la segunda parte).

La apertura del Estado a nuevas fuerzas sociales y la mayor autonomía institucional que de ella derivara descansaron en un factor decisivo: la unificación política de las clases dominantes. Esta unificación política temprana, consolidada bajo el proyecto portaliano, no fue quebrada por la constitución del enclave. El Estado pasó a ser el lugar de negociación con el imperialismo, al mismo tiempo que la instancia de negociación y compromiso progresivamente abierta a nuevas fuerzas sociales. Garante de la reproducción de la sociedad —el papel del ejército fue estratégico en el mantenimiento de la disciplina de la fuerza de trabajo en el enclave y en el arbitraje político en las coyunturas de crisis— el Estado se expresó más como principio de unificación de la sociedad que como agente de transformación de la misma. Ello explica la autonomía del sistema político como lugar de conciliación de intereses sociales y de "reparto democrático" de los beneficios del enclave. Esta "relativa" autonomía institucional se expresa también en el carácter tempranamente asistencialista de la dominación política.

e] LA ESPECIFICIDAD DE LA DOMINACIÓN POLÍTICA EN CHILE VISTA EN EL TRASFONDO DE LAS FORMAS DE DOMINACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La primera observación de importancia en la que descansa la singularidad del patrón de funcionamiento político de la sociedad chilena,

la constituye la temprana unificación política de las clases dominantes locales. Esta unificación no fue quebrada, como señalamos, con la formación del enclave minero. Pese a la existencia de conflictos interburgueses, éstos no impugnaron el sistema hegemónico; esto es, la forma de articulación específica de las relaciones sociales, económicas y políticas en la sociedad chilena. *La única crisis política potencialmente revolucionaria, la crisis de 1891, desembocó en una solución política que reforzó el comportamiento oligárquico de las clases dominantes nativas en el nivel de las relaciones de producción.*

La coexistencia de un patrón oligárquico de comportamiento de las clases dominantes locales en el nivel de las relaciones de producción, con formas democráticas —la apertura del Estado y la transformación de las instituciones políticas expresada en el sistema parlamentario— explica la ambigüedad que rodea la definición del bloque de poder que se consolida con el enclave. En efecto, Faletto prefiere utilizar la expresión de "bloque oligárquico-burgués".[26] La necesidad de apelar a este "dúo" responde al hecho de que la dominación de clase revistió un carácter burgués en el plano político, en tanto que abierta y consensual (lo que no significa que no se haya apelado a la violencia). Pero sus "propietarios" no pueden ser confundidos con una burguesía en el sentido estricto del término. En efecto, no hay una burguesía en el plano de las relaciones de producción, a la manera de la burguesía clásica. En este nivel, las clases dominantes locales se comportaron como una oligarquía: estaban interesadas en la reproducción de sus privilegios en el marco de la dominación extranjera —el capitalismo inglés en primer término y luego el norteamericano— más que en la transformación de la sociedad.

La contrapartida de esta unificación política de las clases dominantes en torno del modelo de funcionamiento del Estado —la estructuración del poder— la constituye la génesis de un movimiento obrero de composición predominantemente minera que se expresó a través de un espacio sindical y político autónomo.

La unificación política de las clases dominantes reforzó la expresión política diferenciada de la clase obrera; es decir, la presencia de los partidos obreros como agentes políticos de la clase. De este modo, el movimiento obrero chileno resultó de la confluencia de dos factores clave para comprender las formas de su acción. Por una parte, su composición minera trajo aparejada una conciencia proletaria que expresó las características de vida y de trabajo de ese sector y se constituyó en

[26] Faletto, Enzo, *Clases sociales, crisis política y problemas del socialismo en Chile*, Santiago, FLACSO/ELAS, 1973, mimeo., p. 6.

el fundamento de las formas que revistió la lucha: la intensidad de los conflictos y la presencia temprana de formas organizativas con características específicas. Por otra parte, la unificación política de las clases dominantes reforzó la identidad clasista de los trabajadores y su diferenciación política. Éstos se enfrentaban ante una clase dominante unificada.

Cuando se piensa en el grueso de las situaciones latinoamericanas, el rasgo común que las diferencia de la chilena es la existencia de fraccionamientos en el seno de las clases dominantes. Esta afirmación no implica negar la interdependencia de las fracciones de la clase dominante con respecto a la dominación imperialista, como tampoco la existencia de conflictos en el seno de la clase dominante chilena. Lo que interesa destacar es que los conflictos interburgueses fueron menos agudos en el caso de esta última. En las situaciones de fraccionamiento de las clases dominantes locales. no se pudo constituir un movimiento obrero que alcanzara expresión política autónoma. Pero, y esto marca la consecuencia diferencial más visible, tampoco el sistema político fue capaz de constituirse en el lugar de resolución eficaz de los conflictos de clase.

La menor capacidad de integración de las clases dominantes, consecuencia del fraccionamiento, y la inestabilidad política que de ella se derivaba, condujeron a situaciones de crisis política permanente (Argentina o Brasil), o bien a la ruptura violenta del sistema, como en Bolivia y México.

La presencia de partidos obreros en la sociedad chilena aparece asociada a la capacidad de negociación e institucionalización de los conflictos que mostraron las clases dominantes locales, en tanto que políticamente unificadas en torno del sistema hegemónico.

Es interesante observar aquí, a manera de contrapunto, el caso colombiano. En efecto, en ese país, después de la crisis mundial de 1929 la unificación política de los diferentes sectores de la clase dominante constituyó un factor clave en el logro de la estabilidad política.[27] Sin embargo, ésta fue una unificación tardía (tardía si se piensa en Chile) y tuvo un efecto más débil que en el caso chileno. En efecto, en Colombia la lucha política revistió formas populistas, la clase obrera se definió como conservadora o liberal y el partido comunista tuvo escasa significación. La violencia como instrumento de impugnación de la dominación fue un elemento constante en la vida política colombiana.

[27] Para un análisis del sistema político colombiano, véase Pécaut, Daniel, *Sindicalismo y política en Colombia,* Bogotá, Ed. La Carreta, 1973.

Si bien no pretendo desarrollar sistemáticamente las implicaciones que derivan de las similitudes y diferencias entre la sociedad colombiana y la chilena, importa destacar que la estabilidad política aparece asociada a la unificación de las clases dominantes, como lo muestra Pécaut. El caso de Uruguay ofrece otro ejemplo de refuerzo, con la salvedad de que allí la estabilidad política no estuvo asociada a una fuerte impugnación —la violencia— como en Colombia: el movimiento obrero uruguayo se articuló tempranamente en torno del Estado (del Estado batllista) y estuvo marcado en su acción por el predominio de formas populistas.

El caso de México queda fuera de esta argumentación. En efecto, la estabilidad política lograda allí después de la revolución aparece asociada a la consolidación de un Estado fuerte, con un rol central como agente de transformación de la sociedad. Este Estado ejerció el control sobre los sectores populares y sus organizaciones de clase, al mismo tiempo que el sistema político se constituyó en un agente central de la desactivación política.[28]

En cuanto a Costa Rica, otra sociedad caracterizada por la situación de prolongada estabilidad política (apenas alterada por la "revolución" de 1948), tampoco resulta comparable. Si bien constituye una variante de la presencia de una clase dominante unificada, su industrialización tardía obliga a incluir su análisis en la problemática específica de las sociedades latinoamericanas caracterizadas por un bajo desarrollo de sus fuerzas productivas. En efecto, en Costa Rica no se constituyó un proletariado industrial capaz de impugnar las formas de dominación vigentes.[29]

La presencia de partidos políticos que reflejaban los clivajes de clase en la sociedad chilena constituye un aspecto central de la singularidad del modelo político que conoció esa sociedad. Pero esa singularidad descansó en el compromiso social tácito que se fue gestando durante la etapa de formación y consolidación del enclave minero. El modelo político chileno resistirá los impactos de la crisis mundial de los años 30. La raíz de su resistencia y flexibilidad para responder a las nuevas condiciones con que se enfrentó la sociedad chilena reside en la unificación política de las clases dominantes. Su lenta desarticulación y la ruptura que se produce durante los años de la democracia cristiana,

[28] Para un análisis del modelo político mexicano, véase Labastida, Julio, "Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas", en *Revista Mexicana de Sociología*, México: IIS, vol. XXXVI, núm. 3, julio-septiembre de 1974, pp. 629-642.

[29] Torres Rivas, Edelberto, *Procesos y estructuras en una sociedad dependiente*, Ed. Prensa Latinoamericana, Santiago, 1969.

no pueden ser comprendidos sin volver la mirada hacia los factores que hicieron posible su formación y consolidación.

En las páginas que siguen abordaremos el estudio del proceso de lenta desarticulación de este modelo político. En esta primera parte, el interés radicó en precisar la génesis de ese modelo y los elementos constitutivos básicos del mismo. Su desarrollo y las contradicciones que lo marcaron sólo pueden ser aclarados en el análisis del período que sigue a la crisis mundial de 1929.

SEGUNDA PARTE

EL LENTO PROCESO DE RUPTURA DEL MODELO POLÍTICO CHILENO: DE LA CRISIS DEL 30 AL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

CAPÍTULO I

LA CRISIS MUNDIAL Y SU IMPACTO SOBRE EL MODELO POLÍTICO

a] LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS

La crisis brutal de las exportaciones proporcionó un duro golpe a la economía chilena. El salitre, que generaba el grueso de las entradas económicas, se había visto afectado por la concurrencia del fertilizante sintético desde 1922. La minería fue el sector más perjudicado. Sin embargo, todos los grupos sociales sintieron la crisis y en un primer momento todos fueron perdedores en mayor o menor grado.

Como observa Leiva Lavalle,[1] los caminos que se abrieron para enfrentar la crisis fueron fundamentalmente dos. Uno consistía en mantener la economía ligada al sector externo y esperar que una reactivación de los mercados internacionales le diera un nuevo impulso. El otro implicaba un crecimiento de las actividades orientadas hacia el mercado interno, creando barreras a las importaciones. Este último imponía un reordenamiento de las relaciones de dependencia con las metrópolis imperialistas y el olvido de las posibles ventajas de la mayor especialización en el comercio internacional.

La política económica chilena siguió el segundo camino, no sin antes intentar el primero.[2] Las clases dominantes enfrentaron la situación en el plano económico a través de una serie de medidas similares a las adoptadas en los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. El recurso de las devaluaciones permitió "socializar las pérdidas", como lo muestra Celso Furtado. Por otra parte, las restricciones cambiarias aminoraron el impacto que las medidas destinadas a impulsar la industrialización sustitutiva provocaban sobre los sectores agrarios. Estos últimos, sólo se vieron afectados de manera indirecta. La produc-

[1] Leiva Lavalle, J., *El sector externo..., op. cit.*, pp. 32-33.

[2] Véase Ruffat, Adolfo, *La política monetaria y el sector externo en Chile entre las dos guerras mundiales*, Santiago, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, memoria, 1969. Citado en Leiva Lavalle, J., *El sector..., op. cit.*, p. 36.

ción agrícola ganadera desembocó en el mercado interno, en el que se colocó a precios incluso más altos que los internacionales.

La crisis no dejaba otras alternativas a la economía chilena. La capacidad para importar había caído bruscamente y con ella las posibilidades de mantener el abastecimiento en forma normal habían desaparecido. Al mismo tiempo, la reducción del ingreso nacional deprimía la demanda, lo que llevaba a una política expansionista.

A la presión del movimiento obrero, al que la crisis afectaba duramente en el sector exportador, donde éste tenía más fuerza, se unía la ejercida por los sectores medios. El sector minero generó una gran masa de cesantes y una fuerte corriente migratoria hacia la capital. Los sectores medios vieron reducirse drásticamente sus ingresos como consecuencia de la contracción económica. El mantenimiento de la estabilidad política alcanzada en los años veinte inclinó el fiel de la balanza hacia una política expansionista.

Si bien en el plano económico las consecuencias de la crisis mundial se tradujeron en un conjunto de medidas similares a las de otros países de la región, en el plano político la realidad histórica se abrió en caminos diferentes. Es en este último donde se hace clara la singularidad de la solución política a la crisis mundial que conoció la sociedad chilena.

b] EL IMPACTO DE LA CRISIS MUNDIAL SOBRE EL SISTEMA DE DOMINACIÓN

La crisis mundial no dejó de tener efectos sobre el modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena. Sin embargo, a diferencia de las situaciones latinoamericanas más comunes, en Chile no se produjo una ruptura del sistema político. En efecto, mientras que la crisis mundial en la mayoría de los países latinoamericanos que siguieron un camino similar en el plano económico se tradujo en la crisis de la dominación oligárquica, y trajo aparejada situaciones de dificultad política permanente, en Chile la dinámica social siguió un camino diferente.

La crisis política de 1932 —la instauración de la "República Socialista" de los 13 días— no rompió con las líneas fundamentales del modelo político vigente hasta entonces, aunque constituyó el primer desafío. La consigna del movimiento socialista de entonces, prohijada por un sector del ejército,[3] era: "pan, techo y abrigo", consigna defen-

[3] El 4 de junio de 1932 el coronel de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove (uno de los fundadores del Partido Socialista Chileno) dirigió un golpe que estableció la efímera "República Socialista".

siva que continuaba definiendo la contienda política de clases como una lucha contra las bases mismas de ese sistema de dominación. El dato más significativo que apoya esta afirmación es que este movimiento no haya planteado ninguna reforma al sistema de tenencia de la tierra. Las medidas propuestas de nacionalización de las industrias del cobre, salitre y carbón, y el apoyo al movimiento sindical, reflejaban el peso diferencial de los sectores obreros del enclave. Por otra parte, estos sectores con mayor poder de regateo estaban desorganizados por la crisis del sector exportador. La crisis los había afectado profundamente y había provocado cesantía y migración.

La pequeña burguesía se constituyó en la fuerza social más importante del grovismo.[4] Es en este contexto que se crea el Partido Socialista. La heterogeneidad de su base de apoyo se pone de manifiesto en la definición misma que el partido presenta. Como observa Faletto,[5] el partido sostenía en una declaración: "La base del partido socialista proviene de la clase obrera, de los sectores medios, campesinos pobres, pequeños agricultores, peones, obreros simples, obreros calificados, artesanos, profesores, técnicos, pequeños industriales, pequeños comerciantes, universitarios; es decir, los que viven de su trabajo, salario o pequeña renta." El Partido Socialista, creado en 1933, presentó una organización interna débil con fuerte autonomía de las cabeceras provinciales lo que se tradujo en una situación propicia al caudillismo y a la intensa disputa ideológica. Surgido a la vida política como alternativa a la Tercera Internacional,[6] el enfrentamiento principal entre las clases sociales era definido como un enfrentamiento entre la "oligarquía" y el "pueblo", como observa Faletto. Mientras la primera designaba a los latifundistas y los grupos vinculados al sector financiero, el otro polo de la oposición, el pueblo, quedaba definido por todos aquellos sectores afectados por la crisis y que clamaban una solución para sus problemas inmediatos. Combinación de la protesta por las condiciones de explotación y de la protesta por exclusión del sistema productivo, su base social de apoyo —"el pueblo"— abarcaba desde sectores de la pequeña burguesía radicalizada por la crisis, hasta aquellos sectores sociales caracterizados por su marginación de la estructura productiva; fundamentalmente a sectores del semi y subproletariado urbano (numéricamente acrecentados como consecuencia de las corrientes migratorias desde el norte minero) cuya inserción en el proceso productivo era

[4] Véase Zemelman, H., "El movimiento popular...", *op. cit.*, pp. 76-78.

[5] Faletto, Enzo, *Clases, crisis..., op. cit.*, p. 12.

[6] En la elección parlamentaria de 1932, los grupos que luego formarían el PS (Partido Socialista de Acción Pública, Socialista de Chile y Socialista Unificado) obtuvieron el 5.6 por ciento de los votos.

marginal e inestable. El PS también representó a sectores de la clase obrera organizada, pero principalmente sus bases residieron entre aquellos a quienes la crisis había dejado fuera del sistema productivo.[7]

Desde su surgimiento en la escena política, el Partido Socialista estuvo cerca de un populismo revolucionario —que reforzó su tendencia al caudillismo— como respuesta a la crisis. A pesar de constituir una amenaza para el modelo político vigente, dio los "límites de tolerancia". La respuesta a este desafío, expresada en los 100 días "socialistas", fue el regreso de Alessandri a la presidencia. La creación de la Milicia Republicana, destinada a impedir nuevos pronunciamientos militares y combatir a las fuerzas políticas de izquierda, significó un "regreso al equilibrio portaliano", como lo indica Joxe.[8] Este equilibrio habría de durar hasta 1936, momento en que se constituyó el Frente Popular.

La gestación del Frente Popular y su acceso al gobierno en 1938 representó el segundo y más importante legado de la crisis mundial en el plano político. El Frente Popular se constituyó como coalición entre los partidos Radical y Democrático, y los partidos de izquierda: el Partido Comunista y el Socialista.[9]

El Partido Radical tenía para entonces una larga trayectoria en la escena política chilena. A pesar de constituir la representación principal de la clase media urbana y burocrática tuvo desde sus orígenes fuertes soportes entre los terratenientes del sur y en la minería nacional[10] la influencia de estos sectores se dejó sentir durante los gobiernos radicales del Frente y como veremos fue un factor decisivo en la determinación de su política agraria.

El acceso al gobierno del Frente Popular, por un estrecho margen de votos sobre la alianza derechista —los partidos conservadores nucleados en torno de la figura de Alessandri— puso de manifiesto la pérdida que en el plano político sufrían las clases dominantes chilenas. En efecto, *éstas fueron incapaces de retener en sus manos el aparato político.* Sin embargo, conservaron su hegemonía política de manera

[7] Véase Jovet, J. C., *El Partido Socialista de Chile,* Santiago, Ed. Prensa Latinoamericana, 1971, 2 tomos, tomo 1, p. 40.

[8] Joxe, Alan, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno,* Santiago, Ed. Universitaria, 1970, p. 72.

[9] Entre los factores de importancia que contribuyeron a fundamentar esta alianza, todos los analistas coinciden en señalar los efectos de la lucha contra el nazismo. Este hecho favoreció el acercamiento entre demócratas y marxistas en el plano mundial y también en la sociedad chilena. Por otra parte, el cambio de posición de la Tercera Internacional, como observa Faletto, "contribuyó a que se limaran las aristas de la lucha de clases". Faletto, E., *Clases, crisis, op. cit.,* p. 14.

[10] Véase Pinto Santa Cruz, A., *Chile: una economía..., op. cit.,* p. 168. También Faletto, E., *Clases, crisis, op. cit.*

indirecta y —lo que marca su especificidad— sin quebrar la continuidad institucional. Veamos por qué.

i] *El significado del Frente Popular*

Las ideas del Frente Popular eran tributarias de las clases dominantes a las que la crisis mundial había afectado en el plano político bajo la forma de una crisis de representación. El Partido Conservador, que había salido de la crisis del período de gobierno socialista mejor preparado que ninguna otra representación política de las clases dominantes,[11] ya no representaba la unificación de los intereses de clase de los sectores económicamente dominantes en la sociedad chilena. Estos intereses habían quedado redefinidos por la crisis en la forma de articulación con el sistema capitalista mundial. En efecto, el proyecto conservador defendía la reproducción de los privilegios de una oligarquía beneficiaria de la dominación extranjera, pero sin proponer alternativas concretas para que esa reproducción fuese viable en los marcos de la nueva situación estructural creada por la crisis mundial. Su proyecto, alimentado del pasado, no tenía respuestas para el presente.

La respuesta surgió de la alianza entre las clases medias —fundamentalmente urbanas y burocráticas— y el movimiento obrero. El Frente Popular se constituyó en la fuerza social capaz de expresar, en el plano político, un modelo de desarrollo como alternativa a la crisis. Sus integrantes levantaron la bandera del desarrollo industrial, y con ella, el proyecto de desarrollo de la sociedad que compartía la burguesía chilena.[12]

ii] *Los años del Frente Popular en el gobierno*

La experiencia frentista abarcó el período que va desde 1938 hasta aproximadamente 1947. El proyecto del Frente Popular postulaba el desarrollo de un proceso de industrialización. Pero lo peculiar de la política frentista era su simultánea afirmación de un proceso de re-

[11] Véase Gil, F., *El sistema político..., op. cit.*, p. 79. El autor observa que: "En ningún momento, a pesar del tormento revolucionario, el sistema de la tierra había corrido peligro de disolución, expropiación o fuertes impuestos. La base económica del poder conservador había emergido intacta de la molesta confusión."

[12] Durante el período de Alessandri (1933-1938) el ritmo de crecimiento industrial global se elevó y se rompió con el atraso relativo de las industrias intermedias (textil y química). Véase Muñoz, Oscar, *Crecimiento industrial..., op. cit.*, pp. 38 *ss.*

distribución de la riqueza social. La simetría de perspectivas entre la burguesía y las clases populares en torno a la necesidad de impulsar la industrialización, se convertía en oposición acerca de la forma que revestiría el proceso de desarrollo. La oposición "más salarios o más acumulación" definía dos orientaciones que habrían de mostrarse irreconciliables. Este aspecto constituyó el nudo de la contradicción principal que se desarrolló en la política del frente popular desarrollista. En efecto, pese a que las masas rurales quedaron excluidas de los beneficios del pacto desarrollista, como veremos esta condición no fue suficiente para impedir la agudización de la lucha social por la apropiación del producto.

El desarrollo industrial que impulsó el Frente Popular se llevó a cabo "desde arriba", a través de la intervención decisiva del Estado. En efecto, lo peculiar de este proceso de impulso hacia una rápida acumulación fue que el Estado desempeñara un papel central. El crecimiento industrial alcanzado no fue el resultado del esfuerzo de inversión de los grupos dominantes chilenos, como observa Faletto.[13] Si bien la drástica reducción del comercio exterior constituyó un estímulo "obligado" para la sustitución industrial, los mecanismos estatales de intervención en la economía fueron los encargados de crear las condiciones favorables para el crecimiento de determinadas actividades industriales hacia las que se volcaron capitales retirados a otras esferas por la contracción experimentada. El gasto público, financiado principalmente a través del aumento de los impuestos indirectos, se orientó hacia la creación de un mercado interno. La creación de la Corporación de Fomento (CORFO) en 1939 sentó las bases de las industrias dinámicas de fuerte inversión inicial. Pero esta institución, pionera en América Latina, más que el resultado de las directivas políticas frentistas fue un instrumento vinculado a un grupo de funcionarios y "tecnócratas", destinado a levantar —con recursos estatales— complejos industriales que más tarde serían traspasados al sector privado.[14]

A través de esta política se logró un desarrollo de la industria con nuevas características. En efecto, mientras el crecimiento industrial después de la primera guerra mundial se basaba en la absorción de mano de obra y en el uso de poco capital, en la etapa frentista la intensificación de equipos de capital comenzó a ser sustancial e inauguró un proceso caracterizado por ritmos decrecientes de absorción de mano de obra.[15] El aumento en números absolutos de la fuerza de trabajo

[13] Faletto, E., *Clases, crisis, op. cit.*, p. 22.

[14] Pinto Santa Cruz, A., *Chile: una economía..., op. cit.*, p. 171, y Zemelman, H., "El movimiento popular...", *op. cit.*, pp. 111-112.

[15] Véase Muñoz, O., *Crecimiento industrial..., op. cit.*, p. 101.

incorporada al sistema productivo fue rápidamente contrarrestado por esta tendencia.

La modalidad característica de la expansión capitalista que puso en marcha la política del frente fue que el control del conjunto de la actividad económica y de distribución quedara circunscrito a un núcleo de bases amplias y diversificadas. En este fuerte proceso de concentración de capitales el sector financiero desempeñó un papel estratégico. La banca, beneficiada por el continuo proceso inflacionario —el ascenso vertiginoso de la tasa de inflación después de 1939— y por la estrechez del mercado de capitales, fue el instrumento utilizado por los grupos oligopólicos (industrial, agrario y financiero) para prestarse a sí mismos a bajas tasas de interés, concentrando el ahorro y favoreciéndose de la devaluación constante de la moneda en el conjunto del proceso. De este modo, la paradoja del capitalismo chileno, como señala Castells, residió en que: "el conjunto del capital chileno está organizado en torno a la maximización de la tasa de ganancia del capital industrial. Y, sin embargo, dicho capital se multiplica artificialmente a través de operaciones especulativas o vive en función de subvenciones del Estado omnipresente en la economía".[16]

La acción del Estado en beneficio de los intereses de la burguesía no descuidó al sector agrario. Como ya indicara, la burguesía chilena —los sectores ligados a la economía industrial-urbana—, enfrentando las condiciones que favorecían una política desarrollista, optó por una política de retraimiento. Su comportamiento fue gerencial y especulativo. Al mismo tiempo, los sectores industriales cedieron ante el carácter intocable de la estructura agraria. La transacción "bajos precios agrícolas, apoyo estatal", se estabilizó durante los gobiernos radicales del Frente Popular. Los mecanismos estatales de compensación para el sector agrario —créditos, obras de infraestructura, regadíos, otorgamiento de bonificaciones, reducción de fletes y una política tributaria excepcional— comenzaron a operar durante los años del Frente.[17] La ayuda estatal a la agricultura, tendencia que venía desde lejos y había adquirido forma institucional en 1870, se transformó en un mecanismo estructural de la economía chilena a partir de la década de 1940. Como observa Silvia Hernández, este mecanismo explica el

[16] Castells, Manuel, "La estructura de clases sociales en Chile (1970)", Santiago, CIDU, documento núm. 55, 1972. En el libro del autor: *La lucha de clases en Chile*, Argentina, Siglo XXI, 1974.

[17] Véase Aranda, Sergio y Martínez, Alberto, "Estructura económica: algunas características fundamentales", en *Chile Hoy*, México, Siglo XXI, 1970, pp. 55-172, p. 133. También el trabajo de Silvia Hernández, "El desarrollo capitalista del campo chileno", en *Chile: Reforma Agraria y Poder Popular*, Buenos Aires, Periferia, 1973, pp. 93-145.

desarrollo capitalista de la agricultura en el sector de los grandes propietarios, beneficiarios del crédito estatal.

La política agraria del Frente Popular resistió a toda forma de tributación o transferencia de ingresos desde los sectores agrarios. De este modo la política desarrollista que impulsaba se tornó inviable. Pero, como observan Aranda y Martínez, la lógica de las medidas agrarias respondía a la unificación de las clases dominantes para preservar el sistema de dominación. En efecto, los mecanismos estatales de compensación del sector agrario estuvieron destinados a contar con el apoyo del sector "tradicional". Esto se explica si se tienen en cuenta la vigencia de caracteres patrimonialistas en el capitalismo agrario chileno, lo que convertía a los terratenientes en aliados eficaces para asegurar el control político sobre el mundo rural.

En 1939, el Frente Popular dictó una ordenanza que prohibía la organización sindical de los trabajadores rurales.[18] La agudización de la explotación del campesinado y la represión, legal e ilegal, de la protesta campesina fueron contempladas con impasibilidad por los partidos de izquierda del Frente. Incluso se sostiene la existencia de un acuerdo táctico de los partidos obreros —tanto socialistas como comunistas— para no promover la sindicalización agraria.[19] Como observa Faletto, las representaciones políticas del movimiento obrero estaban formadas esencialmente por sectores obreros de carácter urbano o por mineros. La vinculación entre los partidos obreros y el campesinado era de tipo ideológico; en la práctica éstos quedaban excluidos de su política en el Frente.

iii] *Los efectos de la política del Frente Popular desarrollista*

Si bien el Frente Popular significó un intento de resolución común a la crisis mundial a través de la incorporación delegada del movimiento obrero en el gobierno, las características esenciales del modelo político no fueron alteradas. El sistema hegemónico —la estructura de poder articulada con la constitución del enclave minero— no se modificó sustancialmente.

La legitimación de los partidos obreros y su acceso al gobierno definió una lucha institucional cuya característica central era una oposición partidaria que reflejaba a los clivajes de clase en la sociedad chilena. Esta peculiaridad de la vida política chilena la acercó a la

[18] Véase Gil, F., *El sistema político...*, *op. cit.*, p. 95.

[19] Faletto, E., *Clases, crisis...*, *op. cit.*, p. 21. También Zemelman, H., "El movimiento...", *op. cit.*, pp. 112-114.

experiencia europea. Sin embargo, el hecho de que los partidos obreros se definieran como agentes políticos de la clase obrera, no significó, en la práctica, que su acción no se sometiera a las formas que le imponía el sistema de dominación de clase vigente. Como observa Petras: "Los partidos obreros fueron cooptados, en diferentes escalas, con el resultado de que la izquierda adquirió el estilo político de la clase media." [20]

Como consecuencia de la participación de los partidos obreros en el frente desarrollista, la orientación inicial hacia el socialismo se convirtió en un compromiso en torno de la industrialización del país. La batalla que se libró entonces giró en torno de la reivindicación por una redistribución del ingreso más justa. En esta lucha política por la apropiación del producto social, los sectores mejor organizados fueron los beneficiarios. Como señala Petras: "los partidos obreros obtuvieron el derecho de negociar, fueron admitidos como legítimos por las élites políticas y llegaron a ser portavoces de una capa de obreros industriales organizados... Como parte del sistema negociador, los partidos de izquierda, en general, han mantenido las luchas obreras a niveles asimilables, al no expresar las reivindicaciones de los sectores pobres que no pertenecen ni a la industria ni al proletariado rural, que forman la mayoría de la clase obrera. En su papel de defensora de los agremiados, la izquierda ha elevado el nivel de vida de ese grupo, preservando su base electoral y sus posibilidades de acceso a los cargos, y *ensanchando la distancia* entre diferentes capas de la clase obrera".[21]

En efecto, la política de los partidos obreros trajo aparejada una acentuación de la heterogeneidad en el seno de la clase obrera. Simultáneamente con ese proceso de diferenciación dentro de la clase obrera se acentuó la distancia existente entre ésta, en su conjunto, y los sectores de empleados (los trabajadores de "cuello blanco"). Como observa Faletto,[22] los grupos medios, tanto en el sector público —cuyo número había aumentado como consecuencia de la expansión de la burocracia fiscal y semifiscal— como en el sector privado, fueron los que más aumentaron sus niveles de vida. Los sueldos y salarios de este sector crecieron mucho más que los de los sectores obreros, incluso que los de aquellos con mayor poder de regateo. La legislación social mostró los privilegios relativos de los sectores medios. La política educa-

[20] Petras, J., *Política y..., op. cit.*, p. 149.

[21] Petras, J., *Política y..., op. cit.*, pp. 151-152.

[22] Faletto, E., *Clases, crisis..., op. cit.*, p. 27. También Pinto, Aníbal, "Desarrollo económico y relaciones sociales", en *Chile hoy, op. cit.*, pp. 5-52, p. 27. Este artículo es la reproducción parcial del apéndice al libro *Chile: una economía difícil, op cit.*

cional se orientó hacia la reproducción de ese distanciamiento a través del aumento inusitado de la enseñanza secundaria.

La política frentista, que dejó intacta la estructura agraria, desató un proceso inflacionario que bien pronto puso de manifiesto la incompatibilidad de esa política con el ansiado proceso de redistribución del ingreso que movilizaba en su apoyo a las clases populares. Los partidos de izquierda —Comunista y Socialista—, que habían alcanzado en su conjunto el 32% de los votos en las elecciones parlamentarias de 1941, vieron reducirse su base social de apoyo. Entre 1941 y 1945, el PS, que había alcanzado por sí solo cerca del 20% del electorado, disminuyó su cuota al 12%. Otro tanto ocurrió con el PC: su cuota electoral descendió del 14 al 10% de los votos.[23]

La política frentista también dejó sentir sus efectos sobre las formas de acción del movimiento obrero. Con la formación del Frente Popular, el aspecto dominante de la estrategia sindical pasó a ser el sindicalismo legal. Hasta mediados de la década de 1930 el movimiento obrero se había debatido en la pugna entre la aceptación o el rechazo del sindicalismo legal. Este proceso se puso de manifiesto en el fracaso del intento de creación de una estructura sindical paralela, dependiente del Estado e impulsada durante la primera presidencia de Ibáñez (1927-1931): la Confederación Republicana de Acción Cívica (CRAC).

En 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).[24] Si bien el nuevo sindicalismo institucionalizado no desembocó en la desaparición del sindicalismo excluido durante el período frentista (dada la permanencia de una legislación laboral restrictiva), provocó un cambio significativo en las relaciones obrero-patronales así como en el papel del Estado en los conflictos laborales.

La participación de la CTCH en organismos estatales como la Corporación de Fomento, el Consejo de Subsistencia y Precios, etcétera, se tradujo, en la práctica, en una política de asimilación cuya consecuencia decisiva era la legitimación de la alianza expresada por el Frente. Los años del frentismo fueron años de "paz social", marcados por la escasez de huelgas y movimientos sociales.

La legitimación y acceso al gobierno frentista de las representaciones políticas del movimiento obrero y el consiguiente predominio del sin-

[23] Pinto Santa Cruz, A., *Chile: una economía..., op. cit.*, p. 174.

[24] Como observan Gurrieri y Zapata, la supervivencia de la Federación Obrera de Chile (FOCH) (creada en 1909) en la CTCH, muestra la vinculación entre el viejo y nuevo sindicalismo y la permanencia de una tradición obrera que no se rompe abruptamente como en Argentina o Brasil. Véase Gurrieri, Adolfo y Zapata, Francisco, *Sectores obreros y desarrollo en Chile (algunas hipótesis de trabajo)*, Santiago, Comisión Económica Para América Latina.

dicalismo legal como forma de acción de los obreros cambió el carácter de la lucha de clases. La clase obrera tendió a definirse en términos de su participación en el sistema político y no por su cuestionamiento de éste. La lucha política revistió un carácter defensivo pese a que en lo ideológico-doctrinario el Estado era definido como el agente de explotación de la clase.

La coyuntura política frentista reforzó las tendencias que ya tenían su historia en el movimiento obrero chileno. El Estado fue percibido como agente político para la obtención de sus reivindicaciones. La dominación de clase se ocultó bajo el ropaje de un "Estado por encima de la sociedad", y un sistema político flexible y abierto, lugar de negociación de los conflictos de clase. En esta percepción del poder se produjo una simetría entre el movimiento obrero organizado —los sectores estratégicos de la economía y con mayor fuerza relativa en su posición en el mercado de trabajo— y las clases dominantes chilenas. La dependencia de estas últimas *vis a vis* del Estado en la coyuntura frentista (el Estado hizo la industrialización del país en su beneficio) marcó el rasgo fundamental de su comportamiento, parasitario y especulativo.[25] De este modo la dominación burguesa se hizo efectiva de manera indirecta, a través de un Estado que tomaba a su cargo la dirección del proceso de transformaciones, y un sistema político que se constituyó en el terreno en el cual las fuerzas sociales participaron y del que derivaron su fuerza.

La política frentista no introdujo transformaciones cualitativas en el sistema político chileno. La incorporación de los partidos obreros no produjo alteraciones sustantivas en el carácter conciliador del sistema, por el contrario, reforzó ese carácter al legitimarlo con la presencia obrera. Las metas y estrategias adoptadas por los partidos obreros no trasgredieron los límites de lo negociable. Los campesinos siguieron excluidos del compromiso social que fundamentó la experiencia frentista.

La contradicción principal que caracterizó la política del Frente Popular desarrollista estuvo marcada por la incompatibilidad entre las exigencias del modelo de acumulación impulsado y la presencia obrera. Las aspiraciones redistributivas no pudieron ser satisfechas, incluso las de una fracción reducida de la clase obrera: los obreros del sector "moderno" de la economía (las industrias con una composición orgánica de capital relativamente alta y la minería). La distribución del ingreso prácticamente no se alteró.[26] Estas condiciones de funcionamiento del

[25] En 1942 el Estado llegó a financiar el 48% de la inversión bruta.

[26] En 1942, el 40% más pobre captaba el 9.5% de los ingresos personales; en 1948, sólo un 8.5%. En ese lapso, el 20% más rico subía del 55.8% al 56.8% del ingreso total. Véase Mistral, Carlos, *Chile: del triunfo popular al golpe fascista*, México, Era, 1974, p. 21.

Frente Popular modificaron la composición de la alianza que lo constituía. La agudización de la lucha social por la apropiación del producto ponía de manifiesto la oposición básica de orientaciones que conjugaba el Frente. El Frente Popular había tratado de responder a la crisis con un proyecto de desarrollo tributario de la burguesía. La ruptura de la coalición política y el alejamiento de los partidos de izquierda dejaban al "desnudo" las oposiciones básicas en la sociedad chilena.

En 1947 la coalición entre radicales y comunistas se rompió. La represión del movimiento sindical y del movimiento político obrero se concretó en la denominada Ley de Defensa de la Democracia, dictada en 1948 bajo la presidencia del radical González Videla. Por esta vía quedaba sellado el agotamiento de la experiencia frentista.[27] Su secuela más importante para el movimiento obrero fue la desarticulación del eje sindical y político, lo que se constituye en un dato de importancia central para comprender la solución política que sigue a la etapa frentista.

[27] Como observa Aníbal Pinto, el anticomunismo de los años de la "guerra fría" facilitó el reagrupamiento de las fuerzas sociales que desembocó en la represión del movimiento obrero y de sus representaciones políticas. Pinto, A., *Desarrollo económico y..., op. cit.*, p. 31. Véase también Faletto, E., *Clases, crisis..., op. cit.*, p. 30.

CAPÍTULO II

LAS ALTERNATIVAS PARA EL ESTANCAMIENTO: EL FRENTE DE ACCIÓN POPULAR

a] EL IBAÑISMO: FRUSTRADO INTENTO DE REARTICULACIÓN POPULISTA DE LAS RELACIONES SOCIALES

El ibañismo, como coinciden en señalar los estudiosos de la sociedad chilena, fue un proceso poco estudiado. El denominado "terremoto ibañista" aparece como un fenómeno "raro" en la sociedad chilena, que por un breve período parece trastocar las reglas de juego hasta entonces vigentes. Sin embargo, las hipótesis que lo vinculan a la experiencia frentista que lo precede, así como algunas hipótesis manejadas para explicar su fracaso y la dinámica política de mediados de la década del 50, permiten clarificar las tendencias y dirección del proceso político chileno.

El ibañismo representó un movimiento heterogéneo en su composición social, de corte caudillista, y que incorporó algunos de los rasgos externos del populismo latinoamericano bajo la influencia del modelo de la Argentina peronista. En efecto, suponía un intento de alianza militar-obrero-empresarial, a la manera del peronismo.[1]

El primer interrogante que se plantea es por qué los sectores obreros encontraron expresión en el ibañismo después de una trayectoria de relativa autonomía con respecto al Estado y a las fuerzas políticas burguesas. Su estructuración política, a diferencia de las situaciones latinoamericanas más comunes, no había surgido en el ámbito de una experiencia populista. El sindicalismo se había afirmado en el mercado de trabajo y en las luchas cívicas de los años 20 y se había legitimado con

[1] En 1946 hubo una conspiración incipiente en el ejército que incluyó a varios dirigentes políticos socialistas y estuvo inspirada en el peronismo. Entre 1951 y 1955 hubo conspiraciones, también inspiradas en la ideología peronista. Los conspiradores de 1951 nombraron a su grupo "Por una Mañana Auspiciosa" (PUMA); reconstituido en 1955 con la denominación de "Línea Recta". Véase Alan Joxe, *Las Fuerzas Armadas...*, *op. cit.*, pp. 79-80.

el juego político a través de los partidos obreros a mediados de la década de 1930.

Faletto sugiere la presencia de nuevos sectores obreros, vinculada al fuerte proceso migratorio que se había intensificado a partir de 1945. Esta "nueva" clase obrera, señala el autor, estaría menos empujada hacia formas de acción colectiva y más orientada hacia la búsqueda de ventajas materiales; todavía bajo el peso de relaciones paternalistas y, por lo tanto, "disponible" para ser cooptada por el Estado.[2]

Sin embargo, como observan Gurrieri y Zapata, hay elementos para pensar que la inserción de los migrantes internos en el sistema productivo no se haya orientado predominantemente hacia la industria, a diferencia de lo ocurrido en Argentina. Desde 1954, fecha en que se clausura la expansión relativa del empleo industrial, la estabilización que se observa en el volumen de empleo permitiría hipotetizar que la migración interna se orientó hacia sectores como la construcción y los servicios.[3]

El proceso central que está en la raíz del apoyo masivo al ibañismo reside en la heterogeneidad interna del movimiento obrero. La presencia de los mineros, con un fuerte poder de regateo, constituyó el primer aspecto de la diferenciación de formas de acción que revistió la condición obrera. La fragmentación que produjo el proyecto de industrialización definió el otro aspecto de la diferenciación: periferia-centro del sistema productivo. La inserción desigual en el proceso productivo trajo aparejada una capacidad desigual de afectar las pautas de acumulación y conseguir un peso político propio. Los obreros más calificados de la industria y los mineros constituyeron una minoría con respecto a la clase obrera. Ésta, en su conjunto, era débil. Esa fragmentación generada por la economía de enclave y reforzada por la legislación laboral se acentuó bajo el impacto de la política desarrollista del Frente Popular. La acción de los partidos obreros, como vimos, estuvo dirigida a defender las demandas de los obreros organizados y por lo tanto del sector moderno de la economía. Las demandas del resto de los trabajadores quedaban excluidas. De este modo, la debilidad de la clase obrera en su conjunto —dado que sus sectores mayoritarios eran débiles— permite explicar la forma que revistió la politización en la coyuntura del ibañismo, así como la permanente oscilación entre una orientación de tipo social-demócrata y una orientación populista-revolucionaria que caracterizó al movimiento obrero chileno.

Los sectores más atrasados de la economía no tuvieron la misma capa-

[2] Faletto, E., *Clases, crisis, op. cit.* Esta interpretación del populismo se encuentra en Gino Germani, *Sociología de la modernización,* Buenos Aires, Paidós, 1969.

[3] Gurrieri, A. y Zapata, F., *Sectores obreros y..., op. cit.,* p. 59.

cidad de ejercer presión a través de sus bases laborales, o sea la industria. Su politización en la coyuntura política del ibañismo constituyó la contrapartida de su debilidad. Por otra parte, el Frente Popular había desarticulado el movimiento sindical y político obrero, favoreciendo el vuelco de sectores organizados hacia una alternativa que rompía con los canales tradicionales de expansión política del movimiento obrero.

En 1951, el argumento electoral básico de Ibáñez fue la defensa de una política de estabilidad monetaria. Esta política, con la que no había tenido eco en 1931, vino a canalizar las esperanzas de sectores de obreros y empleados duramente castigados por la aceleración del proceso inflacionario. De este modo, aunque el ibañismo haya constituido una alternativa para los sectores marginados del sistema productivo, lo que interesa destacar es que constituyó también una alternativa para la clase obrera.

El desgaste del radicalismo después de cinco lustros en el gobierno contribuyó a crearle una base de apoyo entre sectores de la clase media. Sectores de la pequeña burguesía burocrática y profesional, así como la "pequeña burguesía tradicional" (pequeños comerciantes, artesanos, etc.) se inclinaron por esta solución como respuesta a sus problemas inmediatos: la pérdida de sus ingresos reales.[4]

La victoria electoral de Ibáñez [5] tenía lugar en el contexto económico favorable creado por la guerra de Corea. Pero esta coyuntura económica se agotó rápidamente. En 1953, la situación económica se deterioró abruptamente y se aceleró el ritmo de inflación. Las condiciones de prosperidad necesarias para llevar a cabo la política populista de Ibáñez desaparecieron. El carácter antipopular de las medidas deflacionarias aplicadas por el gobierno bajo la asesoría de la misión Klein-Sachs se tradujo en la activación política de los sectores populares que comenzaron a rearticular sus metas y liderazgos autónomos.[6]

En 1953 se creó la Central Única de Trabajadores (CUT). Ésta reunía a obreros y empleados del sector público y privado, y también en una escala mucho menor a sectores campesinos. Si bien la CUT representaba una amplia gama ideológica —el Partido Radical mantuvo su repre-

[4] Faletto, E., *Clases, crisis, op. cit.*, p. 33.

[5] Esta victoria no fue independiente de la fragmentación de fuerzas en la escena política. La derecha presentó su candidato; los radicales y los democratacristianos, un candidato único; los comunistas y socialistas, levantaron la candidatura de Salvador Allende. Estas tres fuerzas se oponían al ibañismo, apoyado por una fracción de los socialistas.

[6] La reducción del porcentaje de ajuste de sueldos y salarios en un 50% del alza del costo de la vida.

sentación en la misma y apareció entonces el Partido Demócrata Cristiano— su declaración de principios mantuvo una posición anticapitalista en pro de una sociedad sin clases.[7]

La ortodoxia económica liberal, con el respaldo económico de Estados Unidos, reforzó en nuevos niveles la crisis política y ello constituyó una amenaza a la capacidad de los marcos institucionales para garantizar la "paz social" y el crecimiento económico.

Sin embargo, el fracaso de la experiencia ibañista desembocó en una rearticulación de los vínculos entre sindicatos y partidos políticos en la sociedad chilena. La constitución del Frente Popular, en 1956, concretó este proceso. De este modo, como veremos, la capacidad institucional para sortear la crisis quedaba asegurada. La formación de la CUT, como observa Angell, constituyó una prueba de predominio de los factores políticos sobre los sindicales.[8]

Por otra parte, la derecha también salió fortalecida de la coyuntura ibañista. Sus representaciones partidarias, el Partido Conservador y el Liberal, presentaron un candidato único en las elecciones de 1958.[9]

b] EL FRENTE DE ACCIÓN POPULAR: PARTIDOS OBREROS COMO AGENTES POLÍTICOS DE LA CLASE Y PERSISTENCIA DE LA IDEOLOGÍA DEL FRENTE POPULAR

La experiencia ibañista había puesto al "desnudo" los clivajes de clase en la sociedad chilena. La relativa exterioridad del Estado con respecto a su dominación de clase, que el ibañismo intentara reforzar, habría fracasado. Su fracaso, no independiente de la coyuntura económica, hizo que la lucha política se perfilara con más nitidez en la escena política de finales de la década de 1950. La formación del FRAP, como coalición de izquierda autónoma, en mayo de 1956, era la respuesta a este proceso.[10] El FRAP significó un avance con respecto al Frente Po-

[7] Véase Barría, Jorge, *Historia de la CUT*, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971.

[8] Angell, A., *Partidos políticos y..., op. cit.*, p. 224.

[9] La democracia cristiana, constituida oficialmente en 1957, era el resultado de la fusión de la Falange Nacional, partido lidereado por Frei, y el Partido Conservador (ala socialcristiana de los conservadores, que se denominaron "Conservadores Unidos"). Véase Gil, F., *El sistema político..., op. cit.*, p. 98. La DC se presentaba como una alternativa reformista surgida en el seno de la burguesía, pugnando por una amplia base social de apoyo.

[10] El FRAP incluía al Partido Comunista y al Partido Socialista, las dos representaciones políticas del movimiento obrero. Este último abarcaba a las dos fracciones en que se había dividido el partido durante el ibañismo: el Partido Socialista Popu-

pular. En efecto, la unidad política del movimiento obrero se concretaba a través de una estrategia de "frente de trabajadores" y no ya de "unidad popular". Sin embargo su ideología seguía siendo tributaria del modelo político burgués impulsado por el Frente Popular desarrollista. El proyecto político de los partidos de izquierda no puso en cuestión la naturaleza reconciliadora del sistema político chileno. Por el contrario, supuso el reconocimiento del compromiso social tácito que había hecho posible la negociación del conflicto de clases en los marcos de la institucionalidad.

El fundamento del programa que articuló a los partidos de izquierda señalaba: "El Frente de Acción Popular será una organización que concertará la acción de los partidos que la constituyen en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El Frente de Acción Popular se caracterizará fundamentalmente por ser núcleo aglutinador de las fuerzas que están dispuestas a luchar por un programa antimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto de los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, el desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y la planificación del sistema productivo con vista al interés de la colectividad y la satisfacción de las necesidades de la población trabajadora." [11]

Como observa Faletto, la alternativa a la dominación, caracterizada como "imperialista, oligárquica y feudal", era la industrialización. Esta alternativa suponía que el sector industrial-urbano, articulado al financiero a medida que se desligase del esquema importador-exportador, estuviese controlado por una burguesía nacional. Esa burguesía se opondría a los sectores terratenientes, oligárquicos y precapitalistas, y estaría dispuesta a aceptar la creciente intervención estatal en la economía. El Estado, nuevamente, era el lugar central para impulsar el proceso de acumulación y garantizar la participación económica y política de los sectores obreros y de los sectores medios. A grandes rasgos, estos supuestos básicos de la alternativa política "desarrollista" estuvieron presentes en las diferentes formas que ésta revistió en América Latina. La singularidad de la sociedad chilena volvía a ser que este proyecto fuera levantado por los partidos obreros, agentes políticos de la clase

lar y el Partido Socialista de Chile. Dos formaciones menores quedaron incorporadas a la coalición: el Partido del Trabajo y el Partido Demócrata del Pueblo, desprendimiento del Partido Democrático.

[11] Citado en Faletto, E., *Clases, crisis..., op. cit.*, pp. 35-36.

obrera. El campo principal de la oposición seguía siendo definido en los términos de la contradicción "oligarquía-pueblo", como en el proyecto del Frente Popular. La oposición principal —burguesía dependiente y proletariado (obreros y campesinos)— quedaba ocultada. De este modo, el movimiento obrero se expresaba a través de una política "defensiva", tributaria del modelo político burgués para el que, como los hechos se encargaron de mostrarlo, no existía una burguesía nacional en condiciones de llevarlo a cabo.

El triunfo electoral de Jorge Alessandri, candidato de la derecha, por un escaso margen de votos sobre el candidato del FRAP, puso de manifiesto que era otra la alternativa de la burguesía chilena.[12]

La alternativa de la derecha —la fórmula de poder que llevó a Alessandri a la presidencia en 1958— implicaba en el plano político el avance de las fracciones monopólicas del capital. Como observa Pinto,[13] Alessandri inició su gestión con un gabinete más ligado a la "tecnocracia empresarial" que a la auténtica "derecha política". Este dato permite pensar en el comienzo de un proceso de restructuración del aparato estatal destinado a fortalecer su aspecto empresarial frente a las formas asistencialistas y conciliadoras que lo habían caracterizado.

Hacia fines de 1959 la coyuntura económica comenzó a tornarse cada vez más favorable gracias a la bonanza del cobre en el mercado internacional. Por otra parte, el recurso creciente al endeudamiento externo contribuía a esa expansión. De este modo, el período que va entre 1959 y 1962 registró una sensible elevación en la tasa de crecimiento económico así como una apreciable estabilidad de los precios.[14] El aumento del gasto público y el programa de vivienda fueron los mecanismos principales de trasmisión a la economía interna de las condiciones favorables alcanzadas en el comercio exterior.

Sin embargo, como observa Aníbal Pinto, este proceso se interrumpió hacia fines de 1962. Este corte explica la creciente dependencia de la

[12] La votación se distribuyó de la siguiente manera: Jorge Alessandri obtuvo el 31.6% de los votos; Salvador Allende, el 28.9%; Eduardo Frei, el 20.7% y Luis Bossay, el 15.6%. Las representaciones políticas de centro: PDC y PR se presentaron independientemente. El candidato independiente Antonio Zamorano (el "cura de Catapilco") obtuvo el 3.3%. Si este candidato no se hubiese presentado, todos coinciden en sostener que Allende se hubiese impuesto. Véase Jovet, J. C., *El Partido Socialista..., op. cit.*, tomo II, p. 49.

[13] Pinto Santa Cruz, A., "Desarrollo económico y...", en *Trimestre Económico, op. cit.*, p. 41.

[14] *Ibidem.* Para un análisis más detallado del proceso económico en este período, véase *La economía de Chile en el período 1950-63*, Santiago, Instituto de Economía, Universidad de Chile.

política alessandrista de profundización del capitalismo respecto del marco formal de las organizaciones partidarias. Su política trató de conciliar al conjunto de las clases dominantes manteniendo los niveles de protección para con la industria de capital nacional y la transferencia de ingresos hacia los sectores agrarios,[15] al mismo tiempo que se garantizaba a los sectores monopólicos el uso cada vez más desembozado de los recursos públicos.

La consecuencia de esta política en el plano económico fue la agudización de los problemas que aquejaban a la sociedad chilena: inflación, desempleo, estancamiento, endeudamiento externo, etcétera.

En el plano político, la relativa calma de la etapa alessandrista dejó de tener condiciones de sustento. El objetivo de impulsar una política de desarrollo que facilitase las inversiones extranjeras y marginase a los sectores populares del sistema de decisiones, como condición básica para acelerar la formación interna de capitales y asegurar su control a través de unidades monopolistas (básicamente extranjeras), fracasó. La ambigüedad de esta política residió en el intento de seguir manteniendo unificados a los diferentes sectores de las clases dominantes, incluidos los sectores terratenientes tradicionales. En efecto, desaparecidas las condiciones económicas excepcionales de la primera etapa del gobierno, la política de unificación no tenía bases reales. Esta contradicción central marcó el fracaso en el intento de compromiso entre las fracciones dominantes locales y el capital extranjero. El proceso generalizado de desnacionalización de la economía iniciado entonces no permitió una articulación estable de las nuevas relaciones sociales, políticas y económicas, favorecidas por la redefinición de la situación de dependencia en el sistema capitalista mundial.

El Estado se debilitó en su capacidad de gestionar los intereses en pugna, viéndose cada vez más sometido a los avatares económicos y más dependiente de aliados y adversarios. Los niveles cada vez más agudos de tensión social se expresaron bajo la forma de una movilización popular en torno a consignas socializantes que ponían de manifiesto el fracaso de la alterativa conservadora para redefinir las relaciones de dependencia y generar las condiciones políticas que exigía el nuevo modelo de acumulación.

La presencia del movimiento obrero en el sistema político a través de los partidos de izquierda fue, sin duda, un factor importante en la desarticulación del proyecto político del alessandrismo. Sin embar-

[15] Se decretó una ley de reforma agraria "casi puramente simbólica" destinada a satisfacer los eslóganes de la Alianza para el Progreso. Véase Petras, J. y Cavarozzi, M., "Conflicto político y dependencia económica en Chile", en *América Latina: economía y política*, Buenos Aires, Ed. Periferia, 1972, pp. 15-94, p. 75.

go, la lucha política se libró en el Parlamento a través de esos partidos y sin impugnar la naturaleza del sistema político vigente.

La construcción de la unidad política del movimiento obrero descansó más en una ideología que en una línea de acción claramente definida. Los partidos de izquierda, en los hechos, actuaron como instrumentos de intervención en el sistema político para defender a los trabajadores. En los hechos también, esta defensa sólo abarcó a los sectores más organizados. Por esta vía, la lucha política del movimiento obrero fue quedando relegada a un segundo plano. La movilización política en los períodos electorales —bajo la dirección partidaria— tendió a remplazar la movilización directa de las masas para la acción política, como señala Petras.[16] Así, las condiciones institucionales para absorber la crisis quedaron aseguradas. El compromiso social básico en que se fundamentaba la naturaleza conciliadora del sistema político chileno no había sido impugnado. La paradoja es que serán fracciones de la clase dominante las encargadas de impugnarlo en la práctica política.

Por eso mismo, pese a la temprana unidad política del movimiento obrero chileno y su expresión política autónoma a través de partidos de clase, la lucha de clases no dejó de mostrar los efectos que sobre ésta produjo el carácter dependiente de la sociedad chilena. Nada más erróneo entonces que hacer de esta singularidad un elemento de inclusión de la sociedad chilena en el modelo de funcionamiento político de las sociedades europeas. Aunque su dinámica política se apartó de las formas más comunes latinoamericanas, las raíces de la misma reconocen una determinación estructural común: la situación de dependencia.

[16] Petras, J., *Política y..., op. cit.*, p. 150.

CAPÍTULO III

LA RUPTURA DEL MODELO POLÍTICO: EL GOBIERNO DEMÓCRATA CRISTIANO Y SU PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CAPITALISTA Y REFORMISMO "POPULISTA"

a] LA ALTERNATIVA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ANTE LA CRISIS

El acceso al gobierno de la democracia cristiana, en 1964, se inscribió en los marcos de la crisis política del período alessandrista. La DC significaba, desde su aparición en la escena política, un cambio cualitativo en las prácticas políticas de las clases dominantes chilenas. Hasta entonces las iniciativas de transformación de la sociedad habían sido formuladas como iniciativas de las clases dominadas, pese a que se tratara de ideas tributarias de la burguesía. Con la DC, la iniciativa surgía directamente, como observa Faletto,[1] del seno de la propia burguesía.

Recapitularé el proceso político en que descansó la transición al capitalismo industrial en Chile. La primera observación de importancia es que ese proceso fue el resultado de una coalición en la que el movimiento obrero representó un papel clave. En efecto, éste, a través de sus representaciones políticas, se constituyó en una de las fuerzas sociales protagonistas del proceso de transición al capitalismo industrial. Este hecho remite a la presencia de una clase dominante políticamente unificada, como la otra característica distintiva del proceso político chileno.

El Estado, como vimos, desempeñó un papel decisivo en el impulso dado a la industrialización y en la consolidación del sector industrial como el más dinámico de la economía chilena a partir de entonces. La política del Frente Popular desarrollista fue, al menos en su primera etapa, ampliamente integradora. Aunque era el resultado de una serie de medidas improvisadas antes que de un proyecto coherente y sistemático, prácticamente la totalidad de las clases sociales —a excep-

[1] Faletto, E., *Clases, crisis..., op. cit.*, p. 37.

ción del campesinado, excluido de la sociedad política— tuvo algo que ganar con esta política.[2]

Sin embargo, y como fue señalado al analizar los efectos de la política del Frente Popular, el compromiso social en pro de la industrialización estaba lejos de constituir una situación estable. La creciente presión inflacionaria fue el signo más visible de las contradicciones generadas por el modelo de acumulación. La oposición entre el desarrollo de la acumulación y la política redistributiva marcó el punto crítico de ruptura de la coalición inicial y definió la salida de la misma de los partidos obreros.

El Estado había sustituido a una burguesía industrial, todavía muy débil, en el cumplimiento de las tareas institucionales y de infraestructura necesarias para impulsar el proceso. Como en otras situaciones de transición en América Latina, el Estado sustituía a una clase dirigente. Su acción de "productor de los capitalistas" se fundaba en un compromiso social cuya raíz residió en la crisis de la economía exportadora.[3] La novedad de este compromiso social que hizo posible "una revolución pasiva" residió en que fue legitimado por los partidos obreros. Esta característica lo aleja de las formas concretas que revistió el Estado populista en Argentina o Brasil, pese a que el sentido de la política gubernamental del período frentista fue coincidente.

El fin del período frentista estuvo marcado por la contradicción entre la función del Estado como agente de la transformación económica de la sociedad (función definida por la lógica de la reproducción del capital en las condiciones específicas fijadas por la industrialización dependiente) y su función como agente de unificación de la sociedad (legitimación de las transformaciones impulsadas).[4] El fracaso

[2] La burguesía industrial fue la principal beneficiaria de la expansión. Las capas medias, en segunda instancia, se beneficiaron del crecimiento del aparato estatal ampliando sus efectivos y gozando de una situación relativamente privilegiada que se pone de manifiesto en la política salarial del Frente y en la legislación social. La clase obrera en su conjunto vio aumentar el volumen del empleo. Los sectores organizados reforzaron su posición en el mercado a través de la acción de los partidos obreros en el gobierno e incluso de la participación sindical en organismos de decisión. Los sectores de la clase dominante volcados hacia la exportación no fueron afectados en la medida de lo previsible, ya que si bien habían perdido el control directo del Estado, se beneficiaron de la política frentista destinada a salvaguardar sus intereses económicos y por lo tanto sus privilegios políticos. Los terratenientes tradicionales siguieron constituyendo una de las piezas fundamentales del mecanismo de poder a través de su control político del mundo rural. Beneficiados de manera indirecta por la política frentista, sus intereses económicos fueron respetados.

[3] El Estado en tanto que "productor de los capitalistas" remite a la noción de "revolución pasiva" de Gramsci, en sus análisis del Risorgimento italiano. Véase Gramsci, Antonio, *Il Risorgimento,* Roma, Editori Riuniti, 1971.

[4] La industrialización dependiente se llevó a cabo sin oposición con los intereses

de la experiencia frentista había agudizado los conflictos entre el capital y el trabajo en la sociedad chilena y parecía poner en cuestión el pacto mismo de convivencia entre la burguesía y el movimiento obrero. Sin embargo, el triunfo del ibañismo, que siguió al Frente Popular, suponía llevar hasta sus máximas consecuencias la política frentista de transición al capitalismo industrial a través de un proyecto político populista. El verdadero centro del conflicto de clases quedaba ocultado tanto para los sectores populares como para las clases dominantes.

En efecto, el apoyo de los primeros a Ibáñez significaba un paso atrás con respecto al compromiso del Frente Popular. La impugnación de la burguesía a este intento populista de rearticulación de las relaciones sociales ponía de manifiesto su rechazo a toda fórmula de compromiso que no amoldara la gestión a los canales institucionales establecidos. Y ello pese a que la forma de la dominación política vigente ya no se adecuaba a las necesidades impuestas por la etapa del proceso de acumulación. A partir de 1953 el carácter adverso de la coyuntura económica, inicialmente favorable, agudizó los niveles de la lucha social. El modelo de acumulación que comenzó a gestarse entonces —la profundización del capitalismo dependiente bajo el signo de la penetración de capitales extranjeros— mostró su incompatibilidad con los intereses de los sectores populares e hizo posible la rearticulación entre sindicatos y partidos obreros, provisoriamente debilitada en el último período de los gobiernos radicales frentistas y durante la etapa ibañista.[5]

El intento de la derecha política —la etapa alessandrista— fracasó no obstante la expansión económica alcanzada en los primeros tiempos de gobierno. El fracaso de Jorge Alessandri ponía de manifiesto la inadecuación de las formas de dominación vigentes para responder a las tendencias profundas del proceso de acumulación. El Estado se mostraba demasiado débil para garantizar el proceso de acumulación; incapaz de controlar a aliados y adversarios. Pese a que el proyecto político de la izquierda —el FRAP— siguió siendo tributario de la tradición del Frente Popular desarrollista y, por lo tanto, seguía existiendo una brecha profunda entre los intereses objetivos de la clase obrera y sus expresiones políticas y orgánicas, la lucha de clases se agudizó. Se imponía entonces una redefinición de las fuerzas sociales en el bloque hegemónico. La alternativa de la democracia cristiana se fundó en una

imperialistas y en una coyuntura de aflojamiento de las relaciones con éste, debida a la crisis mundial. Esta situación específica hace que el concepto de "revolución pasiva" de Gramsci, aunque útil descriptivamente, deba ser analíticamente precisado para el caso de América Latina a través del análisis de las relaciones de clases en el nivel internacional.

[5] En los últimos tiempos de su gobierno Ibáñez había derogado la "Ley de Defensa de la Democracia".

reconstitución de las alianzas en la sociedad chilena con el objetivo de lograr la legitimación de una redefinición general de la dinámica de la acumulación (redefinición ya intentada por Alessandri).[6]

Desde el punto de vista económico lo que estaba detrás de la crisis política chilena era el agotamiento de un modelo de acumulación, de un proceso de desarrollo basado en la expansión de la industria liviana que sustituía importaciones. En la década de 1960 comenzaron a cobrar importancia las actividades vinculadas al sector de producción de bienes de consumo duraderos y costosos (industria automotriz, televisores, etc.). Este proceso, iniciado por Alessandri, presidió la evolución de los años 60 bajo el gobierno de la DC. Importa señalar que el proceso provocó modificaciones profundas en el modelo de acumulación. Se trataba en lo fundamental de hacer de ese sector el polo dinámico de la acumulación que, dado el carácter restringido del mercado interno disponible para esos bienes, requería una política de precios elevados acompañada de un esfuerzo de ampliación relativa de ese mercado (extensión a los sectores medios de altos ingresos y aumento de la diferenciación existente entre éstos y el resto de los asalariados). El nuevo modelo de acumulación necesitaba encontrar su forma de legitimación política, un proceso por el cual el predominio económico del capital monopolista industrial, extranjero y nacional, se transformara en hegemonía política. La DC representó la búsqueda de la hegemonía de ese sector de la burguesía.

El proyecto de la DC en tanto intento de respuesta al agotamiento de un modelo de acumulación tuvo rasgos comunes con otros intentos latinoamericanos para responder a esa situación estructural común. Si se piensa en Brasil, la respuesta económica de la DC a la crisis participó de los rasgos de la política de Kubitschek y también de la de Goulart —el último gobierno del período populista. Frei, como Goulart, rebasó los límites del compromiso social tácito que había fundado la política desarrollista al movilizar a los sectores populares rurales hasta entonces excluidos de la sociedad política. Éste constituyó el aspecto central de la contradicción que enfrentó el proyecto de modernización capitalista de la DC y sobre el que volveré más adelante.

En Argentina, el proceso abierto en 1955 con la caída del peronismo también se caracterizó por el intento de dar respuesta a las nuevas formas que imponía el modelo de acumulación capitalista. El proyecto frondicista fracasó y la denominada "Revolución Argentina", que se abrió con la intervención militar en 1966, significó el esfuerzo más importante en ese sentido, al tiempo que una política también fraca-

[6] Durante el gobierno de Alessandri se elevó drásticamente la inversión pública y total en la industria.

sada de poner fin a la orientación reformista que caracterizara al período frondicista.

La democracia cristiana apareció en la escena político-electoral chilena, en 1964, ofreciendo una alternativa que —como en los últimos tres gobiernos populistas en Brasil o el frondicismo en Argentina— se proponía legitimar una nueva forma de acumulación inducida por los cambios en el sistema capitalista mundial, en el que las empresas multinacionales comenzaron a tener un papel más gravitante y expansivo.[7] Su alternativa a la crisis política supuso un reordenamiento de las fuerzas que actuaban dentro del bloque hegemónico. La fórmula de poder que llevó a Frei a la presidencia descansaba en una alianza con amplios sectores de las clases dominadas, fundamentalmente con el campesinado y el proletariado rural hasta entonces excluidos de la sociedad política,[8] y con los sectores marginales urbanos (los sin casa). Esta base social de apoyo era movilizada en torno de contradicciones estructuralmente secundarias: el gran latifundio en el campo, el problema de la vivienda en la ciudad. La profundización y modernización del capitalismo dependiente suponía "limpiar" del mercado a los "ineficientes".

La liquidación de éstos —el golpe a la derecha política tradicional— requería una reconstitución del esquema de alianzas. La novedad del proyecto demócrata cristiano consistió en rebasar los límites fijados por las anteriores alianzas desarrollistas y movilizar a los sectores antes excluidos. Así, en el plano político, la legitimación del poder del Estado descansaba en el hecho de que el apoyo popular desempeñaba un papel muy importante.

Pero, su respuesta a la crisis en el plano económico —la creación de un proyecto neocapitalista de reordenamiento de las formas de acumulación— requería una relación cada vez más directa entre la clase hegemónica y el poder de Estado. La denominada "Revolución en Libertad" implicaba una redefinición del aparato estatal mismo para superar las viejas formas de dominación. Una autoridad presidencial más fuerte y la presencia de una tecnocracia integrada en la cúspide por gerentes del capital debían concentrar el poder como vía para

[7] El proyecto político de la DC coincidió con los años de la revolución cubana y el intento de respuesta de la Alianza para el Progreso.

[8] Las leyes electorales excluían a los trabajadores rurales (no votaban los analfabetos); el cacicazgo y su contrapartida, la carencia de organización, habían bloqueado cualquier intento de expresión política independiente de estos sectores. Entre 1947 y 1967 Chile tuvo una ley de sindicalización campesina cuyo resultado fue la existencia de sólo 18 sindicatos con un total de 1 800 afiliados a fines de 1968. Véase Chonchol, Jacques, "Poder y Reforma Agraria en la experiencia chilena", en *La vía chilena al socialismo*, México, Siglo XXI, 1973, p. 110.

garantizar las transformaciones promovidas, o sea garantizar las condiciones de acumulación y la "paz social".

Un Estado débil como lugar de dirección política de las transformaciones, que aparecía a través de un sistema político flexible y relativamente abierto, debía ser "puesto en forma". Se trataba de consolidar un Estado más fuerte, no sólo en el sentido obvio de un Estado más represivo, sino —y sobre todo— en tanto empresario de las transformaciones buscadas. Para ello, se imponía abandonar las formas asistencialistas que habían caracterizado el modelo de funcionamiento político del Estado.

La contradicción básica entre la profundización capitalista y la solución política reformista selló el dilema con que se enfrentó la DC en sus seis años de gobierno. El talón de Aquiles de su proyecto político no residió en la ausencia de apoyo popular —puesto que movilizó en su apoyo a aquellos sectores "disponibles" para cualquier proyecto que los tomara en cuenta— sino, por el contrario, en que sus medios de legitimación eran demasiado populares.

Este aspecto selló el corte populista del proyecto de la DC en lo ideológico-doctrinario. Reconstituir los mecanismos de acumulación y activar simultáneamente las demandas políticas y económicas de nuevos sectores eran dos objetivos contradictorios y la realidad se encargaría de probarlo.

Este intento populista "tardío", dadas las condiciones impuestas por el proceso de acumulación en la década de 1960, bloqueó la transformación de las estructuras políticas impulsadas. La movilización de sectores de la clase subalterna, que hasta entonces habían jugado un papel pasivo, terminó por impugnar el gran compromiso social diseñado por la DC.

La reforma agraria y la "chilenización" del cobre fueron los dos pilares en que descansó la estrategia destinada a crear las condiciones de un modelo de desarrollo "asociado".[9] Pero la capacidad de la fracción monopólica de la burguesía para implementar esta estrategia estuvo subordinada a las condiciones de negociación dominantes en el sistema político chileno. La ley de reforma agraria se aprobó a mediados de 1967, después de una batalla parlamentaria en la que la resistencia de los sectores ligados al latifundio mostró la fuerza política e ideológica con que contaban. La "chilenización del cobre" se legitimó a

[9] La estrecha asociación de los sectores más modernos de la burguesía y el Estado con los consorcios internacionales constituye el rasgo definitorio de este modelo de desarrollo. Véase Cardoso, F. H., *Las crisis políticas y las luchas de clase en América Latina*, ponencia presentada al seminario organizado por ILPES en Oaxaca, México, junio de 1973, mimeo.

través de argumentos nacionalistas y sin embargo el discurso nacionalista quedó divorciado del proceso económico. En efecto, la burguesía chilena, a diferencia de la mexicana, sólo pudo gestionar una nueva articulación con el imperialismo de la que obtuvo magros beneficios relativos. Este hecho pone de manifiesto la debilidad estructural de estos sectores frente al imperialismo y la debilidad del Estado mismo como lugar de negociación de sus intereses.[10]

La debilidad del Estado chileno como agente de las transformaciones sociales no fue el producto de una situación de crisis orgánica como en Argentina o Brasil. Por el contrario, y como vimos en la primera parte de este trabajo, fue la consecuencia de la respuesta de la clase dirigente políticamente unificada frente a la dominación extranjera bajo la forma del enclave. La solución a la crisis política de 1891 fue el debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado y como contrapartida la mayor autonomía institucional. Desde entonces, el sistema político fue el lugar de negociación de la lucha de clases en la sociedad chilena. La acción del Estado en la etapa de transición al capitalismo industrial estuvo sometida a las condiciones de negociación institucional dominantes en el sistema político chileno. Esto significa que estuvo supeditada a los términos del compromiso social tácito en que ésta se fundaba. *Fueron los términos mismos de ese compromiso social los que bloquearon la capacidad política del Estado para llevar a cabo las medidas que imponía el modelo de acumulación.* Así, aunque el Estado de transición en la sociedad chilena no revistió las formas de articulación típicas de los Estados populistas —los partidos políticos reflejaban los clivajes de clase de la sociedad chilena— fue víctima de efectos similares. Como el Estado populista, no tuvo la fuerza necesaria para llevar a cabo la política que requerían las condiciones de reproducción del capital.

El proyecto de la DC suponía la redefinición de las funciones del Estado, esto es, una articulación más directa entre los centros de decisión económica y los centros de decisión política. Para lograrlo se imponía recortar la autonomía institucional que bloqueaba los mecanismos de decisión. Las medidas de refuerzo del presidencialismo no fueron casuales en el gobierno freísta. Sin embargo este intento estatista de Frei fracasó. La imposición de medidas de política económica a los sectores conservadores de la clase dominante (la reforma agraria, la chilenización del cobre), sólo podía tener éxito si se mantenía el compromiso social con los sectores populares y las bases de ese compromiso

[10] Para un análisis de los términos en que se fundó la "chilenización del cobre", véase Aranda, S. y Martínez, A., "Estructura económica...", en *Chile hoy, op. cit.*, pp. 112-115.

eran muy frágiles. Después de un período de activación económica (1965-1966), basado en la bonanza del cobre y en el endeudamiento externo que permitió contrapesar la presión social apelando al gasto público, la aceleración inflacionaria se tradujo en la caída de los ingresos del sector asalariado y en la reducción drástica de los ritmos de crecimiento.[11]

En estas condiciones de funcionamiento el apoyo popular se deterioró. Y, como observamos, el "pueblo" desempeñaba un papel muy importante en la legitimación de la política de la DC. Ésta había rebasado los límites del compromiso social tácito que presidiera las experiencias desarrollistas en la sociedad chilena. Pero este nuevo gran compromiso social en el que se incorporaba a los antes excluidos fue condenado por todas las fuerzas sociales que participaron en él; condenado por la derecha y por las clases medias, que se aterrorizaron ante la presión popular creciente y que no estaban dispuestas a pagar el costo del proceso inflacionario; por los grandes propietarios, para quienes la reforma agraria había significado un duro golpe y la movilización del campesinado amenazaba con su liquidación definitiva; por la burguesía industrial, que —como veremos más adelante— continuó comportándose parasitariamente con relación al Estado y se mostró temerosa ante la presión popular acrecentada; condenado por aquellos sectores de la pequeña y mediana burguesía local cuya posición relativa se había deteriorado con respecto al gran capital extranjero y nacional, y condenado también por las masas populares —rurales y urbanas— cuyas expectativas quedaron frustradas.

b] LA RESPUESTA DE LA BURGUESÍA CHILENA AL PROYECTO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CAPITALISMO

La agudización de la crisis de las economías agroexportadoras y la consiguiente crisis del sistema de dominación oligárquica no desembocó en situaciones de clara hegemonía política de una clase o fracción de clase en América Latina. Las situaciones de crisis política crónica fueron el legado más frecuente de la crisis mundial. Las relaciones de fuerza entre las diferentes clases y fracciones de clase las situaba en una posición de equilibrio en la debilidad. Esto confirió al Estado de transición de los años 30 el carácter de lugar de negociación de los conflictos y sustituto del sistema político. El conflicto se libró dentro

[11] Véase Pinto Santa Cruz, Aníbal, "Desarrollo económico...", *op. cit.*, p. 47.

del Estado y éste interiorizó las oposiciones sociales. De esta situación deriva su debilidad como agente político, su incapacidad de llevar a cabo una política adecuada a las exigencias del modelo de acumulación.

El Estado chileno de transición también fue un Estado débil en este sentido, pero apareció bajo la forma de un sistema político —relativamente abierto y flexible— que se mostró eficaz para la negociación del conflicto de clases. Las clases dominantes locales estuvieron políticamente unificadas en torno del modelo político de funcionamiento de la sociedad. La crisis política que derivó del agotamiento del modelo de sustituciones de importaciones fáciles no revistió el carácter de una crisis orgánica como en Argentina o Brasil. Fue una crisis política a la que la DC hizo frente a través de un reordenamiento de las fuerzas sociales en el bloque hegemónico.

La consolidación de la dominación burguesa en el plano político se realizó en Chile con mayor fortuna que en otras experiencias latinoamericanas. Sin embargo esta dominación burguesa legítima tenía como soporte a una burguesía estructuralmente débil. En efecto, la forma de dominación imperialista —el enclave minero— operó como una "camisa de fuerza", como señalan Aranda y Martínez.[12] En la coyuntura del Frente Popular, la burguesía chilena había mostrado un carácter parasitario *vis a vis* del Estado. Entre 1949 y 1960, más de la mitad de los recursos para inversión en las empresas industriales provinieron de fuentes externas a las mismas. A su vez, el 70% de esos fondos era destinado a la formación de *stocks* con fines especulativos y a la concesión de créditos para atraer la clientela de otros competidores.[13]

Este comportamiento gerencial y especulativo tenía sus raíces en las características básicas del capitalismo dependiente chileno. El proyecto de desarrollo del capitalismo autónomo no tuvo en ella el mismo eco que en la burguesía brasileña o argentina. El carácter monopólico del desarrollo del capitalismo —en especial el proceso de industrialización fue dominado por este modo de funcionamiento— frenó la inversión reproductiva, con independencia de la elevada tasa de beneficio obtenida por los sectores más dinámicos de la economía. La intervención estatal se constituyó en el mecanismo básico de la acumulación de capital. El papel omnipresente del Estado en la economía —que reforzó el patrón parasitario de la burguesía chilena—

[12] Aranda y Martínez, "Estructura económica...", *op. cit.* El cobre genera el 80% de las divisas.

[13] Cademartori, José, *La economía chilena,* Ed. Universitaria, Santiago, 1968, p. 139.

constituyó un rasgo estructural que diferencia a la situación chilena de otras situaciones latinoamericanas.

En efecto, si bien el Estado populista desempeñó un papel preponderante en el desarrollo del capitalismo en Argentina y en Brasil, el peso económico de esas burguesías —con independencia de su peso político— fue mucho mayor que el de la burguesía chilena. Y ello, pese a que el Estado siguió teniendo un papel importante en esos países en la década de 1950, cuando ya hacía crisis la ideología del desarrollo nacional. La burguesía chilena fue estructuralmente débil y esa debilidad aparece vinculada con la economía de enclave.[14]

La consolidación del modelo de desarrollo "asociado" como respuesta a las tendencias del proceso de acumulación encontró un obstáculo en las características mismas de la burguesía. La fracción monopólica que intentaba consolidar su hegemonía política a través del proyecto de la democracia cristiana, no tenía el peso económico de sus similares en Argentina o Brasil. Esta afirmación no implica sostener que en los años 60 no fuera la fracción económicamente predominante. Lo que se afirma es que su dependencia con respecto al Estado, y a través de éste con el enclave minero, se tradujo en un comportamiento parasitario. Su predominio económico descansaba en su capacidad de especulación y no en una acción destinada a impulsar la acumulación.

A diferencia de Argentina, en donde los sectores monopólicos de la burguesía habían consolidado su situación de predominio económico y no podían realizar su hegemonía política debido no sólo a la presencia de fuertes sectores populares sino a una situación de fragmentación del poder que derivó en un empate crónico entre las fuerzas, en Chile la búsqueda de esa hegemonía estaba también bloqueada por el comportamiento económico de esa fracción de la burguesía. Y éste me parece un dato de importancia decisiva para entender el fracaso del proyecto demócrata cristiano, fracaso en el que la propia burguesía monopólica desempeñó un papel importante.[15]

En el período 1960-1968, Aranda y Martínez estiman que del total del excedente obtenido en la industria, después de deducido el impuesto a la renta, sólo se destinaba a la formación de capital fijo entre un 25 y un 30%. Por otra parte la inversión privada nacional en capital fijo no alcanzaba a un 10% del ingreso industrial.[16]

[14] Véase Brodersohn, Víctor, *Consideraciones sobre el carácter dependiente de la burguesía industrial chilena,* CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1969, mimeo.

[15] Para un análisis de Argentina véase Portantiero, J. C., "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en *Pasado y Presente,* Córdoba, Argentina, año IV, núm. 1, abril-junio de 1973, pp. 31-86.

[16] Aranda y Martínez, "Estructura económica...", *op. cit.,* p. 77

Durante el gobierno de Frei el coeficiente de inversión cayó. De un 16.4% alcanzado entre 1960-1964, pasó a un 15.6% entre 1965-1970. Esta situación se tradujo en un lento crecimiento del empleo industrial y en la caída sistemática de la participación de los salarios en los ingresos.[17] La ideología integradora del proyecto político demócrata cristiano quedaba divorciada de la realidad.

El Estado en primer lugar y la inversión extranjera en segunda instancia siguieron siendo las dos fuerzas decisivas para sacar a la economía del estancamiento e impulsar un nuevo modelo de acumulación.[18] El examen de las 20 sociedades anónimas principales en la industria manufacturera indica que aquellas con fuerte participación de capital extranjero representaban el 36% del capital total en estas sociedades.[19]

Sergio Ramos observa que en la industria manufacturera en su conjunto (incluidas las empresas constituidas bajo la forma de sociedad anónima) el capital extranjero representaba el 17% del capital pagado por el sector. El sector estatal representaba el 13% y el privado el 70% restante en 1968. El 17% era poseído por el 1% de los accionistas totales, en tanto que el capital privado presentaba una dispersión mayor, lo que hizo factible al capital extranjero las denominadas formas de control minoritario.[20]

Sin embargo, pese al papel del capital extranjero, la baja tasa de acumulación, la lentitud del crecimiento global de la economía y el consiguiente agravamiento de los problemas estructurales básicos de la economía chilena ponían en cuestión el objetivo del proyecto de la DC no sólo en su aspecto político reformista, sino en sus fundamentos económicos.[21] Lo que resulta claro es que para lograr imponer un proyecto de profundización capitalista la DC tenía que controlar el proceso de acumulación. El Estado debía estar al servicio del capital monopólico. Al fracasar en sus objetivos económicos, la DC también fracasó en la construcción del esquema de poder. El fracaso en sus objetivos económicos —pese al fortalecimiento de las posiciones económicas del

[17] Entre 1950 y 1968 los salarios perdieron alrededor de un 40% de su participación relativa. Aranda y Martínez, "Estructura económica...", *op. cit.*, p. 92.

[18] Para un análisis del papel de la inversión extranjera, véase Caputto, Orlando y Pizarro, Roberto, "Dependencia e inversión extranjera", en *Chile hoy, op. cit.*, pp. 173-212. También Gassic, Gabriel, *Concentración, entrelazamiento y desnacionalización en la industria manufacturera,* tesis de grado, Santiago, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, 1971.

[19] Cademártori, J., *La economía..., op. cit.*, p. 140.

[20] Ramos, Sergio, *Chile: ¿una economía de transición?,* Santiago, Prensa Latinoamericana, pp. 49-50. Véase también Vuskovic, Pedro, *Informe 1970,* en Revista Mensaje, Santiago, septiembre-octubre de 1971, núms. 202/203, p. 391.

[21] Durante el período 1960-1966, la producción industrial creció a un ritmo anual promedio del 7%. Entre 1967-1970, sólo lo hizo al 2.4%.

capital monopolista— [22] impugnó sus objetivos políticos: no pudo satisfacer las demandas de los sectores populares movilizados; tampoco satisfizo las exigencias de los sectores de la clase dominante. Y su esquema de poder se constituía en un elemento decisivo a su vez, del bloqueo de las tareas económicas que se proponía realizar.

La condición básica para llevar a cabo la política del modelo de desarrollo —la restructuración de la economía que hiciera posible una racionalización y "modernización" del sistema social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una acumulación de riqueza con la que se podría "premiar" luego, selectivamente, distintos estratos según su eficiencia— no fue cumplida. El rechazo de los sectores perjudicados, principalmente de aquellos sectores movilizados por la DC en el campo y en la ciudad, desbordó la estrategia seguida en lo económico. Particularmente, la agudización de la lucha social en el campo y en la ciudad acabó por reagrupar en su contra a todas las fuerzas sociales que habían participado en el proyecto de la DC.

c] LA AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD

La contradicción básica que caracterizó al proyecto de la DC fue, como señalamos, la que se desarrolló entre los objetivos económicos y la construcción del esquema de poder. En efecto, este esquema suponía la legitimación popular, es decir, una alianza con amplios sectores de las clases dominadas que hiciera posible el desplazamiento de los sectores tradicionales agroexportadores del bloque de poder. La activación política controlada de nuevos actores en el sistema político constituía la contrapartida del proyecto económico, su cara populista. La DC intentó organizar a sectores hasta entonces excluidos de la sociedad política y contrapesar, por esta vía, el potencial subversivo del movimiento obrero. La reforma agraria, las organizaciones comunitarias (centros de madres, juntas de vecinos, etc.), los organismos de promoción popular (encargados de asistir a los sectores populares urbanos afectados por el problema de la vivienda), eran los instrumentos orientados en esta dirección. Las organizaciones de clase quedaban jerárquicamente articuladas con la política estatal.[23]

[22] Véase Garretón, Oscar y Cisternas, Jaime, *Algunas características del proceso de toma de decisiones en la gran empresa. La dinámica de la concentración*, Santiago, mimeo., 1969.

[23] Para un análisis del modelo político de la "comunidad integrada" en la ideo-

Bien pronto, las demandas de estos nuevos actores desbordaron la capacidad de respuesta del gobierno. A la activación económica de los dos primeros años de gobierno sucedió un período de creciente contracción que disminuyó las posibilidades de apelar al gasto público como mecanismo de estabilización de las presiones sociales. La incapacidad de articular el "exceso" de demandas de un "exceso" de actores impuso una acentuación de las funciones represivas. La ideología integradora de la DC se divorciaba de su práctica política; al mismo tiempo que, en tanto su legitimación pasaba por el apoyo de las masas populares rurales y urbanas, éstas le imponían límites a su capacidad de represión económica y política de las clases populares. Por otra parte, el movimiento obrero organizado se enfrentó, tanto a través de la acción directa como a través de la acción de sus partidos en el Parlamento, con la política de la DC.

i] *La agudización de la lucha en el campo*

La Ley de Reforma Agraria se orientó a dinamizar los sectores de la gran burguesía agraria. Entre 1964 y 1968, la producción creció al 4.0% anual, tres veces más rápido que en los últimos veinte años.[24] Simultáneamente, esta fracción pasó a controlar la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la que amplió sus bases y remplazó a los hombres tradicionales de su dirección por agricultores eficaces y progresistas. En efecto, mientras que en 1965 la SNA contaba con 1 834 miembros, en 1969 el número ascendía a 4 500. En ese mismo período, el número de afiliados a los sindicatos de empleadores agrícolas —organismos de participación regional de los latifundistas articulados con la SNA— pasó de 1 917 a 9 803. La SNA se abrió a la participación de propietarios medianos y modernizó su ideología bajo una nueva modalidad tecnocrática.[25]

En 1970, después de tres años de aplicación de la ley, se había expropiado un 14.4% de las tierras productivas y beneficiado a 21 000 antiguos inquilinos y medieros, del total de 100 000 familias campesinas que esperaban una solución.[26]

---

logía de la democracia cristiana, véase Castillo Velasco, Jaime, *Las fuentes de la democracia cristiana,* Santiago, Ed. del Pacífico, 1972 (3ª edición).

[24] Barraclough, S., "La estructura y los problemas del sector agrario chileno", en *Vía chilena al socialismo, op. cit.,* p. 119.

[25] Para un estudio de la evolución de la SNA (fundada en 1838), véase *Los gremios patronales,* Santiago, Ed. Quimantú, 1973.

[26] Los *inquilinos* trabajan los campos del patrón a cambio de ciertas regalías mínimas como casa para ellos y sus familias, una porción de tierra —generalmente entre

El expediente de la subdivisión jurídica de la propiedad había sustraído más de 400 mil hectáreas de riego básico al proceso expropiatorio. Los resultados de la reforma eran muy pobres si se piensa en las expectativas despertadas en los trabajadores rurales.

La sindicalización campesina se extendió rápidamente a partir de 1967. Sin embargo, como observa Angell, los sectores más velozmente captados fueron los inquilinos prósperos y los trabajadores permanentes de los grandes fundos. Los asalariados rurales no residentes en los fundos apenas se habían organizado. De este modo, la sindicalización contribuía a aumentar la heterogeneidad estructural del campesinado.[27]

Entre 1964 y 1965 el número de campesinos en huelga, en cierto modo protegidos por un gobierno partidario de la Reforma Agraria, se triplicó.[28] Pero los movimientos huelguísticos y las tomas de fundos continuaron aumentando después de aprobada la ley. En el período 1960-66, el promedio anual de fundos tomados ascendió a 6. En 1968, esa cifra se elevó a 148.

ii] *La lucha de la clase obrera*

Entre 1961 y 1967 Barrera observa un cambio en las formas de lucha de la clase obrera.[29] En efecto, aumentan las huelgas ilegales en la manufactura por razones de solidaridad con otras organizaciones sindicales y en protesta por las condiciones de trabajo.

Si bien la causa más importante sigue siendo el aumento de remuneraciones, esta pauta —que también caracteriza a las actividades huelguísticas durante 1970— muestra el apoyo de otros sindicatos, federaciones e incluso de la CUT en los conflictos, como observa Barrera. En este contexto se inscribe la huelga de la industria textil chilena, inmediatamente anterior a la intervención bajo el gobierno de la Unidad

---

un cuarto y medio acre— y el derecho de pastorear sus animales en las tierras del patrón. El *mediero* entrega la mitad o más de su cosecha a cambio de la tierra que él mismo cultiva. Los *afuerinos* (trabajadores estacionales), los *minifundistas* y las comuniones indígenas quedaban excluidos de los beneficios de la ley.

[27] Véase Angell, A., *Partidos políticos y..., op. cit.*, p. 266. También Marín, Juan C., "Asalariados rurales en Chile", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires, Inst. T. Di Tella, 69/2, 1969, pp. 317-341.

[28] Véase Petras, J. y Zeitlin, M., "El proceso de radicalización campesina", en *Cuadernos de Economía*, Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 5, año 5, agosto de 1968, pp. 44-67, p. 50. Para un análisis del movimiento campesino durante este período, véase Alfonso, A., *Movimiento campesino chileno*, Santiago, ICIRA, 1970.

[29] Barrera, Manuel, *Perspectiva de.., op. cit.*, p. 149.

Popular. Una huelga dirigida por obreros mecánicos que se transformó en una huelga general de toda una región, la región textil de Tomé.

A partir de 1965, la frecuencia ascendente de huelgas (legales e ilegales) puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para absorber las demandas económicas y sociales del movimiento obrero.[30] El paro general de la CUT, en noviembre de 1967, marcó la confrontación más violenta del movimiento obrero organizado con el gobierno. La solución deflacionaria de la DC denominada "fondo de capitalización" y consistente en el reajuste de sueldos y salarios con bonos de capitalización, popularmente bautizados como "chiribonos", fue rechazada por la CUT.[31] El enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos —incluso los sindicatos demócrata cristianos— puso en cuestión la estrategia de la DC no sólo desde fuera, sino en el seno de la propia organización partidaria. El paro general fue violentamente reprimido. El Estado estaba debilitado en su capacidad de control de la movilización popular y el aspecto represivo cobraba mayor visibilidad.[32]

La DC había fracasado en su intento de organizar una dirección paralela a la CUT. El "Comando Nacional del Trabajo", surgido del movimiento "trabajadores sindicalizados por Frei" en la campaña electoral de 1964, fracasó en sus intentos de constituirse en una organización paralela a la CUT. La UTRACH (Unión de Trabajadores de Chile) fue el último intento, también fracasado y finalmente desautorizado por el mismo partido.

iii] *El movimiento urbano*

En el campo poblacional, la radicalización de las demandas de estos sectores también desbordó la solución tecnocrática de la DC. Las ocupaciones de terrenos comenzaron a crecer y, con ellas, la represión abierta.[33] En 1968, los sectores inicialmente movilizados en torno al

[30] Para un análisis del movimiento huelguístico, véase Sader, Emir, *Movilización de masas y sindicalización en el gobierno de la Unidad Popular,* CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1973 (el autor hace un análisis del período demócrata cristiano). También Zapata, Francisco, *Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende,* El Colegio de México, CES, México, núm. 4, 1974, pp. 8-12.

[31] La CUT era ilegal y lo siguió siendo hasta el acceso de la Unidad Popular al gobierno.

[32] Es interesante destacar que durante el gobierno de Frei se restructuró la localización del ejército con miras a un control de los obreros industriales y de los mineros.

[33] Para un análisis de este aspecto véase Bengoa, José, *Pampa Irigoin, lucha de clases y conciencia de clase,* CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1972, mimeo. También Pastrana, E. y Threlfall, M., *Pan, techo y poder,* Buenos Aires, Ed. Siap-Planteos, 1974.

problema de vivienda impugnaban el proyecto demócrata cristiano. En su origen este movimiento canalizó las reivindicaciones de los sin casa. Organizados en comités, éstos eran los encargados de hacer llegar las demandas al Ministerio de la Vivienda. La creciente incapacidad de los organismos gubernamentales para responder a estas reivindicaciones desembocó en la ocupación de terrenos por la fuerza, con el apoyo de algunas fuerzas políticas. Las coyunturas electorales eran propicias para estas acciones y durante la campaña presidencial de 1970, los "campamentos" formados por los "pobladores" que ocupaban terrenos fueron tan numerosos como los barrios planificados por el gobierno. El descontento popular ante la lentitud en la realización del programa de "promoción popular" dejaba a la DC sin una fracción considerable de su clientela.

En cuanto al movimiento universitario, éste había renovado sus cuadros bajo la influencia de las juventudes de la DC. La modernización de la estructura universitaria que se desarrolló en este período desbordó muy pronto los cauces iniciales. La radicalización política de los estudiantes de la DC constituyó las primeras bases de lo que sería el MAPU y más tarde la Izquierda Cristiana. La crisis política a la cual la DC había intentado responder se había convertido en una crisis social. La sociedad civil irrumpía violentamente en el campo y en la ciudad. La pérdida de base social de la DC se tradujo también en una pérdida de la legitimidad de su proyecto en el seno mismo de la formación partidaria. En 1969 se desprendió el ala izquierdista de la DC, el movimiento de Acción Popular Universitaria (MAPU).

Las elecciones parlamentarias de 1969 mostraron un descenso sensible de la votación partidaria con respecto a las de 1965 (31% y 44% respectivamente).[34] El proyecto hegemónico de la DC había fracasado en su empresa histórica. Su hegemonía sobre la sociedad quedó cuestionada a partir de este fracaso. La movilización de sectores de las clases dominadas, hasta entonces pasivos, había irrumpido en la sociedad política. El hecho decisivo que está detrás de la crisis social, o "crisis del Estado en su conjunto" (en términos de Gramsci) [35] que se desarrolló en la sociedad chilena es que la DC rompió con el modelo político en que éste venía funcionando desde comienzos de siglo.

La hipótesis es que los efectos de la crisis mundial sobre ese modelo político no quebraron la continuidad institucional porque el pacto

[34] Véase Müller, Urs., "La voz de las cifras", en *Cuadernos de la Realidad Nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 14, octubre de 1972, pp. 152-174, p. 156.

[35] Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno,* Buenos Aires, Lautaro, 1962, p. 76.

social en que éste se asentaba se mostró eficaz para resolver los conflictos de clase fundamentales en la sociedad chilena. La DC *rompió los límites de ese compromiso social tácito y con ello selló la ruptura del modelo político que había hecho de la sociedad chilena un caso excepcional en el contexto latinoamericano.*

d] LA CRISIS DE LA HEGEMONÍA POLÍTICA BURGUESA

El fracaso del intento demócrata cristiano desembocó en una crisis de la hegemonía política burguesa en la sociedad chilena. Roto el compromiso social sobre el que se fundaba la estabilidad del modelo político chileno, y sin poderse sentar las bases de una nueva fórmula social, el sistema hegemónico en su totalidad quedó impugnado. El proyecto transformista de la DC había intentado integrar al sistema hegemónico a amplios sectores de las clases dominadas. Como vimos, el proyecto fracasó en el seno del movimiento obrero, pero también —y esto tuvo una importancia decisiva— fracasó entre las clases populares, urbanas y rurales, que habían sido sacadas de la pasividad por la DC. La irrupción de estas últimas en la sociedad política, en las condiciones específicas de una creciente organización del proletariado, constituyó uno de los aspectos decisivos de la crisis social. La fragmentación política de las clases dominantes fue el otro aspecto decisivo que hizo de esta crisis orgánica una crisis potencialmente revolucionaria.[36] La democracia cristiana quedó aislada; "terminó por convertirse en anacrónica... y quedó como en las nubes".[37]

La ruptura de los vínculos entre el partido (la DC) y sus representados dejaba a los sectores del semi y subproletariado urbano y rural sin una expresión política centralizada. La constitución de un bloque popular en torno del movimiento obrero organizado —la Unidad Popular— que pugnaba por la realización de un nuevo sistema hegemónico confirió a la crisis su carácter de situación potencialmente revolucionaria en la coyuntura política de 1970.

La escisión del bloque burgués (la "crisis en las alturas" de la que habla Lenin) quedó marcada por la reconstitución de la derecha política. El Partido Nacional —surgido en 1966 de la fusión de los partidos conservador y liberal— había sido el primero en reconocer el liderazgo freeísta. En 1970 era su opositor. La función de la DC con respecto a los

[36] Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo..., op. cit.*, p. 76.

[37] *Ibidem*, p. 78. Son los términos que explica Gramsci para caracterizar la situación del partido ante una crisis orgánica.

"momios" (la derecha política) había sido la de una clase dirigente que había fracasado en su empresa histórica de consolidar el bloque burgués bajo la hegemonía de los sectores del capital monopólico, nacional y extranjero. El mantenimiento de la hegemonía política burguesa en la sociedad chilena había estado asociado a la permanencia de estructuras patrimonialistas en el campo. El proyecto de profundización del capitalismo de la DC terminó por debilitar la hegemonía política burguesa en su totalidad. La yuxtaposición de las hegemonías políticas parciales de los distintos sectores de la clase dominante, bajo la dirección de la DC, se había roto. Los sectores conservadores (la burguesía agraria subordinada a los intereses financieros, industriales y comerciales dominantes) habían depositado en una nueva fuerza, la DC, la dirección de la sociedad.

Pero el fracaso de la "Revolución en Libertad" puso en cuestión la hegemonía política burguesa en su totalidad. De este modo, el proyecto de los "momios", aunque residual desde el punto de vista del desarrollo económico y social, acumuló un enorme poder de veto político. En efecto, los sectores tradicionales vinculados al gran latifundio manifestaron su fuerza política e ideológica para bloquear las decisiones del gobierno de la DC, pese a que estos sectores no contaban con una fuerza similar para llevar a la práctica sus decisiones. La irrupción de la crisis orgánica hizo que los "momios" se convirtieran en los beneficiarios políticos del fracaso del reformismo burgués expresado por la DC. Ellos pudieron ejercer el liderazgo ideológico sobre las demás fracciones de la clase propietaria y reconstituir una alianza en nombre del "orden".

El éxito que mostraron en esta reconstitución del esquema de fuerzas en el bloque hegemónico era la contrapartida de la confusión ideológica en que se debatía la DC. En efecto, en la convención nacional de la DC, en julio de 1967, había sido aprobado el informe de la comisión técnico-política del partido sobre la "vía no capitalista" de desarrollo.[38] Una intensa disputa ideológica marcó al partido demócrata cristiano a partir de entonces.[39] Pese a las medidas de política económica propuestas —la Reforma Agraria, la chilenización del cobre, la política deflacionaria— el gobierno de la DC aparecía ideológicamente enfrentado al capitalismo y a la burguesía y disponible para una alianza con las

[38] Sobre la orientación del programa de gobierno en 1967 véase PDC; *Proposiciones para una acción política en el período 67-70 de una vía no capitalista de desarrollo. Documento de trabajo para la convención nacional de* DC. Santiago, Comisión Político-Técnica de la DC, julio de 1967.

[39] Para un análisis de los conflictos internos en el seno de la DC, véase Ojeda Urzúa, G., *El conflicto interno en el Partido Demócrata Cristiano,* Universidad de Lovaina, 1969. También Maira, Luis, *Chile: Los años de Unidad Popular,* Santiago, Ed. Quimantú, 1973.

organizaciones sindicales y el FRAP. Esta estrategia defensiva de la DC no encontró aliados en el seno del movimiento obrero y de sus representaciones partidarias. Por el contrario, consiguió reforzar a las fuerzas de la oposición (la derecha política unificada en torno del Partido Nacional). De este modo, la burguesía quedó escindida políticamente alrededor de dos proyectos: la opción conservadora de la derecha política y la opción reformista del centro (la DC). El corte principal entre estos dos proyectos no residió en las medidas económico-sociales, sino en sus propuestas políticas. El punto de ruptura se condensó en torno al control de la movilización popular.

La crisis orgánica revistió un carácter potencialmente revolucionario en la coyuntura política de 1970. La Unidad Popular articuló alrededor de su proyecto de transición al socialismo a amplios sectores de la clase dominada, a los que la DC había sacado de su pasividad política, pero sin poder responder a sus demandas. De este modo, el movimiento obrero organizado y sus representaciones políticas se constituían en el grupo fundamental, potencialmente capaz de hegemonizar a la totalidad de los grupos dominados en la sociedad chilena. Frente a ésta, la burguesía aparecía políticamente fraccionada.

El potencial revolucionario del movimiento social que se gestó como consecuencia de la crisis del reformismo burgués, presentaba una complejidad muy grande. Esta complejidad aparece asociada a lo que Touraine denominó la triple dimensión de los movimientos sociales en América Latina.[40]

En efecto, la orientación de la lucha social se articuló en torno de tres conflictos: el conflicto de clases, clases populares contra clases dirigentes; el conflicto en torno de la participación-exclusión en los beneficios económicos y políticos, planteado como un conflicto entre "pueblo" y "oligarquía" y el conflicto expresado en la oposición Nación-Imperialismo. Estas tres dimensiones de la acción social estuvieron presentes en el movimiento obrero chileno pese a que la fuerza de cada una varió entre las distintas fracciones de la clase obrera y entre las clases que apoyaron a la Unidad Popular. La segunda dimensión, cuyo objetivo era la ampliación de la participación económica e institucional, tuvo mayor peso entre los sectores medios urbanos y los sectores excluidos del proceso productivo a los que la DC había movilizado a través de una ideología populista. El desafío que se presentaba a la Unidad Popular en 1970 era el de concentrar en una fuerza orgánica esta simultaneidad de conflictos que suponía la presencia contradictoria de diferentes sujetos históricos.

[40] Touraine, A., *Vie et mort du Chili populaire*, París, Seuil, 1973, pp. 114 *ss.*

Por otra parte, y como observa Touraine, la lucha política e ideología antimperialista era la dimensión más débil. La lucha de clases en la sociedad chilena se había librado en términos de un enfrentamiento entre burguesía y proletariado (fundamentalmente proletariado del enclave y de las industrias modernas de la economía) y la dominación extranjera había quedado desdibujada bajo esta modalidad de lucha. La burguesía, por su parte, no podía canalizar un movimiento social bajo su hegemonía sin combinar esta pluridimensionalidad de la lucha social. La DC lo había intentado a través de un proyecto político reformista y su fracaso había escindido el bloque hegemónico mismo. En la coyuntura política de 1970, la DC volvió a intentar constituirse en la fuerza capaz de reconstruir el bloque hegemónico burgués al precio de radicalizar su estrategia. El programa de gobierno que ofreció como salida a la crisis era, según las palabras de su candidato Radomiro Tomic, "un esquema preciso de sustitución del capitalismo y coincide con el de Allende en más del 90%".[41]

Pero el fracaso en su empresa histórica había erosionado sus bases sociales de apoyo no sólo entre los sectores populares, sino también entre las clases dominantes. La burguesía también condenó el compromiso social que intentara fundar la DC. Su escisión política en 1970 ponía de manifiesto su ceguera frente a lo que estaba en juego en la lucha de clases. Pese a la inadecuación de la solución política reformista de la DC con respecto a sus intereses —lo que se puso de manifiesto en la agitación social y el deterioro progresivo de la política de la DC— el compromiso era el único medio a su disposición para ofrecer una alternativa de salida a la crisis en que se debatía la sociedad.

En las condiciones de agudización de la lucha de clases en la sociedad chilena la solución de una vuelta al equilibrio pasado no tenía bases de sustento en la realidad. Los sectores que impulsaban un proyecto reformista, ahora ideológicamente más radical que en 1964, lo sabían. Pero su estrategia de "unir a los adversarios para combatir a los enemigos" no tuvo eco entre las clases dominantes chilenas. Los enemigos pudieron unirse políticamente alrededor de la Unidad Popular. Los adversarios quedaron escindidos. Tanto la izquierda como el centro político cifraron sus esperanzas en la flexibilidad y resistencia del sistema político chileno. La derecha política puso el acento de su estrategia en "los límites de tolerancia" del sistema político. Para ella se trataba de reconstituir la hegemonía burguesa y poder utilizar todos los mecanismos de la sociedad política para reprimir violentamente a

[41] Véase Maira, Luis, *Chile, dos años de..., op. cit.*, p. 43.

las clases subordinadas. La escena político-electoral de 1970 mostró el fracaso de la salida conservadora para captar a los reformistas y viceversa. Ninguna de las dos opciones pudo articular orgánicamente a la burguesía. Así, en la brecha abierta por la escisión burguesa se inscribió el triunfo electoral de la Unidad Popular.

La contrapartida del triunfo de la Unidad Popular era la complejidad de sectores y orientaciones a los que ésta debía dar expresión orgánica. El pacto social tácito en que se fundó la estabilidad política de la sociedad chilena había sido quebrado por la DC, como señalamos. La construcción de un nuevo sistema hegemónico, alternativo del sistema burgués, quedó sometida a este desafío.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

TERCERA PARTE

LOS TRES AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: ENTRE LA CRISIS Y LA REVOLUCIÓN

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

INTRODUCCIÓN

Como ya he señalado en la introducción a este estudio, mi enfoque para el análisis de los tres años del gobierno popular parte del reconocimiento de que éstos fueron el resultado del entrecruzamiento de dos historias: la historia de la ruptura del modelo de funcionamiento político de la sociedad chilena y la historia del proyecto de transformación de la sociedad lanzado por la Unidad Popular. Este tema de la "doble historia" del gobierno popular es el hilo conductor de todo este análisis.

La hipótesis central es que el proyecto de transición "democrática, libertaria y pluralista" hacia el socialismo no se hizo cargo de la ruptura del modelo político chileno; por el contrario, presupuso su continuidad.

Sostener esta hipótesis no implica afirmar que la estrategia de la Unidad Popular estaba condenada al fracaso desde su nacimiento. Por el contrario, la singularidad de la coyuntura política chilena en 1970 reside en la apertura de una alternativa institucional para emprender un proceso de transformaciones sociales de carácter revolucionario. En 1970, como observa Debray,[1] la lucha de clases en la sociedad chilena estaba objetivamente moldeada en las formas institucionales burguesas, ya que ésa era la marca depositada sobre el presente, incluido el proletariado, de las condiciones previas de esta formación social. En 1970, ninguna legitimidad revolucionaria hubiera sido posible, ni siquiera concebible, fuera de las formas de legitimación de la democracia representativa.[2]

Para muchos, el fracaso de la Unidad Popular estaba contenido en sus premisas. Pero esta afirmación es engañosa no sólo porque pres-

1 Véase el excelente análisis de Regis Debray en *La Critique des armes*, París, Seuil, 2 tomos, 1974, tomo 1, cap. VI: *La crible chilien*, p. 307.

2 El "error" del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) fue el no haberlo comprendido, como se manifestó en su autocrítica. Véase *Punto Final*, "El MIR y el resultado electoral" (núm. 115, octubre de 1970).

cinde del análisis de la coyuntura histórica concreta en que la estrategia fue formulada, sino también porque es incapaz de dar cuenta del desenlace de la crisis. La verdad es que el desenlace de la crisis era incierto tanto para los protagonistas como para los observadores del Chile popular.

Para otros, el fracaso de la estrategia de transición al socialismo —aunque válida en la coyuntura política de 1970— fue la consecuencia del predominio, desde sus comienzos, de una línea política de derecha en el seno de la Unidad Popular. Este enfoque del fracaso manifiesto de la gestión política de la UP encierra la discusión dentro de los límites fijados por el análisis de las líneas políticas de transformación de los partidos de la izquierda chilena. Cuando ésta es la perspectiva, el debate resulta estéril porque queda encerrado en el ámbito de la política en el sentido estrecho del término, es decir, como reflexión sobre tácticas diferentes para lograr la ampliación del poder político en determinadas coyunturas. Creo que el análisis de los tres años de gobierno popular debe superar los términos del dilema que enfrentó la UP: la discusión acerca de las tácticas alternativas "avanzar para consolidar" o "consolidar para avanzar".

Para descifrar la lógica del proceso que desembocó en la caída del gobierno popular es insuficiente la descripción de la política de los partidos de izquierda que integraban la Unidad Popular. Es fácil atribuir el fracaso de la UP al predominio de una línea política; pero cuando éste es el caso, no cabe ya preguntarse por las condiciones que hicieron posible ese predominio. La lógica de las opciones de la UP queda reducida a un conjunto de parámetros fijos y de este modo, se "demuestra" *ex post facto* la inevitabilidad del desenlace de la crisis. Preguntarse por las razones del predominio de una línea política en el seno de la UP implica interrogarse acerca de la naturaleza misma de esa coalición y de las condiciones que explican su génesis y "delinean" sus avatares en el gobierno.

De este modo, la lógica de las opciones de la UP, aunque "erróneas" a la luz de sus consecuencias, queda inscrita en la lógica de la historia de la sociedad chilena —la historia de la formación, consolidación y ruptura del modelo político chileno— más que en la lógica de la política. Por eso me parece de una gran lucidez la afirmación de Debray al respecto.[3]

Cuando afirmo que el proyecto de transformación de la sociedad de la UP no se hizo cargo de la ruptura del modelo de funcionamiento

[3] Debray, Regis, *La critique des..., op. cit.*, p. 313, "Lamentables, desgraciadas, 'erróneas', la lógica de las opciones es irrefutable. Pero es, a nuestros ojos, tanto la lógica de una historia como la de una política."

político de la sociedad chilena, lo que interesa destacar es que la UP *concibió al sistema político como lugar de resolución eficaz de los conflictos de clase.* De allí la preeminencia acordada a la lucha político-institucional como fuente de legitimación de su política. Pero este análisis político, fundamento de su estrategia, descansaba sobre una ilusión de larga trayectoria en la sociedad chilena: la de que el Estado es el ámbito común de participación de todas las clases sociales. La dominación de clase del Estado había aparecido ideológicamente trasmutada bajo la forma de "un Estado por encima de la sociedad". El movimiento obrero había estado impregnado en su acción por la búsqueda de una alianza con el Estado para vencer los obstáculos a la ciudadanía económica.[4] En la práctica concreta, su acción había sido subsidiaria de la de los partidos políticos de izquierda, intermediarios entre éste y el Estado (o los gobiernos).

La crisis orgánica que irrumpió en la sociedad chilena se caracterizó por la pérdida de la hegemonía burguesa. Sin embargo, la burguesía chilena seguía teniendo el control de la sociedad política en el sentido que da Gramsci a esta expresión, es decir en tanto la ideología liberal burguesa seguía impregnando las iniciativas de los grupos subalternos y de sus representaciones políticas. La sociedad chilena se acercó al tipo de sociedades "occidentales" analizadas por Gramsci, en las que el Estado (la sociedad política) es "sólo una trinchera avanzada, detrás de la cual existe una robusta cadena de fortalezas y casamatas" (la sociedad civil).[5] A diferencia de la situación rusa en 1917, la sociedad civil en Chile no era "primitiva y gelatinosa". La extrema visibilidad del Estado como agente político puede conducir al error de considerarlo como el Estado "oriental" o napoleónico. Pero el Estado chileno era, como en el resto de América Latina después de 1930, un *Estado de negociación.* Esta característica del Estado fue la consecuencia del carácter dependiente de la economía y el efecto común de esa situación estructural compartida por los países latinoamericanos. En Chile el Estado revistió la forma concreta de un sistema político flexible y relativamente abierto, lugar eficaz de resolución de los conflictos de clase (lo que no implica afirmar que no se apelara a la violencia). La eficacia del sistema político se fundó, como vimos en la segunda parte de este trabajo, en un pacto tácito sobre quiénes eran sus actores legítimos y quiénes los excluidos. La burguesía chilena, a diferencia de otras burguesías latinoamericanas, logró establecer un

[4] Para un análisis de la acción obrera en Chile, véase Campero, Guillermo y Jaramillo, Silvestre: "Conciencia de clase, economicismo y acción obrera", en CEREN, Universidad Católica de Chile, Santiago, núm. 8, junio de 1971, pp. 24-42.

[5] Véase Gramsci, A., *Notas sobre Maquiavelo..., op. cit.*, p. 96.

sistema de dominación legítimo. La ideología liberal burguesa penetró la acción de las clases dominadas y de sus intelectuales. La DC rompió los límites del compromiso social tácito en que se fundamentaba la estabilidad política chilena. Pero, "bajo el temblor del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil".[6] La sociedad civil podía asegurar la supervivencia de la hegemonía burguesa. La subversión del sistema hegemónico burgués no era tarea fácil; dependía de la fuerza de las clases subalternas y, especialmente, de la capacidad de sus intelectuales orgánicos para unificar el campo de sus aliados y disgregar el bloque hegemónico burgués. En ausencia de una intervención extranjera y, dadas las características de la acción imperialista (el "bloqueo invisible" de los Estados Unidos), como señala Touraine, el principio unificador de la lucha quedó circunscrito en lo esencial a factores internos: la capacidad de la UP para dar expresión orgánica a las luchas populares.[7] La complejidad de esta empresa histórica es clara si se tiene en cuenta la simultaneidad de conflictos y la presencia contradictoria de diferentes sujetos históricos.[8]

La situación chilena se opone a la situación leninista. En efecto, la sociedad civil no era allí débil como en las sociedades "orientales" precapitalistas sobre las que Lenin desarrolló la teoría marxista. Por otra parte, el Estado era percibido como un ámbito de participación al que se quiere llegar. La oscilación entre una orientación socialdemocrática y la violencia directa impregnó las luchas del movimiento obrero chileno. En Chile, las formas de orientación "socialdemócratas" sustituyeron —de la misma manera que las populistas en la mayoría de los países latinoamericanos— al leninismo. Lo que importa destacar aquí es que esa orientación también impregnó la acción de los dirigentes de la UP. El leninismo no tuvo peso político entre los intelectuales orgánicos del bloque popular. Creo que la debilidad de esta orientación obedece a dos órdenes de razones. Una, más general, tiene que ver con la situación de dependencia de la sociedad chilena y constituye un rasgo compartido por los países latinoamericanos. La otra, más específica, está relacionada con la solidez de la sociedad civil chilena y el papel de los intelectuales en esa sociedad. En efecto, el predominio de la ideología burguesa en la sociedad civil fue también, y de manera decisiva, el predominio sobre los intelectuales de las clases subalternas. La fuerza de esa ideología sobre éstos no dejó de tener efectos durante los tres años de la UP.

[6] *Ibidem*, p. 95.
[7] Touraine, A., *Vie et mort...*, *op. cit.*, p. 155.
[8] *Ibidem*, véase el análisis del autor sobre la triple dimensión de los movimientos sociales en América Latina. En especial, pp. 114 *ss.*

De este modo, aunque la estrategia de la transformación de la sociedad chilena pasaba en 1970 por una lucha institucional y una legitimación político-electoral, el "cuello de botella" político que enfrentó la UP en el gobierno fue la incapacidad de construir un principio de legitimación alternativo del dominante. El cambio cualitativo que se produjo en la escena política chilena como consecuencia del triunfo de la UP tendió a ser interpretado por sus dirigentes como la manifestación de un cambio cualitativo equivalente en la correlación de fuerzas sociales en la sociedad chilena. La causa se inventó a la medida del efecto, como observa Debray.[9]

La incorrecta evaluación de la coyuntura política que abrió el camino al triunfo electoral de la UP descansó en la ausencia de un análisis del bloque histórico dominante y fundamentalmente de la importancia de la sociedad civil y de la sociedad política. La situación abierta durante el gobierno de la DC era potencialmente revolucionaria, pero ello no implicaba suponer que pasaría a ser revolucionaria por el solo efecto del triunfo electoral de la coalición popular en 1970. El fraccionamiento político de la burguesía (la "crisis en las alturas") y su pérdida del control directo del aparato de gobierno, configuraban una situación de crisis orgánica, en términos de Gramsci. Pero con el triunfo electoral, la UP pasaba a controlar el gobierno; los demás aparatos del Estado seguían bajo el control político de la burguesía, incluido el militar. Más aún, la ideología burguesa, insistimos, seguía siendo dominante entre las clases subordinadas y en el seno mismo de la UP.

El supuesto de que el control del gobierno tenía un carácter estratégico para iniciar el proceso de transformaciones revolucionarias de la sociedad que impulsaba la UP descansó en la ilusión de que el Estado es el lugar en el que la lucha de clases puede ser librada con éxito para el bloque popular. Lo que la UP no pudo "ver" fue que la capacidad de conciliación del Estado chileno no era el fruto de su fuerza sino por el contrario el correlato de su debilidad; en otras palabras, la contrapartida de una gran autonomía institucional que descansaba en un compromiso social tácito. Y ese compromiso había sido roto por el impacto de la política reformista de la DC.

El acceso al gobierno de la UP estuvo condicionado al apoyo de los sectores democráticos (la DC) y resultó de un acuerdo con las fuerzas políticas que lo representaban: el Estatuto de Garantías Constitucionales. De este modo, la resistencia y flexibilidad de la institucionalidad burguesa abrían a la UP el camino hacia el control del gobierno. La

[9] Debray, R., *La critique des..., op. cit.*, tomo I, pág. 315.

situación en que ésta se encontraba era excepcional: tenía que poner en marcha una serie de medidas destinadas a revolucionarizar la sociedad en el contexto de una situación prerrevolucionaria, cuya característica decisiva era que la lucha por el poder seguía siendo una cuestión no resuelta.

El desafío que enfrentaba la UP imponía una doble tarea: destruir el bloque burgués y construir, simultáneamente, un bloque de poder popular alternativo. Esta doble tarea inspiraba su programa básico de gobierno. Para llevarla a cabo, la UP contaba con el control del gobierno —una parte del poder— considerado como instrumento estratégico para realizar su proyecto social. La dinámica del cambio social estaba localizada en la gestión del gobierno, en su diseño ideológico, en sus iniciativas concretas, lo que llevaba a un estrechamiento del espacio político autónomo disponible para la acción de los agentes intermedios como los sindicatos, las organizaciones de base ya existentes, o las que se gestasen a partir de entonces.

Por otra parte, las masas desposeídas habían sido convocadas en nombre de un gobierno que representaba sus intereses. El desafío que enfrentaba la UP era el de establecer una relación organizada entre las masas y el gobierno; ¿cómo lograrlo sin que el empuje de éstas desbordara su gestión?

El gobierno de la UP tenía que comportarse como reformista —localizar la dinámica del cambio social en los marcos de la institucionalidad burguesa— dada la naturaleza inédita de su acceso al gobierno. Pero también tenía que ser un gobierno revolucionario: los agentes de la nueva voluntad revolucionaria tenían que acumular y movilizar las fuerzas sociales necesarias para poder realizar su proyecto social. Y ello tenía que ocurrir sin que la dinámica ascendente de la lucha de clases se escapara de sus manos.

El fracaso de la UP en su empresa de unificación del campo popular aparece indisolublemente ligado con una política defensiva y vacilante a partir del segundo año de gobierno, cuya consecuencia más importante fue el haber dejado la lucha de clases librada a su propia dinámica.

Cabe preguntarse por qué ésta fue la política dominante en el seno de la UP. Podría contestarse que se debió al hecho de que las fuerzas de izquierda en su seno eran minoritarias, pero esta argumentación no es suficiente para responder a ese interrogante. Esas fuerzas revolucionarias eran minoritarias pero tampoco ellas consiguieron proponer un proyecto de articulación orgánica de todas las clases explotadas de la sociedad. La concepción del poder popular de esos sectores —PS, MAPU e Izquierda Cristiana— se fundó más en una afirmación doctri-

naria de su necesidad que en una definición de prácticas políticas alternativas en las condiciones específicas de funcionamiento del gobierno popular.

Si se sigue la cadena causal del razonamiento, se llega al punto nodal del dilema que enfrentó la UP y que va más allá de las diferencias de línea política de los partidos que la integraban. La UP no pudo "ver" el problema del Estado. Esta afirmación significa que no pudo articular orgánicamente el campo popular y construir un bloque popular hegemónico, alternativo del burgués. La gestión del Estado era difícilmente compatible con la gestión de la sociedad, y ello se debió a la continuidad de una percepción ideológica sobre las condiciones superestructurales de la sociedad chilena. El poder popular, tal como era concebido por los sectores revolucionarios de la UP, también funcionó como un instrumento de negociación antes que como instrumento de unificación de los intereses del conjunto de las clases dominadas. Pese a la divergencia de líneas políticas en torno al modo de lograr la ocupación-destrucción del Estado burgués, todas ellas fueron víctimas de una ilusión de larga trayectoria en la sociedad chilena: el Estado es el ámbito de negociación de la lucha de clases. El proyecto de transición al socialismo de la UP no pudo hacerse cargo de la ruptura del modelo de funcionamiento político del Estado en la sociedad. Esto equivale a afirmar que no pudo articular orgánicamente los intereses de las clases dominadas. Y ello ocurrió tanto a través de una política defensiva de búsqueda de alianzas que no encontró aliados como a través de una política de masas incapaz de pasar a la ofensiva, de unificar el campo popular.

En las páginas que siguen se aborda el análisis de la Unidad Popular partiendo de una división en dos grandes etapas. En el capítulo II se estudia la primera etapa. Este período abarca el primer año de gobierno y se extiende hasta mediados de 1972. El criterio para delimitarlo ha sido el predominio de una acción ofensiva de la Unidad Popular contra la burguesía monopólica, nacional y extranjera. Esta etapa coincide con la línea de conducción económica denominada "política Vuskovic".

En el capítulo IV se aborda el estudio de la segunda etapa. Ésta se extiende desde la salida de Vuskovic del Ministerio de Economía hasta el golpe militar de septiembre de 1973. La segunda etapa está caracterizada por el cambio en la conducción económica —la denominada "política Millas-Matus". A partir de entonces, la Unidad Popular carece de una política económica; las medidas adoptadas fueron intentos improvisados de responder a los problemas de cada día para sobrevivir. La producción cayó, la inflación se aceleró y la escalada terrorista

alcanzó sus máximos niveles. El gobierno asistió a la defensiva y, prácticamente inmovilizado, al desarrollo de la crisis.

El punto de inflexión entre ambas etapas está fijado, en el plano político, por el paro insurreccional de la burguesía en octubre de 1972. La solución militar a la crisis de octubre —la entrada de los militares en el gabinete— significa un cambio de rumbo en la gestión política. Desde entonces hasta el golpe de septiembre la acción del gobierno es defensiva y su debilitamiento cada vez más agudo. La Unidad Popular, cada vez más escindida en su propio seno y menos popular (el Tancazo, en junio de 1973 marca el regreso de los militares a la escena política), asiste paralizada, sin los instrumentos políticos ni militares, al desenlace de la crisis.

En el capítulo III se analiza la política agraria y las formas que revistió la lucha de clases en el campo. Para no romper la unidad de la temática he preferido tratar la cuestión agraria sin respetar la periodización inicial.

El capítulo V se concentra en el estudio de la estrategia de la burguesía y las formas que ésta revistió durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular. Finalmente, en el capítulo VI se esboza un conjunto de hipótesis para interpretar el papel de los militares en el desenlace de la crisis: el golpe "fascista".

CAPÍTULO I

LA ESTRATEGIA DE LA "VÍA CHILENA AL SOCIALISMO"

a] LAS VICISITUDES DE LA POLÍTICA DE "UNIDAD POPULAR" EN EL SENO DE LA IZQUIERDA CHILENA

La constitución de un frente político de "unidad popular" en 1970 reeditó, bajo nuevas formas, una trayectoria de alianza entre comunistas y socialistas en la sociedad chilena. En 1952 los comunistas habían apoyado desde la clandestinidad la candidatura de Salvador Allende. La posterior formación del FRAP en 1956 constituyó el segundo paso intentado para lograr la unidad política de la izquierda en torno de un programa definido como antimperialista y antifeudal. Esta política de unidad no estuvo exenta de una intensa disputa ideológica en el seno de la izquierda. Para comprender mejor sus vicisitudes es necesario volver la atención hacia las posiciones de los dos partidos fundamentales de la izquierda chilena: el comunista y el socialista.

La estrategia del PC, a diferencia de la del PS, había sido siempre clara y definida en torno del consenso partidario sobre la solución de tipo unidad popular. La tesis de la "vía pacífica", sostenida en el X Congreso de 1957 y ratificada después del fracaso electoral del FRP, en 1964, reapareció en el XIII Congreso partidario (1965) y fue desarrollada en torno al concepto de "gobierno popular". Por otra parte, los escritos del secretario general, Luis Corvalán, la desarrollan con extensión.[1]

En 1956 Corvalán afirmaba: "Ciertamente, no es fácil que el pueblo gane las elecciones en nuestro país. Pero los hechos indican que ha sido capaz de ganarlas una vez y que las podrá ganar con menos dificultades en el futuro, en la medida en que se fortalezca y desarrolle todavía más el movimiento popular y éste pueda imponer nuevas y más profundas ampliaciones a sus derechos políticos y electorales.[2]

[1] Véase Corvalán, Luis, *Camino de Victoria*, Santiago, Impresora Horizonte Ltda., 1971.

[2] Corvalán, L., *Camino de..., op. cit.*, p. 30.

En 1963 el secretario general del PC señalaba como elemento central de la vía pacífica la movilización de las masas: "Las elecciones pueden dar buenos frutos si forman parte del proceso, si los diversos frentes de combate se fusionan en un todo y se crean así las condiciones para que, en un momento dado, se vacíe y exprese a través de ellas el torrente de la marea popular." [3] Y agregaba: "...en el curso del proceso revolucionario puede resultar conveniente pasar de una a otra vía (vía pacífica versus vía armada)." [4]

La estrategia del PC se fundaba en la singularidad del modelo político chileno: coexistencia de instituciones democrático-burguesas y de un movimiento obrero que pese a las escisiones, los reflujos, las rivalidades surgidas en el curso de su historia, mantuvo su identidad propia.

El PS, a diferencia del PC, estuvo caracterizado por la vacilación permanente en torno de su línea política. La presencia de una lucha ideológica constante en su seno, fruto de una organización débil y propicia para el caudillismo, explica esas vacilaciones. Como observa Jovet,[5] el PS "surgió de la entraña del pueblo como un instrumento de sus ansias de liberación... Así canalizó su acción y su fe hacia un objetivo claro: la agrupación de todos los trabajadores manuales e intelectuales (obreros, campesinos, artesanos y pequeños industriales, mujeres), para destruir el latifundio y la penetración imperialista, a fin de dar vida a una democracia revolucionaria en tránsito seguro hacia el socialismo". Su composición reflejó más que una alianza entre obreros y la pequeña burguesía, la unión de las categorías populares en crisis que luchaban por la participación económica y política en un sistema flexible y relativamente abierto. De allí que su lucha política estuviera caracterizada por el predominio de formas populistas revolucionarias como respuesta a la crisis durante la década de 1930. Su participación en el Frente Popular de 1938 se tradujo en fuertes escisiones internas. La oscilación entre una línea reformista y una línea populista revolucionaria marcó el debate a partir de entonces. En 1948, cuando González Videla comenzó la persecución de los partidos de izquierda, el PS se escindió: una fracción mayoritaria (el Partido Socialista Popular, dirigido por Raúl Ampuero y Aniceto Rodríguez) que en 1952 apoyó la candidatura de Ibáñez y estimó al ibañismo "como la única salida democrática para la honda crisis nacional" [6] y una minoritaria, el Partido Socialista de Chile (Salvador Allende y José Tohá).

[3] *Ibidem*, p. 54.
[4] *Ibidem*, p. 60.
[5] Jovet, J. C., *El Partido Socialista de Chile*, Ed. Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971, dos tomos, tomo I, p. 40.
[6] Jovet, J. C., *El Partido...*, *op. cit.*, tomo I, p. 56. El PS levantó la candida-

El fracaso del intento populista de Ibáñez y el retiro del PSP del gobierno en 1955 marcaron su viraje hacia el FRAP. La fusión de las dos fracciones socialistas se concretó en el Congreso de Unificación, en julio de 1957.

A partir de entonces, el debate interno estuvo marcado por la lucha entre dos líneas políticas: el "frente de trabajadores" y "la unidad popular". En el XVIII Congreso ordinario, celebrado en Valparaíso en octubre de 1959, el diagnóstico concluía que "la restructuración e independencia económicas solamente podrán modificar su crítica situación y abrir un proceso de cambio, en el cual la recuperación de las riquezas nacionales y el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, por medio de la nacionalización, la reforma agraria, y una industrialización adecuada, de las reformas tributaria, educacional, previsional dentro de un plan revolucionario integral de desarrollo, transforme completamente el contenido de la actual democracia fraudulenta para dar vigencia a una real democracia económica, social y política.[7] En el FRAP, comunistas y socialistas coincidieron en torno a un programa de democratización económica y social de las bases de poder bajo el predominio de la ideología del frente popular desarrollista de 1938.

En el XXI Congreso celebrado en Linares en junio de 1965 el partido adoptó la política del frente de trabajadores. Se sostuvo la necesidad de que el FRAP se constituyera como expresión de esa línea y se atribuyó el fracaso de 1964 a "la no conducción de una lucha social hacia un enfrentamiento decisivo de clases y su orientación exclusiva por la vía electoral, presentando este camino como una etapa de la revolución chilena, dejó a ésta sin salida momentáneamente, provocando un cambio en el estado anímico y en el sentido del movimiento de masas: su reflujo político".[8] En las tesis se sostuvo: "Nuestra estrategia descarta el hecho de la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder. ¿Significa esto abandonar las elecciones y propiciar el abstencionismo por principio? [...] Un partido revolucionario, que realmente es tal, le dará un sentido y un carácter revolucionario a todos sus pasos [...] y utilizará para estos fines todos los medios que permitan movilizar a las masas." [9]

Las posiciones del Congreso de Linares fueron ratificadas en el XXII Congreso ordinario celebrado en Chillán en noviembre de 1967. El Congreso tenía lugar en el contexto de las resoluciones de la

tura de Allende ese año con el apoyo de los comunistas y otras agrupaciones menores.

[7] *Ibidem*, tomo II, pp. 82-83.

[8] *Ibidem*, tomo II, p. 107.

[9] *Ibidem*, tomo II, p. 111.

Conferencia Tricontinental de La Habana (1967) y la creación de la OLAS, de la que Salvador Allende fue miembro. En sus tesis afirmaba: "La incorporación del Partido Radical al frente político que hasta ahora dirige el Frente de Acción Popular, lejos de fortalecer a la izquierda, la debilita extraordinariamente, engendrando y robusteciendo en ella toda suerte de ilusiones electoralistas que la experiencia ha demostrado ser absolutamente inconducentes para desencadenar un proceso revolucionario dirigido a la toma del poder..." [10]

La política del frente de trabajadores y la posición con respecto a la vía a seguir quedaban contenidas en la política de la OLAS: "En las actuales condiciones chilenas y latinoamericanas, el FRAP debe adecuarse en sus objetivos y organización a la línea general de la política de la OLAS, y debe de estar destinado a convertirse en el Frente Político que una a todas las fuerzas antimperialistas revolucionarias que luchan consecuentemente por la revolución socialista." [11] "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima..." "Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada." [12]

Para el PS, el conflicto nación-imperialismo constituía el tema principal, la piedra de toque del movimiento político. El bloque de fuerzas antimperialistas abarcaba todas las categorías sociales excluidas de la vida social: los pobres de la ciudad y del campo. El "pueblo" quedaba definido no sólo por la explotación, sino también por la exclusión (los sin casa, habitantes de las poblaciones y los campamentos en Santiago, los desocupados, los campesinos pobres, etc.). Como observa Touraine, "el partido socialista chileno es el ejemplo extremo de una formación política muy importante, en la que el contenido ideológico o doctrinal, el humor político, podría decirse, es más central que una línea de acción política, la cual, sin embargo, está mejor definida que la base de clase del partido".[13]

En efecto, la línea política fue vacilante y, como observa Jovet, "...pese a todas las declaraciones verbales revolucionarias, la política del PS experimentó en la acción práctica una modificación opuesta a las resoluciones del Congreso de Chillán y a la posición táctica del FRAP.

[10] *Ibidem*, tomo II, pp. 128-129.
[11] *Ibidem*, p. 132.
[12] *Ibidem*, p. 130.
[13] Touraine, Alain, "Les classes sociales dans une société dependente. La société latinoamericaine", en *Tiers Monde*, t. XVI, núm. 62, abril-junio 75, pp. 235-256, p. 255.

Poco a poco aceptó la línea defendida por el PC en orden a "agrupar las más amplias fuerzas antimperialistas y antioligárquicas, en una alianza de partidos marxistas y no marxistas".[14]

El pleno nacional del partido, en 1969, definió el frente revolucionario como aquel en el que "...tienen cabida todos los partidos, organizaciones y personas abiertamente comprometidos en la lucha antiimperialista y que estén por la sustitución del régimen capitalista por una sociedad socialista".[15]

El distanciamiento entre el análisis político-doctrinario y la acción siguió caracterizando el comportamiento del PS durante los años del gobierno popular. Los planteamientos del Congreso de La Serena, en enero de 1971, enfatizaron las limitaciones de la institucionalidad burguesa y la necesidad de construir la base de una nueva estructura política que culminara en la Asamblea del Pueblo.[16] Pero, como observa Debray,[17] las cualidades de organización, de movilización de masas y de disciplina consecuente del PS, no aparecían a la altura de la propia conciencia política de sus militantes ni de las responsabilidades objetivas de sus dirigentes en la conducción revolucionaria.

El PS, más que ningún otro partido de la UP, se debatió entre dos tareas: la tarea de dirección política y la de gestión administrativa. La impugnación y la gestión del gobierno se confundieron en su acción. Por eso cabe la pregunta que se hace Touraine: "¿Qué hay de más chileno que el partido socialista? ¿Su atracción por la violencia puede separarse de su participación en el juego político abierto?" [18] Esta característica central del PS tradujo el predominio de los aspectos ideológico-doctrinarios en la determinación de las formas de acción. Por eso, la acción revolucionaria apareció más como una acción "expresiva" que como una acción instrumental, como observa Touraine.[19]

Si me he detenido en este análisis de la posición del PS es porque me parece de importancia central para comprender las formas que revistió la lucha política de clases durante el gobierno popular. La UP era más que un frente político, pero menos que un partido. Su vínculo articulador era un programa de gobierno y la ascendencia personal y moral del presidente. Pero sus componentes reflejaban diferentes tendencias y orientaciones presentes en la sociedad chilena. El desafío era lograr,

[14] Jovet, J. C., *El Partido Socialista..., op. cit.*, tomo II, p. 153.
[15] *Ibidem*, tomo II, p. 151.
[16] *Ibidem*, tomo II, p. 176.
[17] Debray, Régis, *Conversaciones con Allende*, México, Siglo XXI, 5ª edición, 1973, p. 50.
[18] Touraine, A., *Vie et mort..., op. cit.*, p. 30.
[19] *Ibidem*, p. 62.

a partir de esas condiciones, un principio de unificación del campo popular. La conquista del poder (el Estado) requería una comprensión exacta de su sentido integral: "dictadura más hegemonía", en términos de Gramsci.

A posteriori, es fácil explicar el fracaso de la conducción política de la UP por el predominio de una línea reformista en su seno (el PC y Allende). Pero esta afirmación, como se señaló en la introducción a este tema, nos parece engañosa. Los sectores revolucionarios del PS, bajo la conducción del secretario general Carlos Altamirano, eran minoritarios. Pero su carácter minoritario no puede ser desvinculado de la naturaleza y las formas de acción del partido.

Mientras que el PC centró su estrategia en la destrucción del poder económico de la burguesía, nacional y extranjera, el PS, junto con los partidos del ala izquierda de la UP, concentró su acción en la construcción del poder popular. El primero pugnó por la ampliación de las bases sociales de apoyo de la UP (política de alianzas con los sectores medios, la pequeña y mediana burguesía), el segundo, por el fortalecimiento de los órganos de poder popular.

Si la estrategia del primero, a juzgar por las tácticas seguidas especialmente a partir del segundo año de gobierno (la política económica denominada "Millas-Matus"), puede ser calificada de economicista, la estrategia del PS adoleció, a mi juicio, de un error inverso y complementario del primero: el subjetivismo voluntarista.

Del cruce de estos dos "errores" políticos resultó el fracaso de la UP. En el pasaje de una política de reformas a una concepción reformista del proceso, el subjetivismo acerca del poder popular también fue una condición favorable. La dialéctica entre reformismo y revolución no pudo ser desarrollada por ninguno de los dos partidos fundamentales de la UP. Los "errores" de cada uno se complementaban sin poder ser superados. Ninguno de los dos partidos pudo "ver" el problema del Estado en su sentido integral. El izquierdismo del PS fue la contrapartida del reformismo del PC y viceversa.

Pero esta "ceguera" del PC y del PS no fue el resultado del azar. Por el contrario, era el fruto de los dilemas que habían caracterizado a las dos formaciones políticas a lo largo de su historia. Y esa historia se había inscrito en las coordenadas específicas del modelo político chileno.

Por eso, carece de sentido afirmar que si la estrategia del PS hubiera sido la dominante, el curso de los acontecimientos habría sido muy diferente. Es posible, pero la historia no se hace con "condicionales contrafácticos".

La constitución de la UP [20] y la posterior proclamación de Salvador Allende como candidato único de la izquierda "fue el resultado de un trabajo de relojería de un grupo de dirigentes y políticos que supieron interpretar en forma hábil y oportuna un singular momento que vivía el país".[21]

El programa básico de gobierno de la Unidad Popular fue aprobado por sus integrantes en diciembre de 1969. La tarea del gobierno del pueblo quedaba definida como una tarea antimperialista, antimonopólica y antioligárquica, destinada a iniciar la construcción del socialismo en Chile. La especificidad de esta estrategia descansaba en la transición "democrática, libertaria y pluralista al socialismo". Como lo afirmó Allende en su primer discurso presidencial (21 de mayo de 1971): "Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista [...] Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas —particularmente al humanismo marxista— y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno." [22] La "vía chilena" al socialismo definía una lucha "en la cual lo que estaba en juego era el mantenimiento de un sistema 'abierto' de transformación social". Se trataba de transformar el carácter de clase del Estado sin su previa destrucción. Allende fundamentó la estrategia en su primer discurso político (5 de noviembre de 1970). Su argumentación se basaba en un texto de Engels: "Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde, de acuerdo con la

[20] La Unidad Popular se constituyó como coalición de los partidos: comunista, socialista, radical, social demócrata, MAPU y Acción Popular Independiente (API). El partido social demócrata se fundó en julio de 1966 como consecuencia de la ruptura con la DC del diputado Patricio Hurtado. Éste fusionó a un sector de la DC, el Movimiento de Rebeldía Nacional (MORENA) con un grupo del Partido Democrático Nacional dirigido por el senador Luis F. Luengo. El API, organizado por el senador Rafael Tarud, se constituyó en 1969, apoyando la política de la UP. El Partido Radical había expulsado en 1969 al ala derechista del senador Durán y sus seguidores, y reiterado el carácter socialista del partido.

[21] Véase Labarca, Eduardo, *Chile al rojo*, México, Juan Pablos Ed., 1971, p. 209.

[22] Salvador Allende, "La vía chilena al socialismo", en Jovet, J. C. y Chelén, R. A., *Pensamiento teórico y político del Partido Socialista Chileno*, Santiago, Quimantú, 1972, pp. 489-519, pp. 491 y 495.

Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene tras sí a la mayoría de la nación." [23]

i] *El poder popular*

El programa [24] señala: "Las transformaciones básicas que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente." Más adelante se agrega: "...las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores *serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder.*" [25] Esta línea de movilización estaba destinada a impulsar el desarrollo de las organizaciones sindicales y poblacionales cuya existencia ya estaba consolidada antes del acceso al gobierno de la UP.

La otra línea de movilización enunciada en el programa tiene un carácter más definidamente político: los Comités de la Unidad Popular (CUP). Al respecto, el programa señala: "Para estimular y orientar la movilización del pueblo hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de la izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por los cambios fundamentales [...] Los Comités de la Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.

"Así, pues, este nuevo poder *que Chile necesita* debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.

"Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles." [26]

[23] *Ibidem,* pp. 492-493.

[24] *Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular,* Santiago, Plá, 1971. Subtítulo: El poder popular.

[25] *Ibidem;* subtítulo: La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores. El subrayado es mío.

[26] *Ibidem.*

Los CUP quedaban definidos como el cauce más adecuado para el ejercicio del poder popular. A través de ellos, se articularía la acción política de las masas con la dirección del proceso político-institucional.[27] Concebidos como instrumentos de dirección política permanente, no se restringían a los militantes de la UP. Sin embargo, la importancia que alcanzaron durante la campaña presidencial se fue extinguiendo lentamente, como señala Debray y el mismo Allende reconoce.[28]

ii] *El Estado popular*

El programa promueve un proceso de reformas democráticas y la movilización y organización del poder popular para construir, desde la base, la nueva estructura de poder. Plantea la génesis de una "nueva constitución política que institucionalice la incorporación masiva del pueblo al poder".[29]

La democratización resulta del pasaje de una autoridad efectiva en la toma de decisiones a las organizaciones populares dentro del contexto de las nuevas instituciones políticas.

iii] *La defensa nacional*

El Estado popular "definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios" (se enumeran varios puntos).[30]

Se rechaza cualquier empleo de las fuerzas armadas para reprimir al pueblo y se afirma la necesidad de posibilitar la contribución de éstas al desarrollo económico del país.

iv] *La construcción de la nueva economía*

Este apartado se inicia con la afirmación de que "las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política remplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo".

27 Véase Debray, R., *Conversaciones con..., op. cit.*, p. 91.
28 *Ibidem.*
29 *Programa Básico*, subtítulo: El nuevo orden institucional: el Estado popular.
30 *Ibidem*, subtítulo: Defensa nacional.

La prioridad central del programa reside en la construcción del Área de Propiedad Social (APS). "El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropien..." El sector quedará integrado por: 1] la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2] el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; 3] el comercio exterior; 4] los monopolios industriales estratégicos; 5] las grandes firmas de distribución y monopolios; 6] en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país... [31]

En cuanto al área privada de la economía (APP), el programa señala la explotación a la que los sectores de la pequeña y mediana industria estaban sujetos por la existencia de los monopolios y asegura el beneficio que éstos recibirán de la política del Estado. También se refiere a la existencia de un área mixta compuesta de empresas que combinen capitales del Estado y particulares. Con respecto a la reforma agraria, se puntualiza la necesidad de su extensión y profundización. Finalmente, el programa enumera los ítems de la política de desarrollo económico.

Por último, el apartado referido a las "tareas sociales" señala: "Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; salario suficiente; que terminen de una vez las alzas de los precios; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares." [32]

El gobierno popular se proponía demostrar algo bien poco usual: la revolución significa mejoras materiales inmediatas y no sólo futuras tanto para los trabajadores organizados como para las masas de desposeídos (los sin casa, los cesantes, etc.). La mayoría de las medidas destinadas a lograr una elevación sustancial del consumo básico se habrían de poner en práctica durante los primeros meses de gobierno (la etapa de la denominada "política Vuskovic"). Como observa Petras,[33] aunque no eran medidas revolucionarias, su sentido descansaba en el

[31] *Ibidem.* Apartado: La construcción de la nueva economía.
[32] *Ibidem.* Apartado: Tareas sociales.
[33] Petras, James, "Transition to socialism in Chile", *Monthly Review,* núm. 5, 1971, p. 45.

fortalecimiento de la base de apoyo social del gobierno. Vuskovic señala que para comprender el programa económico de la UP es necesario tener en cuenta que "en el caso particular de Chile, donde las fuerzas acceden a una esfera parcial del poder político —el ejecutivo— y a partir de una mayoría electoral relativa, quedaban planteadas a la política económica dos tareas simultáneas y que requerían una cuidadosa conciliación: la de ofrecer a corto plazo resultados positivos, principalmente en términos de superación de los problemas que se heredaban y de mejoramientos rápidos en los niveles de vida material de los trabajadores, de modo que contribuyeran a una ampliación de la base política del gobierno y lo habilitaran, por lo tanto, para emprender las transformaciones económicas de fondo, haciéndose cargo en su campo de las realizaciones programáticas y debilitando la base de sustentación económica de sus enemigos".[34]

Como resulta claro de la lectura del programa básico de gobierno, la dinámica de las transformaciones estaba localizada en la gestión del gobierno, en su diseño ideológico, en sus iniciativas concretas. El poder social revolucionario de la UP debía quedar articulado a su poder político institucional.

c] LAS CONDICIONES PARA LA "VÍA CHILENA AL SOCIALISMO"

En los trabajos del consejero político de Allende, Joan Garcés, se encuentra la fundamentación teórica de la estrategia seguida por la UP. En particular, "Vía insurreccional y vía política: dos tácticas" [35] presenta las premisas básicas y por eso nos detendremos en su examen.

i] *La preeminencia del aparato de gobierno:* el carácter presidencial del régimen político chileno, desde 1925, otorgaba al ejecutivo una amplia gama de facultades. Durante el gobierno demócrata cristiano, estas facultades habían sido reforzadas.[36] De este modo, el control del

[34] Vuskovic, Pedro, *Política económica y poder político,* notas sobre la experiencia del Gobierno Popular en Chile, ponencia presentada al Seminario sobre Teoría del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, noviembre de 1974, mimeo., p. 5.

[35] Garcés, Joan, "Vía insurreccional y vía pacífica: dos tácticas", en *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende,* Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 225-227.

[36] Véase Novoa M., Eduardo, "El difícil camino de la legalidad", en *Revista de la* UTE, Santiago, núm. 7, 1972, p. 10.

ejecutivo desempeñaba un papel estratégico para lograr el control total del poder político.

ii] *La legalidad existente:* La existencia de normas con definida orientación progresista favorecían, en una primera etapa, el cumplimiento del programa. La legalidad burguesa podía volverse en contra de la burguesía. Garcés argumenta que el "contenido" de las normas jurídicas depende de la correlación de fuerzas políticas. Si ésta varía, ese contenido también variará pese a la continuidad de la forma. La consecuente contradicción entre contenido y forma de la legalidad se resuelve con la movilización y organización del poder popular, articulado con la perspectiva táctica del gobierno.[37]

iii] *La continuidad constitucional:* "La fortaleza de la institucionalidad vigente está favoreciendo a los representantes de los trabajadores [38] [...] La historia chilena no conoce el derrumbe del aparato estatal como paso de una etapa a otra etapa [39] [...] La institucionalidad política no [es] refractaria en su esencia a la expresión y realizaciones de las fuerzas sociales revolucionarias." [40]

La resistencia y flexibilidad del sistema jurídico-político, en el contexto de un país de tradición liberal dominante (incluido el movimiento obrero), legitimarían el uso del poder político del Estado para acabar con las bases de sustentación de la burguesía. En síntesis, la estrategia de transición "democrática libertaria y pluralista al socialismo" presuponía la continuidad del modelo político chileno. Pero la propensión al compromiso requería —y Allende y sus consejeros lo sabían— consolidar el poder de las fuerzas populares antes de que el centro político desapareciera (la DC) como tal de la escena política chilena.[41] El reformismo burgués de la DC había roto las bases del compromiso social tácito que había hecho del sistema político chileno un sistema excepcionalmente estable. En esas condiciones, gobernar difícilmente podía seguir siendo negociar. En última instancia, la opción de la UP dependía de las opciones de la burguesía.

En la medida en que la UP no se hizo cargo de la ruptura del modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena, su apuesta

[37] Garcés, J., *El Estado y..., op. cit.*, pp. 266-274.
[38] *Ibidem*, p. 90.
[39] *Ibidem*, p. 96.
[40] *Ibidem*, p. 97.
[41] Garcés, Joan, *Chile: el camino político hacia el socialismo*, Barcelona, Ed. Ariel, 1972, p. 77.

quedó en las manos de la burguesía. Como veremos, la UP fracasó en su empresa de articular orgánicamente el campo de sus aliados, mientras que el campo de sus enemigos pudo constituirse rápidamente. La dinámica de la lucha de clases desatada por la puesta en marcha del programa de transformaciones desbordó la capacidad de control de los propios actores de la UP. La sociedad quedó a la deriva.

d] EL TRIUNFO ELECTORAL DE LA UP Y EL ACCESO AL GOBIERNO

El 4 de septiembre de 1970, por un estrecho margen de votos, la UP triunfó en las elecciones. Como observa Müller,[42] Allende apenas superó en 1970 la votación que en 1969 habían logrado los grupos que luego se unieron para constituir la UP (casi un tercio del electorado). En las zonas rurales perdió votos. La batalla electoral se había jugado entre tres partidos (la oposición dividida), favoreciendo así la victoria de la UP.[43] Un triunfo precario y sorpresivo abría el camino a un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad.

La etapa que se extiende entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre de 1970, fecha en que Salvador Allende asumió la presidencia de la república, fue un período de gran conmoción social. La contrarrevolución nacional y extranjera movilizó todos los recursos para arrebatarle el triunfo al candidato de la UP.[44] La ofensiva se desplegó en el sabotaje económico, el pánico financiero organizado, el terrorismo, el asesinato individual, maniobras y negociación política, asesinato selectivo y preparación del golpe de Estado. El asesinato del comandante en jefe del ejército, el general Schneider, dos días antes de la ratificación de los resultados electorales por el Congreso, puso de manifiesto hasta qué punto estaban operando las fuerzas contrarrevolucionarias. Como lo afirmaba Allende: "Desde el 4 de septiembre, día en que fui elegido presidente, hasta el 3 de noviembre de 1970, fecha en que tomé el mando, yo no fui un hombre que se preparaba para tomar el

[42] Müller, U., "La voz de las cifras: un análisis de las elecciones en Chile entre 1957 y 1971", en CEREN, Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 14, octubre de 1972, pp. 152-174.

[43] Para un análisis de las condiciones que determinaron el fraccionamiento político de la burguesía, véase la segunda parte de este trabajo, capítulo III, en especial apartado d.

[44] Sobre la intervención norteamericana, la publicación de los Documentos Secretos de la ITT no deja lugar a dudas. Véase *Documentos secretos de la* ITT, Santiago, Ed. Quimantú, 1972.

gobierno, fui prácticamente un Director de Investigaciones." [45] La prensa de la derecha *(El Mercurio)* desató una campaña de terror creando la imagen de un caos y de un futuro incierto.

La maniobra política denominada "plan Alessandri" (elección de la segunda mayoría relativa y posterior llamado a elecciones que aseguraría el triunfo al candidato de la DC, Eduardo Frei) fracasó. Como observa Claudio Orrego, ideólogo de la DC, esa opción hubiera enajenado más de un tercio del electorado a la vía liberal-democrática, volcándolo a la rebelión.[46] La DC era el árbitro político de la situación; su apoyo a Allende quedó condicionado a la aprobación de un "estatuto de garantías constitucionales" que "asegurara la supervivencia del régimen democrático". Entre las medidas que se fijaban en dicho estatuto, figuraba la de inamovilidad de la función pública que —como se verá— desempeñó un papel central en el bloqueo interno al gobierno. La UP firmó este compromiso táctico que algunos calificaron de inútil y peligroso (MIR, sectores del PS).[47]

De este modo, el acceso de Allende al gobierno quedó condicionado a la fuerza de la institucionalidad vigente. La nueva voluntad revolucionaria se instalaba en la crisis de la vieja sociedad pero se alimentaba de la vigencia de un pasado. Más aún, en los vínculos con ese pasado debía fundar la legitimidad de su proyecto social.

[45] Debray, R., *Conversaciones con..., op. cit.*, p. 85.
[46] *Punto Final*, Santiago, núm. 161, 1972, p. 23.
[47] Allende fue ratificado por el Congreso con 271 votos a favor y 191 en su contra.

CAPÍTULO II

LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: LA PRIMERA ETAPA (DESDE EL ACCESO A LA PRESIDENCIA HASTA MEDIADOS DE 1972)

a] GANAR LA BATALLA DE LA PRODUCCIÓN

La expansión económica acelerada e ininterrumpida constituía el motor de la estrategia de la UP. Como Allende mismo lo afirmara: "Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva, que sólo genera un crecimiento deformado." [1]

La política económica de esta primera etapa, denominada "política Vuskovic", tenía que combinar —como el mismo ministro de Economía lo señalaba— los objetivos de corto plazo con las realizaciones programáticas de mayor alcance. Esto es, tenía que dar respuesta a las necesidades cotidianas de las clases populares y producir los cambios estructurales necesarios para debilitar el poder económico de la burguesía monopólica, nacional y extranjera. La estrategia económica seguida por Vuskovic puede resumirse en las siguientes premisas: i] la necesidad de tener en cuenta la variable política, es decir, la correlación de fuerzas existentes en la sociedad chilena; ii] la necesidad de modificar esa correlación de fuerzas en un sentido favorable a la UP y iii] la afirmación de que las medidas de reforma en el corto plazo debían conciliarse con los objetivos de transformación de la sociedad.[2]

De este modo, la política económica del gobierno popular tenía que probar que a través de ella se maximizaban las aspiraciones del trabajo, al mismo tiempo que convertirse en un instrumento decisivo para debilitar el poder económico burgués.

[1] Allende, S., "La vía chilena al socialismo", en Jovet y Chelén, *Pensamiento teórico..., op. cit.*, pp. 492-493.

[2] Vuskovic, Pedro, "La experiencia chilena: problemas económicos", en *Transición al socialismo y experiencia chilena*, CEREN, —CESO— Plá, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1972, pp. 101-102.

i] *Los éxitos iniciales*

Durante el primer año de gobierno, la UP resolvió con éxito las metas fijadas en el programa de gobierno. Había recibido la economía del país en un estado de depresión aguda, resultante de la crisis estructural por la que atravesaba el país e intensificada —como observa López— [3] por una aguda crisis de realización en los meses de abril y mayo de 1970. Por otra parte, la crisis coyuntural que resultó del momento político —el triunfo electoral de la UP— había agudizado la tendencia depresiva que venía experimentando la economía chilena desde largo tiempo atrás.

En esta situación, el gobierno puso en marcha una política de reactivación económica dirigida a lograr un fuerte aumento de la demanda a través de los reajustes salariales y el gasto público deficitario. La producción se incrementó a través del uso de la capacidad instalada ociosa y de los stocks acumulados. Se amplió considerablemente la capacidad de absorción de fuerza de trabajo desocupada y se aplicaron medidas tendientes a disminuir la tasa de aumento de los precios. Los resultados de esta política de corto plazo fueron evaluados como satisfactorios, e incluso espectaculares, por los analistas de la economía chilena. El producto bruto interno creció en un 8.3% (superando en casi 2.5 veces la tasa de crecimiento del año 1970); la producción industrial se incrementó en un 14% durante 1971; la participación de los asalariados en el ingreso total pasó de un 53.7% en 1970 a un 59% en 1971 (entre julio de 1970 y julio de 1971 los salarios subieron en un 55%, mientras que los precios lo hicieron en un 9%), la tasa de inflación disminuyó desde aproximadamente un 35% en 1970 a poco más del 20% en 1971; la tasa de desocupación descendió y en el caso del Gran Santiago pasó de una cifra superior al 8% en el momento de llegar al gobierno la UP a un 4% a fines de 1971.[4]

En el marco del poder político de reactivación de la economía se llevaron a cabo las realizaciones del primer año de gobierno: la nacionalización de las riquezas básicas (cobre, salitre, carbón) y la estatización e intervención en los sectores de base y monopólicos. En el sector financiero se alcanzó prácticamente el control estatal de la banca pri-

[3] López, Julio, "La estrategia económica del Gobierno de la Unidad Popular", en CEREN, Santiago, Univ. Católica de Chile, núm. 9, septiembre de 1971, pp. 69-86, pp. 69-70.

[4] Véase P. Vuskovic, "La política económica del gobierno de la Unidad Popular", en *La vía chilena al socialismo*, México, Siglo XXI, pp. 43-54. También ODEPLAN: Informe Económico Anual, 1971, Santiago, 1971 y León Arturo y Reca, Inés, *La distribución del ingreso*, Santiago, Proelce (ELAS-CELADE), mimeo., 1973.

vada. En el campo se avanzó rápidamente hasta casi erradicar el latifundio (definido por la Ley de Reforma Agraria como las unidades superiores a 80 hectáreas de riego básico).[5]

En el plano político, el éxito de la primera fase de aplicación del programa se tradujo en los resultados electorales. En las elecciones municipales de abril de 1971, la UP aumentó sus votos en más de un 13%: obtuvo el 50.86% de los votos. Cabe preguntarse por el significado político del resultado electoral.

En la sociedad chilena, las elecciones (municipales o parlamentarias) que suceden inmediatamente a la presidencial, muestran una tendencia a consolidar los resultados obtenidos en la elección presidencial.[6] La comparación de los resultados electorales de 1970 y 1971 indica que una parte de los electores de Alessandri y una parte de los de Tomic tienen que haber votado por partidos de la UP. Entre estos últimos, el Partido Socialista es el que muestra un mayor crecimiento.

Este aumento del apoyo electoral a la UP no puede ser desvinculado del éxito inicial en el cumplimiento de las medidas programáticas. Sin embargo, y como observa Müller, la estabilidad de ese apoyo dependería de la eventualidad de que el proceso de mejoras experimentado no se viera estancado o dificultado. En todo caso, no puede ser interpretado sin más como un apoyo irreversible. Por otra parte, el análisis —comuna por comuna— de los resultados electorales de 1971, muestra que la mayoría de los votos adicionales de la UP provinieron de las capas más pobres del subproletariado de la ciudad y del campo.[7]

Este hallazgo es congruente con los resultados obtenidos por los diferentes partidos de la UP. En efecto, el Partido Socialista fue el que más incrementó su votación en 1971. Al mismo tiempo, era el partido que

[5] La compra de acciones bancarias se inició a fines de diciembre de 1970 y el 6 de enero se intervinieron varios bancos. El 2 de diciembre de ese año pasó a control del Estado la empresa textil Bellavista Tomé; el 27 de enero, Lanera Austral; el 11 de marzo Fiap Tomé; el 26 de marzo Fabrilana (sobre los obreros del sector textil volveremos cuando se consideren los aspectos de la movilización social ya que éste es un sector con características muy particulares). El Estado adquirió el control de la Compañía Acero del Pacífico y de la Cía. Carbonífera de Lota e intervino las fábricas de cemento. El 24 de mayo de 1971 se contabilizaron 876 fundos expropiados por la UP. Continuaron las requisas de empresas textiles. El 29 de mayo se anunció la nacionalización del salitre. El 11 de julio Allende firmó la reforma constitucional aprobada por el Congreso para nacionalizar el cobre. La velocidad en la aplicación de estas medidas abrió un proceso revolucionario de profundas transformaciones.

[6] Véase Müller, U., "La voz de las cifras...", *op. cit.* Esta tendencia es observada por el autor a partir de las elecciones de 1957.

[7] Para una fundamentación de esta afirmación, véase Müller, U., *Características fundamentales y resultados de la política de alianzas de la izquierda chilena entre 1970 y 1973*, mimeo., 1974.

mejor expresaba las tendencias populistas revolucionarias en la sociedad chilena. De allí su mayor eco entre los sectores desposeídos a los que la política del gobierno popular había favorecido particularmente durante los seis primeros meses de gobierno (la política redistributiva del ingreso y de disminución de la cesantía).

Durante esta primera etapa, dominada por la política económica "Vuskovic", la consigna de movilización popular fue "ganar la batalla de la producción". El poder político del gobierno estaba indisolublemente ligado con su éxito económico en el corto plazo. Sin embargo esta consigna no pudo convertirse en un principio de unificación de la acción revolucionaria de las masas. En efecto, ¿cuáles debían ser las prácticas políticas concretas de los trabajadores en una situación definida por la presencia de un gobierno que representaba sus intereses? La respuesta se manifestaba tanto en acciones reivindicativas como en acciones espontaneístas que desbordaban la estrategia del gobierno. Los resultados exitosos de la política económica suponían una articulación estrecha entre la gestión del gobierno y la movilización social en su apoyo, lo que significaba disciplina y organización de los trabajadores. Al mismo tiempo que el efecto político de las medidas de corte populista revolucionario aumentaba la base de apoyo social de la UP, este aumento provenía de las masas desposeídas que pugnaban por ser tenidas en cuenta pero cuya característica básica era la desorganización.

De este modo, y como lo señala Vuskovic,[8] los objetivos económicos de corto plazo (la mejora en el nivel de vida de las clases populares) y las transformaciones económicas más profundas se adelantaron con respecto a la situación política. El desfasaje consiguiente en los avances económicos de un lado y los avances políticos generales del otro, enfrentaba cada vez más a la política económica con las limitaciones del aparato institucional heredado.

La consigna de "ganar la batalla de la producción" no definía en la práctica las alternativas de acción para la clase obrera; tampoco podía articular a los sectores desorganizados caracterizados por una inserción inestable o reciente en la estructura productiva. En efecto, ante la contundencia de las realizaciones del gobierno en esta primera etapa —el período Vuskovic— ¿cuál podía ser la convocatoria de una ortodoxia de principios que, en nombre de los intereses de las masas trabajadoras, colocaba a las organizaciones más tradicionales —los sindicatos— y a las nuevas organizaciones —comités de vigilancia de la producción, organizaciones de control de abastecimientos y precios, etc.— en una ambigua posición política (les impedía participar efectiva-

[8] Vuskovic, P., *Política económica y poder..., op. cit.*, p. 7.

mente en su condición de intermediarias entre sus propias bases y el gobierno).

Ante la toma de una fábrica o de un fundo, en vano podía argumentar el dirigente sindical —cuando lo hacía— que la subordinación a la política del gobierno habría de conducir a un futuro Estado popular. Entonces eran más tangibles y más urgentes los beneficios que reportaba la política populista que la consigna abstracta de ganar la batalla de la producción. Y lo eran, sobre todo, para aquellos sectores sin tradición de organización que, tanto en el campo como en la ciudad, por primera vez empezaban a ser efectivamente tomados en cuenta por el gobierno. En efecto, para éstos se trataba de seguir ganando la batalla por el consumo y dejar atrás su situación de marginación. La lucha por el consumo era prioritaria; la lucha por la producción no podía serlo. Y este rezago en la conciencia política de los sectores populares, incluidos los sectores de la clase obrera, era un dato que la UP tenía que transformar. Las organizaciones de clase, tanto en el nivel corporativo como en el político de los partidos, también estaban rezagadas con respecto a las exigencias que la situación imponía y, lo que fue aún más decisivo, con respecto a la conciencia de la clase misma, como veremos. La tradición economicista del movimiento sindical y el estilo político de los partidos de izquierda, por primera vez en el control del gobierno, seguían impregnados de las formas de acción vigentes en el pasado. En el caso de los partidos esta situación se veía agravada por la dificultad de coordinar la gestión del gobierno con su papel de vanguardia política de las masas.

ii] *Los síntomas de la crisis*

Durante 1971, y pese a la velocidad en los cambios económicos, ya se manifestaban los problemas que la puesta en marcha del programa había desatado. Como vimos en el apartado anterior, la política económica de la UP se proponía coordinar los objetivos de corto plazo (mejora del nivel de vida de los trabajadores) con los objetivos de mayor alcance, la transformación de las relaciones sociales de producción de la sociedad chilena. De este modo, la constitución del área de propiedad social (APS) era un aspecto central de su política económica. La incorporación en esta área de la mayor parte de los recursos naturales, el sistema bancario, la gran parte del comercio exterior, los monopolios industriales y de la distribución, formaba parte del objetivo de destrucción del carácter imperialista, monopólico y oligárquico de la sociedad chilena. Pero esta tarea debía pasar por la legitimación

legal. La UP comenzó a trabajar en la definición de las tres áreas de la economía y en octubre de 1971 envió un proyecto al Congreso al respecto.[9]

En tanto la constitución del APS dependía de las decisiones del Congreso (y, como veremos, el proyecto de la UP nunca fue aprobado) el avance se veía bloqueado por las fuerzas políticas de la oposición. Al mismo tiempo, la indefinición sobre las tres áreas dejaba en la incertidumbre sobre su futuro a los sectores de la mediana y pequeña burguesía, sectores a los que la UP se proponía neutralizar políticamente y conquistar en su apoyo en la medida en que su programa los hiciera beneficiarios de la planificación de la economía.

La debilidad de los mecanismos jurídicos con que contaba el gobierno popular se tradujo en la intervención de un conjunto muy dispar de actividades, lo que derivó en la dificultad de poner en marcha una planificación de la economía del país. Por otra parte, algunas transacciones entre el gobierno y empresas privadas obligaron a éste a realizar fuertes desembolsos. La reducción de la inflación descansó, fundamentalmente, en el sector estatal cuyas empresas trabajan a precios controlados. De este modo, los excedentes originados allí eran exiguos y ponían en peligro la reproducción ampliada del APS. Mientras tanto, la inversión privada había declinado drásticamente. Pese a que la reducción de la inversión privada y el consecuente crecimiento compensatorio de la inversión estatal eran fenómenos de larga data en la economía chilena la situación en 1971 tuvo consecuencias políticas decisivas para la UP. En efecto, el capital-dinero acumulado en el sector privado fluyó hacia la especulación.

En el contexto de una política de redistribución de ingresos tan fuerte como la seguida por la UP, la demanda interna superó muy pronto en su crecimiento a la oferta. El recurso de las importaciones —en el contexto de un aumento de los precios de los productos importados, especialmente de los alimentos, y de reducción del precio del cobre— vino a incrementar la situación deficitaria del gobierno. A ello se agregaba la drástica reducción de las inversiones y préstamos externos, fundamentalmente de Estados Unidos. De este modo, ya durante el segundo semestre de 1971, comenzaban a manifestarse los primeros síntomas de una crisis económica que ponía en cuestión la política populista de la izquierda.

[9] En el proyecto de la UP se consideraban expropiables por decreto aquellas empresas que tuvieran un capital superior a los 14 millones de escudos en diciembre de 1969 (aproximadamente 1 millón de dólares). El proyecto definía los procedimientos de compensación en los casos de nacionalización y los términos de tal compensación.

A comienzos de 1972, el ministro Vuskovic señalaba: "La posibilidad real de implementación de una política económica de esta naturaleza radica en la medida en que pueda efectivamente transformársela en una política de masas, con una participación muy activa de los trabajadores." [10] En efecto, como el mismo Vuskovic lo señala, en el curso de 1971, la política económica del gobierno se tradujo en una serie de medidas mucho más avanzadas y cuya significación desbordaba el nivel de aspiraciones y de conciencia de su base social. Este desfasaje hacía que la política económica de la UP fuera cada vez más vulnerable y dependiente de la institucionalidad burguesa. La burguesía local —favorecida por la ofensiva imperialista— [11] se lanzó a una acción destinada a crear las condiciones para el derrocamiento del gobierno popular. Como veremos, al bloqueo parlamentario —siempre presente— sumó una política definida de especulación y acaparamiento de productos. Por esta vía ganaba el apoyo de amplios sectores de la pequeña burguesía empresarial —particularmente de los pequeños comerciantes— beneficiarios inmediatos de la aceleración del proceso inflacionario.

A comienzos de 1972, las dificultades comenzaban a resultar críticas y la UP entraba en un proceso de revisión de su política económica. El agotamiento de la "política Vuskovic" para resolver los problemas generados por la puesta en marcha del programa era un hecho reconocido por todos. Lo que constituía el interrogante básico de la UP era cuál sería el camino a seguir a partir de entonces.

Cabe preguntarse como muchos de sus protagonistas lo hicieron si la UP debió de haber llamado a un plebiscito después de las elecciones de 1971, como era la opinión del PS. En esa coyuntura política, el plebiscito hubiera permitido legitimar las transformaciones profundas en la institucionalidad vigente que requería la dinámica del proceso. La UP no lo hizo y la política económica seguida hasta entonces quedó a merced de esa institucionalidad. De este modo, se puede concluir que a comienzos de 1971 la UP perdió una ocasión histórica. No importa precisar quiénes entre sus integrantes fueron los responsables. Lo cierto es que, como el mismo Vuskovic lo señalaba entonces, la opción política dejó sin instrumentos a la política económica.

Lo que importa destacar aquí es que el predominio de una concepción del proceso por etapas, que Allende resumiera en la expresión "apresúrate lentamente",[12] no fue el producto del azar y de una cegue-

[10] Vuskovic, P., *La política económica..., op. cit.*, p. 53.

[11] Para un análisis del comportamiento del imperialismo que, como vimos en la introducción a este trabajo, desborda sus objetivos, véase Vuskovic, P., *Política económica..., op. cit.*, en especial pp. 9-12.

[12] Debray, R., *Conversaciones con Allende, op. cit.*, p. 92.

ra voluntaria por parte de sus integrantes. La apuesta chilena contaba con que el tiempo jugaría en su favor. La realidad se encargó de probar lo contrario.

b] EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN OBRERA

Con el acceso de la UP al gobierno se produjeron cambios significativos en la organización sindical y la afiliación a la CUT. Una estimación conservadora eleva la cifra de sindicalización a más de un millón a comienzos de 1972.[13] Por otra parte, el convenio CUT-gobierno, de diciembre de 1970, otorgó el reconocimiento legal a la CUT y estableció, entre otros aspectos importantes, un sistema de cotización obligatorio y la necesidad de constituir mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas del área social y mixta.[14]

Los resultados de las elecciones del Consejo Directivo Nacional de la CUT (en mayo de 1972) mostraron el ascenso en la sindicalización —los votos alcanzaron la cifra de 560 240— así como una pauta política de claro predominio de los partidos de la izquierda. El PC obtuvo el 31% de los votos y el PS el 26%. Ambos consiguieron un total de 34 dirigentes a lo que se agregó la contribución de formaciones políticas menores. Sin embargo, resulta de especial importancia recordar que la DC obtuvo casi un tercio del electorado (26%).[15] Este dato, unido a la presencia de una heterogeneidad de orientaciones dentro del Partido Socialista, constituía una situación poco favorable para el logro de una estrategia única por parte de los trabajadores.

La elección, como observa Zapata,[16] consiguió legitimar a la CUT frente a todas las tendencias políticas en su condición de intermediaria en la comunicación establecida entre sus propias bases y el gobierno. El problema que se planteó entonces descansó en la dificultad de establecer cuál debía ser el lugar de los sindicatos en la experiencia revo-

[13] Castillo, F., Echeverría, R. y Larraín, J., "Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile", en CEREN, Universidad Católica de Chile, núm. 16, abril de 1972, p. 7.

[14] Para estos y otros aspectos incluidos en el convenio, véase Zapata, Francisco, *El movimiento obrero y el gobierno de la Unidad Popular*, México, CES, 1975, pp. 16-17.

[15] *Ibidem*, p. 26. Los resultados electorales fueron publicados en *El Mercurio*, Santiago, junio de 1972. En las provincias de Santiago y Valparaíso, la DC y el PIR sumados obtuvieron el 33.5% de los votos. Para un análisis de los resultados de las elecciones de la CUT por grupos de provincias véase *Chile hoy*, 2-8 de marzo de 1973, p. 13.

[16] Zapata, F., *El movimiento..., op. cit.*

lucionaria en curso. Esta dificultad aparece asociada a la tradición reivindicacionista de las organizaciones sindicales. En efecto, ¿cómo se habría de compatibilizar la función tradicional de los sindicatos —portavoces de los intereses del trabajador explotado en el sistema capitalista— con la dinámica de un gobierno que pugna por maximizar los intereses del trabajo? Los sindicatos pasaron a encontrarse en la difícil situación de representar los intereses de los obreros en tanto clase explotada, al tiempo que representarlos en su nuevo papel de productores en que los situaba el gobierno. Esta nueva situación generó dificultades que se veían acrecentadas por la diversidad de orientaciones de la acción de sus bases. En efecto, la fuerte heterogeneidad de las situaciones estructurales de la clase obrera, fruto del desarrollo capitalista dependiente, se tradujo en una diversidad de orientaciones de la acción de los obreros. Como señala Vuskovic, "una proporción significativa de los trabajadores encuentra ligados sus intereses objetivos inmediatos a la dinámica del consumo (incluso suntuario, no esencial) de la burguesía y las capas de altos ingresos, y por lo tanto resiente políticas que restrinjan o afecten esos consumos..." [17] El predominio de las formas de acción tradicionales de los sindicatos se puso de manifiesto durante el primer año de gobierno. En 1971, el gobierno registró más de siete mil "pliegos de peticiones". Ello implicaba en ese momento, un pliego por sindicato (incluidos los campesinos).[18]

La posibilidad de una gestión obrera, es decir, de que los obreros tuvieran poder de decisión sobre los tipos de producción, las inversiones y la distribución, enfrentaba dos dificultades básicas: por una parte, la experiencia de las luchas obreras había sido esencialmente reivindicativa; por otra, la ausencia de competencia técnica y de información adecuada hacían difícil el ejercicio de esta nueva función.

La definición de las normas de participación obrera se logró en julio de 1971.[19] Éstas fueron ratificadas por la CUT y el gobierno, al margen del Congreso. Como coinciden en señalar la mayoría de los analistas del problema, las formas de participación y poder de los trabajadores quedaban circunscritas al ámbito de cada empresa, en tanto que los niveles superiores de decisión seguían a cargo del viejo aparato administrativo. Por otra parte, en cada empresa el proceso de democratización interna encontraba dificultades: el carácter burocrático de los delegados del gobierno, que actuaron con frecuencia como nuevos

[17] Vuskovic, P., *Política económica y..., op. cit.*, p. 21. El autor describe el caso particular del conflicto obrero en la industria automotriz.

[18] Véase Zapata, F., *El movimiento obrero..., op. cit.*, p. 9.

[19] *Normas Básicas de Participación de los Trabajadores en la Administración de las Empresas del Área Social y Mixta.*

gerentes; la resistencia de los sindicatos que veían reducido su poder efectivo por la incorporación de los delegados obreros a la gestión de la empresa; la resistencia de los sectores de empleados sometidos a una situación que deterioraba su status relativamente privilegiado; el sectarismo de los diferentes partidos políticos.[20]

La estructura de las normas de participación reproducía, en el nivel de cada empresa, el esquema de división de poderes de la democracia liberal. Dado el carácter suficientemente general de las mismas, su aplicación dependía en cada caso de la correlación de fuerzas políticas en la empresa, más que de su contenido literal. Por eso mismo, su aplicación dio origen a una gran variedad de experiencias.

i] *Los obreros textiles*

Los obreros de la industria textil constituyen un caso especial para el estudio de las formas que revistió la conciencia obrera en la sociedad chilena. En el mes de mayo de 1971 los trabajadores textiles de las grandes y modernas fábricas pertenecientes a los magnates de la industria, Yarur y Sumar, se declararon en huelga, ocuparon las fábricas y pidieron al gobierno que las estatizara.[21]

El gobierno requisó las firmas y ambas empresas pasaron —si bien no oficialmente— a integrar el área social de la economía.

En el caso de Yarur, la última huelga de los trabajadores había ocurrido en 1962.[22] En la fábrica textil Hirmas, que como las anteriores se caracterizaba por un sistema paternalista destinado a impedir la movilización política de los trabajadores, los dirigentes sindicales estimaban que la mayoría de los obreros no pertenecía a ningún partido político. Sin embargo, entre el 60 y 70% de ellos votó a la UP.[23]

Como observa Petras, en el caso de las industrias textiles la mayoría de los trabajadores apoyó la huelga principalmente para protestar contra los bajos salarios y la intensa explotación de que eran víctimas en el trabajo. La estatización era percibida como una cuestión secundaria antes de que ésta se obtuviera. Pero, una vez efectuada, ésta dio lugar a un proceso de maduración política de sus intereses de clase. Tal fue el caso de Hirmas, empresa estudiada por Petras, en la que el papel

[20] Véase Campero, G., "Gestión de la empresa y participación de los trabajadores", en *Nueva Economía*, Santiago, núm. 2, 1972.

[21] Véase Petras, J., "Nacionalización, transformaciones socioeconómicas y participación popular en Chile", en CEREN, Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972.

[22] *Punto Final*, Santiago, núm. 130, 1971, p. 5.

[23] Petras, J., "Nacionalización...", *op. cit.*, p. 11.

cumplido por el interventor del gobierno fue, según constató Petras, decisivo en ese proceso.

A comienzos de 1971, los obreros textiles habían logrado la intervención de prácticamente la totalidad de las empresas de esa rama. A diferencia de la nacionalización del cobre, que fue casi íntegramente obra de la acción del Ejecutivo y del Congreso, el requisamiento de la industria textil se hizo "desde abajo" y como resultado de las demandas de los trabajadores. Como observa Vuskovic: [24] "En el caso de las empresas del área social, las situaciones más favorables y de mayor madurez coincidieron con aquellas en que había sido más intensa la lucha de los trabajadores por la incorporación a esa área de la empresa correspondiente, situándose en el otro extremo situaciones de relativo privilegio tradicional, como ocurría con los trabajadores del cobre." Éste fue el caso por excelencia de la industria textil. Por eso mismo, entre los obreros textiles la percepción de que se limitaba su grado de participación y poder, subordinándolo a una estructura administrativa superior, a la que tenían poco acceso, también tuvo una relevancia especial. La revista *De frente,* publicación del MAPU, señalaba que existía en la industria textil, hacia fines de 1971, una fuerte impugnación de los trabajadores al carácter formal de la participación. Como consecuencia de esta burocratización se desarrolló un movimiento de base que desembocó en cambios en la directiva sindical e incluso, en algunos casos, en el remplazo de los interventores estatales.[25]

A mediados de 1972 tuvo lugar el "Encuentro de los Trabajadores Textiles". Su objetivo era hacer un balance de un año de participación de los trabajadores en las empresas, en el contexto de un fuerte descontento por las formas burocráticas y formalistas que ésta asumía.[26] A partir de entonces, los encuentros de trabajadores por ramas industriales se sucedieron. Las normas fundamentales establecidas por el convenio CUT-gobierno habían quedado desbordadas por la práctica misma de la gestión obrera en las fábricas.

Los obreros textiles desempeñaron un papel ejemplar en la lucha por la democratización de la gestión. Como observa Touraine: "...el lugar de la conciencia de clase obrera en un país como Chile fue el de las empresas, poco numerosas, pertenecientes a la gran industria nacionalizada y que producían para el mercado interno; lo que designa, especialmente, a las grandes empresas textiles [...] Fue allí, en Santiago y en Tomé, en lo que respecta a los textiles, donde se desarrolló

[24] Vuskovic, P., *Política económica y..., op. cit.,* p. 19.
[25] *De frente,* Santiago, núm. 13, 1972.
[26] Primer Encuentro de Trabajadores Textiles. *Participación es poder,* Santiago, Quimantú, 1972.

una conciencia de clase con un alto grado de integración (sobre todo durante el régimen de la Unidad Popular)." [27]

Como constató Petras, los grupos de más larga trayectoria y experiencia en las luchas de clase y en la organización, bajo la dirección de la izquierda, eran los menos interesados en participar y tomar decisiones en las formas estatizadas.[28] Los mineros del cobre, el grupo con una organización más antigua, habían sido dirigidos por militantes comunistas y socialistas que conquistaron sus posiciones directivas gracias a su desempeño gremial (capacidad de organizar huelgas, de negociar aumentos salariales, etc.), más que por su militancia política; ellos prestaron su apoyo a los políticos de izquierda, de acuerdo con la capacidad que éstos demostraron de reforzar las demandas de sus dirigentes gremiales. Los trabajadores organizados y mejor remunerados eran aquellos que durante años, como lo señala Petras, habían participado en una política socialista de tipo "electoral-remunerativo".

Los sectores tardíamente organizados de la clase obrera con una mayor vinculación a grupos políticos de la extrema izquierda, como el MIR, fueron los que mostraron una mayor preocupación por el problema de la gestión obrera. Para los primeros, en cambio, el socialismo aparecía asociado con la redistribución y no con la producción. La preeminencia entre la mayoría de los obreros del cobre de una acción defensiva, centrada en una presión de tipo reivindicativa, se tradujo en un mecanismo de elevación del nivel de vida de estos sectores del área estatal. De este modo, se acentuó la fragmentación estructural entre los trabajadores del área social en las empresas estratégicas (fragmentación que, como vimos en la primera parte de este estudio, tenía una larga historia en la sociedad chilena) y el resto de los trabajadores, en especial los del área de propiedad privada.[29]

ii] *El problema de la participación en el área privada de la economía*

Hay escasa información disponible sobre las formas que revistió el problema de la participación obrera en el área privada de la economía. Esta situación sin duda refleja que el problema prioritario para la UP fue el del área social. La mayoría de los análisis coinciden en señalar la insuficiencia de la política de la UP respecto de esta área. Como observa Vuskovic, "el acceso abierto fue relativamente amplio en el caso

[27] A. Touraine, *Les classes sociales..., op. cit.*, p. 245.
[28] Petras, J., *Nacionalización..., op. cit.*, p. 22.
[29] En el capítulo IV se estudia el comportamiento de sectores mineros en la segunda etapa del gobierno popular.

de las empresas del área social, pero muy limitado en el de las empresas del área privada, en relación a las cuales se propició sólo la constitución de 'comités de vigilancia', con escaso poder y a cuya formación y estímulo se dedicó en la práctica muy poca atención".[30]

Esta situación se tradujo en una diferenciación decisiva entre los trabajadores del área social y los del área privada. En el primer caso, los trabajadores pasaban a ejercer una participación activa en la gestión de la empresa mientras que en el segundo la situación permanecía relativamente incambiada con respecto al pasado. Por otra parte, los trabajadores del área privada constituían la mayoría de los asalariados del país.[31] Sin duda, la política de empleo del gobierno popular había acrecentado el volumen de los trabajadores empleados por este sector.

En los primeros meses de gobierno surgió el proyecto de constituir "comités de vigilancia de la producción" en las empresas del área privada. El objetivo central de esta organización era vigilar la marcha de la producción para impedir el sabotaje.[32] Elegidos democráticamente y en vinculación con los sindicatos, su tarea resultaba demasiado estrecha en comparación con la ejercida por los obreros del APS. Los obreros no podían solidarizarse —como tampoco las direcciones políticas o la CUT podían aceptarlo— con una política de integración a la empresa destinada a maximizar la rentabilidad privada. ¿Cuál podía ser, en esta circunstancia, el poder de convocatoria de la consigna "ganar la batalla de la producción"? En tanto los obreros no controlaban las empresas, esta consigna estaba muy lejos de encauzar la acción de los trabajadores en términos de la estrategia fijada por el gobierno. La consecuencia inmediata de esta situación fue que los comités de vigilancia, destinados a asegurar la batalla por la producción, desaparecieron con el reflujo político, o bien se transformaron en instrumentos más radicales de acción de los obreros. En muchos casos, desembocaron en la ocupación de la fábrica por los obreros en demanda de su incorporación al área estatal.

En esta segunda alternativa, los obreros se enfrentaban a la propiedad privada desbordando la estrategia del gobierno con respecto a la mediana y pequeña burguesía no monopólica. El gobierno, en tanto responsable de la gestión económica y del orden político, condenó las

[30] Vuskovic, Pedro, *Política económica y..., op. cit.*, p. 20.

[31] Datos para 1963 indican que las industrias medianas y pequeñas —que forman el área de propiedad privada a partir de 1970— constituían el 97% del total de industrias y abarcaban 5 910 establecimientos que ocupaban a 126 000 personas (el 56% de los asalariados industriales), CEPAL, *El desarrollo industrial de América Latina*, Santiago, junio de 1967.

[32] Véase *Cómo participar*, Santiago, Ed. Quimantú, 1972.

tomas. Pero su actitud estuvo marcada por la ambigüedad política que le imponía la situación. Tuvo que ser tolerante y persuasivo ya que se definía como el gobierno de los trabajadores.

Las ocupaciones de fábricas se vieron multiplicadas como consecuencia del paro patronal de octubre de 1972. En esas circunstancias, como veremos, el gobierno y la dirección política llamaron a los obreros a ocupar las fábricas y hacerse cargo del funcionamiento de la economía. Superado el desafío de octubre, ¿cómo podía justificar y hacer cumplir el gobierno la medida de devolver a sus propietarios el control de las empresas ocupadas? Sobre este aspecto y su impacto decisivo en la formación de los cordones industriales y los comandos comunales, volveremos más adelante.

Puede concluirse que los trabajadores del área privada de la economía constituían el talón de Aquiles de la estrategia de la UP para el sector industrial. Su radicalización hacia la izquierda era la contrapartida de la ausencia de dirección política. Más que en ningún otro sector industrial, en éste la batalla de la producción no tuvo eco. A fines de 1971 se constituyó el Frente Nacional del Área Privada (FRENAP). La resistencia de la burguesía monopólica encontraba rápidamente aliados entre los sectores no monopólicos; la burguesía se unía en defensa de la propiedad privada.

Hacia fines de la etapa denominada "Vuskovic", la situación comenzaba a mostrar sus aspectos catastróficos. A la crisis económica se unía la desorganización de las prácticas políticas del proletariado en el contexto de una unificación progresiva de la burguesía.

c] EL CONTROL POPULAR DE LA DISTRIBUCIÓN: LOS CONFLICTOS EN EL SENO DEL MOVIMIENTO URBANO

A mediados de 1971, la UP impulsó la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) como respuesta a los problemas de abastecimiento que comenzaban a sentirse entonces. Ya durante el gobierno demócrata cristiano se habían constituido una variedad de organizaciones populares centradas en el lugar de residencia: juntas de vecinos, centros de madres, etcétera.

Las JAP, promovidas por el ministro de Economía Vuskovic, surgieron en los diferentes barrios de Santiago y se extendieron a las provincias. Complemento democrático de la acción de las empresas estatales, estaban destinadas a asegurar la normalidad de la distribución y el cumplimiento de los precios oficiales.[33] Estas organizaciones popu-

[33] Véase Giusti, Jorge, "Participación popular en Chile: antecedentes para su

lares tuvieron un gran eco entre los habitantes de los barrios populares de Santiago. Las penurias de la inflación y la escasez comenzaban a castigar duramente a estos sectores. Sin embargo la burguesía seguía controlando los canales esenciales de distribución (alrededor del 70% de las empresas de distribución).

Por otra parte, la política redistributiva lanzada por el gobierno descansaba en la expansión de la anterior composición de la producción; lo que constituía un obstáculo para llevar a cabo esa política redistributiva. En esas condiciones, la lucha por el consumo que habrían de librar los sectores populares tenía un campo muy restringido de acción.

Pese a los efectos positivos de las JAP en los barrios populares y en los campamentos, sobre todo en los momentos críticos como el paro patronal de octubre de 1972, éstas no llegaron a constituirse en los órganos de una política de masas en torno de la distribución. Su actividad quedó limitada a una acción defensiva en el nivel vecinal.

La política de la UP estaba centrada en el consumo y los problemas de la producción aparecían como segunda prioridad en su estrategia. Por eso mismo, los problemas del consumo no podían ser resueltos. La preocupación del gobierno por conciliar los intereses de los trabajadores y los de los empresarios del comercio detallista contribuyó a desdibujar el significado de las JAP como órganos de poder popular.

La batalla por el consumo, aunque percibida como prioritaria por las masas trabajadoras, no pudo ser ganada. La lucha en torno a la defensa de los niveles de vida se tradujo, en la mayoría de los casos, en la defensa de situaciones individuales y no pudo hacerse cargo de los intereses generales de las clases populares. Las JAP fueron órganos defensivos, pero incapaces por su naturaleza misma de constituirse en una alternativa que articulara orgánicamente a las clases populares.

Contrapartida de una política populista, las JAP expresaron un movimiento definido por su lucha en torno a la inclusión antes que un movimiento contra la explotación. Si bien su debilidad como órganos de poder popular se corresponde con la política defensiva, de búsqueda de alianzas con los "sectores medios", que dominó la estrategia del gobierno popular en su segunda fase (la política "Millas-Matus"), también es cierto que, por su naturaleza misma, estaban limitadas a desempeñar una acción defensiva. La batalla decisiva que tenía que librar la UP no pasaba por el consumo, sino por la construcción de un nuevo sistema económico: la transformación de las relaciones sociales de producción y de la superestructura política e ideológica de la sociedad.

---

estudio. Las JAP", en *Revista Mexicana de Sociología*, año XXXVII, vol. XXXVII, núm. 3, julio-septiembre, 1975, pp. 767-788.

CAPÍTULO III

LA POLÍTICA AGRARIA Y LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO

Para comprender mejor las formas que revistió el proceso durante la segunda fase de gobierno (el período de aplicación de la política denominada "Millas-Matus") es necesario volver la atención hacia la cuestión agraria. En este capítulo se intenta un análisis de las formas que revistió la lucha de clases en el campo durante los tres años del gobierno popular.

a] EL LEGADO FREIÍSTA

El instrumento con que contaba el gobierno para llevar a cabo su política agraria antilatifundista era la ley de Reforma Agraria promulgada durante el gobierno de Frei, en julio de 1967. Mientras la institucionalidad política vigente permaneciera incambiada, los límites y las posibilidades de acción de la UP quedaban fijados por las características de esa ley.

El proyecto de reforma agraria de la democracia cristiana tenía dos objetivos, estrechamente interrelacionados: promover el desarrollo capitalista en la agricultura chilena y desarrollar una capa de pequeños capitalistas agrarios, base de apoyo político a su programa.[1] El marco legal, heredado del gobierno demócrata cristiano, adquiría un nuevo propósito político y un enfoque diferente con la Unidad Popular: la iniciación y el avance en la transición al socialismo.[2]

Desde su llegada al gobierno, la UP explotó al máximo las posibilidades que ofrecía la legislación vigente. Ello tuvo como corolario un proceso de acelerada expropiación del latifundio y una rápida amplia-

1 Véase Chonchol, Jacques, "Poder y reforma agraria en la experiencia chilena", en *Chile hoy, op. cit.*, p. 274.

2 Véase Chonchol, J., *La vía chilena al socialismo..., op. cit.*, tercera parte: "La política agraria del Gobierno Popular", en "La Política Agraria", pp. 103-139.

ción de la sindicalización campesina. La estructura de clases en el campo chileno, en 1970, abarcaba una amplia gama de situaciones estructuralmente heterogéneas. La UP, en noviembre de 1970, se encontró ante las reivindicaciones de los siguientes sectores: 26 900 pequeños propietarios (entre 5 y 20 hectáreas de riego básico: HRB); 190 000 minifundistas (menos de 5 HRB); 50 000 inquilinos y medieros; 21 000 asentados (beneficiarios de la Reforma Agraria;[3] 95 000 asalariados permanentes y alrededor de 360 000 campesinos sin tierra, trabajadores ocasionales y desocupados.[4]

Después de 18 meses en el gobierno, en abril de 1972, se había traspasado a manos de 50 000 inquilinos y medieros el 21% de la tierra productiva, completándose de este modo el total previsto por la ley. Sin embargo el resto de los asalariados agrícolas quedaban marginados de los beneficios de la ley.

El dilema que enfrentaba la UP era cómo coordinar el empuje del campesinado pobre en los marcos estrechos de la legalidad vigente.

Durante el período mencionado se constituyó un área reformada en la que comenzaron a ensayarse distintos tipos de formas organizativas. A partir de 1971 se crearon los Comités de Reforma Agraria (CERA) con el propósito de impedir el desarrollo del cooperativismo agrario, políticamente organizado y expresado por la democracia cristiana. Los CERA reunían a varios fundos adyacentes en una unidad mayor, económicamente más racional, sostenida por el crédito estatal a través de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). La responsabilidad del manejo de los CERA era compartida por todos los trabajadores permanentes en los fundos, los que tenían igualdad de derechos en el consejo administrativo e igualdad de derechos sobre los beneficios marginales de la producción. Éstos quedaban restringidos como medio para desarrollar la economía colectiva misma.

Esta forma organizativa procuraba que la separación entre el asentado (beneficiario de la reforma) y el asalariado agrícola, no se transformase en una relación de dominación. La creación del Fondo Nacional de Desarrollo —encargado de administrar el excedente y asignarlo al área reformada— constituía un mecanismo de compensación de las desigualdades existentes entre las áreas reformadas. La democracia cris-

[3] *El asentamiento*, especie de cooperativa rural de familias campesinas, fue la forma organizativa que surgió en los fundos expropiados durante el gobierno demócrata cristiano. Se trataba de una organización transitoria, ya que después de un período de prueba de entre 3 y 5 años de duración, los campesinos podían decidir si continuaban bajo esta organización o si preferían dividir la tierra en forma individual; o bien formar una empresa mixta.

[4] Véase Barraclough, Solon, "La estructura y los problemas del sector agrario chileno", en *La vía chilena al socialismo, op. cit.*, pp. 133-121.

tiana atacó a los CERA apelando a la imagen del Estado patrón que bloqueaba el acceso a la tierra a los campesinos. Su consigna era: "No al Estado patrón".

Los antiguos asentados, del mismo modo que el campesinado, vieron peligrar sus aspiraciones. El trabajo ideológico y político realizado por la DC había difundido una conciencia "campesinista" para la que el objetivo era la propiedad de la tierra. El lema "la tierra para el que la trabaja" había penetrado en los trabajadores rurales, pese al alto grado de proletarización de los mismos.[5]

Los campesinos de las nuevas áreas reformadas, dirigidos por la DC, reclamaban una situación similar a la de los viejos asentados. Los CERA, pese a significar un avance en la socialización de la tierra y en la democratización de la gestión, constituían un flanco vulnerable al ataque de la oposición. De este modo, tanto en el campo como en la ciudad, la UP se encontraba frente al retraso político en la conciencia de los obreros. El gobierno aceptó una solución de compromiso con la creación del "comité campesino". Pero, el blanco de ataque de la oposición se apoyaba en el retraso de la conciencia de clase de los campesinos, por eso mismo seguía siendo eficaz pese a los cambios en las formas organizativas del sector reformado. La creación de los "centros de producción" (fundos estatales establecidos en latifundios expropiados, con carácter agro-industrial) fue más tardía y también encontró resistencias.

b] GANAR LA "BATALLA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA"

Los dos problemas centrales a los que la UP se abocó fueron: la aceleración en la expropiación del latifundio y la organización del área reformada. Estos requisitos, interrelacionados, eran la condición para ganar la batalla de la producción agrícola dentro de los marcos fijados por la estrategia de la UP.

La primera condición —acelerar la expropiación del latifundio— pudo ser llevada a cabo en condiciones favorables. En efecto, al aislamiento político de la fracción terrateniente tradicional se unió la movilización campesina (aumento sin precedentes en las huelgas y tomas de fundos). Pero, la eficacia de las medidas expropiatorias dependía de la organización del área reformada. Sólo medio año después de asumir el gobierno, la Unidad Popular llegó a un acuerdo acerca de la

[5] Véase Hernández, Silvia, "El desarrollo capitalista...", *op. cit.*, pp. 115 *ss.*

alternativa de organización a seguir. La dificultad para definir esta política puso de manifiesto que el tema campesino, pese a su importancia en el programa, no era un tema claro para los partidos de la izquierda chilena. Los partidos habían guardado silencio durante mucho tiempo sobre la cuestión campesina (véase la segunda parte de este trabajo).

La política seguida con respecto al área reformada no estuvo exenta de vacilaciones. La UP buscó, a través de diferentes formas organizativas, alcanzar su doble objetivo: ganar la batalla de la producción agrícola y crear la unidad política del sector reformado. Por otra parte, no se ignoraba que la eficacia del área reformada, dentro de los marcos de la política económica general de la UP, dependía de cómo se organizaran las relaciones entre ésta y el conjunto de la economía. Resolver este problema requería de fuertes inversiones estatales que la agricultura misma no podía generar.[6] Una medida de este tipo sólo hubiera sido factible con la aceleración del área de propiedad social de la economía.[7]

La otra cara del problema la constituía la presión ejercida por el campesinado pobre. Chonchol señala que con el 50% de la tierra expropiada sólo se beneficiaba a un 15% de los trabajadores rurales.[8] La aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias creó un sector privilegiado en el que la conciencia "campesinista" era dominante.

En efecto, como consecuencia de la puesta en práctica de la ley de Reforma Agraria se generó un corte entre los campesinos reformados y el resto de los asalariados agrícolas. Los afuerinos quedaron marginados del área reformada. La misma suerte corrieron los pequeños agricultores que trabajaban parcialmente para el fundo pero que no residían en él. Esta situación desembocó en conflictos dentro del área reformada.

En tanto los campesinos esperaban convertirse en dueños de la tierra, se resistieron a absorber mano de obra ante el temor de que les tocase menos en el futuro reparto de las tierras. El conflicto que surgió cobró la forma de un típico conflicto patrón-trabajador.[9] La persistencia de

[6] Téngase presente que el sector agrícola no alcanzaba a más del 10% del Producto Geográfico Bruto y que la población ocupada en ese sector representaba el 24.5% de la población económicamente activa total. Véase Billaz, René y Maffei, Eugenio, "La reforma agraria chilena y el camino hacia el socialismo", en CEREN, Santiago, Univ. Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972, p. 52.

[7] Billaz y Maffei, "La reforma agraria...", *op. cit.*

[8] Chonchol, J., "La política agraria...", *op. cit.*, p. 109.

[9] *Ibidem,* p. 108. También Langand, Michel, "El sector reformado; ¿área social de la agricultura?", en *Chile hoy,* suplemento agrario núm. 2, Santiago, enero de 1973, p. 3.

este conflicto entre los trabajadores, incluso en los CERA, constituía un factor decisivo para la fragmentación de la base de apoyo político campesino.

Un breve examen de los principales problemas que la UP encontró en el sector reformado permite poner en claro el tipo de conflictos que se presentó en este sector, así como los que surgieron en las relaciones entre el área reformada y el conjunto de la economía agrícola.

Como observa Langand [10] "la unidad reformada constituye un complejo híbrido de tenencia, donde coexisten microexplotaciones campesinas con una explotación colectiva". Por su trabajo en la explotación colectiva, el campesino recibía un anticipo, fijo e igualitario, considerado como una conquista lograda por el sector reformado. La consigna era "acá somos todos iguales".[11] La ausencia de un sistema de incentivos a la producción trajo aparejado un menor rendimiento y el aumento del ausentismo, a pesar de que en algunos casos se intentaron establecer controles por parte de los dirigentes e incluso de la asamblea de campesinos.

Por el contrario, en la microexplotación (goces y derecho a talajes), el campesino comercializaba su producción directamente en el mercado, escapando al control de la unidad reformada y con el agravante de que los costos de estas explotaciones individuales estaban en la mayoría de los casos financiados por la explotación colectiva. La tendencia a que la economía campesina usurpara a la colectiva, canalizando de este modo los recursos colectivos hacia la apropiación privada de la empresa familiar campesina, trajo aparejado el deterioro de la economía colectiva.[12] Esta situación puede ser interpretada a partir de dos hipótesis, en principio no excluyentes. Se puede pensar que es el resultado de una conciencia "campesinista" de los trabajadores rurales, fruto de su retraso político, o bien se puede derivar este comportamiento del tipo de problemas que el campesinado enfrentó en el área reformada.

Un estudio de José Bengoa sobre nueve predios de la provincia de Santiago, aunque no es representativo del área reformada, permite observar una tendencia presente en 1972.[13] Según este trabajo, la mayoría

[10] Langand, Michel, "El sector reformado...", *op. cit.*, p. 3.

[11] Gómez, Sergio, "Incentivos y normas de trabajo en el sector reformado", en *Chile hoy,* suplemento agrario núm. 3, Santiago, febrero de 1973, p. 7.

[12] Para un análisis de la importancia de la economía campesina familiar en la economía chilena, véase Lehman, David, *La agricultura chilena y el período de transición,* Santiago, ICIRA/Institute of Development Studies (ed.), 1972.

[13] Bengoa José, "Dividir las tierras, ¿por qué?", en *Chile hoy,* suplemento agrario núm. 2, Santiago, enero de 1973, p. 5. El estudio se basó en las entrevistas a 84 campesinos. Se tomó una muestra proporcional y al azar de: una cooperativa asignataria de la reforma agraria, cuatro asentamientos (dos de los cuales databan del

de los campesinos (55.9%) quiere que se les entregue la tierra en forma individual (sólo el 29.7% se inclina por la forma colectiva de tenencia). Los argumentos que dan son del tipo: "Cuando se trabaja en lo propio, se trabaja a la idea de uno y no a la del otro"; "En lo propio se rinde más y se endeuda menos"; "La tierra es poca y algunos ni siquiera trabajan, por eso hay que repartirla; cada cual su pedazo."

El autor observa que el deseo de poseer la tierra en forma individual es mayor entre los trabajadores de los asentamientos "viejos", que entre los de las nuevas unidades reformadas.[14] Bengoa explica este dato como generado por la amarga experiencia que el régimen de asentamiento dejó en el campesinado. Pese a la provisoriedad de estos hallazgos, interesa destacar que la conciencia "campesinista" de los trabajadores rurales aparece reforzada por los problemas que se enfrentaron en el área reformada.[15]

En las condiciones de funcionamiento de la economía campesina, competitiva con la economía colectiva, se explica la resistencia de los trabajadores reformados a incluir fuerza de trabajo externa. Nuevos miembros significaba reducir el nivel de ingreso de cada campesino. Por otra parte, la economía colectiva se encontraba descapitalizada como consecuencia de las características de la ley de expropiación. La contratación de asalariados y el sistema de trabajo a trato aplicado a los mismos —fueran permanentes o temporales— vino a reproducir bajo nuevas modalidades el tipo de relaciones de producción propias del latifundio.

La fragmentación entre el sector reformado y el resto de los trabajadores agrícolas sólo podía beneficiar la constitución de un frente común en defensa de la propiedad agraria. El eje de este frente no eran los terratenientes parasitarios, los "momios", sino la gran burguesía agraria. No debe olvidarse que ésta (los que poseían entre 40 y 80 HRB) había duplicado su número gracias al expediente de la subdivisión de predios. En 1970, esta fracción acumulaba el 44% de las tierras productivas (las mejores); contaba con el más alto nivel de mecanización existente y generaba el 43% de la producción nacional y el 55% de la

comienzo del gobierno demócrata cristiano y dos de sus finales), tres comités campesinos y sus centros de reforma agraria (CERA).

[14] Véase también esta afirmación en Arroyo, Gonzalo, "El capitalismo agrario goza de buena salud", en *Chile hoy*, Santiago, núm. 21, 3-9 de noviembre de 1972, p. 21.

[15] Las restricciones de este estudio impiden generalizar sus hallazgos. Jacques Chonchol, en conversación sobre este aspecto, me señaló sus reservas sobre la predominancia de una tendencia a poseer la tierra en forma individual entre los campesinos.

producción efectivamente comercializada. En ese frente de defensa de la propiedad los pequeños propietarios habrían de desempeñar un papel activo.

El otro dato que tiene una importancia decisiva para comprender la evolución de la lucha social en el campo reside en que los canales de comercialización de la producción agrícola siguieron en manos de la burguesía. Durante 1972, las unidades reformadas comercializaban el 85% de sus productos por canales privados. De este modo, la burguesía transformaba su situación convirtiéndose en una burguesía agrario-comercial, beneficiaria indirecta de las consecuencias de las políticas de la Unidad Popular (efecto redistributivo de la inflación y características del proceso expropiatorio mismo, que permitieron obtener el capital circulante necesario para actuar especulativamente).

La existencia de un sector reformado, ni capitalista ni socialista, colocado en una situación objetiva de confluencia de sus intereses inmediatos con los de la burguesía agrario-comercial, definía el campo de la lucha de clases en términos de un enfrentamiento entre el bloque burgués, y el proletariado y el subproletariado agrícola; es decir, los marginados de los beneficios de la reforma agraria.

La burguesía agraria se fortificaba en el Parlamento (el proyecto Moreno, sobre el que volveré más adelante, respondía a sus intereses y contaba con el apoyo de la oposición); tenía a su favor a los tribunales agrarios, los que en la práctica amparaban el uso de la violencia directa en el campo: las "guardias blancas" y los "comandos de defensa de la propiedad rural".[16]

La velocidad con que la UP llevó a cabo el proceso expropiatorio desató una lucha social en el campo cuya instancia de resolución escapó al control del gobierno. La batalla de la producción en el campo no se pudo ganar porque, al igual que en las fábricas, no era una batalla prioritaria. La movilización campesina a través de las "Brigadas de Aumento de la Producción" no ofrecía contenidos concretos a la lucha política del campesinado: ¿cuál podía ser su poder de convocatoria en condiciones en las que predominaba una acción defensiva de los intereses inmediatos en el campesinado, sin que la conquista y consolidación del poder político de la UP fuese un objetivo claro para ellos?

De este modo, mientras el sector reformado reforzaba su conciencia "campesinista", el recurso a la acción directa —las tomas de fundos— era la respuesta espontánea del campesinado pobre. Las dos respuestas desbordaron la estrategia agraria de la UP.

[16] Para una crónica de la violencia burguesa en el campo, véase *Chile hoy*, Santiago.

Por otra parte, la UP carecía de una dirección política unificada en torno de la cuestión campesina. Los dos partidos principales, el PC y el PS, diferían en su concepción del problema. Esta diferencia de líneas explica que el problema agrario (lo que sucedió también en la industria) fuera abordado de manera vacilante por la UP, así como el carácter contradictorio de las medidas políticas que efectivamente se tomaron en el campo.[17]

c] LAS NUEVAS FORMAS DE LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO: EL PODER CAMPESINO

Pocos meses después de su acceso al gobierno (diciembre de 1970), la UP decretó la creación de los "consejos campesinos". Estos consejos debían formarse en el nivel local, regional y nacional. Su composición contemplaba la participación exclusiva de organizaciones que tuvieran representación en el nivel correspondiente (sindicatos, federaciones de asentamientos, cooperativas, etc.). Este requisito limitativo tenía dos consecuencias: por un lado, excluía a los dos tercios del campesinado que no pertenecían a ninguna organización,[18] por otro, dejaba sentir el peso político de los campesinos agremiados por la democracia cristiana.

La distribución de los campesinos sindicalizados según confederación, en 1971, indica que el 46% pertenecía a Ranquil (básicamente dirigido por el partido comunista y el socialista); el 37% a Triunfo Campesino y Libertad (ambos básicamente controlados por la DC) y el 15.5% a Unión obrero-campesina (MAPU).[19]

Frente a las limitaciones generadas por esta forma organizativa, algunos sectores del campesinado presionaron para lograr cambiar el enfoque de los consejos campesinos. El caso más conflictivo ocurrió en la provincia de Cautín, predominantemente mapuche. Allí, los campesinos mapuches (que eran de hecho pequeños propietarios o comuneros usurpados) actuaron como detonante de una movilización que incluyó a los afuerinos no mapuches y que fue apoyada por un sector del PS y por el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización

[17] Para una caracterización de las dos líneas políticas de la UP en torno de la cuestión agraria, véase Gómez, Sergio, "Agricultura y revolución: diferencias de puntos de vista en el seno de la izquierda", en *Chile hoy*, suplemento agrario núm. 4, Santiago, abril de 1973, pp. 8-9.

[18] Billaz y Maffei, "La reforma agraria chilena...", *op. cit.*, p. 61.

[19] Hernández, Silvia, "El desarrollo del capitalismo...", *op. cit.*, p. 131.

asociada al MIR. Los campesinos pidieron la creación de consejos de base. En estos consejos debían de estar representados los campesinos no organizados. En Cautín se desarrolló un fuerte movimiento en enero de 1971 —el "verano caliente", como se lo llamó— que desembocó en la formación de un consejo comunal (el de Lautaro) elegido por la base. Este procedimiento se extendió a otras comunas y culminó con la realización de un Congreso de Consejos Comunales, en Temuco, en marzo de ese año.[20]

Los sucesos de Cautín llevaron al gobierno a aprobar este enfoque de los consejos campesinos. Estos consejos mostraron un comportamiento diferente a los que se habían generado por decreto. En efecto, en ellos se reclamaban funciones de dirección y se intentaba construir un poder paralelo en el campo. En los formados por decreto, se intentó operar dentro de la norma legal establecida, esto es, como asesores.

A mediados de 1972, en casi todas las comunas rurales se habían formado consejos campesinos, pero sólo funcionaba el 40% y muchos lo hacían en forma esporádica. De los 260 consejos comunales, sólo un 10% era creado directamente por la base.[21]

A la ambigüedad en cuanto a sus funciones y la heterogeneidad de su composición interna se agregaba otro factor que dificultaba la acción de los mismos: la divergencia dentro de la Unidad Popular respecto de lo que se esperaba de esta forma organizativa del campesinado. En la práctica estas divergencias se tradujeron en una ausencia de definición de las tareas que éstos debían cumplir y de apoyo político-económico para llevarlas a cabo.

El gobierno había cedido ante las presiones de las bases campesinas por una organización menos burocrática (los consejos de base). Sin embargo, la lucha social en el campo desbordó rápidamente los cauces establecidos por el programa de la UP. Las tomas de tierras comenzaron a sucederse en gran escala en las regiones mapuches, quienes actuaron como el detonante social en los comienzos de la lucha; lucha que para ellos reasumía los valores de la comunidad. Las tomas se extendieron a otras regiones, especialmente en el sur del país, en las que prácticamente no había habido expropiaciones durante el gobierno demócrata cristiano.[22] En 1967, el número de tomas ascendió a 9; en 1968 llega-

[20] Véase Castillo, F. y Larraín, J., "Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile", en CEREN, Santiago, Univ. Católica de Chile, núm. 10, diciembre de 1971, p. 174 y Cantoni, Wilson, "Poder popular en el agro chileno", en CEREN, Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972, pp. 80-103.

[21] Castillo, F., *et al.*, "Las masas, el Estado...", *op. cit.*, p. 12.

[22] Klein, Emilio, *Antecedentes para el estudio de los conflictos colectivos en el campo: 1967-1971*, ICIRA, mimeo., Santiago, 1972.

ron a 26; en 1969 fueron 148; en 1970 llegaron a 456 y en 1971 éstas habían llegado a la cifra de 1 278.[23]

Como observa Marín,[24] y también Klein, las tomas de fundos ponían de manifiesto un cambio cualitativo en la acción campesina: su objetivo principal era la expropiación del latifundio, pero en ellas participaban minifundistas y peones estacionales que no habían tenido vinculación previa con el fundo. La consecuencia inmediata de esta forma de movilización del campesinado pobre fue la presión ejercida sobre los fundos menores de 80 HRB y, por lo tanto, no expropiables según la ley. La mayoría de las tomas se llevaban a cabo en esos predios, con lo cual se constituían en una seria amenaza para la burguesía agraria.

La Unidad Popular no fomentó las tomas de fundos (a excepción de sectores del PS y en la etapa en que estaba llegando a su fin el proceso expropiatorio). No obstante, no las contrarrestó acudiendo al desalojo —no podía hacerlo— sino a través de la aceleración del proceso expropiatorio. Pero esa solución tenía un límite: la naturaleza de la ley de reforma.

La agitación política en el campo también se reflejó en el aumento del número de huelgas. En 1967 éstas alcanzaron a 693; en 1968 fueron 648; en 1969 saltaron a 1 401 y en 1971, alcanzaron a 1 758.[25] Al tiempo que se incrementaban las huelgas, éstas tendían a mostrar una nueva forma de conciencia entre los campesinos. En efecto, las huelgas tendían a expresar la solidaridad con los campesinos de otros fundos. En 1971 el 38% de las huelgas obedecieron a esta razón.[26]

d] LA CUESTIÓN AGRARIA: CENTRO DEL CONFLICTO INSTITUCIONAL

La presión de las masas campesinas sobre la tierra y la debilidad del gobierno para poder continuar el proceso expropiatorio en los predios comprendidos entre 40 y 80 HRB, y para poner en práctica mecanismos de control impositivo, de crédito y de distribución que encauzaron al más importante sector productivo del agro (la burguesía agraria) hacia la satisfacción de las necesidades generales de la política gubernamental terminó por paralizar toda acción al respecto. En efecto, la

[23] *Ibidem* y Hernández, S., "El desarrollo del...", *op. cit.*

[24] Marín, Juan C., "Las tomas: 1970-72", en *Marxismo y revolución*, Santiago, núm. 1, julio-septiembre de 1973, pp. 49-78.

[25] Hernández, S., "El desarrollo del capitalismo...", *op. cit.*, p. 134.

[26] *Ibidem*, p. 135.

Unidad Popular asistió inmovilizada —e internamente escindida en torno a la línea política a seguir en el campo— al proceso de fragmentación de su frente de apoyo político en el campo.

A comienzos de 1973, el senado aprobó el proyecto de reforma constitucional del senador demócrata cristiano Rafael Moreno. El proyecto, que había sido presentado a comienzos de 1972, aseguraba la inexpropiabilidad de todo predio igual o inferior a las 80 HRB; disminuía la duración del asentamiento a un año, fecha en la cual la tierra debería ser asignada a los campesinos en forma individual, cooperativa o mixta, y garantizaba la libertad de comercio.[27]

El proyecto "Moreno" colocaba la cuestión agraria en el centro del conflicto institucional: la oposición entre el Parlamento y el Ejecutivo. Del mismo modo que el proyecto sobre las "empresas de trabajadores" (véase capítulo v), este proyecto bloqueaba la constitución de un área social en el campo que pudiera efectivamente constituirse en la vanguardia del proceso de transformación de las relaciones de producción en la sociedad chilena.

La batalla de la producción en el campo suponía condiciones políticas que no se cumplieron: estabilización del proceso, represión de las tendencias de izquierda (el MCR, en particular), entendimiento entre la democracia cristiana y la Unidad Popular. Si éste hubiera sido el camino seguido por la UP, el programa mismo del gobierno hubiera quedado impugnado. Pero en tanto la UP tampoco optó por incentivar la movilización campesina hacia la toma de fundos y su actitud fue vacilante y defensiva, el proceso de lucha social en el campo quedó librado a su propia dinámica. El espontaneísmo de los campesinos pobres y la acción defensiva de los sectores reformados, centrada en sus intereses inmediatos, fueron la contrapartida de la acción del gobierno.

El paro patronal de octubre de 1972 también provocó en el campo el surgimiento de nuevas formas de organización de los trabajadores. A partir de allí surgió el Comando Nacional Campesino, cuyo objetivo era unificar la respuesta política del campesinado frente al enemigo común: la burguesía. Se crearon también comandos provinciales, departamentales y comunales para asegurar el abastecimiento de alimentos y de insumos y vigilar la producción. Pero estas organizaciones tuvieron un carácter defensivo; nacidas en una situación excepcional, al igual que lo ocurrido con los cordones industriales, carecieron de dirección política.

[27] En agosto de 1972 los partidos socialista y comunista habían llevado a cabo sus respectivos plenos partidarios y en ellos se había acordado por unanimidad establecer como límite de inexpropiabilidad las 40 HRB. *Chile hoy*, Santiago, núm. 11, 25-31 de agosto de 1972, p. 9.

La crisis de junio (el "Tancazo") también incorporó al campesinado en la movilización por la defensa del gobierno popular. Pero estas formas organizativas fueron concebidas por el gobierno como defensivas. La opción hacia una estrategia de poder campesino llegaba demasiado tarde. La lucha de clases en el campo había quedado librada a su propia dinámica y su resultado fue la fragmentación política del campesinado.

CAPÍTULO IV

LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: LA SEGUNDA ETAPA (DEL PARO PATRONAL DE OCTUBRE AL DESENLACE. LA POLÍTICA "MATUS-MILLAS" COMO INTENTO DE RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA)

a] LA CRISIS ECONÓMICA

En 1972, el desabastecimiento relativo en materia de consumo y la fuerte expansión monetaria derivada del financiamiento del gasto fiscal en condiciones de descenso en la reserva de divisas (disminución en los precios del cobre, drástica restricción de créditos, aumento en el volumen y los precios de las importaciones) configuraban los elementos básicos de la crisis económica en que se debatía la sociedad chilena. Los efectos políticos de la crisis económica eran cada vez más tangibles y hacían urgente la necesidad de definir una línea política que permitiera superar el equilibrio catastrófico en que vivía la sociedad chilena. En tales circunstancias, la conducción económica se situó en el centro de la lucha política. La continuidad de la "política económica Vuskovic" suponía, como el mismo ministro lo señalaba, que ésta se transformara en una política de masas (véase capítulo II). Pero el dilema que enfrentaba la UP consistía en cómo conciliar la movilización revolucionaria de las masas con el respeto a la institucionalidad vigente.

En este contexto los dirigentes de la UP realizan su primer encuentro: el cónclave de "El Arrayán" (febrero de 1972). Esta reunión no arrojó más resultados positivos que una declaración de buena voluntad para luchar más fuertemente contra el sectarismo y las tendencias burocráticas en el seno de la UP.

Los recientes resultados electorales —la victoria de la oposición unida en las provincias predominantemente rurales de O'Higgins, Colchagua y Coquimbo, en enero de 1972— [1] fueron un dato decisivo en

[1] La DC y el PN se unificaron en una coalición: la Confederación Democrática (CODE) y presentaron un candidato único a las elecciones complementarias para diputado en Valparaíso (junio de 1971). Al igual que entonces, y luego de obtener un triunfo electoral, se presentaron unidos a las elecciones de enero de 1972 (O'Higgins, Colchagua y Coquimbo). En estas provincias también lograron imponer su candidato.

la evaluación de la situación que entonces realizaron los dirigentes de la UP. ¿La aceleración de la movilización política del campesinado acaso no estaba impugnando la estrategia del gobierno?

Sin embargo la UP no pudo resolver el dilema en ese cónclave. La continuidad de la política económica aplicada hasta entonces puso de manifiesto que no había unidad de perspectivas. La paradoja de la situación residió en dejar provisoriamente incambiada la conducción económica pero sin darle los instrumentos políticos que ésta requería. De este modo la política Vuskovic quedó condenada inevitablemente al fracaso. Su impotencia para resolver la crisis económica era una impotencia política y no técnica.[2] En efecto, en el lapso que va desde el cónclave de El Arrayán hasta la segunda reunión de la UP (Lo Curro, en junio de 1972) la crisis económica se agudizó.

La política redistributiva no podía tener éxito si no se avanzaba en el control de la producción. Durante el primer semestre de 1972 la formación del área de producción social permaneció estancada. A ello se sumó la debilidad de su composición interna para resolver los problemas del abastecimiento. Las intervenciones estatales en la estructura de precios y salarios y en el libre juego de la oferta y la demanda —absolutamente necesarias para reorientar la dinámica del sistema productivo— produjeron, en las condiciones de funcionamiento existentes, numerosos "cuellos de botella" que fueron explotados para obtener diversas formas de ganancia especulativa.

Pero avanzar en el control de la producción implicaba poner en práctica expropiaciones rápidas, esto es, avanzar en la constitución del APS. El proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía, presentado en el Congreso por los senadores demócrata cristianos Hamilton y Fuentealba, fue aprobado por la oposición en febrero de ese año. Este proyecto y su corolario, el de las "empresas de trabajadores", venía a bloquear todo intento de avance en el control de la producción dentro de los marcos de la institucionalidad.[3] Finalmente, la UP decidió cambiar de rumbo para hacer frente a la situación.

[2] Vuskovic afirmaba: "Es el propio pueblo de Chile el que tiene que llevar adelante la política económica del Gobierno Popular, en el campo, en las fábricas, en las poblaciones, en cada centro de actividad." Entrevista en *Chile hoy*, Santiago, núm. 3, 30 de junio a 6 de julio de 1972, p. 14.

[3] Para un análisis de la significación de estos dos proyectos de la oposición, véase capítulo V.

b] LA AUSENCIA DE UNIDAD POLÍTICA EN LA UP: EL CÓNCLAVE DE LO CURRO

El centro del debate interno de la UP giró, como no podía ser de otra manera, sobre la conducción económica. Las concepciones tácticas divergentes de los dos partidos fundamentales, el partido comunista y el socialista, se expresaron a través de dos consignas: "consolidar para avanzar" (PC) y "avanzar sin transar" (PS).

El debate en torno a las tácticas alternativas no se había inaugurado entonces, por el contrario, era la expresión de divergencias más profundas que tenían su historia. Como vimos, la UP era algo más que un frente político pero mucho menos que un partido. La consigna del PC "consolidar para avanzar", suponía que dar la prioridad a la movilización política de las masas pondría en peligro el control del gobierno. El secretario general del PC, Luis Corvalán, afirmaba: "El objetivo principal de la revolución no es la conquista del poder en sí sino el cambio de la sociedad, la creación de un nuevo orden económico, político, social y una cultura..." [4] Para ello, mantener el control del gobierno era una cuestión decisiva. Y más adelante Corvalán agregaba: "...para aumentar la producción se requiere urgentemente mejorar la dirección económica, entrar por la vía de la planificación de la economía dando a los trabajadores más participación, más poder en la dirección de las empresas, produciendo allí un cambio real en las relaciones de producción de manera que los obreros comprendan claramente que las cosas han cambiado, que en el aumento de la producción y de la productividad está la base principal del mejoramiento incesante de su situación, para la reproducción ampliada de las industrias y la acumulación necesarias para la inversión fiscal y la realización de obras sociales".[5]

La concepción táctica del PS partía de la premisa del carácter burgués del Estado y la necesidad consiguiente de dar prioridad a la movilización política de las masas para lograr el control total del poder político.

La línea de conducción económica del PC quedó expresada en la tesis de Orlando Millas. El eje de su argumentación era la necesidad de defender al gobierno popular en la coyuntura crítica por la que éste atravesaba. Así, Millas expresaba: "Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido

[4] Luis Corvalán, entrevista en *Chile hoy*, Santiago, núm. 43, 6 al 12 de abril de 1972, p. 28.
[5] *Ibidem.*

afectada, en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen trasgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del gobierno popular, su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de sus enemigos, y por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a las capas medias y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos. En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro, cuando haya condiciones más desarrolladas. Esos asuntos, en su momento deberán estudiarse mejor y abordarse adecuadamente. No obstante, ahora pueden contribuir a que despierten suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias [...] podemos y debemos completar la Reforma Agraria en los términos de la ley vigente e igualmente completar la constitución del área de propiedad social de la economía en los marcos del programa básico de gobierno, o sea, respecto de las grandes empresas de importancia estratégica. Ello requiere aislar a los sediciosos, afianzar su gobierno, consolidar su obra, y modificar en su favor la correlación de fuerzas." [6]

Para el PC, impulsar la movilización política de las masas en esa coyuntura significaba poner en peligro la existencia misma del gobierno popular. Lo cierto es que durante la etapa de la política Vuskovic, la movilización popular era débil y éste es un dato de decisiva importancia, a mi juicio, para comprender la posición del PC y de Allende mismo.[7]

La línea de conducción económica del PC se impuso en Lo Curro. La posición del partido socialista —al menos la posición dominante, ya que el partido estaba internamente dividido en cuestiones de la estrategia a seguir— era expresada por su secretario general, Carlos Altamirano: "También sostuvimos (en Lo Curro) que era necesario un readecuamiento de la política económica [...] ahora había que ir a un aumento de la inversión, un reordenamiento en el comercio exterior, desde el mercado norteamericano al de los países socialistas y del resto del mundo capitalista, tarea que se está cumpliendo en estos momentos [...] En suma, es necesario entrar en una *nueva etapa,* no de consolidación, sino de profundización y desarrollo del proceso. Creemos que ambas posiciones no son contradictorias. Es perfectamente posible avanzar, pero sin descuidar el manejo eficiente de las empresas

[6] Millas, Orlando, "La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular", revista *Principios,* Santiago, mayo-junio de 1972.

[7] No fue sino después del paro patronal de octubre de 1972, que el curso de la lucha social desbordó los cauces del programa de la UP.

del área social, la capacidad de los funcionarios y la planificación de la economía." [8]

En síntesis, se compartía la necesidad de "sanear la economía", pero se trataba de avanzar en el proceso. Más claramente, en la edición de *Posición,* órgano del partido socialista, Arnoldo Camu respondió a la tesis "Millas".[9] Allí se manifestaban las divergencias con el partido comunista. La correlación de fuerzas, sostenía el autor, no podrá mejorarse en favor de las fuerzas revolucionarias si el gobierno vacila y se lanza a una política de concesiones destinada a lograr la neutralidad política de los sectores medios. La ampliación de las bases de apoyo popular debía descansar, en esta perspectiva, en la transformación de las relaciones de propiedad y de trabajo. Para ello, se imponía acelerar el avance coordinado del programa económico apoyándose en una política revolucionaria de las masas.

Pero a mediados de 1972, el "poder popular" era más una aspiración que una realidad. No será sino después del paro patronal de octubre que el poder popular cobre realidad. La concepción de una política de alianzas destinada a afianzar el proceso dentro de los marcos de la institucionalidad vigente se impuso en Lo Curro sobre la concepción de una política de masas. Entonces, la concepción del PS, el MAPU y la izquierda cristiana, no era claramente traducible en una alternativa política. ¿Cómo enfrentar la crisis económica —"sanear la economía"— apoyándose en la aceleración de la movilización revolucionaria de las masas, sin entrar en contradicción con la estrategia de la UP (el mantenimiento de la institucionalidad)?

Como resultado del cónclave de Lo Curro, el ministro Vuskovic fue remplazado por el socialista Carlos Matus y se nombró a Orlando Millas como ministro de Hacienda. La conducción económica, a partir de entonces, se denominó política "Millas-Matus".

La tesis de Millas (la tesis del PC), había triunfado sobre la línea que en ese momento representaba Pedro Vuskovic. En los meses de abril y mayo la UP buscó un acuerdo con la DC para resolver la crisis institucional desatada a propósito de la definición de las áreas de la economía.

[8] Carlos Altamirano, entrevista en *Chile hoy,* Santiago, núm. 5, 14 al 20 de julio de 1972, p. 30 (el subrayado es mío).

[9] *Posición,* Santiago, núm. 12, 1972.

c] LA AUSENCIA DE UNIDAD POLÍTICA EN LA UP: LA ASAMBLEA DE CONCEPCIÓN

La primera agitación importante alrededor de la cuestión del "poder popular", dentro de los partidos de la izquierda, surgió en torno a la Asamblea Popular de Concepción, en julio de 1972. El 22 de julio había aparecido una convocatoria en la prensa de Concepción en la que se invitaba "al pueblo de la provincia para discutir, analizar y denunciar directa y democráticamente la función y el carácter contrarrevolucionarios del Parlamento y al mismo tiempo rendir un combativo homenaje a la revolución cubana, cuando se cumple un nuevo aniversario de la gesta del 26 de julio". El PS, el MAPU, el MIR y el Partido Radical (PR) y la izquierda cristiana (IC) apoyaron al llamado. El PC criticó duramente la posición adoptada frente a la Asamblea. Teitelbaum expresó: "Es una idea delirante y calenturienta." [10]

En una carta a los jefes de los partidos de la UP (31 de julio) Allende expresó: "El poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad, Asamblea del Pueblo." [11]

Lo cierto es que a partir de entonces la discusión sobre el poder popular se hizo pública. La crisis de liderazgo en el seno de la UP, de la que hablara Corvalán en mayo de ese año: "crisis de orientación política, de liderazgo político que afecta el progreso mismo del gobierno...",[12] también se hizo pública. Las tendencias izquierdistas en el seno de la UP se habían reforzado, y con ellas, la dualización creciente de la UP.

El MIR, apoyándose en la experiencia de los consejos campesinos impulsados por la base, lanzaba la consigna de formar consejos comunales urbanos, cordones industriales. La Asamblea Popular de Concepción había levantado la bandera del "poder popular". Su consigna era: "crear poder popular". Esta consigna estaba entonces muy distanciada del nivel de conciencia de las masas, su eco principal eran los pobladores y los estudiantes.[13]

Para el MIR, los comandos comunales y los cordones industriales debían

[10] *Chile hoy*, núm. 8, 4-10 de agosto de 1972, pp. 6-7.
[11] *Ibidem.*
[12] *Punto final*, núm. 159, 1972. Documentos, pp. 2-3.
[13] Los sucesos de Lo Hermida (población compuesta por campamentos formados a través de sucesivas ocupaciones de terrenos) fueron contemporáneos a la Asamblea de Concepción. En síntesis, la intervención policial y la muerte de un poblador provocaron una intensa disputa en el seno de la UP.

ser el germen de un poder paralelo y alternativo del Estado burgués. La izquierda de la UP adoptó una posición más matizada. Dio su apoyo total a los cordones, pero señalando que éstos debían formar parte del conjunto de las fuerzas revolucionarias de la UP, sin que el poder político revolucionario entrase en contradicción con el poder político institucional.[14]

d] EL "PODER POPULAR" Y EL PARO PATRONAL DE OCTUBRE DE 1972

En la coyuntura creada por el paro patronal, los cordones industriales y los comandos comunales comenzaron a convertirse en una realidad. Estas nuevas formas de organización de los trabajadores surgían como respuesta al intento de la burguesía de paralizar al país.

El cordón industrial Cerrillos-Maipú fue el primero en constituirse. La zona de Cerrillos representaba la mayor concentración industrial del país (46 000 obreros trabajando en 250 industrias de diferentes ramas: textil, línea blanca, neumáticos, etc.). También era el centro de distribución de combustibles para toda la capital. La constitución de este cordón reconoció como antecedente la huelga de los trabajadores de la industria Perlak. Esa huelga, declarada por incumplimiento de un petitorio a la patronal, rápidamente contó con la solidaridad de los trabajadores de otras fábricas también en conflicto, y movilizó el apoyo de las demás industrias de la comuna de Maipú. El comando de los trabajadores de Maipú ocupó el Ministerio de Trabajo —estableció barricadas en sus accesos— y lanzó un petitorio denominado "plataforma de lucha". Su objetivo era revisar con el gobierno la política en el área privada de la producción.[15]

¿Cuál era el significado de esta nueva forma organizativa desde el punto de vista de la conciencia de los obreros? El cordón industrial expresaba una organización de clase: su objetivo central y el tema de su acción era la expropiación de los patrones, la expropiación de fábricas y fundos. El paro de octubre desembocó en la intensificación de las tomas de fábricas. El gobierno había llamado a los trabajadores a que se hicieran cargo del funcionamiento de la economía, ¿cómo justificar que, una vez pasado el desafío gracias a la acción misma de los trabajadores, éstos acaten la instrucción de devolver a los propietarios el control de las empresas?

[14] Véase Carlos Altamirano, Carta abierta a Luis Corvalán, 13 de febrero de 1973.

[15] *Chile hoy*, Santiago, núm. 6, 21 al 27 de julio de 1972, p. 11.

La ministra de Trabajo, Mireya Baltra (Partido Comunista) expresaba: "No podemos intervenirlo todo. Debemos cumplir el programa de la Unidad Popular, que dice que hay tres áreas de la economía. Y nosotros estamos por que exista un área privada de la economía que podamos desarrollar. ¿Por qué no vamos a dejar que los capitalistas hagan sus gastos en la construcción del socialismo?" "Tenemos que vencer al economicismo... Es fácil ser líder ahora, tomándose una industria. ¿Por qué no lo hacían antes? Ahora abusan porque no hay represión del gobierno de la Unidad Popular." [16]

Los trabajadores ofrecieron una fuerte resistencia ante la perspectiva de devolución de empresas. Los cordones industriales gestados a partir del paro patronal —Vicuña Mackenna, San Miguel, Conchalí, Ñuñoa, etc.— se movilizaron para impedirlo.

Los cordones industriales y los comandos comunales (reagrupación del movimiento urbano en cada comuna) rodeaban Santiago: ¿cómo lograr que las iniciativas de estas organizaciones no desbordasen el programa del gobierno? Nacidos en un período excepcional durante el cual el vacío creado por la burguesía en el aparato de producción y distribución les asignaba un conjunto de tareas específicas a cumplir, ¿cuál debía ser su papel una vez restablecida la "normalidad"? La solución a la "crisis de octubre" fue la constitución de un gobierno de tregua "UP-militares". La intervención de los militares para respaldar la institucionalidad vino a decidir la crisis "en las alturas". La ausencia de confianza en las masas populares quedaba de manifiesto. El "poder popular" —sus embriones— tenía para el gobierno un carácter defensivo.

Lo que importa destacar aquí es que los cordones industriales —a diferencia de las organizaciones de los pobladores, que conocieron un desarrollo divergente, marcado por el predominio de la presión reivindicativa— constituían un movimiento de clase, como lo sostiene Touraine.[17]

Estas iniciativas, que excedían la esfera de la producción para constituirse en expresiones más generales de poder, carecieron de una dirección política homogénea y dieron lugar a experiencias diversas. La CUT mantuvo una actitud ambigua y vacilante frente a las mismas. La per-

[16] Entrevista a Mireya Baltra en la revista *Chile hoy*, Santiago, 21 al 27 de julio de 1973, pp. 32 y 29.

[17] Touraine, A., *Vie et mort...*, *op. cit.*, p. 22. Véase también Threlfall, Mónica *et. al.*, *Consejo Comunal de Trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú*, Santiago, CIAV, documento de trabajo núm. 67, 1973, y Cheetham, Rose *et. al.*, *Comandos urbanos, alternativa de poder socialista*, Santiago, CIDU, 1973. A partir de octubre de 1972 tanto *Punto final* como *Chile hoy* constituyen excelentes fuentes sobre el tema (entrevistas y análisis del problema).

cepción de una suerte de estructura sindical paralela marcó esas vacilaciones. La tradición de la acción sindical en Chile estaba marcada, como vimos, por una autonomía en el plano de la empresa (la negociación del pliego de peticiones) pero había sido subsidiaria de los partidos políticos en su relación con el Estado. La oscilación entre la acción directa y la búsqueda de una alianza con el Estado para el logro de la ciudadanía obrera estuvieron presentes como los dos rasgos distintivos de su lucha.[18] A esta actitud de la CUT se sumó la ausencia de un acuerdo político sobre cómo encarar el problema. En los hechos, la solución institucional a la crisis de octubre significó la desmovilización de las masas.

Sin embargo, después de octubre la realidad de estos embriones de poder popular era innegable. La pregunta que cabe formularse es: ¿Había perdido la UP otra ocasión histórica al rechazar una política de masas y optar por una solución "centrista", de "desarrollo nacional", aceptable por los militares y la DC? [19]

La realidad se encargó de probar que la política prudente del gobierno (PC-Allende) no pudo responder a las exigencias de una crisis social extrema. En efecto, la conducción económica "Millas" se proponía lograr un retroceso táctico con miras a neutralizar a los sectores de la pequeña y mediana burguesía en el contexto de una movilización revolucionaria de las masas populares. Este desfasaje de la conducción económica con respecto a la situación política fue señalado en todos los análisis del proceso chileno. Vuskovic había fracasado porque su política económica carecía de las condiciones políticas para llevarla a cabo. La UP se negó a seguir el camino de la movilización de las masas ante el temor de que ésta desembocara en la ruptura de la institucionalidad. Millas también fracasó porque esa política suponía condiciones diferentes de las que se hicieron presentes después del paro patronal. La presión popular bloqueó todo intento de conducción económica dentro de los marcos de la línea del PC.

e] LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS

La gestión económica a partir del cónclave de "Lo Curro" se tradujo en los hechos en la adopción de una serie de medidas destinadas a sanear el funcionamiento de la economía.

[18] Campero, G. y Jaramillo, S., "Conciencia de clase...", *op. cit.* Los autores señalan que aunque la negociación colectiva se llevaba a cabo en el nivel de la empresa, ésta quedaba limitada por la política gubernamental sobre reajustes.

[19] Véase Debray, R., *La critique des armes...*, *op. cit.*, tomo 1, p. 313.

El eje de esta política era la clase obrera organizada y movilizada en torno a la consigna de "ganar la batalla de la producción". Sin embargo, después del paro patronal la movilización política de las masas desbordó los cauces del programa de la UP. En esas condiciones el cambio en la gestión económica estaba condenado al fracaso. La desarticulación de las reglas de juego de la economía capitalista, generada por las medidas aplicadas por el gobierno, se había traducido en el plano económico a través de fuertes desfasajes entre la oferta y la demanda. De este modo se habían creado las condiciones favorables para el desarrollo de un capitalismo especulativo en el que la burguesía invertía los fondos atesorados durante 1971. La burguesía maximizaba su tasa de ganancia en las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía y al mismo tiempo lograba reproducir de manera ampliada esas condiciones: inflación, escasez, mercado negro.

La política económica del PC se proponía resolver el problema en el marco del mercado. El camino adoptado se tradujo en el alza sustantiva de los precios con miras a dejar operar la ley del valor como mecanismo fundamental de asignación de los recursos. Esta medida procuraba contrarrestar el desabastecimiento restringiendo el consumo; en la práctica, significaba romper con el modelo populista seguido hasta entonces.

Dado que los sectores populares eran los más afectados por esta política, simultáneamente se planteó un reajuste compensatorio destinado a mantener el poder adquisitivo de las masas populares. El objetivo propuesto por el gobierno de otorgar mayores reajustes salariales a los trabajadores más pobres fue rápidamente sobrepasado por la presión de los asalariados. Al mismo tiempo, los aumentos adicionales en el ingreso se vieron frustrados por los aumentos en los precios; el corolario inevitable fue la reducción del poder adquisitivo de obreros y empleados.

El bloqueo parlamentario de la oposición a toda política tributaria destinada a financiar los reajustes y sus resistencias a la aplicación de ajustes discriminados bajo el lema de "justicia social para todos" paralizó al gobierno en su capacidad de dar respuesta a la crisis. En efecto, si se tiene en cuenta que en 1971 el 7% de la población económicamente activa recibía prácticamente la mitad de los ingresos de la economía, se comprenderá fácilmente cuál fue el resultado de la política de reajustes. El dinero que fluía del Estado iba a parar a manos de ese 7%, situado en una posición privilegiada en la producción, distribución, o en otros sectores. Como observan Müller y Hinkelammert: "Si hasta el año 1970, la reivindicación de un reajuste salarial del 100% del costo de la vida era una medida eficaz y realista para estabilizar

la distribución de los ingresos, una vez lograda, después de este año, la inflación se desarrolla de una manera tal que la misma aplicación de un reajuste del 100% resulta en una discriminación de los grupos de ingresos más bajos. De eso se sigue que una política tal en relación a las remuneraciones pone en peligro la propia redistribución de los ingresos y la dinamización de la economía sobre la base de la producción de bienes de consumo popular." [20]

La rápida pérdida en el poder adquisitivo de los sectores populares se debió fundamentalmente al aumento en los precios de los productos alimentarios. A fines de octubre de 1972 el área de propiedad social sólo representaba el 21% del sector alimentario.[21] La debilidad en la composición interna de este sector impedía al gobierno controlar la escasez relativa de esos productos. Por otra parte, esta política tampoco se tradujo en un mejoramiento de las relaciones campo-ciudad. Una parte importante del aumento experimentado en el precio de los productos agrícolas se transformó en ingresos especulativos de los grupos que dominaban la comercialización en el campo. Al mismo tiempo, el efecto redistributivo del aumento de los precios agrícolas se limitó a los ingresos de los propietarios, ya que los campesinos asalariados vieron reajustados sus ingresos en forma proporcional al índice de precios al consumidor.[22]

Los sectores asalariados con menor poder de regateo fueron los que sufrieron el mayor deterioro en su situación. Estos sectores, sobre todo localizados en una condición marginal en el proceso productivo, eran a su vez los que más habían radicalizado la lucha y en los que más eco tenían las tendencias izquierdistas dentro de la UP, así como el MIR.

La política Millas se tradujo en una reproducción ampliada de la situación de crisis previa, pero en un nivel más que duplicado de precios.[23] Por otra parte, la agudización de la lucha social por la apropiación del producto ocurría en el contexto de una fuerte movilización política de las masas.

La crisis social había alcanzado niveles extremos y no podía ser resuelta a través del proyecto "Millas". Es por eso que se puede afirmar,

[20] Müller, Urs. y Hinkelammert, Franz, "Condiciones y consecuencias de una política de redistribución de ingresos", en CEREN, núm. 16, abril de 1973, pp. 203-227, p. 205.

[21] Instituto de Economía y Planificación de la Universidad de Chile, informe económico, 1972.

[22] Müller y Hinkelammert, "Condiciones...", *op. cit.*, p. 210.

[23] Glauser, Kalki y López, Julio, "Táctica económica o estrategia política", en *Chile hoy*, Santiago, núm. 13, 8-14 de septiembre de 1972, pp. 10-12 (los autores son economistas pertenecientes al MAPU).

como lo hace Touraine, que después de la salida de Vuskovic, el gobierno no volvió a tener una política económica.[24] El proyecto también fracasó en su intento de llegar a un acuerdo con la DC y aislar de ese modo a la derecha contrarrevolucionaria. Fracasadas las conversaciones con la DC acerca de las áreas de propiedad, el mercado negro y el desabastecimiento crearon las condiciones favorables para la huelga insurreccional de octubre. A partir de entonces, la UP quedó limitada a una política defensiva que dejó librada la lucha social a su propia dinámica. El corolario fue la desorganización política de las prácticas del proletariado, al tiempo que la rápida unificación del campo de los enemigos.

f] EL CAMPO POPULAR, BLANCO DE ATAQUE DE LA OPOSICIÓN. LA HUELGA DE LOS MINEROS DE EL TENIENTE

Después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 la oposición perdió sus esperanzas de derrocar constitucionalmente a Salvador Allende. En el contexto de una ofensiva de la burguesía (véase capítulo v) tuvo lugar la huelga de los mineros de El Teniente. Vale la pena detenerse a examinar ese conflicto porque es indicativo de las formas que revistió la lucha de clases en la sociedad chilena durante el gobierno popular.

En abril de ese año estalló una huelga de proporciones en la mina El Teniente, que se prolongó hasta comienzos de julio de ese año. La causa inmediata era el problema de los reajustes salariales.[25]

En el estudio de Petras sobre las actitudes de la clase trabajadora chilena,[26] se observa que los mineros de El Teniente tendieron a considerar la nacionalización como un medio de mejorar sustancialmente su propio nivel económico y no como una vía para estimular el desarrollo nacional. La presencia permanente de una actitud reivindicacionista entre los mineros, unida a la defensa de una comunidad (las condiciones específicas de vida y de trabajo de los mineros), había sido siempre el rasgo distintivo de su lucha.

¿Por qué no iban a manifestar resistencia a la política de la UP si ésta no respondía a sus demandas? Más que acusar de economicistas a los obreros de El Teniente, como lo hizo la izquierda chilena, la

[24] Touraine, A., *Vie et mort...*, *op. cit.*, p. 229.

[25] El Teniente, Chuquicamata y El Salvador constituían las tres minas más importantes.

[26] Petras, J., *Nacionalización...*, *op. cit.*, pp. 7 *ss.*

pregunta que cabía entonces hacerse era: ¿por qué los mineros de El Teniente seguían manteniendo un comportamiento "tradicional" frente al gobierno popular? La consigna de "ganar la batalla de producción en las minas" no podía transformar cualitativamente las orientaciones de los mineros. La protesta minera había surgido como respuesta a las condiciones de trabajo y de vida en las minas. Los mineros no se levantaron contra las clases dominantes locales, a las cuales no estaban ligados por ninguna forma directa de explotación económica, sino contra el enclave (la dominación extranjera). Sin embargo, y como se analizó en la primera parte de este trabajo, la forma de expresión política del conflicto de clases apareció como un enfrentamiento entre mineros y clases dominantes locales. El antagonismo de clases en el plano político no tenía correspondencia en el plano social (allí los mineros se enfrentaban a las compañías extranjeras del enclave). Esta situación singular permitió un margen amplio de institucionalización de los conflictos en la sociedad chilena. Consecuencia del carácter dependiente de la sociedad, esta situación permite comprender por qué el eje del conflicto se situó directa y predominantemente en el plano político —expresión más sobresaliente de la dominación interna— y no tuvo implicaciones decisivas sobre el modo de producción dominante.[27]

La acción ofensiva de los mineros tendió a circunscribirse a la presión económica y política destinada a obtener ventajas de su situación estratégica en el sistema económico.[28] Esta acción, a través de sus representaciones políticas, no pudo hacerse cargo de los intereses del conjunto de las clases explotadas en la sociedad chilena. Como observa Touraine: "En las situaciones de dependencia... la acción sobre el sistema político es el medio indirecto, pero fundamental, de acción sobre la clase antagonista. Nada lo muestra mejor que la naturaleza del sindicalismo en casi todos los países donde éste no estuvo prohibido. El sindicalismo se desarrolló bajo la protección del Estado y en unión estrecha con él. Lo que es válido para Brasil, para México o para la Argentina peronista, puede aplicarse, más de lo que parece a primera vista, a los mineros bolivianos o chilenos." [29]

La huelga de El Teniente —manipulada por la oposición en el contexto de una crisis social— no puede ser comprendida si se olvida

[27] Las ideas aquí presentadas las debo, en gran parte, a discusiones con Silvia Sigal, que me aclararon mucho la interpretación de la peculiaridad del modelo político chileno.

[28] Entre 1957 y 1969 los reajustes salariales en las tres minas más importantes fueron siempre superiores a los reajustes obtenidos en el sector privado en su conjunto. Véase Barría, Jorge, *Los sindicatos de la Gran Minería del Cobre*, Santiago, INSORA, 1970.

[29] Touraine, A., "Les classes sociales...", *op. cit.*, p. 254.

cuál había sido la tradición de lucha de los mineros y las características de su acción. O, lo que es lo mismo, si se pierde de vista lo que constituyó la peculiaridad del modelo político chileno y la raíz de su prolongada estabilidad.

Suponer que la conciencia de clase de los mineros surgiría espontáneamente como contrapartida de la presencia de un gobierno popular era caer en el voluntarismo más extremo. La batalla de la producción no podía ser una consigna revolucionaria para los mineros —como tampoco lo fue la nacionalización— y no haberlo comprendido a tiempo dejó un blanco de ataque que la oposición supo capitalizar muy bien, en el caso concreto de los mineros de El Teniente.[80]

Si me detuve en la reflexión a propósito de este conflicto en un sector de los mineros, fue con el objeto de señalar que la UP ofrecía puntos débiles no sólo en el plano político institucional sino también en el campo de las fuerzas populares. El desafío que enfrentó durante los tres años en el gobierno fue el de articular ese campo popular. Su fracaso explica lo fundamental del desenlace de la crisis: el triunfo de las fuerzas contrarrevolucionarias en la sociedad chilena.

[80] Cabe notar que el peso de los sindicatos de empleados y de la dirección demócrata cristiana entre éstos fue un factor decisivo en el desarrollo de los acontecimientos de El Teniente. Ello permite explicar por qué el conflicto se desató allí y no en Chuquicamata, donde se observaron tendencias más reivindicacionistas, mayor ausentismo y disciplina que en El Teniente.

CAPÍTULO V

LA ESTRATEGIA DE LA BURGUESÍA

a] EL BLOQUEO PARLAMENTARIO

A comienzos de 1971 las fuerzas políticas de la oposición estaban divididas. Las medidas económicas del gobierno popular habían dado un serio golpe al poder de los sectores monopólicos nacionales y extranjeros. El triunfo de la UP en las elecciones municipales de ese año legitimaba el programa antimperialista, antimonopólico y antioligárquico del gobierno popular.

Las acciones destinadas a impedir el acceso al gobierno de Salvador Allende habían fracasado. La democracia cristiana le dio finalmente su apoyo. El interrogante que se abría entonces era hasta cuándo la DC se comportaría como el centro político.

La DC había negociado su apoyo a la UP a través de la firma del estatuto de garantías constitucionales. La inmovilidad de los cargos públicos le aseguraba un papel estratégico en el aparato administrativo que de este modo quedaba en manos de funcionarios del antiguo régimen. La pequeña burguesía profesional y burocrática se pronunciaba en favor de la democracia, pero ello no significaba que estuviera de acuerdo con un proceso revolucionario.

En esta primera etapa, la oposición de la DC se concentró en la defensa de sus posiciones institucionales: defensa de funcionarios públicos, de militantes del partido. El Partido Nacional, por su parte, invocaba la defensa de la propiedad.[1]

Ambos coincidieron en su ataque al gobierno a propósito de los sucesos de Cautín (la movilización de los campesinos en el sur).

En junio de 1971 fue asesinado Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro del Interior del gobierno de Frei y personaje importante en el partido

1 Véase Echeverría *et. al.*, "Etapas y perspectivas de la lucha ideológica en Chile", en CEREN, Santiago, Univ. Católica de Chile, núm. 13, julio de 1972.

demócrata cristiano. Este hecho se tradujo en la escena política en un cambio cualitativo importante: la DC entró en la oposición. En efecto, por iniciativa de los diputados demócrata cristianos cayó la mesa de izquierda de la Cámara de diputados (hasta entonces presidida por la UP). Al mismo tiempo, la DC y el PN se unieron en una coalición electoral (CODE) y presentaron un candidato único a las elecciones complementarias para diputados en Valparaíso.[2] La victoria electoral de la oposición unida en Valparaíso no dejó de tener efectos sobre el partido demócrata cristiano. En agosto de ese año se desprendió una fracción, la Izquierda Cristiana, que se unió a la UP.

Los resultados electorales también repercutieron sobre la UP. El Partido Radical se escindió y surgió en la escena política el Partido de Izquierda Radical, el PIR, reclamando una rectificación del proceso iniciado por el gobierno popular.

A partir del mes de septiembre de ese año las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado se sucedieron con frecuencia cada vez mayor. El Partido Nacional presentó ese mes una acusación contra el ministro de Economía, Pedro Vuskovic. El PDC no la apoyó. Sin embargo, poco tiempo después, la oposición en bloque lanzó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá. El PDC y el gobierno se enfrentaron en lo que Garcés calificara como "juicio político al régimen".[3]

El gobierno resolvió la crisis provocada por esta acusación cambiando de cartera a Tohá, que pasó a ocupar el Ministerio de Defensa. La "muñeca" de Allende (término utilizado para designar la habilidad política del presidente) y su recurso al "enroque" lo hicieron ganador de este complicado juego de ajedrez. En esa ocasión, como en las que le sucedieron, Allende logró triunfar tácticamente sobre sus enemigos en el interior del sistema político. Pero a fines del primer año de gobierno, cuando ya comenzaban a manifestarse los síntomas de una crisis económica aguda, frente a la cual la "política Vuskovic" se mostraba impotente, la DC ya estaba en la oposición abierta. En efecto, la DC sostenía la institucionalidad pero se servía de ésta como su arma de defensa por excelencia contra el gobierno popular.

[2] Ya en diciembre de 1970, el presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, había hecho un llamamiento a todos los chilenos para llevar a cabo una acción conjunta en defensa de la democracia y de la libertad. *El Mercurio*, en su editorial del 14 de diciembre de 1970 titulada "La oposición integrada" se había hecho eco de este llamado.

[3] Garcés, J., *El Estado y los problemas..., op. cit.*, p. 61. Véase también Garcés, J., *Revolución, Congreso y Constitución: el caso Tohá*, Santiago, Ed. Quimantú, 1972.

i] *El proyecto Hamilton-Fuentealba: centro del conflicto institucional*

La UP podía hacer frente a la crisis política provocada por el bloqueo parlamentario en la medida en que se enfrentaba a una oposición política con problemas análogos a los suyos, una oposición carente de unidad. La debilidad de la oposición radicaba en que estaba internamente dividida y su acción era vacilante. La lucha política en torno a la definición de las áreas de la economía marcó en su evolución un cambio en esas condiciones. En esa lucha lo que estaba en juego era la cuestión del poder, tema sobre el que no cabían vacilaciones por parte de la DC.

En octubre de 1971, los senadores demócrata cristianos, Renán Fuentealba y Juan Hamilton, presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional, cuyo propósito, como observa Luis Maira, era: "...regular en forma restrictiva el funcionamiento del área social de la economía. Con el pretexto de delimitar las áreas económicas, en la práctica se suprimían atribuciones al presidente de la República y se limitaban los sectores que el área social podía incluir".[4]

El tema de la definición de las áreas de propiedad constituyó el centro de las conversaciones que se iniciaron unos meses más tarde entre la DC y el gobierno.[5] El encargado de llevar a cabo ese diálogo fue el ministro de Justicia, Manuel Sanhueza, miembro del PIR.[6] Las conversaciones fracasaron como resultado de los "devaneos unitarios" del PIR y su intento de coligarse con la DC.[7] Pero este hecho en sí mismo no puso fin a los intentos de negociación. Sin embargo éstas tuvieron una corta vida.

Renán Fuentealba, miembro de la denominada ala moderada de la DC, expresaba: "Aparte de este conflicto jurídico existe el conflicto de enfrentamiento que puede producirse como consecuencia del conflicto jurídico. Va a venir la lucha si esto sigue adelante y no se producen acuerdos; la lucha en la calle; la lucha de poder de concentra-

[4] Luis Maira, "Reales proyecciones del conflicto institucional" en *Chile hoy*, Santiago, núm. 43, 11-17 de mayo de 1973, p. 6. Para un análisis del conflicto y descripción de los proyectos —de la oposición y del gobierno— véase *El libro de las 91*, Santiago, Ed. Barco de Papel, 1972, pp. 213-249.

[5] Las requisiciones se venían llevando a cabo sobre la base del Decreto Ley 520 promulgado durante la breve vida de la "República Socialista" de 1932.

[6] A comienzos de 1972 el PIR se había incorporado a la UP.

[7] *Chile hoy*, Santiago, núm. 52, 8-14 de junio de 1973, p. 17. Allí se presenta un informe del intento del PIR por pactar con el API y conseguir para la oposición los dos tercios que ésta necesitaba en el Congreso. Como consecuencia de esta acción el PIR salió de la UP.

ciones, de manifestaciones, de foros, en que el Congreso Nacional por un lado y el Ejecutivo por el otro, van a sostener sus posiciones y tienen derecho a hacerlo. Se va a producir en el país un período de agitación cuyas consecuencias nosotros tememos que puedan ser graves para la tranquilidad del país y para el desenvolvimiento normal del proceso democrático." [8]

La revista PEC, órgano del Partido Nacional, publicó el 23 de junio un artículo titulado "La DC y la estrategia incorrecta". Allí se manifestaba el pesimismo del PN sobre los resultados concretos de las negociaciones entre la DC y la UP y se advertía de los peligros que éstas significaban. En efecto, en julio de ese año la DC y el PN acordaron su unificación electoral para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Con esta decisión de la DC el diálogo quedó cerrado y la definición de las áreas de propiedad siguió pendiente.

A partir de entonces, el paro patronal de octubre (véase apartado b), y la posterior campaña electoral, concentraron todas las fuerzas de la oposición. No fue sino hasta después de las elecciones de marzo que el proyecto "Hamilton-Fuentealba" volvió a convertirse en el centro del conflicto institucional. La oposición había fracasado en su intento de lograr los dos tercios de votos en el Congreso (la UP obtuvo prácticamente el 44% de los votos).

El proyecto en cuestión significaba en los hechos que la oposición pudiera decidir cuáles entre las 258 empresas expropiadas después del 14 de octubre de 1971 podrían permanecer en el área de propiedad social y cuáles podrían ser transferidas al área privada. El Parlamento, mayoritariamente opositor al gobierno, podía bloquear la formación del APS y de este modo paralizar la gestión del gobierno.[9]

La lucha política entre el ejecutivo y el Parlamento giró en torno a un debate jurídico acerca de las atribuciones de los respectivos poderes del Estado: ¿podía la oposición rechazar los vetos del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional por simple mayoría, o bien necesitaba contar con los dos tercios de los votos? Para la oposición en bloque, la simple mayoría era suficiente. La DC argumentaba que el trámite de insistencia para imponer la voluntad del Congreso (los dos tercios de los votos) promulgado durante el gobierno de Frei había

[8] *La Prensa*, 25 de junio de 1972.

[9] Al proyecto se adjuntó el denominado proyecto de "empresa de trabajadores". En ese apartado se presentaba un esquema de cogestión para las empresas del área social similar al de Yugoslavia; la "empresa de trabajadores", asociación entre el capital y el trabajo, eludía la cuestión de las relaciones de producción dominantes. Su argumento central se basaba en la objeción de pasar el poder económico a manos del Estado. Bajo la consigna de: "No al Estado patrón", la DC libraba una intensa lucha ideológica en el seno del movimiento obrero y campesino.

caducado con la reforma constitucional de 1970. De ello se derivaba que el ejecutivo estuviera obligado a promulgar el proyecto "Hamilton-Fuentealba" o, en su defecto, a llamar a un plebiscito.

La UP mantenía el criterio de que en ausencia de insistencia —los dos tercios de los votos requeridos— no cabía legislar. Por lo tanto sólo promulgaría aquellas partes del proyecto sobre las que había acuerdo con la oposición. El Tribunal Constitucional, instancia mediadora a la que recurrió la UP, se declaró incompetente para resolver el conflicto entre los poderes.

En el mes de mayo, la DC integró su nueva directiva. Patricio Aylwin sustituyó a Fuentealba en la presidencia del partido. La consecuencia política de este reajuste interno en el seno de la DC era clara: el predominio de la llamada "línea dura". En efecto, mientras Fuentealba se pronunciaba por el ejercicio de "una oposición racional y no obstructiva" ya que "el gobierno caerá por el peso de sus propios errores",[10] Aylwin expresaba que "no está en discrepancia nada doctrinario ni programático, sino el estilo de conducción". Su estilo lo definía en la frase: "no dejar pasar una al gobierno utilizando todos los instrumentos legítimos tanto institucionales como en la base social".[11]

Para *El Mercurio* este cambio de línea de la DC no ofrecía dudas de interpretación. En su editorial del 20 de mayo, expresaba: "La elección de la nueva directiva de la democracia cristiana significó un refuerzo de la oposición." Y más adelante agregaba: "Aún a riesgo de simplificar en exceso los criterios que existen en la democracia cristiana, diremos que hay una línea que confía en que el desgaste de la popularidad del marxismo será inevitable [...] Esta corriente cree que hay que soslayar los conflictos, aceptar el diálogo y sacrificar muchas cosas para conseguir la subsistencia del régimen democrático, la posibilidad de elecciones, y por lo tanto, la derrota del marxismo. La línea que triunfó en la junta demócrata cristiana [...] cree que —dentro de la estricta legalidad— es preciso detener el avance del marxismo ante el peligro de que tal avance haga ilusorio el propio régimen democrático y permita el afianzamiento dictatorial del marxismo..." [12]

La oposición "razonable" había sido derrotada en el seno del PDC y con ella la posibilidad de contar con un centro político se esfumaba. Luis Maira comentaba este cambio de línea así: "...en materia de 'dureza', ¿adónde pueden llegar los demócrata cristianos? Participaron en el paro patronal de octubre, donde dirigentes suyos de los colegios profesionales tuvieron destacada intervención en la dirección de las

[10] *El Mercurio*, Santiago, 14 de mayo de 1973.
[11] *Ibidem.*
[12] *El Mercurio*, Santiago, 20 de mayo de 1973.

maniobras golpistas. Han apoyado todas las acusaciones constitucionales de la derecha, y ahora, de propia iniciativa, han propuesto una acusación colectiva contra todo el gabinete. Han llegado a una dirección política común con el Partido Nacional, y a las listas electorales conjuntas, como ocurrió en la última campaña parlamentaria. Han guardado silencio frente a las actividades de 'Patria y Libertad', a la 'reaparición' de Roberto Thieme, y se sabe que muchos de sus militantes y dirigentes juveniles tienen doble militancia con la organización fascista".[13]

En este contexto, la declaración de incompetencia por parte del Tribunal Constitucional cerraba el camino a toda solución institucional que no supusiera un compromiso entre el gobierno y la DC. La oposición en bloque declaró al gobierno ilegítimo: ¿con quién negociar?

Después del Tancazo (junio) los acontecimientos se precipitaron. El llamado de Allende a "tomar las industrias" colocó el tema del poder popular en el centro del debate. La DC argumentó que el presidente había violado el estatuto de garantías, colocándose en una situación de abierta ilegalidad. Frei expresó el 7 de julio en el Senado: "...se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad, y lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas, y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior".[14] Vale la pena recordar aquí que cuando se produjo el Tacnazo (octubre de 1969),[15] la CUT había llamado a una huelga general y ordenado la ocupación de fábricas, fundos y otros lugares de trabajo. Ante el temor de que esa sublevación militar desembocara en un golpe militar y la instauración de una dictadura militar, la CUT apoyó al gobierno de Frei. Entonces, se trataba de mantener la constitucionalidad y llegar a las elecciones de 1970. La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) manifestó su preocupación al ejecutivo ante la orden del presidente de la CUT. Algunos de los miembros del comité directivo promovieron una declaración de la SOFOFA "para señalar que, aunque la emergencia nacional justificó la adopción de medidas extraordinarias, llamar a los trabajadores a romper el orden constitucional era inaceptable, ilegal y absolutamente contrario a todos los principios democráticos". Pese a que la declaración no se hizo pública por considerar que el momento

[13] Luis Maira, "La nueva mesa de la DC", en *Chile hoy*, Santiago, núm. 48, 18 al 24 de mayo de 1973, p. 8.

[14] *El Mercurio*, Santiago, 8 de julio de 1973.

[15] Sublevación del regimiento Tacna, supuestamente apolítica (reivindicaciones corporativas).

no era adecuado, la SOFOFA envió una delegación a que discutiera el problema con Frei.[16]

En julio de 1973, Frei retomaba las expresiones con que los empresarios lo habían interpelado en 1969.

A mediados del mes de julio, la Iglesia intervino para buscar una salida a la crisis. El cardenal Silva Enríquez hizo un llamado al diálogo. La DC declaró aceptar ese llamado.[17]

Las vicisitudes de ese intento de diálogo estuvieron marcadas por el carácter irreconciliable de las posiciones en conflicto. La DC imponía condiciones para un diálogo, cuya aceptación, tanto Allende como el PC (el PR y el MAPU obrero-campesino) [18] lo sabían, implicaba el abandono mismo del programa de la UP. El gobierno negoció el desarme de los grupos armados al margen de la ley (Ley de Control de Armas); pero las condiciones impuestas por la DC iban mucho más allá: promulgación inmediata de la ley de reforma constitucional (proyecto "Hamilton-Fuentealba"), devolución de las industrias "usurpadas" durante la asonada militar de junio (el Tancazo). En síntesis, cambio sustancial de la política económica, lo que significaba un viraje hacia el centro en todos los frentes de acción del gobierno.[19]

En el seno de la UP, los esfuerzos de Allende y del PC por establecer un entendimiento con la DC crearon —como lo habían hecho los intentos anteriores— fuertes tensiones internas. Los comunistas, radicales y el MAPU obrero-campesino coincidieron en la necesidad de negociar con la DC aunque sus posiciones presentaban diferencias de matices. El partido socialista se opuso. El 12 de julio Carlos Altamirano expresaba: "El partido socialista no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del gobierno popular, de los trabajadores. En estos momentos, cualquier fórmula de transacción con la democracia cristiana sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno y en el resto de la reacción cuyo único e inalterable objetivo es recuperar el poder y sus privilegios [...] La directiva del partido demócrata cristiano habla de paz social y de concordia, pero en los hechos atiza la hoguera de la guerra civil. Unidos a lo más turbio de la reacción, esos dirigentes proclaman una falsa posición pacifista y una

[16] SOFOFA, Actas, 5 de noviembre de 1969.

[17] Véase *Mensaje*, Santiago, núm. 222, septiembre 1973, pp. 400-402 e *ibidem*, núm. 221, agosto de 1973.

[18] El MAPU se escindió como resultado de una crisis interna, en marzo de 1973: la línea de Garretón (MAPU) y la línea de Gasmuri (MAPU-obrero y campesino). Esta última, próxima al PC. Véase Harnecker, Marta, "La crisis del MAPU", *Chile hoy*, Santiago, núm. 40, 16-22 de marzo de 1973, pp. 5-7.

[19] *El Mercurio*, 12 de julio de 1973 y *La Prensa*, 27 de julio de 1973.

disposición al diálogo con el solo fin de desmoralizar a las masas y desarmarlas ideológicamente, debilitando así al gobierno." [20]

La UP intentaba una salida política a la crisis en momentos en que la crisis de dirección estallaba abiertamente en su seno y conocía, paradójicamente, el máximo extrañamiento respecto del movimiento popular. La solución al Tancazo fue una solución militar: la incorporación de los militares al gabinete en agosto.

Por otra parte, en el seno de la DC también estaban bloqueadas las condiciones para una salida política a la crisis. El senador Jorge Lavandero declaraba: "Propiciamos la instauración de un gobierno fuerte y autoritario... ¡Basta de conversaciones inútiles!" [21]

La negociación con la DC se planteaba en momentos de máxima debilidad del gobierno popular. Su ala izquierda apoyaba abiertamente la solución de fuerza como única salida: la tesis del enfrentamiento inevitable.[22]

El golpe militar de septiembre puso fin a la crisis de dominación extrema en que se debatía la sociedad chilena. La realidad se encargó de probar que ya era demasiado tarde para encontrar una salida política y, al mismo tiempo, que no había condiciones para un enfrentamiento militar. El gobierno se había quedado sin los instrumentos políticos para resolver la crisis a su favor y tampoco contaba con los instrumentos militares. Allende había triunfado en el plano político sobre sus enemigos. Con su derrota, el sistema político chileno moría también. La dominación, divorciada de la legalidad, reaparecía desnuda en la figura de los militares chilenos.

ii] *Las lecciones de la lucha institucional*

La democracia cristiana no se escindió internamente entre moderados y reaccionarios. El partido triunfó sobre la clase: la cohesión partidaria fue más fuerte que las tensiones internas creadas por los clivajes de clase y las ideologías presentes en su seno. Pese a su composición pluriclasista y, por lo tanto, la presencia entre sus bases de sectores cuyos intereses históricos de clase coincidían con el proyecto de la Unidad Popular, y al predominio de una ideología liberal-democrática entre

[20] *Chile hoy*, Santiago, núm. 59, 27 de julio-2 de agosto de 1973, p. 5.

[21] *Chile hoy*, Santiago, núm. 60, 3-9 de agosto de 1973, p. 5.

[22] La alternativa de un gobierno "UP-militares de izquierda", decidido a romper con la legalidad burguesa y apoyado en el movimiento popular (los cordones industriales) si en algún momento pudo tener realidad quedó sin fundamento después de la renuncia del general Prats al gabinete.

éstos, el partido permaneció unido bajo la hegemonía de su ala "dura". Cabe preguntarse sobre el porqué de este dato, decisivo en el desenlace de la crisis que conoció la sociedad chilena.

El proyecto reformista burgués de la DC se había opuesto al proyecto conservador de la derecha. El corte principal entre ambos se localizó, como señalamos ya, en el plano político. Era precisamente en ese plano en el que los "límites de tolerancia" de la derecha se habían estrechado. El impacto de las medidas del gobierno demócrata cristiano había jugado un papel decisivo en esa escisión política.

En noviembre de 1970 la DC apoyó el acceso al gobierno de Salvador Allende. Entonces, como lo señalara Claudio Orrego, ésa era su única opción. De no haberla seguido el partido se habría enajenado una buena parte de su clientela política, sobre todo entre las capas profesionales y burocráticas de la pequeña burguesía, partidaria de los cambios y fiel a las formas democráticas.

A partir de entonces, su acción estuvo centrada fundamentalmente en el sistema político (lo que no implica que más tarde no apelara a la violencia). La institucionalidad era su arma de defensa privilegiada contra sus enemigos (la UP). En esta lucha, la DC cumplió un papel decisivo en el logro del debilitamiento del gobierno popular. La lucha en torno a la definición de las áreas de propiedad lo muestra con claridad.

Para explicar la resistencia del partido a las tendencias centrífugas presentes en su seno, me parece que es necesario retomar el tema de las formas que reviste la lucha de clases en las situaciones de dependencia. Tema introducido en las dos primeras partes de este trabajo, y que constituye el hilo conductor de las hipótesis que se desarrollan a través del mismo.

La situación de dependencia genera un desfasaje entre los conflictos sociales (la definición de las clases en el nivel de la producción) y los conflictos políticos (la manifestación de los conflictos de clase en el plano político). Esta hipótesis, utilizada en nuestro análisis del movimiento obrero, también se aplica para el análisis del comportamiento de los "sectores medios", esos sectores cuya posición de clase reconoce, en su definición, una ambigüedad básica; no pertenecen ni a la burguesía ni al proletariado.

Estos "sectores medios" —que incluyen una gran parte del funcionariado público— se enfrentaron a la UP en un conflicto cuya expresión ideológica fue la oposición entre "democracia y dictadura".[28]

[28] En 1970 los empleados públicos eran aproximadamente 266 000. En esa cifra se incluía 68 000 miembros de las fuerzas armadas y carabineros, 70 000 burócratas, 55 000 empleados en servicios de salud y 73 000 en la educación. Los intelectuales y

El eje de esa lucha giró en torno a sus demandas de mantener un status privilegiado (que ya la política freiísta había debilitado). Este mundo de los funcionarios vio con horror la agudización de la lucha de clases que se traducía en el deterioro de sus niveles de vida y en la omnipresencia de la violencia. Para negarla, siguió fiel a una lucha política partidaria cada vez menos institucional y más violenta, con la esperanza de restablecer un orden, un Estado, en el que mantendrían sus viejas posiciones: en el que el movimiento obrero volvería a ocupar "su lugar" como antes.

La realidad se encargó de probar, a partir del golpe militar, que sus verdaderos enemigos no estaban en el bloque popular; que la oposición de clases pasaba por el enfrentamiento entre capital y trabajo.

La solidez partidaria de la DC (el "patriotismo de partido") [24] fue la contrapartida de este desfasaje entre el conflicto social y el conflicto político en la sociedad chilena. Desfasaje que había hecho posible un alto grado de institucionalización de los conflictos pero que, una vez rotas las bases del compromiso social en que se fundara el modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena, ya no permitió absorber la crisis política.

Con el golpe militar de septiembre llegó a su fin el sistema político institucional. Y con ese fin, la DC misma perdió su significado. Los militares se hicieron cargo de los intereses de la burguesía. En este nuevo "orden" no hay espacio para los funcionarios y el conjunto de los asalariados que constituían "los sectores medios" y se habían lanzado a una acción directa en defensa de sus privilegios.

b] LA RESISTENCIA CIVIL: EL "GREMIALISMO" Y LA LÍNEA DE MASAS DE LA BURGUESÍA CHILENA

La táctica de lograr el fracaso económico del gobierno popular ocupó un papel central en la ofensiva de la burguesía. Esta táctica había comenzado antes de que Salvador Allende accediera a la presidencia, el 3 de noviembre de 1970. Las maniobras del ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldívar, estuvieron destinadas a crear un caos económico que impidiera ese acceso.

En una primera etapa, sin embargo, la ofensiva de la oposición —divi-

los profesionales liberales alcanzaban a 185 000 personas. Finalmente, los ejecutivos o administradores llegaban a aproximadamente 55 000. Véase Harnecker, M. y Uribe, G., *Lucha de clases*, Santiago, Ed. Quimantú, vol. II, 1972.

[24] Gramsci.

dida— se concentró en el plano institucional. La burguesía estaba situada a la defensiva frente a los rápidos avances en el programa del gobierno. Mientras esta situación se prolongó, los distintos poderes del Estado cumplieron en el ejercicio de sus facultades: la Contraloría General de la República cursó sin problemas con estricta sujeción al derecho las resoluciones sobre expropiación e intervención de empresas; el Congreso aprobó por unanimidad la reforma constitucional para nacionalizar el cobre; la burocracia administrativa, en la que predominaban los funcionarios demócrata cristianos, acogió las instrucciones correspondientes.

Los empresarios, por su parte, respetaron las decisiones sobre precios. Durante los primeros meses del gobierno aceptaron la reducción de la tasa de ganancia, compensada en buena medida por la elevación de los niveles de actividad que les permitía defender el monto absoluto de sus ingresos.[25]

Pero esta situación habría de durar poco tiempo. Favorecida por el "bloqueo invisible" de Estados Unidos, la burguesía chilena comprendió muy pronto que tenía que concentrar sus esfuerzos en la meta de lograr el fracaso económico del gobierno. Sus primeras acciones se encaminaron a romper la política de precios y de ascenso del ingreso real de los trabajadores. Acelerar la inflación y entorpecer el abastecimiento se transformaron en sus objetivos inmediatos y en torno a ellos concentró su acción. Como observa Vuskovic,[26] la preservación de su dominio sobre importantes áreas del sistema productivo le facilitó esta tarea. Podía imponer alzas artificiales de los precios y regular la producción, llegando incluso a la destrucción deliberada de productos. La burguesía, observa el autor, se desplazó hacia la esfera de la distribución y comercialización, caracterizándose cada vez más como una burguesía especulativa. "Con los ingresos que en tales condiciones derivaba de la producción y, sobre todo las nuevas fuentes de ingreso que se le abrían a través de la especulación y el mercado negro, procuró restablecer su posición anterior en la distribución del ingreso nacional, obligando a nuevos y mayores aumentos de remuneraciones para defender el mejoramiento real de los asalariados, con los sucesivos efectos inflacionarios consiguientes." [27] Las condiciones de operación del capitalismo especulativo son distintas a las del capital industrial o financiero "normal".

Como se indica en un informe del MAPU: "Son los sectores mejor ubicados y con más práctica y conocimiento quienes pueden reaccio-

[25] Véase Vuskovic, Pedro, *Política económica y poder...*, *op. cit.*, pp. 12 *ss.*
[26] *Ibidem.*
[27] *Ibidem.*

nar rápida y adaptativamente a las oportunidades de obtención de ganancia que se abren. Aun entrando a la actividad especulativa, la burguesía monopólica no puede hacerlo sola, requiere de otros sectores. Comerciantes, transportistas, pequeños y medianos productores [...] son quienes desarrollan el capital especulativo." [28]

Estos sectores se convirtieron en aliados inmediatos de la burguesía monopólica para realizar sus propios intereses de clase: maximizar sus ganancias en las nuevas condiciones creadas por el capitalismo especulativo. Los transportistas fueron el pilar del movimiento gremial que desembocó en el paro de octubre de 1972 y en la ofensiva de agosto de 1973. Como observaba el *Time:* "Oficialmente, los camioneros han estado en huelga para protestar por la falta de repuestos; en realidad esperan derribar al gobierno, que según ellos, quiere dejarlos fuera del negocio." [29] La táctica de lograr el fracaso económico de la UP requería que la burguesía se apoyase en las bases de la sociedad. Los partidos tradicionales se revelaron insuficientes para librar esa batalla cuya meta final era el derrocamiento de Allende.

De este modo, la consigna de la burguesía pasó a ser "apoyarse en las masas democráticas".[30]

El eje del movimiento gremialista se constituyó en torno de los sectores patronales y técnico-profesionales. Unos y otros convergían en la defensa de sus intereses de clase. Los pequeños patrones —comerciantes, dueños de camiones— tenían un papel estratégico en el sabotaje económico. Sin embargo, como señala Mattelart, el movimiento gremial también se extendió a otros sectores: la resistencia cívica se libraba en los consejos de barrio, las asociaciones femeninas, las federaciones de estudiantes...[31]

La oposición controlaba los medios de comunicación de masas: el 70% de la prensa escrita y el 70% de las radioemisoras. Desde allí llevó a cabo una lucha ideológica destinada a transformar a una "mayoría silenciosa" en una "mayoría sediciosa". La lucha ideológica cobró una importancia decisiva en la creación del bloque contrarrevolucionario. Desde esta situación privilegiada la burguesía se lanzó a una ofensiva destinada a crear un movimiento de masas cuya primera acción de importancia fue el paro patronal de octubre de 1972. La "marcha de

[28] *Informe del* MAPU anterior a las elecciones de marzo de 1973, mimeo., sin fecha.

[29] *Time,* agosto 27 de 1973.

[30] Véase Mattelart, Armand, "La bourgeoisie a l'école de Lenine: le 'gremialisme' et la ligne de masse de la bourgeoisie", en *Politique aujourd'hui,* enero-febrero de 1974, pp. 23-46.

[31] *Ibidem,* p. 39.

las cacerolas vacías", en diciembre de 1971, había movilizado a las mujeres bajo el leit motiv del desabastecimiento.

i] *La gestación del "poder gremial"*

El movimiento gremial tenía sus antecedentes inmediatos en la gestión demócrata cristiana. Pero entonces los embriones de gremialismo no desbordaron la esfera de la agricultura.

La sola excepción importante fue en el terreno universitario.[82] Sin embargo, la ideología participacionista de la DC fue la base de su posterior desarrollo.

La primera noticia de conversaciones entre partidos de la oposición y gremios patronales fue la reunión celebrada el 4 de marzo de 1972 y conocida como "el complot del pastel de choclo".[83] Los allí reunidos acordaron que todo el que pensase que: "Nuestra libertad, nuestra democracia y los derechos humanos están seriamente amenazados [tiene la obligación de] actuar con decisión y valentía [...] Ante esta situación, no cabe la cobardía ni el desaliento. Es la hora de la acción." [84] Se presentó un documento que proponía la formación del movimiento "Solidaridad, Orden y Libertad" (SOL) destinado a desarrollar las líneas de acción.

El 12 de abril la oposición unida llevó a cabo la "Marcha de la democracia". Poco después, la coordinación conjunta de una línea de masas quedó concretada. De la marcha en las calles se pasaba a un plan concertado de huelgas cuyo eje eran los gremios y cuyo objetivo final era el paro nacional. El paro de octubre se inició con el conflicto del gremio de propietarios de camiones de la provincia austral de Aysén. El motivo aducido por éstos era el proyecto de empresa estatal que el gobierno contemplaba para esa zona del país. La huelga de los camioneros fue el detonante. Inmediatamente le siguieron los gremios empresariales (Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura, Cámara de Comercio, Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, etc.), que alegaban solidaridad con los transportistas en huelga. A ellos se sumaron los comerciantes y profesionales. *El Mercurio* del 22 de octubre describía a "esta nueva fuerza social" así: "Han ido al paro camioneros, modestos comerciantes, artesanos y pequeños industriales, obreros, campesinos, empleados, técnicos y profesionales,

[82] *Ibidem.*

[83] *Los gremios patronales,* Santiago, Ed. Quimantú, documentos especiales, p. 5, *Chile hoy,* Santiago, núm. 33, 26 de enero-1 de febrero de 1973, p. 6.

[84] *Ibidem.*

entre otros. La composición social de los gremios en huelga no puede ser catalogada ni de burguesa, ni de obrera, ni de campesina. Distintas condiciones sociales se reunieron en este movimiento, porque en él prima la actividad o la especialidad propia del individuo y no su artificial clasificación en el binomio explotadores y explotados."

El movimiento de octubre fue presentado por la oposición como la protesta del "pueblo" chileno. Su pliego de peticiones, era "el Pliego de Chile". Sus demandas eran demandas políticas.

Los cordones presentaron su pliego, "el Pliego del Pueblo". El Pliego de Chile pedía la eliminación de cualquier sanción contra los participantes en la huelga, la absoluta libertad de la prensa de oposición para publicar cualquier clase de información, incluso proposiciones subversivas, la subordinación de todos los cambios estructurales al Congreso, la participación de los gremios en la planificación, la promulgación de la ley de control de armas, la eliminación de las JAP.[35] A ello se agregaba las demandas de cada gremio.

Como respuesta, el Pliego del Pueblo exigía "la nacionalización de todas las empresas de distribución, las compañías más importantes de transportes, los monopolios industriales, las firmas constructoras principales y el resto de los bancos y compañías de seguros; la no devolución de las empresas ocupadas por los trabajadores durante el paro de octubre; la expropiación de los fundos mayores de 40 hectáreas de riego básico, la expropiación de todas las inversiones norteamericanas en Chile y la suspensión del pago de la deuda externa; reajustes discriminados para los trabajadores; aumento de la tributación al capital; servicios sociales y trato más justo a la mujer".[36]

Los trabajadores habían impedido la paralización del país. La CUT llamó a sus miembros al estado de emergencia y a todos los partidarios del gobierno a realizar trabajos voluntarios. Los cordones industriales se multiplicaron; los comandos comunales coordinaron la acción de las juntas de vecinos, los centros de madres, las asociaciones estudiantiles, los pobladores y campesinos. La economía del país siguió funcionando y la clase obrera cobró confianza en su capacidad para hacer frente a la burguesía. La mayoría de los patrones estaban en huelga y la mayoría de los trabajadores continuaban su trabajo. Las oposiciones de clase se visualizaron nítidamente; la sociedad estaba escindida en dos campos. Los obreros demócrata cristianos no acataban el paro.

El gobierno se encontraba inmovilizado, no tenía los recursos para aplicar una represión sistemática contra la acción contrarrevolucionaria

[35] *El Mercurio*, octubre 22 de 1972.

[36] El Pliego del Pueblo apareció transcrito en *Marxismo y revolución*, Santiago, núm. 1, julio-septiembre de 1973, pp. 229-240.

de la burguesía y los gremios. El Estado se diluía en la sociedad civil. El sistema político estaba desgarrado por la lucha de clases. El movimiento popular desbordaba la estrategia de la UP.

En estas condiciones, el 2 de noviembre Allende anunció la constitución de un nuevo gabinete con participación militar. La huelga insurreccional de la burguesía había fracasado gracias a la acción de los trabajadores. Las fuerzas armadas entraron en escena para restablecer el orden. La burguesía había fracasado en el logro de su meta de hacer claudicar el programa de la UP, sin embargo, le rendía sus dividendos. Las consecuencias económicas del paro agravaron la crisis económica: mercado negro, inflación y especulación, se reforzaron mutuamente. El margen de acción de la UP se estrechaba cada vez más.

A fines de 1972 el gobierno reconoció la necesidad de llevar a cabo una política de control del abastecimiento. El anuncio del ministro Flores sobre la política de distribución del gobierno fue recibido por la oposición como "el anuncio oficial de la dictadura y el comienzo de un ataque a fondo de la Unidad Popular contra las garantías constitucionales".[37]

El 28 de noviembre Allende anunciaba en un mensaje que había llegado la hora de que todos se apretaran los cinturones. La oposición respondió que "la UP estaba tratando de controlar a Chile por el estómago".

La huelga insurreccional de octubre probó a la burguesía que era necesario intensificar su línea de masas. Pocos días después de finalizada la huelga, apareció en circulación el libro de Claudio Orrego, *El paro nacional*. Este "libro de combate", según las palabras de su autor [38] (el mismo que había diseñado la "estrategia de los mariscales rusos" para Chile) se proponía reflexionar sobre las lecciones de octubre. Para Orrego el gremialismo era el medio con el que se podía poner fin a la situación de empate político. Sin embargo, aclaraba allí, no se trata de un fenómeno poujadista. Los gremios no prescindieron de los partidos políticos y muchos de ellos respondían a la movilización de base de los militantes de la DC.[39] Por cierto que se preocupa en dejar constancia de que los gremios fueron los conductores del conflicto.

¿Cómo ve este estratega militar la participación de los militares en el gabinete? Allende apeló a la conciencia democrática de los militares, "pero ya el juego está demasiado conocido para que opere eficazmente.

[37] *El Mercurio*, 11 de enero de 1973. Artículo titulado "El umbral de la dictadura".

[38] Orrego, Claudio, *El paro nacional*, Santiago, Ed. del Pacífico, noviembre de 1972, p. 7.

[39] *Ibidem*, p. 21.

La palabra presidencial está demasiado vencida como para que tenga efecto. Su legitimidad democrática está demasiado derruida como para que alguien acepte en convertirse en el pato de la boda del MIR y el partido socialista".[40]

Orrego contaba con el éxito electoral de marzo. Noviembre no era el momento de llamar a los militares; la UP caería sola. La acumulación de fuerzas, la articulación de varios frentes de ataque —"cada cual haciendo lo suyo"— preparaban el Moscú de la Unidad Popular. Los gremios habían irrumpido en la escena política levantando la bandera de la defensa de las libertades. En los hechos, defendían sus negocios.

El paro de octubre marcó el punto de inflexión más nítido entre las dos etapas en que puede ser estudiada la Unidad Popular. A partir de entonces ya no se puede gobernar; la sociedad queda a la deriva.

c] LA OFENSIVA DE AGOSTO DE 1973: LA ESPERA DEL DESENLACE

Inmediatamente después de las elecciones de marzo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Jorge Fontaine, expresaba: "Corresponde a las tres fuerzas fundamentales asumir un papel decisivo en la nueva organización política y social. Ellos son: los partidos políticos que están dispuestos a construir y no a provocar el caos, las fuerzas armadas, cuya acción es indispensable para restablecer la disciplina y la eficiencia e impulsar el progreso, y el poder gremial que constituye la palanca del desarrollo y el factor de cohesión social de la comunidad nacional." [41] Los gremios se lanzaban abiertamente a la reconquista del Estado en una nueva ofensiva cuya gestación se inició después de las elecciones de marzo.

Ante los anuncios de una nueva acometida de las fuerzas opositoras la CUT desplegó sus tácticas de movilización tradicionales. A mediados de junio llamó a una huelga general de 24 horas destinada a "probar que sólo los trabajadores pueden paralizar al país". Ese mismo día los obreros se congregaron para escuchar el mensaje presidencial. El 29 de junio, después de abortado el intento golpista, una nueva manifestación de la CUT salió a las calles de Santiago. La CUT se encontraba en una difícil posición política. Por una parte no aceptaba el desarrollo de los cordones industriales y comandos comunales que escaparan a su control, por otra, reconocía —Calderón y Figueroa lo hicieron explí-

[40] *Ibidem*, p. 29.
[41] *Chile hoy*, núm. 41, 21-29 de marzo de 1973, p. 5.

citamente— la importancia de estas nuevas formas de organización de la clase obrera.[42]

En agosto, León Vilarín —presidente de la Confederación de dueños de camiones y del Comando de acción gremial (organización permanente creada después del paro de octubre de 1972) — declaraba: "Creo que se toca fondo cuando ya nadie cree en la palabra del Supremo Gobierno..." [43]

Antes de entrar a los acontecimientos de agosto con los que se abre la ofensiva gremial, y mientras retenemos las imágenes por un lado de la Unidad Popular dualizada en su seno, y por otro de una oposición que presentía cercana su victoria, es ilustrativo preguntarse cuáles eran los temas de la batalla ideológica que la oposición llevaba a cabo.

La temática del caos económico y la dictadura continuaba siendo el centro de la lucha ideológica de la oposición. En abril, *El Mercurio* se preguntaba: "¿Por qué el gobierno no protesta por la inflación?" La respuesta era: "Porque para los comunistas existen dos clases de chilenos. ELLOS Y USTED." La consigna a seguir: "¡No se lamente! Piense, reflexione, actúe." [44]

A estos dos grandes temas se sumó la campaña contra el proyecto del gobierno de crear la escuela nacional unificada. La neutralidad de la Iglesia se quebró. Las declaraciones del obispo de Valparaíso, Monseñor Tagle, eran el primer pronunciamiento público de un miembro de la alta jerarquía eclesiástica en contra del gobierno. En agosto la ofensiva gremial comenzó nuevamente con el conflicto de los gremios patronales y técnico-profesionales. La huelga se prolongó durante los meses de agosto y septiembre. Sin embargo no logró la fuerza que tuviera en octubre.[45] La oposición esperaba el concurso de las fuerzas armadas. El 11 de septiembre las filas militares respondieron.

En ese breve lapso, las actividades terroristas de Patria y Libertad (véase apartado siguiente) se intensificaron. Las reestructuraciones del gabinete se sucedieron sin poder alcanzar estabilidad. La CUT y los cordones industriales se volcaron a una acción destinada a repetir la experiencia de octubre. Sin embargo, las bases estaban cansadas y confundidas y el éxito fue menor que entonces. Los empresarios (la SOFOFA), cuya acción había estado marcada por un fuerte antiestatismo en respuesta al gobierno de Frei, hicieron del tema de la ruptura del Estado

[42] Para un análisis de la posición de los dirigentes de los cordones, véase "Todo sobre poder popular", en *Chile hoy*, núm. 60, 3-9 de agosto de 1973.

[43] *El Mercurio*, 26 de agosto de 1973.

[44] *El Mercurio*, 26 de agosto de 1973.

[45] Sobre la huelga, véase *Chile hoy*, núms. 60-65, agosto-septiembre de 1973 y *Punto final*, núm. 191, 28 de agosto de 1973, pp. 30-32.

su motivo de lucha. La crisis de dirección en el seno de la UP había alcanzado su forma más extrema. Para muchos, "la guerra civil ya había comenzado". El Estado había sido arrasado por la sociedad civil. El gobierno ya no gobernaba; proliferaban los grupos armados y el poder judicial protegía a los grupos "fascistas", mientras el ejército reprimía a los obreros "en cumplimiento" de la ley de control de armas. La situación de indefinición, de espera, ya no podía mantenerse más.

d] PATRIA Y LIBERTAD: EL BRAZO ARMADO DE LA BURGUESÍA

Mientras el Partido Nacional ofrecía una alternativa sediciosa "razonable", basada en el desarrollo de un frente de masas y sin descuidar el terreno institucional, Patria y Libertad se definía como un aparato político-militar-golpista y conspiraba abiertamente en el seno de las fuerzas armadas. Este movimiento se había formado una semana después de las elecciones presidenciales de 1970. Pablo Rodríguez Grez y unos doscientos abogados más anunciaron el comienzo de "una lucha frontal para impedir que el marxismo deje caer su garra sobre nuestro país". A imagen y semejanza de la Asociación Anticomunista de Chile (ACHA), de la década de 1940, este movimiento se transformó en un frente nacionalista y reclutó sus cuadros entre los sectores tecnocráticos de la extrema derecha, especialmente los grupos más jóvenes. En sus primeras declaraciones, Pablo Rodríguez preconizó la teoría del Estado integrado, las empresas integradas, el gobierno autoritario. Durante 1971 se organizó una campaña propagandística destinada a hacer conocer los objetivos de la organización a través de las emisoras de radio (Radio Agricultura y Radio Balmaceda). En 1972 cobraron importancia sus acciones terroristas destinadas a apoyar el paro de octubre.

En el primer consejo nacional de sus dirigentes (Temuco, mayo de 1973), Patria y Libertad hizo pública una declaración: "Nuestra máxima aspiración consiste en sustituir la sociedad organizada sobre la base de valores burgueses, demoliberales y capitalistas, por una sociedad que se organice sobre la base de los valores nacionalistas, demofuncionales e integracionistas [...] el país no tiene una salida político-institucional. La única fuerza capaz de superar este trance está constituida por el capital moral y militar de las fuerzas armadas, el respaldo de los hombres de trabajo a través del movimiento gremial y el nacionalismo como ideología integradora." [46]

[46] *El Mercurio*, 24 de mayo de 1973.

Patria y Libertad hablaba en nombre de los valores nacionales y levantaba la consigna del reencuentro nacional de los chilenos sobre la base del retorno a las instituciones corporativas. El tema del Estado integrado era la contrapartida de este corporativismo de ultraderecha. El "frente invisible" de Patria y Libertad estaba integrado por personajes importantes de la burguesía.[47] La resistencia civil —la derecha en huelga— era una de las caras de la subversión contra el gobierno de Allende. La otra estaba constituida por los comandos terroristas de Patria y Libertad. Esta cara, abiertamente ilegal, estaba protegida y financiada por la burguesía; los dólares americanos fluían en su apoyo.

Como observa Touraine,[48] este movimiento no se caracterizó por la participación de los "sectores medios". A diferencia de los gremios, en los que la pequeña burguesía y las capas profesionales y burocráticas se lanzaron a una acción directa destinada a defender sus intereses, Patria y Libertad nucleaba a los jóvenes de la burguesía. Sus líderes, *play boys* que aparecían en elegantes restaurantes de Santiago, nada tenían de semejanza con las cabezas del movimiento gremial.

Patria y Libertad era el puente entre la burguesía y las fuerzas armadas. La "Base operativa de las fuerzas especiales" (BOFE), organización denunciada por el MIR[49] tenía contactos en las unidades militares. Animada por militantes de Patria y Libertad, era la encargada de llevar a cabo los atentados terroristas en coordinación con una plana mayor militar.

A la táctica desplegada en el plano ideológico —crear una conciencia anti-UP entre los militares— la burguesía sumaba otra táctica más sutil e indirecta de penetración entre sus cuadros. Después del Tancazo, el golpismo era su única salida: sea el "golpe blando" promovido por la democracia cristiana o el golpe de los sectores más fascistas. En la lucha por la reconquista y restauración del Estado, los militares constituían un sector estratégico. La burguesía chilena mostró que no estaba dispuesta a ceder sin haber agotado antes todos los medios de defensa y destrucción a su alcance. La lucha parlamentaria, el combate en las calles, la insurrección civil y el golpismo.

[47] *Chile hoy*, núm. 14, 15-21 de septiembre de 1972, p. 7. Véase la carta de Roberto Thieme a Orlando Sáenz (presidente de la SOFOFA), en *Última hora*, 8 de agosto de 1973.

[48] Touraine, A., *Vie et mort..., op. cit.*, p. 133.

[49] Véase *Chile hoy*, núms. 64-65 de septiembre de 1973. Informe político del MIR donde se presenta la documentación sobre los preparativos golpistas y la confluencia de dos proyectos de golpe de Estado (el de la DC y el de los sectores más fascistas).

CAPÍTULO VI

LOS MILITARES Y EL DESENLACE DE LA CRISIS

a] EL GOLPE "FASCISTA" *

Cuando Gramsci se pregunta qué es el fascismo, responde: "El fascismo es la fase preparatoria de la restauración del Estado; es decir, de un recrudecimiento de la reacción capitalista, de una exasperación de la lucha capitalista contra las exigencias más vitales de la clase proletaria. El fascismo es la ilegalidad de la violencia capitalista: la restauración y la legalización de esta violencia." [1]

En efecto, el Estado —observa Gramsci— significa concentración de la dirección y de la acción.[2] En Chile, en 1973, el gobierno ya no gobernaba. Los distintos poderes del Estado actuaban por su cuenta. El Parlamento y la Contraloría paralizaban la gestión del ejecutivo; el poder judicial dejaba impune a los grupos terroristas; los militares reprimían a los obreros y campesinos aplicando la Ley de Control de Armas. La sociedad civil había arrasado con el Estado. La desintegración de las instituciones políticas llegaba a su punto extremo.

El golpe militar de septiembre fue un golpe "fascista" en este sentido gramsciano del término: vino a preparar la restauración del Estado

* Es importante aclarar que el uso del término "fascista" tiene aquí un valor metafórico. Soy consciente de que implica una generalización histórica incorrecta. Sin embargo, se trata de destacar la conservación del régimen capitalista fuera de los marcos de la institucionalidad ("la ilegalidad de la violencia capitalista"). Como opuesto al concepto de "revolución", el de "fascismo" tiene un significado más simbólico que analíticamente útil para comprender las formas específicas que, a diferencia de la Europa de los años 30, revisten las dictaduras militares en América Latina. Con esta advertencia utilizo el término, consciente de que se trata de una homonimia con los casos europeos y no de una sinonimia. Y, como señala Debray: "la homonimia es espontánea, cómoda, generosa, pero no implica la sinonimia" (R. Debray, *La critique des armes, op. cit.*, tomo I, p. 48).

[1] Gramsci, Antonio, *Sul Fascismo,* selección de textos por Enzo Santarelli, Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 90-91.

[2] Gramsci dice: "Stato significa accentramento di comando e d'azione", p. 93.

chileno. Y no por casualidad lo hizo en nombre de Diego Portales. Los militares asaltaron el poder persuadidos de que las fuerzas armadas eran la única institución con recursos para poner fin a la crisis (esto es, para resolver la contradicción que el proyecto freiísta había generado en la década de 1960 sin poderle dar respuesta, y que tampoco la Unidad Popular pudo resolver).

A diferencia de otras situaciones latinoamericanas en las que el debilitamiento y desintegración de las instituciones políticas y de los partidos fue un proceso prolongado en el tiempo, en Chile esta situación fue breve. El sistema político había mostrado su resistencia y su flexibilidad para absorber los conflictos de clase dentro de los límites de lo negociable. Allí, los militares habían permanecido entre bastidores, tutelando el mantenimiento de los límites de tolerancia del sistema político.

Las contradicciones planteadas por las exigencias de un nuevo modelo de acumulación en la década de 1950 (el agotamiento de la etapa de sustituciones fáciles) se habían intentado resolver desde un proyecto reformista burgués (el gobierno de la democracia cristiana). Pero esta solución política a las exigencias de modernización capitalista terminó por romper las bases del pacto social implícito sobre el cual se había fundado la especificidad y estabilidad del sistema político chileno. Rotos esos límites de tolerancia, las condiciones mismas para la reproducción del régimen capitalista de producción comenzaron a peligrar. En la coyuntura producida por la crisis de la dominación burguesa se instaló en el gobierno la Unidad Popular. Su meta era crear las condiciones para la transición al socialismo en Chile. Pero la puesta en marcha de su programa de gobierno desarticuló las reglas de juego de la economía capitalista. La agudización de la lucha de clases que se desató entonces escapó a su control.

En 1973 los militares tenían la última palabra. Esta percepción era no sólo la de la derecha, sino además la de la mayoría de los sectores de la izquierda. Sin embargo, pocos pudieron predecir la naturaleza que habría de tener el golpe militar de septiembre.

En agosto, la revista *Mensaje* publicó un artículo de Jaime Ruiz Tagle, titulado "Las fuerzas armadas y el poder popular", en el que se decía: "A las fuerzas armadas, acostumbradas a la disciplina y el orden, les resulta difícil comprender este anárquico movimiento social. Sin embargo, los oficiales más lúcidos parecen convencerse de que el *poder popular* es una realidad dinámica, viva, que sólo una masacre podría aplastar..." [8]

[8] *Mensaje*, Santiago, núm. 221, agosto de 1973.

Después del "Tancazo" del 29 de junio, la imagen del profesionalismo de los militares chilenos se quebró. Con ella se debilitó también la confianza en el poder de convocatoria del gobierno sobre los militares constitucionalistas. La deliberación abierta en el seno de las tres armas era visible. El interrogante que todos se formulaban entonces era cuál sería el modo de intervención del ejército. La alternativa con que contaba la izquierda era la de la guerra civil: [4] escisión del ejército y acción de los sectores militares en favor del gobierno. Esa acción sería apoyada por amplios sectores de la población (en especial, por los cordones industriales, en los que hubo intensos preparativos militares después del "Tancazo".[5]

Se especulaba acerca de distintos proyectos golpistas en el seno de la derecha.[6] Uno de ellos era el del sector freiísta de la DC. Se trataba de lograr un pronunciamiento militar pero sin que la situación escapara del control del PDC (es decir, sin que el PN impusiera su línea junto a los oficiales "brasileños"). Las fuerzas armadas pasarían a ocupar puestos clave en el gabinete, convocadas para "restaurar la seguridad nacional" que la crisis económica había puesto en peligro.[7] Pero la DC también estaría presente. Por esta vía se impondría una opción "centrista" que liquidaría las metas de la UP.

El modelo "freiísta" del golpe no era el único modelo para la burguesía. La convocatoria del PN al cuerpo de oficiales era mucho más nítida que la de los freiístas. Se trataba de derribar por la fuerza a Allende. *El Mercurio* publicó un artículo titulado "Llamamiento a la gente sensata", de Carlos Vicuña Fuentes, que es ilustrativo del llamado modelo fascista de golpe [8] y en el que se expresaba: "El deber de la gente sensata es poner fin al saqueo y al desorden, estimulados y amparados por el gobierno inepto y enloquecido que nos aplasta, remplazando de hecho éste por otro [...] Para llevar a cabo esta empresa política salvadora hay que renunciar a los partidos, a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa y envenenada, y entregar a un

[4] Garcés, J., *El Estado y los problemas..., op. cit.*, p. 44.

[5] El debate en torno a los "cordones paralelos" entre el PC y la izquierda de la UP se agudizó a partir del "Tancazo". Para un análisis de las posiciones de los dirigentes de los cordones industriales, véase "Foro sobre poder popular", *Chile hoy, op. cit.*

[6] Informe político del MIR: "Dos vías, un golpe", *Chile hoy*, núm. 65, cit.

[7] Es ilustrativo al respecto el informe económico presentado por Sergio Molina, director del departamento técnico del PDC, al consejo plenario del partido, en abril de 1973. Allí se analiza la situación económica y se señala que "Las FFAA son un factor determinante del futuro político de Chile." Véase la versión completa del informe en *Política y espíritu*, Santiago, año XXVIII, (343), mayo de 1973, pp. 68-80.

[8] *El Mercurio*, 27 de junio de 1973.

corto número de militares escogidos la tarea de poner fin a la anarquía política..." [9]

En síntesis, para el PN y los sectores de Patria y Libertad, se trataba de instalar un régimen autoritario-militar encargado de reconstituir los mecanismos de acumulación capitalista y garantizar la "paz social". El denominado "modelo fascista" de golpe fue el que triunfó en septiembre. Al asaltar el poder los militares liquidaron el sistema político chileno, y por lo tanto a la democracia cristiana misma.

La explicación del comportamiento de los militares chilenos (tradicionalmente no intervencionistas) se ve doblemente dificultada. Por un lado, por la dificultad que ofrece la naturaleza del problema: los militares constituyen un desafío teórico en la reflexión actual sobre América Latina. Y ello se debe no sólo a la dificultad presente en toda explicación de los comportamientos sociales sino al hecho de que la lógica de la acción, en este caso, es "misteriosa" para los civiles. Por otro lado, la ausencia de estudios sistemáticos hace más difícil la tarea. En efecto, salvo contadas excepciones, la atención sobre los militares chilenos comenzó en los últimos meses del gobierno de Allende.[10]

b] LA DEFINICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS POR SU LUGAR EN EL APARATO ESTATAL

Una rápida mirada a la historia de los militares chilenos permite mostrar cuáles fueron las características más salientes de la imagen que sobre ellos se construyó. Al igual que en el resto de América Latina los militares chilenos cumplieron un papel fundamental en el proceso de formación de la sociedad nacional. Sin embargo, a diferencia de otras situaciones latinoamericanas (como la peruana o la boliviana)

[9] *El Mercurio,* 27 de junio de 1973.

[10] Las fuentes más importantes que existen sobre el tema son: Joxe, Alan, *Las fuerzas armadas..., op. cit.,* el estudio de Roy Hansen, *Military Culture and Organizational Decline: A study of the chilean army* (Tesis doctoral, UCLA, 1967); North, Liisa, *Civil Military Relations in Chile, Argentina and Perú,* Berkeley, Institute of International Relations, University of California, 1967; Joxe, A., "L'armée chilienne", *Les Temps Modernes,* 29 (323), junio de 1973. Después del golpe aparecieron numerosos ensayos, entre los cuales cabe citar: North, Liisa, "Los militares en la política chilena", *Revista Mexicana de Sociología,* IIS, México, vol. XXXVII (2), abril-junio de 1975; Rojas, Robinson, *Éstos mataron a Allende,* Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1974; Nef, J., "The politics of repression: the social pathology of the chilean military", *Latin American Perspective,* vol. 1 (2), verano de 1974. Finalmente, para un análisis de los militares durante el gobierno de la UP véase la recopilación de los materiales de la revista *Chile hoy,* en García, Pío, *Las fuerzas armadas en Chile,* México, Siglo XXI, 1974.

el orden conservador limitó el poder militar. Esta temprana subordinación del poder militar al civil hizo posible que en Chile los militares fueran percibidos como la expresión armada de la nación antes que como los guardianes del orden establecido. La también temprana profesionalización de sus cuadros, así como la victoria en la guerra del Pacífico, robustecieron esta imagen de los militares chilenos.

La participación política abierta de las fuerzas armadas durante el período 1919-1932, en el contexto de intensos conflictos sociales, apareció asociada a la democratización de la estructura de poder. Como consecuencia del impacto del enclave minero sobre la articulación de las clases sociales en la sociedad, el Estado chileno se abrió a la participación de nuevas fuerzas sociales. En este proceso histórico de apertura del Estado, los militares aparecieron jugando un papel decisivo. Pero su carácter "progresista" era el efecto de una ilusión: esa apertura, garantizada por los militares, era en realidad el modo de defenderse de la burguesía. Finalmente los militares aparecieron a la cabeza del movimiento que culminó en la "República Socialista" de 1932. Pero este primer desafío —legado de la crisis mundial de 1930— tuvo una corta vida y fue liquidado por las mismas fuerzas armadas. Desde entonces los militares permanecieron entre bastidores. La capacidad de absorción de los conflictos mostrada por el sistema chileno no hizo necesaria su intervención directa en el proceso político. La institucionalización del movimiento obrero, la negociación del conflicto de clases, los situaba en una posición política de "neutralidad".

El comportamiento de los militares chilenos fue ideológicamente trasmutado en esta trilogía: neutralidad política, profesionalismo y carácter progresista de las fuerzas armadas. Pero esta imagen era tributaria de una ilusión de larga trayectoria en la sociedad chilena. Del mismo modo que el Estado era percibido ideológicamente como "un Estado por encima de las clases", los militares eran percibidos como esencialmente apolíticos.

Si se descorre el velo ideológico, la realidad muestra que los militares chilenos no intervinieron directamente en el proceso político porque las características del sistema político aseguraron su estabilidad por mucho tiempo. Cuando lo hicieron (1924-25, 1932) su acción estuvo orientada a crear y garantizar las bases de un sistema político restringido, o sea a tutelar la dominación burguesa en las condiciones particulares de funcionamiento de la sociedad chilena (véase primera y segunda parte de este trabajo).

Como lo muestra Roy Hansen,[11] el origen social de los militares

[11] Hansen, Roy, *Military culture..., op. cit.*

chilenos se encuentra fundamentalmente en los "sectores medios" (la pequeña burguesía tradicional y la nueva pequeña burguesía, en términos de Poulantzas).[12] Por otra parte, en ese mismo estudio se comprueban las vinculaciones sociales de los oficiales con la burguesía. En cuanto a su composición de clase y a sus relaciones sociales, los militares chilenos siguen la pauta de los ejércitos latinoamericanos.

Sin embargo, esta variable es, *per se,* incapaz de dar cuenta del comportamiento militar. El factor que a mi juicio resulta decisivo para alcanzar una explicación, es el lugar que ocuparon las fuerzas armadas en el aparato estatal chileno. En efecto, el apoliticismo de los militares chilenos fue la contrapartida del modo específico de funcionamiento del sistema político chileno. Sólo analizando las características que hicieron de éste un sistema excepcionalmente estable se puede llegar a comprender el papel asignado a los militares dentro del Estado. A la inversa, la importancia creciente de los militares en otras situaciones latinoamericanas y su intervención en el proceso político fueron el resultado de un proceso de inestabilidad política crónica, de incapacidad de las burguesías locales para consolidar una dominación legítima de clase.

A la definición de los militares por su lugar en el aparato estatal —variable en cada contexto histórico determinado— se agrega un factor propio de las instituciones armadas. Éstas se caracterizan por su estructura jerárquica y autoritaria, por la segregación del mundo civil, por el uso de la violencia como solución óptima. Son instituciones "totales", que configuran un tipo *sui generis* de personalidad y de relaciones sociales entre sus miembros. La fidelidad (voluntaria o compulsiva) a la institución, el "espíritu de cuerpo", resume la especificidad de este orden institucional. Para el mundo de los civiles es una institución misteriosa.

El carácter profesional de las fuerzas armadas tiende a privilegiar los aspectos corporativos (sobre la composición de clase) en las relaciones entre ellas y los grupos dominantes en el aparato estatal. De este modo, cuanto mayor sea el grado de profesionalismo de los militares (y por lo tanto mayor su cohesión interna y su capacidad organizativa), más fuerza tendrá cualquier convocatoria que apele a su autoridad para ejercer el arbitraje entre las clases o fracciones de clase en conflicto. Esta situación explica la paradoja de que el papel profesional de los militares aparezca asociado a su "neutralidad" política, como también

[12] Poulantzas, Nicos, *Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui,* París, Seuil, 1974, pp. 207 *ss.*

a las expectativas sobre su intervención para defender el *statu quo* o transformarlo.[13]

La neutralidad política de los militares o su intervención directa en el proceso político dependen de la definición de éstos dentro del aparato estatal. Pero en ambos casos el grado de profesionalismo —la fuerza del "espíritu de cuerpo" sobre las tendencias centrífugas dentro de la institución— es una variable interviniente que debe ser tenida en cuenta en el análisis de la acción de los militares. Por eso vale la pena destacar que los militares chilenos tenían un alto grado de profesionalismo y por lo tanto de disciplina y cohesión interna. Este rasgo aparece asociado a su prolongada trayectoria de no intervención en el proceso político, en el contexto de la definición del lugar ocupado por éstos en el aparato estatal chileno (factor decisivo para explicar su neutralidad). También es necesario señalar que una vez rotas las bases de la estabilidad del sistema político chileno y agudizada la lucha de clases como consecuencia de las medidas del gobierno popular, el profesionalismo de las fuerzas armadas fue un factor decisivo en el éxito del golpe fascista de septiembre. El ejército chileno, unido en su cohesión profesional, constituyó un instrumento disciplinado del golpe de Estado que derribó a Allende. Éste no se encontró, al asumir la presidencia en 1970, ante un ejército corrupto, desorganizado y desmoralizado como el de Cuba en la época de Batista.[14] Por el contrario, se trataba de un ejército altamente profesionalizado cuyos cuadros habían sido educados dentro de los marcos del Programa de Ayuda Militar de los Estados Unidos (PAM).[15] Un ejército con una trayectoria de no intervención, disciplina interna, capacidad organizativa y una ideología constitucionalista cuyos contenidos estaban penetrados por las doctrinas de seguridad interna y contrainsurgencia (desarrolladas en estrecho contacto con la fuerza militar norteamericana).

c] LA POLÍTICA MILITAR DE LA UNIDAD POPULAR

La Unidad Popular encadenó su estrategia a una visión fundada en largos años de trayectoria de los militares chilenos, y apuntó a asegurar

[13] Para una interpretación del papel profesional de las FFAA asociado a la intervención en el proceso político, véase O'Donnell, Guillermo, *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

[14] Véase González, Edward, *Cuba under Castro. The limits of charisma*, Boston Houghton Mifflin Co., 1974, pp. 89-90, cit. en North, Liisa, *Los militares...*, *op. cit.*, p. 486.

[15] Jóxe, A., *Las fuerzas armadas...*, *op. cit.*, y North, L., *ibidem*.

la continuidad de esa trayectoria. La afirmación del carácter constitucionalista de las fuerzas armadas —el respeto a un gobierno constitucionalmente elegido— no significaba que éstas fueron apolíticas, sino que subordinarían sus preferencias políticas a los principios constitucionales, como lo habían venido haciendo hasta entonces.[16]

La UP contaba, como señala Garcés, con que las fuerzas armadas se polarizarían entre un sector democrático (oficiales constitucionalistas) y un sector reaccionario (golpistas). Garcés observaba que "no hay revolución posible si no se cuenta con un ejército revolucionario".[17] Pero mientras ese momento no llegaba la UP tenía el tiempo a su favor.

En la práctica, el principal instrumento a que apeló el gobierno popular fue el progresivo compromiso de las fuerzas armadas en la aplicación del programa de gobierno: los militares fueron convocados a colaborar en las tareas de desarrollo económico, ocuparon cargos de dirección en la distribución, se involucraron en la reforma agraria, en la administración del cobre, etcétera.

Simultáneamente, el gobierno prestó especial atención a los problemas de equipamiento y de infraestructura operativa de las fuerzas armadas. Durante el gobierno de Frei, las demandas reivindicativas de los militares habían permanecido relegadas a un segundo plano. El "Tancazo" expresó precisamente su protesta en 1969. Pero la política de la UP se limitó al otorgamiento de concesiones materiales. Por eso mismo, paradójicamente Chile pasó a ser a partir de 1970 uno de los países más militarizados de América Latina.

d] LAS RELACIONES ENTRE LA UNIDAD POPULAR Y LOS MILITARES

Un breve examen de las relaciones entre el gobierno popular y los militares permite poner en claro que, en la práctica, la Unidad Popular no logró formular una verdadera política hacia las fuerzas armadas. A partir del paro de octubre, momento en que la lucha de clases penetró en el campo institucional, su política fue defensiva e improvisada.

[16] Garcés afirma: "...todo revolucionario debe tener bien presente dónde están las fuerzas armadas del Estado chileno, que, dado su carácter constitucional, aparecen históricamente identificadas con la legitimación roussoniana de los gobernantes (voluntad general de los ciudadanos), y no con la revolucionaria (interés del proletariado y sectores populares)". Garcés, J., *El Estado...*, *op. cit.*, p. 93.

[17] *Ibidem*, p. 23.

i] *El paro patronal de octubre: la incorporación de los militares al gabinete*

El 2 de noviembre de 1972, Allende anunció la composición del nuevo gabinete: tres militares y los dos dirigentes máximos de la CUT. Los militares quedaban situados en una ambigua posición política. Llamados para arbitrar la situación, su incorporación al gobierno aparecía como una muestra de apoyo al programa de la UP. Sin embargo, se preocuparon por dejar en claro que se trataba de "una colaboración patriótica en aras de la paz social".[18]

El Mercurio titulaba su editorial del 5 de noviembre, "Difícil posición de las FFAA", y decía: "Jamás en la vida de la república habían sido puestas en situación tan comprometida por un gobierno que, empleando la lealtad de los soldados, intenta mezclarlos poco a poco en su propio juego político de corte revolucionario marxista..." [19]

La solución militar a la crisis de octubre mostró que el gobierno estaba dispuesto a sacrificar tácticamente al movimiento popular para mantener los límites fijados por la institucionalidad (la otra cara de su estrategia). También puso en claro que la burguesía articulaba, en su estrategia, lucha institucional y subversión (la resistencia civil), pero no tenía un consenso en torno de una salida militar golpista.

El presidente de la democracia cristiana, Renán Fuentealba, declaraba entonces: "La incorporación de hombres representativos de las tres ramas de las fuerzas armadas significa que éstas, y no tan sólo las personas nombradas, asumen responsabilidades de gobierno, vale decir, responsabilidades políticas, con todos los derechos y con todos los deberes y riesgos que ello implica." [20]

La democracia cristiana cifraba sus esperanzas en la continuidad institucional. Su estrategia dominante era la de los "mariscales rusos", formulada por su ideólogo Claudio Orrego.

Cuando los militares se retiraron del gabinete, después de las elecciones de marzo de 1973, la prensa chilena no ahorró adjetivos para calificar el papel positivo cumplido por éstos en el gobierno. Desde *El Mercurio* hasta *El Siglo*, los militares recogían elogios. La UP en su conjunto —pese a las divergencias internas— reconoció que la incorporación de los militares al gabinete había sido positiva: se había logrado poner fin al paro patronal de octubre y se había ganado tiempo.

[18] Declaraciones del general Prats —ministro del Interior— a la revista *Chile hoy* (núm. 22, 10-16 de octubre de 1972).

[19] *El Mercurio*, 5 de noviembre de 1972.

[20] *Chile hoy*, núm. 22, cit., p. 5.

En cierto sentido, los enemigos estaban desconcertados. Luis Corvalán afirmaba: "Debe tenerse en cuenta la unidad que se alcanzó en los sectores obreros y la estabilidad que logró el gobierno con la ascensión de los militares..." [21] *El Mercurio,* aunque no escatimó elogios por la labor cumplida, se preocupó por dejar en claro que "...ya no será admisible exigir a los militares una especie de indiferentismo y ausentismo de las tareas de desarrollo nacional, con el pretexto de que no pueden deliberar".[22]

La oposición había perdido la ocasión de conseguir los dos tercios de votos en el Congreso. A partir de entonces, la convocatoria golpista a los oficiales cobró fuerza en su seno.

La DC, en forma vacilante primero y decididamente después, se abocó también a la tarea de romper la neutralidad de las fuerzas armadas. En la medida en que la institucionalidad se desgastó como arma de ataque privilegiada contra la UP, y en que la resistencia civil mostró la necesidad cada vez mayor de contar con el apoyo de las fuerzas armadas, la balanza de la DC se inclinó hacia la alternativa golpista. Pero su proyecto, como ya lo señalamos, no coincidía con el del Partido Nacional.

La ofensiva insurreccional de octubre, en la que la DC había colaborado abiertamente, debilitó el sistema institucional mismo. En su estrategia de combinar el juego institucional con la subversión, la segunda terminó por triunfar sobre el primero. De este modo, también la DC quedaba a merced de los militares. Su ideología integrista había proporcionado las bases ideológicas para el movimiento gremial de octubre. A partir de entonces, ella también quedaba sometida a la subversión como arma fundamental de lucha contra la UP.

ii] *El "Tancazo": la ofensiva militar contra el gobierno popular*

El alzamiento militar del 29 de junio —el "Tancazo"— marcó el punto inicial de una ofensiva total contra el gobierno de la UP. Un mes antes, Jarpa, presidente del PN, expresaba: "Junto con tratar de utilizar a las fuerzas armadas y carabineros como puntal de su gobierno y cobertura para su acción desquiciadora, los marxistas se esmeran solapadamente en desprestigiar y desmoralizar a los integrantes de esta institución, que respaldan la estabilidad y la soberanía del Estado chileno [...] A través de publicaciones y elementos infiltrados cuestionan la disciplina, la jerarquía y aun la existencia misma de las

[21] *La Opinión,* Buenos Aires, 24 de marzo de 1973.
[22] *El Mercurio,* 28 de marzo de 1973.

fuerzas armadas. Antes utilizaban al MIR para estos propósitos, ahora son los propios comunistas los que siembran la consigna de que los oficiales constituyen una casta privilegiada y que reciben del Estado un tratamiento desproporcionado y excesivo." [23] Jarpa se refería a la acción del MIR. En efecto, éste señalaba como tarea fundamental de la izquierda la de llevar a cabo una lucha ideológica dentro del ejército, destinada a concientizar a los soldados y suboficiales. El ejército, desde esta perspectiva, se dividiría según un corte clasista. Y esa escisión tenía que ser preparada, no llegaría "del cielo". La actividad agitativa que el MIR llevó a cabo abiertamente dentro de las fuerzas armadas proporcionó a la oposición un flanco de ataque que ésta supo capitalizar muy bien. Esto debilitó la estrategia de la UP hacia los militares. A ello se sumó la acción del Partido Socialista (los sectores que seguían la línea de su secretario general, Carlos Altamirano), del MAPU (la "línea Garretón") y de la IC. En efecto, estos grupos fueron aproximando sus posiciones a las del MIR en la evaluación de la estrategia a seguir con respecto al ejército.

A fines de marzo, el PS dio a conocer, a través de su secretario general, una declaración pública en relación con las fuerzas armadas. En ella Altamirano afirmaba: "Queremos que en los militares, marinos y aviadores de Chile, oficiales, suboficiales, clase y soldados, continúe madurando seriamente una nueva conciencia de su responsabilidad ante la patria y el pueblo, que les permita asumir una posición acorde con la necesidad de lograr la liberación social y no de simple intentona intrascendente." [24] El PN interpretó esta declaración como un llamado abierto a la subversión en el ejército. Su presidente respondió en los términos ya citados. El 23 de junio la revista *Tribuna* (portavoz del PN), reprodujo las declaraciones del senador Bulnes: "...el presidente de la república [...] es actualmente un jefe ilegítimo." [25] El 26 de junio, el senador del PIR, Américo Vicuña, declaraba: "...porque en definitiva los militares no tienen razón alguna para ser solidarios con el fracaso estruendoso del peor gobierno que haya conocido nuestro país..." [26] El 28 de junio *El Mercurio* publicó las declaraciones de Jarpa. La "pulcra imagen del coronel Grove" se oponía a las "barbas revolucionarias" de los dirigentes actuales del PS. Jarpa afirmaba que el PS "se opone a la existencia misma de las fuerzas armadas".[27]

El 29 de junio estalló la asonada del regimiento blindado número 2,

[23] *El Mercurio*, 15 de abril de 1973.
[24] Declaración del Partido Socialista, 22 de marzo de 1973.
[25] *Tribuna*, 23 de junio de 1973.
[26] *Chile hoy*, núm. 56, 1-12 de junio de 1973, p. 11.
[27] *El Mercurio*, 28 de junio de 1973 (publicación completa del discurso de Jarpa).

al mando del comandante Roberto Souper. El día anterior, el general de división y jefe del estado de emergencia, Mario Sepúlveda, había anunciado ante la prensa que se preparaba un cuartelazo.[28]

Los tanques al mando de Souper se dirigieron a La Moneda (el palacio presidencial) donde el general Prats les salió al encuentro. El motín fue rápidamente sofocado. La prensa de oposición llenó sus páginas de confusas explicaciones: que Souper ignoraba el descubrimiento del brote conspirativo, que se mantuvo leal a sus subordinados, que sólo intentaba rescatar a un capitán detenido en el Ministerio de Defensa por actividades conspirativas, etcétera. Los efectos de la conspiración se intentaron minimizar ante la opinión pública: el ejército había puesto de manifiesto "su espíritu de cuerpo" y su comportamiento constitucionalista...

Sin embargo, la revista *Ercilla* publicaba la siguiente reflexión: "Por otro lado, quedó al descubierto que el llamado 'poder popular' adolece de una gran debilidad. Para que en Chile exista enfrentamiento tendría que dividirse el poder armado. Como hay cohesión, disciplina jerárquica y unidad en éste, la supuesta guerra civil no pasa de ser un temor infundado." [29]

El "Tancazo" había cumplido con éxito su misión de constituirse en un ensayo de lo que ocurriría en septiembre. Los militares defendieron la continuidad institucional pero al hacerlo pasaron a dominar abiertamente la situación. Todas las fuerzas sociales quedaban a su merced.

A partir de entonces el respaldo militar a la legitimidad legal significó en los hechos una política de creciente hostilidad hacia el movimiento popular. La aplicación de la Ley de Control de Armas —proyecto presentado por un senador demócrata cristiano y aprobado por el Congreso en octubre del año anterior— estuvo dirigida a reprimir a los obreros, campesinos, estudiantes y pobladores.[30]

El 9 de agosto Allende constituyó un nuevo gabinete con participación militar. El general Prats volvía a tomar parte en el gobierno. Conocido por su posición constitucionalista, su incorporación alimentó la esperanza de la UP de lograr la neutralización de las fuerzas armadas.[31]

[28] Texto reproducido en *El Mercurio*, 6 de julio de 1973.

[29] *Ercilla*, 4-10 de julio de 1973, pp. 10-11.

[30] Véase la crónica de las acciones militares en *Chile hoy*, núm. 65, 6-13 de septiembre de 1973.

[31] El general Prats había sido víctima de un curioso atentado dos días antes del "Tancazo", cuyo propósito fue poner en ridículo su prestigio dentro y fuera del ejército. Prats presentó su renuncia pero Allende no la aceptó. El 27 de julio fue asesi-

Sin embargo, el ala izquierda de la UP criticaba duramente la acción defensiva del gobierno frente a los militares.[32]

El interrogante que entonces se planteaba era: ¿acaso el "Tancazo" no había proporcionado una ocasión al gobierno para pasar a la ofensiva, armar al pueblo y disolver el Parlamento, contando para ello con el apoyo de los militares favorables al gobierno?

Como bien lo señala el consejero político de Allende,[33] "la Unidad Popular no contó con las condiciones materiales ni políticas para organizar un ejército popular paralelo al profesional". En el análisis que hace Debray se muestra con claridad el carácter puramente verbal de la consigna de "armar al pueblo".[34] El problema era, como observa Debray, el de saber hasta qué punto la UP podía militarizar a las fuerzas populares (o sea hasta qué punto tenía la posibilidad material y política de hacerlo) sin precipitar la intervención militar directa. Si el problema se plantea fuera de estos términos se cae en un círculo vicioso.

En rigor, la progresiva pérdida de capacidad de acción por parte de la UP no fue más que el desarrollo de las premisas que presidieron su acceso al gobierno. A mediados de 1973 era demasiado tarde para librarse de las consecuencias de su acción previa. Tampoco podía "armarse al pueblo" en el sentido de dar a algunos sectores obreros la capacidad defensiva que les permitiera enfrentar al ejército. En todo caso, todo seguía dependiendo de cómo actuarían los militares: ¿se escindirían?

El 23 de agosto Prats renunció a sus cargos de comandante en jefe del ejército y de ministro de Defensa. En su carta de renuncia dirigida al presidente, expresaba: "...Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en un factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional." [35] En efecto, Prats había convocado al cuerpo de gene-

---

nado el edecán naval del presidente, comandante Arturo Anaya. El cerco sobre los militares leales al gobierno se estrechaba cada vez más.

[32] El 7 de agosto, la armada denunció un intento sedicioso frustrado de los marinos de Valparaíso e informó de la participación en el mismo de elementos del MIR, PS y MAPU.

[33] Garcés, J., *El Estado...*, *op. cit.*, p. 26.

[34] Debray, R., *La critique...*, *op. cit.*, tomo I, pp. 295-299.

[35] *Chile hoy*, núm. 64, 31 de agosto-6 de septiembre de 1973, p. 11. Prats había sido blanco de una provocación realizada por las esposas de varios altos oficiales, que ante su puerta manifestaron su repudio al general. Véase *Chile hoy*, núm. 60, 3-9 de agosto de 1973, p. 5.

rales para solicitar su repudio a las injurias de que había sido víctima (véase cita 35). Doce generales se negaron a apoyarlo y sólo seis (entre los cuales se contaba Pinochet) le dieron su solidaridad.[36]

La renuncia del general Prats marcó el comienzo de una cuenta regresiva hacia el desenlace final. Con él renunciaron los generales constitucionalistas Pickering y Sepúlveda.

Como observa Debray,[37] durante 1973 la única manera en que los militares podían ser consecuentemente "legalistas" era apoyando a un gobierno popular, transformándose en socialistas revolucionarios. Mantener su "neutralidad" política significaba, en los hechos, tomar el partido de la burguesía.

Con la salida de Prats del gabinete el camino para el golpe de septiembre quedó despejado. Las fuerzas armadas no se dividieron: actuaron unidas y disciplinadas por la cohesión que les confería su alto grado de profesionalismo. Los militares chilenos se proclamaron la única agencia integradora de la nación capaz de asumir la dirección de la sociedad. Su misión había sido definida como la de "poner orden" por encima de la política durante el gobierno de la UP. En septiembre quedó claro para sus altos mandos que la crisis extrema en que se debatía la sociedad los llamaba a cumplir otra tarea: la de "salvadores de la patria". Ellos eran los únicos capaces de garantizar la "paz social" y la reconstitución de la economía.

El golpe militar "fascista" de septiembre vino a crear el Estado chileno de un golpe (valga la redundancia): la unidad de dirección de la sociedad chilena, la dominación burguesa. La sociedad civil había arrasado con el Estado; los militares, en nombre del Estado, arrasaron con la sociedad civil.

Nuevamente, como al comienzo de este epílogo, una cita de Gramsci permite arrojar luz sobre el desenlace de la crisis: "En determinadas circunstancias puede ocurrir que no convenga 'descubrir' al ejército, no hacerlo salir de la constitucionalidad o, como se dice, no llevar la política entre los soldados para mantener la homogeneidad entre oficiales y soldados en un terreno de aparente neutralidad y superioridad, más allá de las facciones; sin embargo, es el ejército, o sea el Estado Mayor y la oficialidad, quien determina la nueva situación y la domina." [38]

[36] Véase Garcés, *El Estado..., op. cit.*, pp. 31-54 y también *Testimonio a las Naciones Unidas*, reproducido en la revista *Postdata*, Lima, núm. 1, diciembre de 1973.

[37] Debray, R., *La critique..., op. cit.*, p. 293. Para un análisis de la crisis política, véase también el trabajo teórico del autor: "Temps et politique", en *Les Temps Modernes*, mayo de 1970.

[38] Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo..., op. cit.*, p. 78.

La acción de la UP se encadenó a una estrategia destinada a mantener la tradicional no intervención de los militares. Pero por eso mismo quedó prisionera de la voluntad de éstos. Cuando la sociedad chilena llegó a una situación de "equilibrio catastrófico" fueron los militares los que tuvieron la última palabra.

CONCLUSIONES

He analizado las transformaciones en el patrón de dominación política de la sociedad chilena. Éste es un tema polémico respecto del cual he formulado algunas preguntas y presentado algunas hipótesis. El tema principal de las dos primeras partes de este trabajo estuvo constituido por el estudio de la formación, consolidación y ruptura del modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena. En la tercera y última parte, estudié con más detalle el proceso social durante el período de la Unidad Popular. Allí me fue posible actualizar las hipótesis que se fueron formulando a lo largo del análisis de las transformaciones en la dinámica política de esa sociedad.

El punto de ruptura de la prolongada estabilidad política está situado en los años del gobierno demócrata cristiano. En efecto, después del intento "ibañista" de rearticulación de las relaciones sociales, la lucha por el control del Estado (especialmente por el control del gobierno) estuvo marcada por la presencia de tres bloques electorales: los partidos obreros, coligados en el FRAP, y los partidos burgueses, o sea la Alianza Conservadora-Liberal y el Partido Demócrata Cristiano. La burguesía comenzaba a escindirse en torno a dos proyectos alternativos de solución política para los problemas que planteaba el desarrollo del modelo de acumulación (en las condiciones concretas fijadas por el agotamiento del proceso de desarrollo basado en la expansión de la industria liviana de sustitución de importaciones).

A partir de entonces, las tres coaliciones se sucedieron en el control del gobierno, cada una de ellas tratando de encontrar una solución política para las exigencias planteadas por la reorientación en las formas de acumulación. En lo fundamental, y pese a las diferencias cualitativas entre ellas (y, por supuesto, entre las coaliciones burguesas y la Unidad Popular), las tres tenían que resolver la contradicción entre acumulación y distribución en la sociedad chilena. Esta contradicción se había expresado en el carácter crónico de la inflación, único medio

de paliar temporalmente la agudización de los conflictos de clase,[1] y era la consecuencia de la creciente ineficacia del sistema político (organizado en función de partidos de clase) para resolver las demandas del conjunto de las clases subordinadas.

Como observa Bárbara Stallings, el fracaso del proyecto alessandrista llevó a una radicalización del modelo de desarrollo (el gobierno freiísta), la que a su vez abrió una brecha para la instalación, con Allende, del proyecto de transición al socialismo. De este modo se pasó de una variante modificada del "laissez faire" (Alessandri) a un intento de modernización capitalista que asignó al Estado un papel central (Frei), y finalmente se llegó a un modelo de transición al socialismo (Allende).

Lo que importa señalar aquí es que el proyecto freiísta y el proyecto de la UP constituyeron variantes de un mismo modelo: un modelo capitalista dependiente de desarrollo de la industrialización, basado en una participación muy significativa del Estado.[2]

La UP tenía como meta la *creación de las condiciones para la transición al socialismo* en Chile. Esas condiciones estaban sometidas a las restricciones impuestas por la propiedad privada de los medios de producción y la vigencia de los mecanismos de mercado en la distribución. La sociedad chilena no pasaría automáticamente a ser una sociedad en transición hacia el socialismo por la sola aplicación del programa de gobierno de la UP, y ésta lo sabía. Se trataba pues, de crear esas condiciones dentro de los límites establecidos por el sistema capitalista dependiente.

Durante la etapa alessandrista se registró la tasa más alta de crecimiento de la economía de todo el período abierto en 1958. La burguesía en su conjunto obtuvo ganancias sustanciales a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los sectores asalariados. Sin embargo, la resistencia ofrecida por los obreros organizados puso límites a este recurso deflacionario. El corolario fue el agravamiento de los males que aquejaban a la economía chilena, en especial la agudización de las presiones inflacionarias.

Las contradicciones que no pudo resolver Alessandri se intentaron resolver a partir de un proyecto de modernización capitalista caracterizado por la intervención decisiva del Estado en la economía. En el plano político, esta respuesta tenía como contrapartida una solución

[1] Este desafío común a las tres opciones es analizado en el excelente trabajo de Bárbara B. Stallings, *Economic development and class in Chile, 1958-73,* California, Tesis doctoral, Universidad de Stanford, agosto de 1975, mimeo.

[2] Bárbara Stallings presenta una fundamentación de este argumento que comparto plenamente. Véase Bárbara Stallings, *Economic development..., op. cit.,* p. 7.

de tipo reformista-"populista". La reorganización de los mecanismos de acumulación —intento que se tradujo en el aumento de los stocks de capital durante el período— se mostró incompatible con la simultánea activación de las demandas económicas y políticas de nuevos actores. El campo, que durante mucho tiempo había sido el territorio inexpugnable del patrimonialismo terrateniente, dejó de serlo bajo el impacto de la reforma agraria freiísta. La disyunción entre el sistema político y el sistema de desigualdades sociales, que había hecho posible la eficacia del sistema político como instancia de reconciliación de los intereses sociales y de gestión del Estado, ya no se pudo seguir manteniendo. Los excluidos de la sociedad política irrumpieron en el sistema político convocados por el proyecto integrista de la DC, y terminaron por romper sus diques de contención.

Durante el gobierno de Frei, la tasa de ganancia de la burguesía en su conjunto descendió.[8] No obstante, el sector industrial —los sectores modernos de la burguesía industrial, de carácter monopólico— se vio beneficiado. Pero este descenso general de la tasa de ganancia de la burguesía no alcanzó a compensar los aumentos salariales. Y la política redistributiva constituía el otro elemento del gobierno: su cara "populista". Del mismo modo, la lentitud en el proceso de expropiaciones en el campo dejaba frustradas las expectativas del campesinado.

En estas condiciones de funcionamiento, el gran compromiso social que intentara fundar la DC —la movilización de las masas populares rurales y urbanas antes excluidas del sistema político— terminó condenado por todas las fuerzas sociales que en él participaron.

De este modo la UP accedió al gobierno en el contexto de una crisis del modelo político chileno marcada por la ruptura del pacto social implícito sobre el que éste se fundara. Mi hipótesis para interpretar su fracaso es que el proyecto de transición al socialismo de la UP no se hizo cargo de esa ruptura: por el contrario, presupuso su continuidad.

El análisis de los tres años del gobierno de la UP muestra el desarrollo de una crisis social que alcanza niveles extremos (desde fines de 1972 y durante 1973, las formas de lucha extrainstitucionales constituyen una constante, tanto para la burguesía como para las clases populares), penetra el campo institucional y desborda la capacidad de control del gobierno popular. La lucha de clases queda librada a su propia dinámica. La UP asiste a partir de entonces, impotente y a la defensiva, al desarrollo de este proceso. Finalmente, tanto las fuerzas de la derecha como las de la izquierda quedan a merced de los militares. La culminación de este proceso es el golpe militar de septiembre.

[8] Stallings, B., *Economic development...*, *op. cit.*, p. 567.

La UP se había enfrentado al desafío de dar expresión orgánica a las luchas populares. En efecto, su convocatoria al pueblo implicaba la presencia de sectores estructuralmente heterogéneos cuyas expectativas sobre el gobierno popular eran también diferentes.

La oposición "pueblo" versus "momios" (ésta fue la expresión ideológica fundamental que revistió el conflicto de clases en la sociedad chilena en la coyuntura política de 1970) condensaba tres planos diferentes de la lucha social. En efecto, era una oposición de clase (capital-trabajo), una oposición a la dominación extranjera (nación, imperialismo), y una pugna por ampliar la participación social en los beneficios.[4]

Cada uno de estos conflictos tendió a ser expresado por sectores diferentes dentro del campo popular. El corte principal entre la clase obrera y el resto de las clases populares pasó por una primera diferenciación central: los sectores incorporados al proceso productivo y los sectores marginados. Estos últimos (las masas desposeídas del campo y de la ciudad) cifraban sus esperanzas en una redefinición del Estado que les permitiera ser tomados en cuenta: los problemas del empleo, la vivienda, etc., eran los ejes de sus reivindicaciones que se expresaron en formas populistas de lucha. Estos sectores fueron también los más disponibles para la convocatoria populista revolucionaria del partido socialista.

Para la UP, estos sectores desposeídos y carentes de una tradición de organización constituían un primer desafío: ¿cómo establecer una relación organizada entre éstos y el gobierno? O, en otros términos, ¿cómo movilizarlos políticamente sin que su empuje desbordara la gestión del gobierno?

Pero éste no era el único desafío que enfrentaba la UP. En efecto, la clase obrera chilena era un conjunto estructuralmente heterogéneo cuya diferenciación interna se había acentuado como consecuencia del desarrollo dependiente del capitalismo en Chile.[5]

Las fracciones de la clase obrera ligadas al gran capital extranjero —las grandes empresas monopólicas en las minas y en la producción para el mercado interno— tenían una concepción instrumental de la política que se tradujo en el predominio de los aspectos defensivos de su acción contra las clases antagonistas. En primer lugar, los mineros habían librado una lucha marcada por su oposición a los patrones y

[4] Para un análisis de la simultaneidad de estos conflictos en el campo popular, véase Touraine, A., *Vie et mort...*, cit.

[5] Para un análisis de las distintas fracciones de la clase obrera, hacia 1970, véase Manuel Castells, *La lucha de clases en Chile*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975, cap. II, pp. 81-91.

por la defensa de sus condiciones de vida y de trabajo. Su lucha había sido una lucha de clase al mismo tiempo que una lucha en defensa de sus intereses comunitarios (intereses que los segregaban del resto de la clase obrera y que les conferían una posición relativamente privilegiada en ese conjunto). Ellos fueron los principales beneficiarios del pacto social tácito sobre el que se fundó la estabilidad política en la sociedad chilena.

Esta concepción instrumental de la política, asociada al predominio de formas de acción reformistas, también se impuso por sobre otras formas de acción entre los obreros de las grandes empresas monopólicas cuya producción se destinaba al mercado interno.

Estos sectores, con un alto grado de organización corporativa (expresado en la CUT) y representados en el plano político, en lo fundamental, por el PC, pasaron a ser convocados por un gobierno que representaba sus intereses y en nombre del cual debían ganar la "batalla de la producción". ¿Cuál podía ser el poder de convocatoria de esta consigna entre los mismos? En efecto, para la mayoría de ellos ganar la batalla de la producción en el área de propiedad social significaba aumentar sus ventajas materiales. La nacionalización de las riquezas básicas y la estatización de las industrias tendieron a ser percibidas como medidas destinadas a mejorar su situación antes que como pasos dirigidos hacia la transformación socialista de la sociedad.

En las industrias medianas, productoras de bienes de consumo básico y en las que predominaba el capital nacional, la situación era diferente. Este sector, que formaba parte del área de propiedad privada en el programa de gobierno de la UP, fue el que conoció un desarrollo de la conciencia de clase en sus formas más puras de enfrentamiento con el capital. Allí nacieron y se desarrollaron los cordones industriales y los comandos comunales. Los obreros de la industria textil, como vimos, fueron los protagonistas principales de este movimiento clasista. Extraña paradoja: la política del gobierno no contaba con una estrategia clara para estos sectores, como tampoco para los sectores del campesinado rural —los afuerinos y los minifundistas— que quedaban excluidos del programa de reforma agraria. ¿Cómo articular este movimiento clasista con la gestión del Estado? La UP se mostró vacilante, e internamente dividida, acerca del camino a seguir.

El campo popular ofrecía un blanco de ataque a la oposición. La situación en que se encontraba la UP era excepcional. La clase dominante ya no controlaba el aparato estatal, había perdido el control del gobierno (instancia clave dado el papel desempeñado por el Estado en la economía chilena), pero tampoco lo controlaban las fuerzas populares (el Parlamento les era adverso, el poder judicial hostil, etc.).

En esas condiciones de funcionamiento, la gestión del Estado —o sea su capacidad de creación de las condiciones para la transición al socialismo— quedaba subordinada a su capacidad para articular orgánicamente las luchas populares. Rotas las bases sociales del sistema político, la UP se situaba en el centro de la crisis. La alternativa de una salida revolucionaria como la que impulsaba descansaba en la constitución de un bloque de poder popular, alternativo al bloque burgués. En ausencia de una intervención extranjera directa lo esencial de la unificación del campo popular quedaba en sus manos.

La UP no pudo responder a este desafío. Interrogarse sobre las razones de su impotencia lleva, en primera instancia, a señalar su fracaso en el intento de constituir una unidad de dirección política en su seno. La UP era algo más que un frente pero mucho menos que un partido.

Durante la primera etapa del gobierno (la que coincide *grosso modo* con la aplicación de la denominada "política Vuskovic", y que se analiza en el capítulo II de la tercera parte) el énfasis fue puesto en los aumentos salariales y del consumo. Esta política económica "keynesiana", basada en la reactivación de la economía a través de un aumento de la demanda y la utilización de las capacidades ociosas en la economía, pronto dejó de mostrarse eficaz para resolver los problemas que enfrentaba el gobierno. Sus éxitos iniciales le permitieron a la UP ganar la primera batalla electoral (las elecciones municipales de abril de 1971). Pero a partir del segundo semestre de 1971 los síntomas de la crisis económica por la que atravesaba la sociedad chilena eran ya visibles.

En las condiciones específicas de funcionamiento del gobierno popular esta política populista debía ser abandonada si se quería continuar en el camino hacia el socialismo. En efecto, la UP tenía que aumentar los fondos necesarios para la inversión en las condiciones adversas fijadas por el comportamiento de la burguesía local y del capital internacional.

De continuarse en esa línea populista-revolucionaria, el fiel de la balanza de la UP debía inclinarse hacia el movimiento popular (y así lo entendió Vuskovic). Esta política económica suponía la aceleración de la expropiación de la burguesía. ¿Cómo llevar a cabo este proceso sin acelerar la intervención militar? O, en otros términos, ¿cómo acelerar la movilización popular sin que ésta desbordara la gestión del gobierno? En la UP tuvo lugar un intenso debate en torno del camino a seguir.

Como vimos, la política económica del PC —la "política Millas"— triunfó en el cónclave de Lo Curro. El PC no estaba dispuesto a arries-

gar el control del gobierno, y contaba con que el tiempo jugaría a su favor (véase el capítulo II de la tercera parte).

El abandono de la política populista significaba el sacrificio de la gran mayoría de los sectores populares que constituían la base social de apoyo de la UP y que, dentro de su estrategia, permitirían legitimar legalmente el proceso de transformaciones. Pero también significaba la alternativa de negociación con la democracia cristiana y el intento de consolidar una alianza con los "sectores medios". Así lo entendieron Allende y el PC.

Sin embargo, a mediados de 1972, las condiciones sociales concretas habían cambiado sustancialmente. La movilización popular impidió la aplicación coherente y sistemática del conjunto de medidas que se proponían "para consolidar el proceso". A partir de entonces la UP careció de una política económica y su acción, vacilante y defensiva, estuvo orientada a solucionar los problemas cotidianos antes que a crear las condiciones que se había propuesto para revolucionarizar la sociedad.

El área de propiedad social era débil y su composición interna reflejaba los avatares de la política sobre la economía. Incluso si el gobierno hubiera podido incorporar a esa área a las 90 empresas que se señalaron como meta, el APS sólo habría controlado el 44% de la producción industrial y el 22% del empleo. En estas condiciones difícilmente se podían crear los requisitos para la transición al socialismo. A ello se agregaba el hecho de que la producción de ideologías estaba controlada, en lo fundamental, por la burguesía.

En el cálculo político de la UP, la variable "tiempo" jugó un papel esencial. En efecto, se esperaba "ganar tiempo". Lo que la UP no pudo "ver" fue el problema del Estado, esto es, el problema de la dirección de la sociedad. Su acción permaneció encadenada a una visión tributaria de largos años: la ilusión del "Estado por encima de la sociedad", de la resistencia y flexibilidad del sistema político para negociar los conflictos de clase.

Pero una vez rotas las bases del compromiso social que habían creado esta ilusión, el proceso social quedó a la deriva, sin que ninguna de las fuerzas en pugna pudiera imponerle una dirección.

La UP se inclinó hacia el mantenimiento de su estrategia institucional —su aspecto reformista— en detrimento de su aspecto revolucionario, el movimiento popular. De este modo, el corolario de su política fue la desarticulación de las prácticas políticas del movimiento popular en el contexto de una rápida unificación del campo de sus enemigos.

El predominio de esta estrategia en su seno aparece vinculado a la fuerza de una ideología en la sociedad chilena: la presencia de un

Estado fuerte, capaz de resistir los avatares de la agudización de la lucha de clases.

Sin embargo, los sectores que dentro de la UP se opusieron a esta línea de conducción sólo pudieron formular, a mi juicio, una respuesta contraideológica, y por lo tanto, también sometida a esa visión de la sociedad política chilena.[6]

En efecto, lo que aquí se sostiene es que la concepción del poder popular en el seno de la izquierda fue la contrapartida —subjetivista y voluntarista— del economicismo dominante en el ala "PC-Allende-MAPU-OC", de la UP.

Las dos líneas en que se escindió internamente la UP fueron víctimas, de diferente manera, de una ideología dominante en la sociedad chilena.

La paradoja con que se enfrentó la UP durante sus tres años de gobierno quedó sellada por la presencia de estas dos líneas políticas en su seno, ninguna de las cuales se ajustaba a una evaluación adecuada de las condiciones concretas en que se desenvolvía el gobierno popular. Ni el control del gobierno podía garantizar la continuidad del proceso en la coyuntura política que se inició a partir del paro de octubre —como lo querían los comunistas y Allende mismo— ni la movilización política de los sectores populares encontraba condiciones materiales —políticas y militares— para ser llevada a cabo sin que ello implicara la caída del gobierno.

En 1973 el gobierno ya no gobernaba. Cada uno de los poderes del Estado actuaba por su cuenta. La subversión civil de la burguesía escapaba al control del gobierno, como también lo desbordaba la movilización popular. El gobierno dejaba de ser la instancia estratégica para la conducción del proceso. La movilización popular no tenía los instrumentos militares que le permitieran enfrentarse en una lucha decisiva con las fuerzas contrarrevolucionarias. El poder popular era impotente para salir de la crisis.

En estas condiciones, los militares tuvieron la última palabra. Y no se dividieron como esperaba la izquierda. La sociedad civil había arrasado con el Estado, la realidad se había encargado de dejar al desnudo el contenido de clase de la dominación. Los militares actuaron en

[6] El término "contraideología" es utilizado aquí en el sentido que le asigna Eliseo Verón. La contraideología se caracteriza por su incapacidad de revelar o manifestar las contradicciones inherentes a la ideología a la que se opone y, por el contrario, es generadora de contradicciones entre quienes la sustentan. Véase Verón, Eliseo, "Ideología y producción de conocimientos sociológicos en América Latina", en *Ciencias Sociales: ideología y realidad,* Buenos Aires, Ed. Tiempo Contemporáneo, 1970, p. 194.

nombre de la restauración del Estado. Por cierto, de un nuevo Estado sobre las ruinas del viejo.

La lógica del proceso desarrollado durante el gobierno popular quedó encadenada a la lógica de la historia de la sociedad chilena: la historia de la formación, consolidación y ruptura final del modelo político de funcionamiento que había hecho de ésta una sociedad excepcionalmente estable. Esa lógica de la historia había aparecido ideológicamente trasmutada en la visión de un "Estado por encima de las clases". A esta visión quedó subordinada la acción de la UP. El conflicto se siguió jugando fundamentalmente en el área política —expresión condensada de la dominación interna— y por eso mismo no pudo crear las condiciones para la modificación del modo de producción.

Pero el privilegio otorgado a la lucha en el plano político-institucional, como instrumento indirecto y fundamental de la lucha contra las clases antagonistas, había sido el mecanismo fundamental al que habían recurrido los partidos de la izquierda chilena a lo largo de su trayectoria política. De allí la aparente paradoja de la situación chilena. Una lucha política librada a través de partidos de clase que no tuvo consecuencias decisivas sobre el modo de producción dominante. Y decimos "aparente" porque la lógica de la misma remite a las condiciones estructurales específicas del capitalismo dependiente en Chile.

La presencia de partidos de clase en la sociedad chilena no permite asimilar el comportamiento político de las clases sociales al de las sociedades europeas de "capitalismo avanzado". Cuando éste es el enfoque se pierde de vista la especificidad de la sociedad chilena que más allá de la originalidad que mostró en las formas de la lucha de clases fue también una sociedad dependiente.

En esta lectura del proceso político chileno, la historia de la UP queda inscrita en la historia de las luchas de clases en la sociedad chilena, particularmente en los últimos cuarenta años de este siglo. Es a partir de esta historia que el curso de los acontecimientos más recientes deja de aparecer como una secuencia incomprensible de "errores", "contrasentidos" o "traiciones". Por el contrario, la lógica de las opciones de la UP queda encadenada a la lógica de la historia de la sociedad, antes que a la lógica de la política. Por eso este ensayo intenta no caer en el recuento de las intenciones fallidas de la UP, sino reconstruir las condiciones sociales en que se dio la lucha de clases en la sociedad chilena (condiciones moldeadas por la historia de esas luchas), así como las condiciones políticas (los proyectos en pugna dentro de la UP). Proyectos alternativos que de manera opuesta y complementaria reflejaron los efectos de esa lucha y quedaron encadenados a una ilusión tributaria de esa historia.

El golpe militar de septiembre abrió una nueva etapa en la historia de la sociedad chilena: Chile dejó de ser un caso excepcional en América Latina para adquirir los rasgos más brutales de una nueva realidad dominante en el cono sur. Con él, una serie de nuevos interrogantes desafían la reflexión actual sobre las estrategias de transformación estructural de una sociedad dependiente. El tema del Estado aparece redescubierto bajo las nuevas modalidades que éste asume hoy: Estado de excepción, "Estado burocrático-autoritario", etc. Ante esta nueva realidad es claro que deberán ser repensados tanto los conceptos como los instrumentos de análisis.

La esperanza de un derrocamiento a corto plazo del régimen militar chileno —en el contexto del refuerzo de las dictaduras militares en el cono sur— no puede ser el fundamento de la estrategia de las fuerzas populares. A mi juicio, en septiembre de 1973 se inició en Chile una nueva etapa de la lucha de clases cuyas modalidades y ritmos habrán de asemejarse muy poco a las que la caracterizaron en el pasado. El pasado constituirá una lección por la negativa para no repetir los viejos "errores".

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Allende, *Su pensamiento político,* Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

Angell, Alan, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile,* México, Editorial Era, 1974.

Barría, Jorge, *Historia de la* CUT, Santiago, Ed. Prensa Latinoamericana, 1971.

———, *Los sindicatos de la gran minería del cobre,* Santiago, Insora, 1970.

Barrington Moore, Jr., *Orígenes sociales de la dictadura y de la democracia,* Barcelona, Ed. Península, 1973.

Cademártori, José, *La economía chilena, un enfoque marxista,* Santiago, Editorial Universitaria, 1968.

Cardoso, Fernando H., *Estado y sociedad en América Latina,* Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972.

———, *Ideologías de la burguesía industrial en países dependientes,* México, Siglo XXI, 1971.

——— y Faletto, Enzo, *Dependencia y desarrollo en América Latina,* 3ª ed., México, Siglo XXI, 1971.

Castells, Manuel, *La lucha de clases en Chile,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.

Castillo, Jaime, *Fuentes de la democracia cristiana,* Santiago, Editorial del Pacífico, 1972.

Corvalán, Luis, *Camino de victoria,* Santiago, Impresora Horizonte Lta., 1971.

Debray, Regis, *Conversaciones con Allende,* México, Siglo XI, 1973, 5ª ed.

———, *La critique des armes,* París, Seuil, 1974, 2 vols.

Los documentos secretos de la I.T.T., Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

Edwards, Alberto, *La fronda aristocrática en Chile,* Santiago, Ediciones Ercilla, 1936.

Encina, Francisco, *Historia de Chile, desde la prehistoria hasta 1891,* Santiago, Editorial Nascimento, 1940-52, 20 tomos.

Faletto, Enzo; Ruiz, Eduardo y Zemelman, Hugo, *Génesis histórica del proceso político chileno,* Santiago, Ed. Quimantú, 1971.

Furtado, Celso, *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana,* Santiago, Editorial Universitaria, 1970.

Galdames, Luis, *A History of Chile,* Chapell Hill, N. C., University of North Carolina Press, 1941.

Garcés, Joan, *Chile: El camino político hacia el socialismo,* Barcelona, Ediciones Ariel, 1972.

Garcés, Joan, *Revolución, Congreso y Constitución: el caso Tohá,* Santiago, Editorial Quimantú, 1972.
———, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende,* México, Siglo XXI, 1974.
García, Pío, *Las fuerzas armadas en Chile,* México, Siglo XXI, 1974.
Gil, Federico, *El sistema político de Chile,* Santiago, Editorial Andrés Bello, 1969.
Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno,* Buenos Aires, Lautaro, 1962.
———, *Il Risorgimiento,* Roma, Editori Riuniti, 1971.
———, *Sul Fascismo* (Escritos reunidos y presentados por Enzo Santarelli), Roma, Editori Riuniti, 1974.
Los gremios patronales, Santiago, Ed. Quimantú, 1973.
Halperín, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina,* Madrid, Alianza Editorial, 1970.
Harnecker, Marta y Uribe, Gabriela, *Lucha de clases, Santiago,* Ed. Quimantú, 1972, 2 vols.
Jovet, Julio C., *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile,* Santiago, Editorial Universitaria, 1955.
———, *Historia del Partido Socialista,* Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971, 2 vols., 3ª ed.
——— y Chelén, Alejandro, *Pensamiento teórico y político del Partido Socialista de Chile,* Santiago, Ed. Quimantú, 1972.
Joxe, Alain, *Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile,* Santiago, Ed. Universitaria, 1970.
Labarca, Eduardo, *Chile al rojo,* México, Juan Pablos Editor, 1971.
———, *Corvalán, 27 horas,* Santiago, Editorial Quimantú, 1972.
Lagos, Ricardo, *La concentración del poder económico,* Santiago, Ed. del Pacífico, 1961.
Lechner, Norbert, *La democracia en Chile,* Buenos Aires, Ediciones Signos, 1970.
Lehman, David, *La agricultura chilena y el período de transición,* Santiago, ICIRA-Institute of Development Studies (des), 1972.
Libro de las 91, Santiago, Ediciones Barco de Papel, 1971.
Maira, Luis, *Chile: dos años de Unidad Popular,* Santiago, Ed. Quimantú, 1973.
Martner, Gonzalo, ed., *El pensamiento económico del gobierno de Allende,* Santiago, Ed. Universitaria, 1971.
El Mercurio, *Breve historia de la Unidad Popular,* Santiago, Ed. Lord Cochrane, 1974.
Mistral, Carlos, *Chile: del triunfo popular al golpe fascista,* México, Editorial Era, 1974.
Muñoz, Oscar, *Crecimiento industrial de Chile 1914-1965,* Santiago, Universidad de Chile, Instituto de Economía y Planificación, 1971, 2ª ed.
North, Liisa, *Civil-Military Relations in Chile, Argentina and Peru,* Berkeley, Institute of International Studies, 1967.
Novoa, Monreal, Eduardo, *La batalla por el cobre,* Santiago, Ed. Quimantú, 1972.
O'Donnell, Guillermo, *Modernización y autoritarismo,* Buenos Aires, Editorial Paidós, 1972.

Ojeda Urzúa, G., *El conflicto interno en el seno del partido demócrata cristiano,* Universidad de Lovaina, 1969.
Orrego V., Claudio, *El paro nacional,* Santiago, Ed. del Pacífico, 1972.
Pastrana, Ernesto y Threlfall, Mónica, *Pan, techo y abrigo,* Buenos Aires, Ediciones Siap-Planteos, 1974.
Pécaut, Daniel, *Sindicalismo y política en Colombia,* Bogotá, Ediciones La Carreta, 1973.
Pensamiento político de don Jorge Alessandri, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1970.
Petras, James, *Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno,* Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1971.
——— y Morley, Robert, *La conspiración yanqui para derrotar a Allende,* México, Ediciones Nuestro Tiempo, 1974.
Pinto Santa Cruz, Aníbal, *Chile, un caso de desarrollo frustrado,* Santiago, Ed. Universitaria, Santiago, 1973, 3ª ed.
———, *Chile una economía difícil,* México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
——— *et al., Chile hoy,* México, Siglo XXI, 1970.
Poulantzas, Nicos, *Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui,* París, Seuil, 1974.
———, *Origen y formación del Partido Comunista de Chile,* Santiago, Editora Austral, 1965.
———, *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891,* Santiago, Editorial Universitaria, 1969.
Ramírez Necochea, Hernán, *Antecedentes económicos de la Independencia de Chile,* Santiago, Editorial Universitaria, 1967.
Ramos, Sergio, *Chile: ¿una economía en transición?,* Santiago, Prensa Latinoamericana, 1972.
———, *Vie et mort du Chili populaire,* París, Seuil, 1973.
———, *Production de la société,* París, Seuil, 1973.
Uribe, Armando, *El libro negro de la intervención norteamericana en Chile,* México, Siglo XXI, 1974.
Touraine, Alain, *La conscience ouvrière,* París, Seuil, 1966.
Urzúa, Germán, *Los partidos políticos chilenos,* Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1968.
Vitale, Claudio, *Interpretación marxista de la historia de Chile,* Santiago, Editorial Universitaria, 1969-71, 3 vols.
Vuskovic, Pedro, *Acusación al imperialismo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

ARTÍCULOS O CAPÍTULOS DE LIBROS

Aranda, Sergio y Martínez, Alberto, "Estructura económica: algunas características fundamentales", *en* Aníbal Pinto *et al., Chile hoy,* México, Siglo XXI, 1970, pp. 55-172.
Barraclough, Solon, "La estructura y los problemas del sector agrario", *en* Allende, S. *et al., La vía chilena al socialismo,* México, Siglo XXI, 1973, pp. 113-121.
Barrera, Manuel, "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile, *Cuader-*

nos de la realidad nacional, Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 9, septiembre de 1971, pp. 119-155.
Billaz, René y Maffei, Eugenio, "La reforma agraria chilena y el camino hacia el socialismo", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972, pp. 45-79.
Borón, Atilio, "Movilización política y crisis política en Chile", *en Aportes,* núm. 20, abril de 1971.
Cantoni, Wilson, "Poder Popular en el agro chileno", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972, pp. 80-103.
Campero, Guillermo, "Gestión de la empresa y participación de los trabajadores", *Nueva economía,* Santiago, núm. 2, 1972.
——— y Jaramillo, Silvestre, "Conciencia de clase, economicismo y acción obrera", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 8, junio de 1971, pp. 24-42.
Caputto, Orlando y Pizarro, Roberto, "Dependencia e inversión extranjera", *en* Aníbal Pinto *et al., Chile hoy, op. cit.,* pp. 173-212.
Carmagnani, M.; Hernández, S. y Colodro, M., "Evolución de la industria en Chile, 1860-1940", *Boletín del Centro de Estudios Socio-económicos,* Santiago, núm. 1, 1967.
Castillo, F.; Echeverría, R. y Larraín, J., "Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile", *en Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 16, abril de 1972, pp. 3-70.
——— y Larraín, J., "Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 10, diciembre de 1971, pp. 161-198.
Chonchol, Jacques, "Poder y reforma agraria en la experiencia chilena", *en* Aníbal Pinto *et al., Chile hoy, op. cit.,* pp. 255-321.
———, "La política agraria del gobierno popular", *en* Salvador Allende *et al., La vía chilena al socialismo, op. cit.,* pp. 103-112.
Debray, Regis, "Temps et politique", *Les temps modernes,* mayo de 1970.
Echeverría, Rafael; Castillo, Fernando y Larraín, Jorge, "Etapas y perspectivas de la lucha ideológica en Chile", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 13, julio de 1972, pp. 114-152.
Faletto, E. y Ruiz, E., "Conflicto político y estructura social", *en* Aníbal Pinto *et al., Chile hoy, op. cit.,* pp. 213-254.
———, "La crisis de la dominación oligárquica (1920)", *en* Faletto *et al., Génesis histórica del proceso político chileno,* Santiago, Ed. Quimantú, 1971, pp. 8-31.
Giusti, Jorge, "Participación popular en Chile: antecedentes para su estudio. Las JAP", *Revista Mexicana de Sociología,* México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, vol. XXXVII, núm. 3, julio-septiembre de 1975, pp. 767-788.
Hernández, Silvia, "El desarrollo capitalista del campo chileno", *en* Barraclough, S. *et al., Chile: reforma agraria y gobierno popular,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973, pp. 93-145.
Joxe, Alan, "L'armée chilienne", *Les Temps Modernes,* año 29, núm. 323, junio de 1973.
Labastida, Julio, "Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus

perspectivas", *Revista Mexicana de Sociología,* México, IIS, vol. XXXVI, núm. 3, julio-septiembre de 1974, pp. 629-642.
López, Julio, "La estrategia económica del gobierno de la Unidad Popular", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 9, septiembre de 1971, pp. 69-86.
Marín, Juan C., "Asalariados rurales en Chile", *Revista Latinoamericana de Sociología,* Buenos Aires, Instituto T. Di Tella, núm. 2, 1969, pp. 317-341.
———, "Las tomas: 1970-72", *Marxismo y revolución,* Santiago, núm. 1, julio-septiembre de 1973, pp. 49-78.
Mattelart, Armand, "La bourgeoisie a l'ecole de Lenine: le gremialisme et la ligne de masse de la bourgeoisie chilienne", *Politique Aujourd'hui,* enero-febrero de 1974, pp. 23-46.
Müller, Urs., "La voz de las cifras", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 14, octubre de 1972, pp. 152-174.
——— y Hinkelammert, Franz, "Condiciones y consecuencias de una política de redistribución de ingresos", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad de Chile, núm. 16, abril de 1973, pp. 203-227.
Nef, Jorge, "The Politics of Repression: The Social Pathology of the Chilean Military", *Latin American Perspectives,* vol. I, núm. 2, verano de 1974, pp. 475-507.
North, Liisa, "Los militares en la política chilena", *Revista Mexicana de Sociología,* México, IIS, vol. XXXVII, núm. 2, abril-junio de 1975, pp. 475-507.
Petras, J. y Zeitlin, M., "El proceso de radicalización campesina", *Cuadernos de economía,* Santiago, Universidad Católica de Chile, año 5, núm. 5, agosto de 1968, pp. 44-67.
——— y Cavarozzi, M., "Conflicto político y dependencia económica en Chile", *en* James Petras *et al.,* (comp.), *América Latina: economía y política,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1972, pp. 15-94.
———, "Nacionalización, transformaciones socioeconómicas y participación popular en Chile", *Cuadernos de la realidad nacional,* Santiago, Universidad Católica de Chile, núm. 11, enero de 1972, pp. 3-24.
Pinto, Aníbal, "Desarrollo económico y relaciones sociales", *en* Aníbal Pinto *et al., Chile hoy, op. cit.,* pp. 5-52.
"Pliego del Pueblo", *Marxismo y revolución,* Santiago, núm. 1, julio-septiembre de 1973, pp. 229-240.
Portantiero, Juan C., "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", *Pasado y presente,* Córdoba, Argentina, año IV, núm. 1, abril-junio de 1973, pp. 31-86.
Touraine, Alain, "Les classes sociales dans une société dépendente: La société latino-américaine", *Tiers Monde,* t. XV, núm. 62, abril-junio de 1975.
Vuskovic, Pedro, "La experiencia chilena: problemas económicos", *en Transición al socialismo y experiencia chilena,* Santiago, CEREN-CESO-PLA, 1972, pp. 99-114.
———, "La política económica del gobierno de la Unidad Popular", *en* Salvador Allende *et al., La vía chilena al socialismo, op. cit.,* pp. 43-54.
———, "Informe 1970", *Mensaje,* Santiago, núms. 202-203, septiembre-octubre de 1971.
Verón, Eliseo, "Ideología y producción de conocimientos sociológicos en América Latina", *en* Verón *et al., Ciencias sociales: ideología y realidad,* Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970.

Zeitlin, Maurice, "Los determinantes sociales de la democracia en Chile", *Revista Latinoamericana de Sociología,* vol. 2, núm. 2, 1966.
Zemelman, Hugo, "El movimiento popular chileno y el sistema de alianzas en la década de 1930", *en* Faletto *et al., Génesis histórica del proceso político chileno,* Santiago, Ed. Quimantú, 1971, pp. 33-118.

MATERIALES NO PUBLICADOS O DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

Affonso, Almino *et al., Movimiento campesino chileno,* Santiago, ICIRA, 1970.
Barría, Jorge, *Historia del sindicalismo chileno,* Santiago, Instituto de Administración Pública, 1967.
Bengoa, José, *Pampa Irigoin, lucha de clases y conciencia de clase,* Santiago, Centro de Estudios Socioeconómicos, Universidad de Chile, mimeo., 1972.
Comité Político de la Unidad Popular, "Chile y la UP: Informe de 'El Arrayán' ", *Nueva Economía,* Santiago, julio-agosto de 1972, pp. 38-50.
Cómo participar, Santiago, Editorial Quimantú, 1972.
Cheetham, Rose *et al., Comandos urbanos: alternativa de poder socialista,* Santiago, CIDU, Universidad Católica de Chile, Documento de trabajo, 1973.
Faletto, Enzo, *Clases sociales, crisis política y problemas del socialismo en Chile,* Santiago, FLACSO/ELAS, 1973, mimeo.
Garretón, Oscar G. y Cisternas, Jaime, *Algunas características del proceso de toma de decisiones en la gran empresa: la dinámica de la concentración,* Santiago, ODEPLAN-SERCOTEC, 1970.
Gásic, Gabriel, *"Concentración, entrelazamiento y desnacionalización en la industria manufacturera",* Santiago, Memoria, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, 1971.
Gurrieri, Adolfo y Zapata, Francisco, *Sectores obreros y desarrollo en Chile (algunas hipótesis de trabajo),* Santiago, Cepal, mimeo., 1967.
Humud, Carlos, "El sector público chileno entre 1830 y 1930", Santiago, Memoria, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, 1969.
Hansen, Roy A., "Military Culture and Organisational Decline: a study of the chilean army", Tesis doctoral, UCLA, 1967.
Klein, Emilio, *Antecedentes para el estudio de los conflictos colectivos en el campo: 1967-71,* Santiago, ICIRA, mimeo., 1972.
Leiva Lavalle, Jorge, *El sector externo, los grupos sociales y las políticas económicas en Chile,* Santiago, Centro de Estudios Socioeconómicos, Universidad de Chile, s/f.
León, Arturo y Reca, Inés, *Incidencia de la distribución del ingreso y ocupación en el último censo,* Santiago, PROELCE, 1974.
Partido Demócrata Cristiano, *Proposiciones para una acción política en el período 67-70 de una vía no capitalista de desarrollo,* Santiago, Comisión político-técnica de la DC, julio de 1967.
Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Textiles, *Participación es poder,* Santiago, Quimantú, 1972.
Programa básico de la Unidad Popular, Santiago, 1970.
Ruffat, Adolfo, *La política monetaria y el sector externo en Chile entre las dos guerras mundiales,* Santiago, Memoria, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, 1969.

Sader, Emir, *Movilización de masas y sindicalización en el gobierno de la Unidad Popular,* Santiago, CESO, Universidad de Chile, 1973.
Stallings, Bárbara, *Economic Development and Class Conflict in Chile, 1958-1973,* California, Tesis doctoral, Universidad de Stanford, agosto de 1975, mimeo.
Threlfall, Mónica *et al.,* "Consejo Comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú", Santiago, CIDU, Universidad Católica de Chile, documento de trabajo núm. 67, 1973.
Torres Rivas, Edelberto, *Interpretación social del desarrollo centroamericano,* Costa Rica, EDUCA, 1971, 2ª ed.
Universidad de Chile, Instituto de Economía y Planificación, *La economía chilena en el período 1950-63,* 1963.
———, *La economía chilena en 1971,* 1972.
———, *Informe económico 1972,* 1973.
Vuskovic, Pedro, *Política económica y poder político: notas sobre la experiencia del Gobierno Popular en Chile,* Ponencia presentada al Seminario sobre Teoría del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, noviembre de 1974 (sin publicar).
Zapata, Francisco, *Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende,* México, El Colegio de México, CES, núm. 4, 1974.

DOCUMENTOS DE GOBIERNO Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Acuerdo CUT-Gobierno, Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del área social y mixta, 1971.
Oficina de Planificación Nacional, *Informe económico, 1971.*
———, *Resumen del plan anual, 1972.*
———, *Resumen del Plan de la Economía Nacional, 1971-76.*
Presidencia de la República, *Mensaje del Presidente de la República ante el Congreso Nacional,* 1959-73.
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, *El desarrollo industrial de América Latina,* junio de 1967.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y DIARIOS

Chile Hoy, Santiago, 1972-73.
Ercilla, Santiago, 1969-73.
Mensaje, Santiago, 1970-73.
Punto Final, Santiago, 1969-73.
Posición, Santiago, 1972-73.
Nueva Economía, Santiago, 1971-73.
Tribuna, Santiago, 1972-73.
De Frente, Santiago, 1971-72.
El Mercurio, Santiago, 1970-73.

El Siglo, Santiago, 1970-73.
La Prensa, Santiago, 1970-73.
Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1969-73.
Las Noticias de Última Hora, Santiago, 1970-73.
Sociedad de Fomento Fabril, Memoria, 1969-73.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 7

PRIMERA PARTE: LA FORMACIÓN DEL MODELO POLÍTICO CHILENO: DE PORTALES A LA CRISIS DE 1930.

CAPÍTULO I: LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD NACIONAL 19

a) *La unificación de los intereses agrarios y comerciales. Hipótesis para su interpretación* 21
b) *La dominación política: el Estado oligárquico y la clase dirigente nacional* 24

CAPÍTULO II: ECONOMÍA DE ENCLAVE Y PATRÓN DE DOMINACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CHILENA: LA SINGULARIDAD EN EL "MODELO POLÍTICO" CHILENO 31

a) *La constitución del enclave salitrero: desarticulación entre el poder económico y el poder político en la sociedad chilena* 31
b) *Los efectos del enclave sobre la articulación de las clases sociales* 34
c) *La crisis política de 1891: apertura del Estado a nuevas fuerzas sociales. La mayor autonomía institucional* 37
d) *El modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena: desde la constitución del enclave a la crisis mundial de 1930* 44
e) *La especificidad de la dominación política en Chile vista en el trasfondo de las formas de dominación en América Latina* 46

SEGUNDA PARTE: EL LENTO PROCESO DE RUPTURA DEL MODELO POLÍTICO CHILENO: DE LA CRISIS DEL 30 AL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.

CAPÍTULO I: LA CRISIS MUNDIAL Y SU IMPACTO SOBRE EL MODELO POLÍTICO 53

a) *Las consecuencias económicas de la crisis* 53
b) *El impacto de la crisis mundial sobre el sistema de dominación* 54

i) El significado del Frente Popular 57
ii) Los años del Frente Popular en el gobierno 57
iii) Los efectos de la política del frente popular desarrollista 60

CAPÍTULO II: LAS ALTERNATIVAS PARA EL ESTANCAMIENTO: EL FRENTE DE ACCIÓN POPULAR 65

a) *El ibañismo: frustrado intento de rearticulación populista de las relaciones sociales* 65
b) *El Frente de Acción Popular: partidos obreros como agentes políticos de la clase y persistencia de la ideología del Frente Popular* 68

CAPÍTULO III: LA RUPTURA DEL MODELO POLÍTICO: EL GOBIERNO DEMÓCRATA CRISTIANO Y SU PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CAPITALISTA Y REFORMISMO POPULISTA 73

a) *La alternativa de la democracia cristiana ante la crisis* . . . 73
b) *La respuesta de la burguesía chilena al proyecto de profundización del capitalismo* 80
c) *La agudización de la lucha de clases en el campo y en la ciudad* 84

i) La agudización de la lucha en el campo 85
ii) La lucha de la clase obrera 86
iii) El movimiento urbano 87

d) *La crisis de la hegemonía política burguesa* 89

TERCERA PARTE: LOS TRES AÑOS DE LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: ENTRE LA CRISIS Y LA REVOLUCIÓN.

Introducción 97

CAPÍTULO I: LA ESTRATEGIA DE LA "VÍA CHILENA AL SOCIALISMO" 105

a) *Las vicisitudes de la política de "unidad popular" en el seno de la izquierda chilena* 105
b) *El programa de la Unidad Popular* 111

i) El poder popular 112
ii) El Estado popular 113
iii) La defensa nacional 113
iv) La construcción de la nueva economía 113

c) *Las condiciones para la "vía chilena al socialismo"* . . . 115
d) *El triunfo electoral de la* UP *y el acceso al gobierno* . . . 117

CAPÍTULO II: LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: LA PRIMERA ETAPA (DESDE EL ACCESO A LA PRESIDENCIA HASTA MEDIADOS DE 1972) 119

a) *Ganar la batalla de la producción* 119

i) Los éxitos iniciales 120
ii) Los síntomas de la crisis 123

b) *El problema de la gestión obrera* 126

i) Los obreros textiles 128
ii) El problema de la participación en el área privada de la economía 130

c) *El control popular de la distribución: los conflictos en el seno del movimiento urbano* 132

CAPÍTULO III: LA POLÍTICA AGRARIA Y LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO 135

a) *El legado freiista* 135
b) *Ganar la "batalla de la producción agrícola"* 137
c) *Las nuevas formas de lucha de clases en el campo: el poder campesino* 142
d) *La cuestión agraria: centro del conflicto institucional* . . 144

CAPÍTULO IV: LA UNIDAD POPULAR EN EL GOBIERNO: LA SEGUNDA ETAPA (DEL PARO PATRONAL DE OCTUBRE AL DESENLACE. LA POLÍTICA "MATUS-MILLAS" COMO INTENTO DE RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA . . 147

a) *La crisis económica* 147
b) *La ausencia de unidad política en la* UP: *el cónclave de Lo Curro* 149
c) *La ausencia de unidad política en la* UP: *la Asamblea Popular de Concepción* 152
d) *El "poder popular" y el paro patronal de octubre de 1972* . . 153
e) *La agudización de la crisis* 155
f) *El campo popular, blanco de ataque de la oposición. La huelga de los mineros de El Teniente* 158

CAPÍTULO V: LA ESTRATEGIA DE LA BURGUESÍA 161

a) *El bloqueo parlamentario* 161

i) El proyecto "Hamilton-Fuentealba": centro del conflicto institucional 163
ii) Las lecciones de la lucha institucional 168

b) *La resistencia civil: el "gremialismo" y la línea de masas de la burguesía chilena* 170

i) La gestación del "poder gremial" 173

c) *La ofensiva de agosto de 1973: la espera del desenlace* . . . 176
d) *Patria y Libertad: el brazo armado de la burguesía* . . . 178

CAPÍTULO VI: LOS MILITARES Y EL DESENLACE DE LA CRISIS 181

a) *El golpe "fascista"* 181
b) *La definición de las fuerzas armadas por su lugar en el aparato estatal* 184
c) *La política militar de la* UP 187
d) *Las relaciones entre la* UP *y los militares* 188

i) El paro patronal de octubre: la incorporación de los militares al gabinete 189
ii) El "Tancazo". la ofensiva militar contra el gobierno popular 190

CONCLUSIONES 197

BIBLIOGRAFÍA 207

Siendo Director General de Publicaciones José Dávalos, se terminó la impresión de *Sociedad y política en Chile: de Portales a Pinochet,* el día 14 de julio de 1979 en los talleres de Fuentes Impresores, S. A., Centeno, 109, México 13, D. F. La edición consta de 2 000 ejemplares.

U N A M

FECHA DE DEVOLUCION

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello.

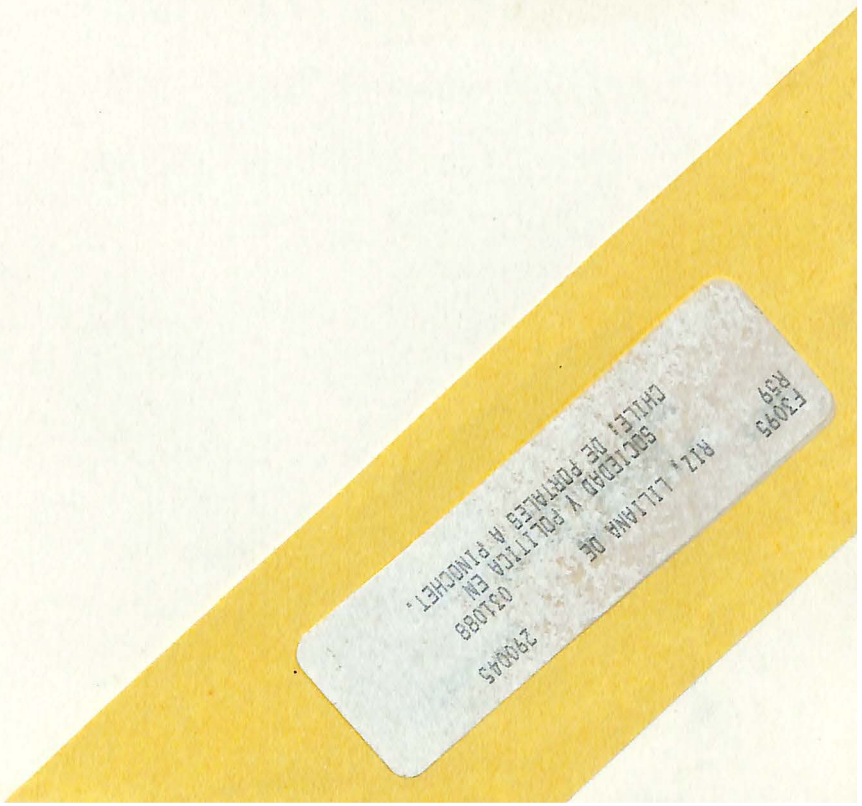
VNIVERSIDAD NACIONAL
AVFENOMA DE
MEXICO

F3095
R59

UNAM

31088

INST. INV. SOCIALES



Liliana de Riz/Sociedad y política en Chile